

LA PIEL DE CENTROAMÉRICA

LA PIEL DE CENTROAMÉRICA
(UNA VISIÓN EPIDÉRMICA
DE SETENTA Y CINCO AÑOS DE SU HISTORIA)

Edelberto Torres-Rivas



FLACSO
COSTA RICA
15 Años

972

T693p Torres Rivas, Edelberto

La Piel de Centroamérica: una visión epidérmica de setenta y cinco años de su historia / Edelberto Torres Rivas. - 1a. ed. - San José, C. R. : FLACSO, 2007. 286 p. ; 21X 14 cm.

ISBN 978-9977-68-146-7

1.- América Central -Historia. 2. América Central - Política económica. 3. América Central - Condiciones sociales. I. Título



ESTA PUBLICACIÓN ES POSIBLE GRACIAS AL APOYO INSTITUCIONAL DE LA AGENCIA SUECA DE COOPERACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN (SAREC) DE LA AGENCIA SUECA PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL (ASDI).



FLACSO
COSTA RICA
15 Años

Diseño de portada Leonardo Villegas

Fotografía de portada: Carlos Sojo

Producción editorial: Américo Ochoa

Primera edición: marzo 2007

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Sede Costa Rica
Apartado Postal 11747, San José, Costa Rica, Fax: (506) 253-4289

Página Web: <http://www.flacso.or.cr>

*Para Pablo, Arasi, Darío y Marena,
y también para sus padres y madres,
vínculos fundamentales*

ÍNDICE

PRÓLOGO A LA EDICIÓN COSTARRICENSE / 13

PRÓLOGO / 15

ACLARACIONES NO PEDIDAS / 15

CAPÍTULO 1

BREVE INTRODUCCIÓN: CENTROAMÉRICA

ANTES DE 1930 / 19

CAPÍTULO 2

LA CRISIS MUNDIAL DE 1929/1930

EN CENTROAMÉRICA / 27

1. La política económica de la oligarquía: el estancamiento a largo plazo / 28

CAPÍTULO 3

LA POLÍTICA, LA DICTADURA GARANTÍA

DEL ORDEN TERRATENIENTE / 41

1. El caudillaje militar dictatorial: la defensa del orden terrateniente / 42

CAPÍTULO 4

EL PROYECTO DEMOCRÁTICO EN LA POSGUERRA:

VICTORIAS Y FRUSTRACIONES / 53

CAPÍTULO 5

LOS TRASPIÉS DE LA MODERNIZACIÓN

ECONÓMICA DE LA POSGUERRA / 75

1. La contradictoria modernización de la economía exportadora / 79
2. El proyecto de integración económica: sombras y luces / 89

CAPÍTULO 6

LAS LUCHAS POLÍTICAS SE TRANSFORMAN

EN VIOLENCIA ARMADA / 99

1. Los cambios políticos / 99
2. Los estallidos revolucionarios / 108
3. Prolegómenos al proyecto democrático / 119

CAPÍTULO 7

EL HURACÁN DE LA CRISIS:

¿UNA DÉCADA O VEINTE AÑOS PERDIDOS? / 131

CAPÍTULO 8

LAS DEMOCRACIAS DE BAJA INTENSIDAD / 139

CAPÍTULO 9

LOS AÑOS NOVENTA: POLÍTICAS MACROECONÓMICAS DE ESTABILIZACIÓN Y REFORMA / 167

El crecimiento económico de los noventa:
fortalezas y debilidades / 171

Bases del nuevo estilo de desarrollo
centroamericano / 173

Cambios en la estructura financiera / 178

Situación social / 181

El futuro o la incertidumbre democrática / 189

Notas sobre el TLC con Estados Unidos / 192

CAPÍTULO 10

LA DESPEDIDA: BALANCE FINAL / 199

CAPÍTULO 11

INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA / 203

ANEXO

¿CÓMO ÉRAMOS HACE MEDIO SIGLO?

ALGUNOS RASGOS CUANTITATIVOS DE LA SOCIEDAD

CENTROAMERICANA (1945/1955) / 211

PRÓLOGO A LA EDICIÓN COSTARRICENSE

Al conmemorarse 15 años de desarrollo institucional, la Sede Académica de Costa Rica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, se complace en presentar la más reciente obra de Edelberto Torres Rivas, centroamericano nacido en Guatemala como el mismo se define. Torres Rivas es, sin exageración, el maestro de generaciones de sociólogos centroamericanos. Desde su contribución seminal, *Interpretación del Desarrollo Social Centroamericano*, ha convocado a la academia y al público en general a una lectura de los acontecimientos sociales, económicos y políticos de la región con un sentido integral: más allá de las fronteras geográficas, con un horizonte temporal de largo alcance y con una aproximación sectorial que permite combinar economía, sociedad y política. La Centroamérica objeto de la reflexión de Edelberto Torres Rivas es por lo tanto plena, fluida, única.

El libro que hoy presentamos es una aportación en tiempo biográfico. Es un recuento histórico de una Centroamérica sigloveintera, contemporánea del autor. Un repaso apresurado, un tacto ligero sobre la piel de los últimos tres cuartos de siglo. Pero no por ligero superficial. La propuesta analítica de Torres Rivas es examinar la secuencia histórica de los últimos 75 años a partir del proceso de modernización que, fiel a sus convicciones más profundas, localiza en el lento avance en la construcción de sociedades democráticas.

La democratización en Centroamérica, dice, es el nombre de la modernidad. Analiza así los avances y retrocesos, los caminos truncados de la democracia en el Istmo, afectada por recurrentes ánimos autoritarios, frecuentes desastres naturales y permanente predominio oligárquico que se resiste al cambio político y a la entrada de los excluidos en la escena del poder.

La estructura del texto representa momentos de ese decurso confuso hacia lo moderno, arrancando en la crisis de los treinta; continúa con la garantía castrense del orden terrateniente a la que condujo, luego, el breve espacio de la búsqueda reformista de los años cuarenta. Avanza después hacia la frustración demo-

crática de la segunda postguerra adobada con el proyecto de modernización económica e integración regional. Luego la guerra, los procesos de paz, y la renovada aspiración por construir un campo político abierto, una institucionalidad democrática duradera. El recorrido termina con las expectativas en torno al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, el principal socio comercial de la región, cuya ratificación final espera a la altura de Febrero de 2005 la incorporación de Costa Rica. La recomendación de Torres Rivas es, en este respecto, tanto más relevante para el resto de la región: “si el Estado es pasivo, lerdo o incompetente los efectos negativos pueden aumentar”.

Testigo de privilegio de buena parte de los tiempos reseñados, Edelberto Torres Rivas continúa con este volumen una prolífica trayectoria en las ciencias sociales latinoamericanas. Ha estado ligado a todos los procesos institucionales que han conformado la comunidad de ciencias sociales de la región: medio siglo atrás, en los inicios de la FLACSO como escuela de posgrado en Chile; ayudante de Fernando Henrique Cardoso durante sus tiempos en el ILPES; en los setentas a cargo del Programa Centroamericano de Ciencias Sociales del Consejo Superior Universitario Centroamericano, CSUCA, contribuyendo al desarrollo de la ciencias sociales en una época de aguda violencia y persecución contra el pensamiento. Fue Secretario General de la FLACSO entre 1985 y 1993 período durante el cuál contribuyó notablemente al desarrollo institucional, propiciando la instalación de unidades de la FLACSO en Guatemala, El Salvador y Costa Rica. En años recientes, Torres Rivas ha trabajado con el PNUD aportando su conocimiento a la producción del Informe de Desarrollo Humano de Guatemala y a las actividades del Informe sobre la Democracia en América Latina de esa organización.

Esta publicación, se realiza en el marco de las actividades del 50 Aniversario de la FLACSO, como homenaje a una trayectoria personal al servicio de las ciencias sociales del continente.

CARLOS SOJO
San José, febrero de 2007.

PRÓLOGO

ACLARACIONES NO PEDIDAS

Lo que aquí se presenta es un texto sumario que solo un lector, juicioso e imparcial, podría calificar estando de acuerdo con el jesuita Baltasar Gracián quien en un conocido dictum proclamó que *¡lo bueno, si breve es dos veces bueno!* Esta es una breve historia de un trecho de lo que ha ocurrido en Centroamérica en los últimos setenta y cinco años. Es, sin duda, ambicioso porque se trata de cinco países cuyas condiciones particulares son más importantes que la supuesta homogeneidad regional. Comienza con el fatídico 1930, que interrumpió un aparente suave proceso de renovación social. Y termina en el comienzo del milenio, cuando hay una voluntad de rectificar la historia. Toda esta crónica está apretada en un breve espacio de ciento y tantas páginas.

Este trabajo tiene dos orígenes. Uno, un manuscrito especialmente escrito, de treinta páginas, que salió publicado en el tomo 14 de la *Cambridge History of Latin America*, dirigido por L. Bethel y publicado en español por la Editorial Crítica, Barcelona, 2001. Por otro lado, notas de trabajo resultado de reiterados cursos sobre política centroamericana impartidos en diversos niveles académicos, en distintos países y fechas; apuntes de clases introductorias, organizados con cierta premura y desorden.

En el breve espacio disponible, el recuento histórico es necesariamente superficial porque sólo toca la epidermis de los hechos juzgados importantes. Por eso le llamamos *La piel de Centroamérica*. Nos quedamos en la descripción de la superficie, con datos, nombres, fechas y cifras, de forma rápida, con prisa, con ánimo de síntesis de la realidad social. Pero no hay intención frívola o sin fundamento sino voluntad de tratar la materia histórica con algún análisis, vale decir, hacer un comienzo de reflexión fundada teóricamente, buscando darle sentido a la piel centroamericana. Dice Hobsbawn, con la razón que casi siempre le asiste, que todas las ciencias sociales precisan de testimonios históricos en la medida que se ocupan de la realidad social o que intentan verificar o refutar modelos teóricos generales, valiéndose de datos y testimonios. En consecuencia, la sociología política que aquí ejercitamos se apoya en datos que se vuelven históricos en el momento de ser utilizados, se hace ‘histórico’ el hecho aun cuando pertenece a un pasado inmediato.

Para que este texto pueda ser mejor utilizado, sugiero tomar en cuenta las siguientes advertencias que como autor considero imprescindibles, de mayor a menor importancia en virtud del rango de calidad que ellas tienen:

- a) Este trabajo tiene un hilo teórico conductor no explícito, que es la intención de estudiar el desarrollo centroamericano como un proceso múltiple de modernización, la historia como realización de la razón o de su fracaso. Es como una meta, la realización de una voluntad colectiva. En rigor, la modernidad, que es una época, es el apareamiento del sujeto independiente, responsable ante sí mismo y frente a la colectividad: es el individuo que personifica la libertad personal porque ya no está atado a adscripciones heredadas, particularismos o conductas prescritas propias de una sociedad tradicional, atrasada. Dicho de otra manera más directamente referida al texto, la modernidad es

un proceso de diferenciación múltiple frente al pasado que representa el atraso; implica una discontinuidad de significados y resulta de la “superación-destrucción del viejo orden pero sin que uno nuevo acabe por institucionalizarse ¿Cómo calificar el atraso en los términos utilizados frecuentemente en este trabajo? Es lo disfuncional del pasado, las herencias negativas del viejo orden que se niega a morir en Centroamérica. Y expresado de modo empírico, la modernización es el camino empedrado del proceso de construcción del capitalismo como actividad económica donde lo agrícola es secundario, de la democracia liberal como sistema político propio de aquel, de una sociedad urbana, con abundancia de las clases medias, alfabetas y una cultura secularizada y racional. Este modelo histórico de modernización marca a *contrario sensu* lo que entendemos por atraso. *En resumen, el símbolo de la modernización es la sociedad democrática.*

- b) En tanto el trabajo es una síntesis, está lleno de supuestos de inteligibilidad que pueden desorientar al lector. Por ejemplo, se afirma sin más sobre “la nefasta misión de Chatfield en Centroamérica”... dando por sentado que se conoce la función que este personaje desempeñó contra al proyecto federal de los liberales. También hay juicios de valor. La objetividad en las ciencias sociales es lealtad al método, al dato y no a la ‘verdad’. ¿Verdad de quién?; y la imparcialidad es más difícil en la historia porque ella la hacen los hombres. No hay enfoques ideológicos pero sí ‘partie prissee’ que se hacen explícitos.
- c) El trabajo no tiene citas de pie de página, salvo excepciones. De tenerlas, se habría extendido en número de páginas. Los datos estadísticos obligan a mencionar las fuentes. Al final hay una nota bibliográfica comentada, de donde se tomaron fechas, cifras y nombres. Aún más arbitrario puede parecer el despliegue desordenado de

cuadros estadísticos, que tienen un valor ilustrativo pero no probatorio. Rechazo, en esta ocasión, el necio hábito de poner un cuadro y luego comentar su contenido, en una desenfadada reiteración de lo obvio.

- d) Finalmente, hay un viejo trabajo inédito, hecho hace más de dos décadas, que se agrega como Anexo. Es un breve estudio titulado *¿Cómo era Centroamérica hace medio siglo?*, cuyo valor reside no en su pretensión analítica sino en la información estadística que contiene. Son como pinceladas estructurales de Centroamérica hacia 1945/50 con datos olvidados o desconocidos. Este Anexo es completamente independiente de *La piel*, pero por supuesto puede ser leído, aprovechado o rechazado *ad libitum*.

La piel de Centroamérica, en cuanto recuento histórico de los hechos sociales, políticos, económicos ocurridos a partir de 1930 hasta la fecha, 2005, tiene un valor académico cierto según el uso que se le dé. Por ello, subrayamos que tiene una intención propedéutica, como introducción a la enseñanza de la historia regional. *La piel de Centroamérica* es una introducción a la historia de la región, es el preámbulo para que estudiantes de diversos niveles puedan tener el mínimo de conocimiento –de conciencia– del pequeño mundo en que nos movemos. Y ese exordio lo mismo le sirve a un estudiante de ciencias duras como de disciplinas humanistas.

En breve, *La piel de Centroamérica* se presenta con tales intenciones, tal como el párrafo anterior lo dice. *Dar la mano para el primer paso en el conocimiento de la realidad nacional y regional*. Es sólo el primer paso. Si en efecto sirve para ello, el texto se salva y las intenciones del autor se verán colmadas de satisfacciones.

Edelberto Torres-Rivas

Centroamérica, diversas fechas y lugares.

CAPÍTULO 1

BREVE INTRODUCCIÓN:

CENTROAMÉRICA ANTES DE 1930

La Capitanía General del Reyno de Guatemala, roto el vínculo colonial, en 1821/23, se convirtió en la fugaz República Federal de Centroamérica. Fue un proyecto ideal de un grupo de patricios de mentalidad liberal y nunca una realidad política y administrativa viable. De hecho, el régimen colonial no creó experiencias de unidad política ni de relaciones económicas entre las diversas regiones de la Capitanía. Las naciones que luego formaron Centro América alimentaron siempre factores de desagregación, que estuvieron políticamente representados por el llamado Partido Conservador, frente a los liberales que pugnaban por fundar un Estado unitario.

Hubo guerras internas a favor o en contra de ese proyecto que alimentaron los intentos de separación. Costa Rica se mantuvo al margen pero sosteniendo, de hecho, un aislamiento que contrastaba con los belicosos esfuerzos unionistas de Honduras y El Salvador. El 9 de marzo de 1847, el gobierno conservador de Guatemala notificó a los otros Estados su declaración de independencia absoluta,¹ que después de la batalla de la Arada (3/II/1851), siguieron

¹ Hemos escogido la fecha más rotunda, pero hay discrepancia en cuanto a ella, cf: Ralph Lee Woodward, *Rafael Carrera y la creación*

Francisco Dueñas, en El Salvador, Francisco Ferrara, en Honduras, Frutos Chamorro, en Nicaragua y Braulio Carrillo, en Costa Rica. La ruptura de la Federación fue más una victoria de los intereses ingleses, que de los conservadores centroamericanos².

En Centroamérica, la instauración de Estados-nacionales fue, como en muchas partes de América Latina, facilitada por la continuidad de instituciones, burocracias y actores de la estructura del poder colonial sin solución de continuidad en la experiencia centroamericana. La posibilidad de alcanzar estabilidad política en el siglo XIX, no se logró fácilmente, pero fue primero en Costa Rica y por último en Honduras. En los últimos decenios del siglo XIX se establecen vínculos económicos permanentes con el mercado mundial por medio de las exportaciones agrícolas –en especial de café–. El proceso empezó y dio los mejores resultados en Costa Rica; más adelante y con otras modalidades en relación con la estructura agraria y el mercado de trabajo, en Guatemala y El Salvador; y, con retraso y de forma incompleta, en Honduras y Nicaragua. En ambos la ganadería y las minas completaban su escasa vocación cafetalera.

El atraso heredado del período colonial español, la crisis cíclica del mercado internacional del café y las sangrientas luchas políticas de la oligarquía por el control del gobierno frenaron el crecimiento económico, el progreso

de la República de Guatemala, CIRMA-Plumstock, Guatemala, 2002, p. 260. En la batalla de la Arada, el general Carrera derrotó por obra del azar, a un poderoso ejército centroamericano, dirigido por lo más destacado de los oficiales liberales. Lo militar reforzó a lo político.

2 El cónsul Chatfield, genio diplomático y siniestro político, motivó a los británicos profundamente interesados en la separación de los centroamericanos y en estimular la presencia militar de su país en la Costa Atlántica.

social y la consolidación de la estabilidad institucional. Sin embargo, al empezar el siglo XX ya se habían producido cambios importantes en la diferenciación social al aparecer una burguesía rural, terrateniente, que por razones culturales y políticas se ha llamado oligarquía; una pequeña clase media urbana y un extenso sector de campesinos con poca o ninguna tierra. La oligarquía, de origen europeo, forma el sector criollo de la estratificación social y étnica, la población indígena forma el campesinado y mestizos con diversidad de color y conciencia, las clases medias. La vida política era estable aunque no democrática.

En 1914 la población total de la región era de poco menos de 4 millones de habitantes, de los cuales casi el 60% vivía en Guatemala y El Salvador. La base de esta sociedad –la estructura agraria– presentaba tres modalidades: grandes plantaciones de café controladas por agricultores nacionales que producían para la exportación. En Guatemala y Costa Rica un importante grupo de finqueros alemanes controlaba una cuota del monto exportable y de la intermediación comercial.

Las plantaciones de banano, inicialmente de propiedad nacional se amplían y modernizan cuando pasan a manos norteamericanas, a comienzos del XX, estableciendo una producción integrada verticalmente con una estructura de comercialización ligada de forma directa al mercado norteamericano. Se le llamó por ello, una economía de enclave. Y pequeñas parcelas que eran propiedad de campesinos que cultivaban cereales básicos y otros productos para su propio consumo o para satisfacer la demanda interna. El café y el banano representaban el 80% de las exportaciones centroamericanas.

El mercado laboral lo componían los llamados “mozos colonos”, que eran campesinos empobrecidos ligados a las haciendas cafetaleras por un *endeudamiento vitalicio y hereditario*; que tuvo una naturaleza semiservil, parecidos

al feudalismo de Castilla, con contenidos acentuados cuando se trataba de indígenas; había un numeroso sector de campesinos parcelarios y/o aparceros, medieros o jornaleros itinerantes que eran obligados a trabajar (Guatemala, El Salvador y menos en Honduras y Nicaragua) en la época de zafra y trabajadores agrícolas en las plantaciones bananeras. En Costa Rica, el grupo de parcelarios o campesinos emigrantes era importante no por su número sino por sus funciones sociales; y Honduras en donde predominaban los campesinos que se dedicaban a la agricultura de subsistencia, aislados, lo que se explica en parte por lo extenso del fraccionado del terreno montañoso del país.

Aproximadamente antes de 1910 ya se había construido más del 80 por ciento de las líneas de ferrocarril que existe hoy en Centroamérica.

Cuadro 1
Producción centroamericana de café antes de la crisis
(1884 a 1929; cifras en 1.000 libras)

Año	Costa Rica a/	Guatemala b/	Honduras c/	Nicaragua d/	El Salvador e/	Total
1928-29	43,431	90,610	5,291	29,010	134,042	302,475
1927-28	41,447	136,246	3,307	38,581	149,474	369,055
1926-27	35,715	135,144	2,646	22,708	66,139	262,352
1925-26	40,124	97,445	1,984	39,022	101,413	279,988
1924-25	33,951	83,555	1,764	23,810	95,020	238,100
Promedio 1924-25 1928-29	38,934	108,600	2,998	30,644	109,218	290,394
Promedio 1909-10 1913-14	30,865	106,263	882	18,078	66,580	222,668
1908-09	25,133	89,949	2,646	17,196	59,525	194,449
1907-08	37,479	56,879	2,425	15,873	69,525	172,181
1906-07	26,456	100,752	2,646	64,816	17,858	212,528
1905-06	39,022	72,753	2,984	68,784	68,784	204,707
1904-05						
Promedio 1904-05 1908-09	31,130	79,984	2,469	17,857	64,287	195,727
1903-04	37,038	62,611	2,646	15,873	66,139	184,307
1902-03	33,069	75,398	3,307	18,519	48,281	179,574
1901-02	33,069	59,525	2,646	19,842	33,069	148,151
1900-01	39,683	76,060	1,984	18,519	39,683	175,929
1899-1900	35,715	66,139	2,646	19,842	48,943	173,285
Promedio 1899-00 1903-04	45,715	67,947	2,646	18,519	47,223	172,050
1898-99	39,683	52,911	2,646	6,614	13,228	115,082
1897-98	62,832	62,832	2,646	9,921	19,842	134,263
1896-97	27,778	63,493	2,646	10,582	23,810	128,309
1895-96	85,981	85,981	3,307	9,259	13,228	135,585
1894-95	25,133	59,525	2,646	8,819	15,873	111,996
Promedio 1894-95 1898-99	31,085	64,048	2,778	9,039	17,196	125,046
1893-94	29,763	59,525	4,630	16,535	39,954	145,507
1832-93	31,747	56,879	5,953	17,858	33,069	145,506
1891-92	22,487	52,911	3,307	9,921	30,424	119,050
1890-91	23,810	39,683	3,968	9,480	33,069	110,010
1889-90	26,456	39,683	3,968	9,254	15,873	95,239
Promedio 1889-90 1893-94	26,853	49,736	4,365	12,611	29,498	123,063
1888-89	27,999	39,683	5,291	10,362	14,551	97,886
1887-88	21,164	33,069	3,968	7,937	13,228	79,366
1886-87	32,408	39,683	3,968	8,378	7,937	92,374
1885-86	21,164	36,597	3,968	9,921	29,763	101,413
1884-85	19,842	47,620	3,307	9,700	20,062	100,531
Promedio 1884-85 1888-89	24,515	39,330	4,100	9,260	17,108	94,313

Fuente: The World's Coffee, N° 9, International Institute of Agriculture, Bureau de la FAO en Roma. Villa Borghese.1947. Pp. 98-99 y 116; New York Pan-American Coffee Bureau proporcionó las cifras de la primera parte del cuadro.

a/ Exportación de la estación comercial que termina el 30 de septiembre.

b/ Producción por estación octubre-septiembre.

c/ Exportación durante el año fiscal que termina el 31 de julio.

d/ Exportación por año calendario.

e/ Producción por estación noviembre-octubre.

Todos ellos, propiedad de la United Fruit Co. En la costa Atlántica las instalaciones portuarias de Puerto Cortés, Puerto Barrios y Limón (en Honduras, Guatemala y Costa Rica, respectivamente) se modernizaron con el fin de reducir el coste del transporte directo a los mercados europeos y norteamericanos. Poco a poco se creó un sistema financiero y bancario; antes de la Primera Guerra Mundial había 23 bancos en la región, la mayoría de ellos de capital nacional o alemán. Aunque antes de 1917 el sistema de electricidad era limitado y servía sólo a las ciudades capitales, es decir, Guatemala, San Salvador y San José, el telégrafo *unía* las principales ciudades con las zonas económicas más importantes de la región.

La influencia de Estados Unidos en la región empezó a hacerse sentir después de la firma del Tratado Clayton-Bulwer (1851) entre aquel país y el Reino Unido, pero sobre todo y de manera definitiva, a finales del siglo XIX. Se intensificó cuando en 1901 Gran Bretaña, en virtud del Tratado Hay-Pauncefotte, accedió a reducir su presencia y los Estados Unidos empezaron a construir un canal interoceánico en Panamá, país que, con ayuda norteamericana, se había independizado de Colombia en 1903. El canal se inauguró en 1914. La magnitud del éxito tecnológico que significó el canal que comunicó los dos mares fue inferior a la importancia de la expansión de la influencia política norteamericana en el ámbito internacional, no solo del Caribe Grande.

En Centroamérica especialmente la dominación no fue tanto económica como diplomática y política. Recuérdese que en 1898 los Estados Unidos derrotaron a España en una guerra auto provocada que casi le permite quedarse con Cuba, pero que convirtió a Puerto Rico y algunas islas del Mar del Sur en colonias. Y propició la ocupación imperial de Filipinas, Haití, Santo Domingo y Nicaragua, en distintos momentos en el primer y segundo decenios del

siglo XX. Desde entonces la política interna estuvo siempre condicionada por las determinaciones del Gran Vecino, a veces convertido en policía brutal o socio voraz e insensato.

Movidos por el interés canalero, aunque con pretextos menos sustantivos, los norteamericanos intervinieron en Nicaragua en 1911 y se quedaron en el país hasta 1933, con una breve interrupción en 1925. Su presencia en este país condicionó el futuro político no sólo de Nicaragua sino de los otros países de la región, en donde como ya se dijo su influencia ha sido determinante. Después de la Primera Guerra Mundial, la presencia económica estadounidense fue más allá de las inversiones en la agricultura, los ferrocarriles y los puertos. Por ejemplo, los servicios de electricidad de tres de los cinco países pasaron a manos norteamericanas (Bond & Share Co.) y más del 75% del comercio exterior era con Estados Unidos, porcentaje mayor que el de antes de la guerra y obtenido a expensas en gran parte de la derrotada Alemania.

De manera desigual hubo distintos momentos de prosperidad, especialmente en la década de 1920 en Guatemala, El Salvador y Costa Rica. El modelo primario exportador padeció periódicas crisis generalmente de precios, pero se afianzó todavía más y con ello la dependencia de la monoproducción y de la demanda externa. En los años que precedieron a la crisis mundial de 1929-1930, los ingresos obtenidos del café y el banano representaban casi el 90% de los que producía la exportación en Costa Rica, Guatemala y El Salvador, y el 70% en Honduras y Nicaragua (donde la extracción de oro y plata seguía siendo importante).

Los años veintes también se caracterizaron por una cierta estabilidad política. En Costa Rica bajo la conducción de la llamada “Generación del Olimpo” representada por Ricardo Jiménez Oreamuno y Cleto González Víquez; en Guatemala, con los generales José María Orellana y Lázaro

Chacón, y en El Salvador bajo el liderazgo de la familia Meléndez-Quiñónez. Liberales en los tres países y electos en sufragios de dudosa validez democrática. Hubo en esta década los primeros movimientos sociales, proyectos de organización obrera y política, reformas financieras como la creación del quetzal como moneda finalmente estable. Las estructuras oligárquicas de control y dominación fueron compatibles por algún tiempo con formas muy limitadas de participación. En Honduras continuó la guerra civil entre los partidos tradicionales.

En Nicaragua, la intervención norteamericana se interrumpió en agosto de 1925 para reiniciarse en enero de 1926, como resultado del fracaso de un gobierno bipartidista, por el golpe del general Chamorro. Un nuevo intento de reconciliación, compulsivo, redactado en inglés, fue impuesto y conocido como el Pacto del Espino Negro, del cual se habla más adelante.

CAPÍTULO 2

LA CRISIS MUNDIAL DE 1929/1930 EN CENTROAMÉRICA

La crisis económica internacional de 1929 no tuvo en Centroamérica efectos de “shock” financiero, de corto plazo, como ocurrió en los países desarrollados. Sus efectos catastróficos empujaron el estancamiento de la región por más de una década, apenas interrumpido por momentos de recuperación transitoria. La dinámica del comercio exterior se debilitó por la disminución de la demanda internacional de los productos agrícolas tradicionales así como de la importación de manufacturas, en especial de Estados Unidos. Las repercusiones de la depresión mundial fueron diferentes en cada país.

Los niveles más altos de comercio exterior se habían alcanzado en Nicaragua en 1926, en Guatemala en 1927 y en Costa Rica y El Salvador en 1928, mientras que en Honduras los ingresos en divisas extranjeras sólo empezaron a descender en 1931. Algunos efectos fueron nacionales, pero es posible generalizar sobre la crisis económica en el conjunto de la región como una depresión prolongada.

Debido a que la sociedad centroamericana tenía una base agrícola y su factor dinámico era el mercado exterior, la recuperación fue lenta y reforzó las tendencias conservadoras en el manejo de la crisis. A falta de indicadores más completos,

las estadísticas correspondientes al valor de las exportaciones e importaciones, es decir, datos sobre el comercio exterior, se utilizan para ilustrar la magnitud de la crisis bajo la forma de un descenso de la demanda internacional, que no se recuperó sino hasta después de 1945 y cuyo equivalente fue un descenso paralelo de las importaciones.

Como se ve, no hubo un hundimiento espectacular de la producción o en las exportaciones centroamericanas, sino más bien una pauta en zigzag que durante los primeros años mostró un descenso medio equivalente al 50% del valor de las exportaciones en relación con el punto más alto del decenio anterior y que impuso serias limitaciones a la capacidad de importar.

1. LA POLÍTICA ECONÓMICA DE LA OLIGARQUÍA: EL ESTANCAMIENTO A LARGO PLAZO

La caída internacional del patrón oro en 1931 creó problemas con el tipo de cambio; Guatemala y Honduras se resistieron a la devaluación, mientras que Costa Rica y El Salvador, después de dejar que su moneda flotara, la devaluaron entre 1931 y 1933. Nicaragua siguió su ejemplo en 1937. Los países más afectados por la crisis fueron Honduras y Nicaragua, porque la recuperación fue más lenta y tuvo lugar en niveles más bajos que en el resto de la región. En Nicaragua, además, la balanza comercial fue desfavorable de forma constante durante 15 años. Hubo una ligera mejora del estancamiento en 1936-1939, y especialmente en 1937, en Guatemala, El Salvador y Costa Rica.

La paralización del comercio internacional causada por el estallido de la Segunda Guerra Mundial contribuyó a prolongar los efectos críticos que se arrastraban desde 1930; los problemas del conjunto de la economía continuaron y los niveles de comercio exterior, del gasto público y del

producto interior bruto (PIB) en general no se recuperaron hasta después de 1945, y en algunos casos incluso más tarde, como ocurrió en Honduras.

La existencia de una economía de mercado interno fue importante porque una parte de la producción agrícola y la del sector de pequeños artesanos manufactureros se consumía en el propio país. Es difícil calcular con exactitud el valor de la producción para el mercado exterior y el de la que se destinaba al consumo local. En este último había un elemento importante de autoconsumo que se centraba no sólo en las economías campesinas, sino también en las fincas tradicionales, cuyos propietarios vivían de un extenso sistema de aparcería. Cálculos correspondientes a los primeros años cuarenta sugieren que, por término medio, menos de la mitad del valor de la producción agrícola se destinaba a la exportación³.

Cuadro 2
Producción centroamericana de café
por habitante

Producción por habitante (lbs. per cápita)			
País	Promedio	Promedio	Promedio
1924-28	1929-33	1934-38	
Costa Rica	74.891	93.520	86.774
El Salvador	66.778	91.492	86.311
Guatemala	52.338	45.239	50.288
Nicaragua	43.475	39.683	38.912

Fuente: The World's Coffee, N° 9, International Institute of Agriculture. Bureau of FAO in Rome, Villa Borghese, Rome, 1947, pág. 107. a/ Tabla obtenida del International Statistical Compendium, para 1924-38, Instituto Internacional de Agricultura.

³ E. Torres-Rivas "Centroamérica: algunos rasgos de la sociedad de posguerra", Documento de trabajo del Kellogg Institute, No. 25, Washington, D. C., 1984, cuadro 1, p. 49.

La naturaleza del sector agrícola la determinaban el funcionamiento y las relaciones entre sus tres subsistemas. El primer subsector era la industria bananera, que era moderna, la controlaba el capital norteamericano y sus operaciones estaban integradas internacionalmente. Por tanto, esta industria resultó afectada por la crisis no sólo en el descenso del volumen de comercio y la caída del precio de las bananas, sino también por los cambios en las estrategias de inversión por parte de la compañía matriz. En el decenio de 1930, la United Fruit Company, al no poder combatir eficazmente la sigatoka o “enfermedad de panamá”, decidió trasladar sus plantaciones a la región del Pacífico: Tiquisate en Guatemala, y Quepos en Costa Rica.

El segundo subsector era la agro industria del café, cuyo nivel de capitalización era diferente. Las empresas cafetaleras pudieron continuar trabajando incluso con ingresos disminuidos debido al carácter permanente del cultivo del café pero sobre todo por la acumulación de viejas experiencias de ciclos deprimidos seguidos por períodos de prosperidad. El descenso de los ingresos en el sector del café afectó al sistema de producción de modo relativo al impedir la expansión de las zonas cultivadas y las mejoras de la productividad, pero tuvo efectos desastrosos en la vida de millones de campesinos.

Hubo baja de salarios en el sector público, desocupación y sobre todo ‘desalarización’ de la economía rural. La disminución de la demanda internacional afectó a los ingresos de la oligarquía, si bien la estructura de propiedad de la tierra pudo absorber esta disminución sin que se vieran afectados los recursos básicos de producción. El cultivo del café se caracteriza por la inelasticidad de la oferta y porque necesita un voluminoso número de trabajadores estacionales. Por ello, frente a las inesperadas fluctuaciones de los precios y de la demanda, la ‘variable’ de ajuste que aseguró la normalidad de los beneficios

a los cafetaleros es el costo de la mano de obra, que tiende a la baja. Fue eso lo que aconteció con el campesinado, el tercer subsector, durante los largos años de depresión.

El tercer subsector era la economía campesina, de indígenas en Guatemala y El Salvador, cuya producción se distribuía más en forma de autoconsumo por parte de las familias que por medio de la venta de excedentes en mercados locales. De hecho, sólo este sector de la economía mejoró relativamente su nivel de producción. La crisis estimuló las condiciones para reforzar la demanda de esta elemental economía mercantil, solución ante la relativa debilidad del sector exportador. El incremento de la producción de alimentos básicos, en especial maíz y frijol, confirmó que la economía mercantil podía reaparecer o adquirir vigor dondequiera que productores independientes mantuviesen sus medios de producción, puesto que la disponibilidad de alimentos estimularía la demanda interior.

Las cifras correspondientes a este período indican que hubo momentos en que los granos básicos fueron relativamente abundantes, como por ejemplo, en 1937. En un ejercicio de deducciones lógicas basadas en el conocimiento de la estructura de producción, es dable suponer que tales rendimientos procedían del *sector* de la pequeña propiedad. Indudablemente, es esta información lo que ha permitido a Bulmer-Thomas analizar los diversos mecanismos que paliaron la crisis, uno de los cuales fue la substitución de las importaciones agrícolas durante la segunda mitad del decenio de 1930.⁴ La agricultura de mercado interno creció en importancia durante algún tiempo, lo cual se debió más a condiciones interiores que al efecto de políticas gubernamentales, donde los grandes propietarios eran influyentes.

⁴ V. Bulmer-Thomas, *The Political Economy of Central America since 1920*, Cambridge, 1987, cap. 4.

Cuadro 3
Centroamérica: Comercio exterior 1930-1945 (en US millones dólares actuales)

Año	Guatemala		El Salvador		Honduras		Nicaragua		Costa Rica		América Central	
	Export.	Import.	Export.	Import.	Export.	Import.	Export.	Import.	Export.	Import.	Export.	Import.
1930	51,6	33,0	22,0	20,0	54,9	26,0	13,4	16,0	27,5	11,0	169,4	106,0
1931	33,2	26,0	19,0	12,0	55,8	17,0	10,4	12,0	24,1	9,0	142,5	76,0
1932	23,3	15,0	9,0	9,0	55,6	12,0	7,0	7,0	14,4	5,0	109,3	48,0
1933	16,5	12,0	9,0	8,0	60,0	10,0	6,1	6,0	14,0	6,0	105,6	42,0
1934	19,2	12,0	9,0	5,0	52,6	12,0	4,6	5,0	8,2	9,0	93,6	46,0
1935	16,1	15,0	10,0	9,0	17,1	6,0	4,6	5,0	7,3	7,0	55,1	42,0
1936	22,0	18,0	10,0	8,0	11,2	5,0	3,5	6,0	7,8	8,0	54,5	45,0
1937	23,0	26,0	15,0	10,0	12,2	6,0	6,2	6,0	10,8	12,0	67,2	60,0
1938	23,5	26,0	10,0	9,0	15,9	10,0	4,3	6,0	9,3	13,0	63,0	64,0
1939	24,3	24,0	12,0	9,0	22,5	11,0	4,8	7,0	8,6	17,0	72,2	68,0
1940	15,6	20,0	10,0	8,0	22,3	11,0	3,7	8,0	7,0	17,0	58,6	64,0
1941	18,8	19,0	10,0	8,0	21,3	11,0	4,6	12,0	9,8	18,0	64,5	68,0
1942	26,7	14,0	17,0	9,0	20,3	12,0	5,6	8,0	10,2	12,0	79,8	55,0
1943	26,3	18,0	21,0	12,0	9,0	10,0	7,7	16,0	12,2	20,0	76,2	76,0
1944	31,1	21,0	22,0	12,0	19,8	14,0	7,8	12,0	10,4	22,0	91,1	81,0
1945	39,7	23,0	21,0	13,0	27,6	15,0	6,9	14,0	11,5	27,0	106,7	92,0

Fuente: CEPAL, *América Latina: Relación de Precios de Intercambio*, Santiago, 1976, pp. 35, 43, 45, 49 y 55.

La capacidad de absorción de las economías campesinas se vio puesta a prueba cuando se convirtieron en refugio para las masas rurales sin empleo. Como ocurre en las economías monoexportadoras, donde los impulsos dinámicos tienen su origen en la demanda exterior, la pérdida de tales impulsos se traduce en una decadencia parcial del sector monetario del mercado interior, sin consecuencias catastróficas para los grupos de alto ingreso, que siempre lo tendrán.

Entre el campesinado, la desmonetarización acentuó el pago en especie o con 'monedas' privadas solo canjeables en la tienda de la finca, reforzando la estremecedora explotación de la población del campo. De cualquier manera la producción de café dependía sólo en parte de las relaciones salariales, y más en el pago con tierra como ocurría con el mozo colono en Guatemala, El Salvador o Nicaragua, o el aparcerero en Costa Rica. En ambas situaciones los dueños de la tierra evitaban los problemas de pagar salarios y dejaban el mantenimiento y la substitución de la fuerza laboral como factores cuya relación con el coste de producción era sólo marginal. En otras palabras, el valor de la mano de obra no formaba parte de los costos de producción.

Hacia 1935 se pusieron en vigencia leyes contra la vagancia o el fatídico Boleto de Jornalero, donde los patronos debían anotar los días trabajados por el peón, a fin de asegurarse el trabajo campesino por 150 anuales como mínimo. En Guatemala fue peor para los indígenas sometidos a esta nueva modalidad de trabajo forzado, que retrasó el surgimiento de relaciones capitalistas.

La crisis puso al desnudo, por lo prolongada, la naturaleza primitiva del capitalismo agrario en sociedades profundamente desiguales. Las ganancias producidas por el café, que se derivaban de los precios internacionales y estaban sujetas a ellos, tenían una relativa independencia del

coste interior de producción, que sólo indicaba un mínimo; los ciclos de crecimiento o de depresión no se reflejaban nunca en los niveles salariales ni en otras condiciones de su reproducción social. El nivel de vida de la población campesina estaba determinado por el nivel de consumo que permitía la economía de subsistencia. No obstante, había desempleo en el nivel urbano nacional, menos visible que en el campo donde vivía el 80% de la población.

Como se señala más adelante, la expresión política de la crisis fue el ascenso de caudillos militares, con parecidos por sus arbitrariedades y su dureza autoritaria y muy plegados a los intereses de sus respectivas oligarquías. Esa alianza conservadora explica las respuestas gubernamentales a estos problemas; en los cinco países consistieron en adoptar una política tradicional y ortodoxa anticíclica para hacer frente al ciclo económico crítico. Lo tradicional lo determinaba la cultura terrateniente, cuya mentalidad influida con fuerza por el liberalismo económico, les empujaba a insistir en la naturaleza ineficaz de la acción estatal. La ortodoxia de la política residió en la aplicación del principio según el cual el gasto público estimula la demanda sólo en la medida en que supera los ingresos fiscales; así pues, el déficit fiscal debía evitarse a toda costa.

Los gobiernos centroamericanos llevaron a cabo reducciones presupuestarias inmediatas, como rebajar salarios, como consecuencia de la apreciable caída de los ingresos fiscales, de los impuestos sobre las importaciones y las exportaciones. Lo más sorprendente en este sentido ocurrió cuando a mediados del decenio de los treinta las reducciones del gasto público alcanzaron un nivel en que empezaron a producir pequeños excedentes. De manera dramática e irresponsable, los dictadores Ubico y Hernández, en Guatemala y El Salvador, se jactaron de tener superávit que transformaron en ahorro público no utilizado, reforzando así los peores efectos sociales del estancamiento, o profundizando a este.

De los cinco gobiernos, el de Guatemala fue el más torpemente ortodoxo, ya que después de 1932 consiguió equilibrar el presupuesto y en lo sucesivo generó un excedente cada vez mayor que se acumuló de forma improductiva hasta el final de la guerra. El gobierno no sólo redujo el empleo público, sino que hasta recortó los salarios e instituyó una política de construcción de carreteras –basada en la mano de obra gratuita–, todo lo cual produjo desestímulos para la demanda interna.

- a) Exportación de la estación comercial que termina el 30 de septiembre.
- b) Producción por estación octubre-septiembre.
- c) Exportación durante el año fiscal que termina el 31 de julio.
- d) Exportación por año calendario.
- e) Producción por estación noviembre-octubre.

Los demás gobiernos no estaban en una situación diferente y, frente a la reducción del gasto público para evitar los balances deficitarios, recurrieron a la deuda interna. Los presupuestos de Honduras y Nicaragua se gestionaron en el nivel más bajo de gastos puramente administrativos, un nivel tal que el siguiente paso hubiera sido la parálisis total. En el año 1937 se registró una fugaz mejora en el comercio exterior, importante porque señaló un punto decisivo después del cual el gasto público empezó a crecer lentamente. Vale la pena recordar que en otras sociedades latinoamericanas las políticas anticíclicas estimularon la demanda interna, el gasto público aumentó y la producción interior empezó de hecho a sustituir importaciones⁵ para el mercado nacional.

⁵ Véase, por ejemplo, Celso Furtado, *Formación Económica de Brasil*, Fondo de Cultura Económica, México, 1963.

Cuadro 4
Producción centroamericana de café post crisis
(1929 a 1945; cifras en 1.000 libras)

Año	Costa Rica a/	Guatemala b/	Honduras c/	Nicaragua d/	El Salvador e/	Total
1944-45	48,061	151,679	5,953	26,896	136,687	369,276
1943-44	41,447	132,498	4,189	28,881	136,908	343,923
1942-43	53,352	142,640	4,409	26,456	148,151	375,008
1941-42	47,636	155,647	4,850	27,999	142,640	378,772
1940-41	47,400	113,759	1,984	27,999	128,530	319,672
1939-40	41,227	115,523	3,086	33,731	147,710	341,277
Promedio 1939-40 1943-44	45,812	132,013	3,704	29,013	140,788	351,330
1938-39	44,534	118,609	4,189	38,361	148,814	354,506
1937-38	53,132	125,664	5,512	31,526	140,655	356,489
1936-37	58,423	147,710	3,307	34,833	158,292	402,565
1935-36	46,959	121,255	2,425	28,881	126,325	325,845
1934-35	53,352	94,358	4,189	40,786	130,073	322,758
Promedio 1934-35 1938-39	51,280	121,519	3,924	34,877	140,832	352,432
1933-34	42,108	79,367	4,189	32,408	127,869	285,941
1932-33	61,289	110,011	3,527	30,203	141,096	346,126
1931-32	40,786	119,050	2,425	17,858	105,822	285,941
1930-31	50,706	89,949	3,086	34,833	165,347	343,921
1929-30	51,809	97,224	3,527	33,731	143,301	329,592
Promedio 1929-30 1933-34	49,340	99,120	3,351	29,807	136,687	318,305

Fuente: The World's Coffee, N° 9, International Institute of Agriculture, Bureau de la FAO en Roma. Villa Borghese, 1947. Pp. 98-99 y 116; New York Pan-American Coffee Bureau proporcionó las cifras de la primera parte del cuadro.

Debido a la actitud ortodoxa en la política pública, en la que influía la defensa de los intereses de los terratenientes, el gasto público durante esta época de crisis no sólo no hizo frente a los efectos del ciclo depresivo, sino que contribuyó indirectamente a ellos. El crecimiento de la deuda pública para cubrir los desequilibrios presupuestarios resultó improductivo, a la vez que la aportación gubernamental al PIB fue siempre pequeña y, durante estos años, descendió. Era prácticamente impensable crear programas de obras públicas, compra de cosechas o expansión del crédito.

En general, no existía ninguna política fiscal capaz de “curar” una depresión cuyos orígenes eran extranjeros ni de limitar los trastornos producidos por la debilidad de las exportaciones cuando su origen eran exclusivamente los movimientos de precios en vez del crecimiento de la productividad del trabajo. El atraso social quedó reflejado en la incuria técnica frente a los desarreglos de la economía; la cultura terrateniente es más responsable del largo estancamiento por las políticas que trazó en una falsa defensa de sus intereses que los efectos que produjo el comercio exterior.

En resumen, exceptuando variaciones de poca importancia, los Estados centroamericanos respondieron a la crisis económica con una serie de medidas liberales y ortodoxas. Sus medidas (o la falta de ellas) debilitaron el consumo interior, recortando drásticamente el gasto público, reduciendo los salarios, limitando la movilización de recursos financieros. Al mismo tiempo, como veremos, un temor profundo al natural descontento social encontró expresión en la defensa del orden político tradicional mediante la intensificación de los mecanismos autoritarios que ya estaban profundamente arraigados en la cultura de la región. Así, se juntaron la parálisis económica, el estancamiento social y la represión política. Al final nadie ganó y la modernización social y política tuvieron, de nuevo, que esperar.

Las repercusiones de la Segunda Guerra Mundial en las economías centroamericanas fueron considerables porque prolongaron el ciclo crítico iniciado en 1929/30. Recuérdese que Europa era un mercado importante para las exportaciones de la región. A corto plazo la consecuencia más sensible fue la pérdida de los mercados del café –primero el alemán y después el británico– y la reorientación del comercio centroamericano hacia Estados Unidos, con lo cual se consolidó una tendencia que venía creciendo desde la Primera Guerra Mundial. Este cambio revistió especial importancia porque la balanza comercial de la región con Estados Unidos era deficitaria mientras que la anterior con Gran Bretaña y Alemania presentaba superávit. La región se convirtió de un buen vecino en un pobre socio.

Entre las medidas positivas de esa época estuvo el Acuerdo Interamericano sobre el Café (XI-1940), que por primera vez instauró el sistema de cuotas para el creciente mercado estadounidense. En cambio, las exportaciones de banano descendieron. La reducción o pérdida de los mercados del sudeste asiático, por la guerra, estimuló una cierta diversificación agrícola al introducirse “cosechas de guerra” como, por ejemplo, el caucho, los aceites esenciales y las fibras vegetales, cuya producción estratégica el gobierno norteamericano encargó a las compañías United Fruit y Standard Fruit en Guatemala, Honduras y Costa Rica. Sin embargo, la importancia de estas cosechas fue temporal, ya que después de la guerra sólo el abacá y la palma africana continuaron siendo productos importantes en el enclave bananero.

Ninguna sociedad centroamericana estaba a la sazón en condiciones de fomentar el crecimiento industrial mediante la substitución de importaciones, dado que la guerra fue un gran obstáculo para las importaciones. México y Brasil, por ejemplo, hicieron esfuerzos por abastecer los mercados con artículos manufacturados de producción nacional.

Hacia 1944-1945 estos países, en especial Guatemala y El Salvador, habían acumulado forzosamente cuantiosas reservas de divisas extranjeras y oro que no se empleaban en actividades productivas. En ese último año se terminó de pagar la llamada “deuda inglesa”, contraída cien años antes por la República Federal, para atender los urgentes gastos de la administración del nuevo Estado. Al mismo tiempo, el ingreso de divisas no utilizadas contribuyó a provocar el fenómeno inflacionario, que revistió especial agudeza en Honduras y Nicaragua.⁶ Los problemas fiscales que existían desde 1930 continuaron en grado variable hasta 1942, pero sólo causaron problemas graves en Costa Rica bajo el régimen de Calderón Guardia.

Ni antes ni después de 1930 las ventajas o contratiempos del modelo de agricultura orientada a la exportación se pusieron en duda. Al contrario, se consideraba que el alto grado de especialización económica y la libertad de vender en el mercado exterior ofrecían buenas oportunidades para el progreso material de estas sociedades y para la acumulación primaria de una élite voraz. La crisis no cambió la mentalidad oligárquica que creía en el destino agrario de la nación, en la naturalidad de los buenos y malos momentos. La democracia no era vista sino como una amenaza para una sociedad de peones analfabetos. La ciudadanía, el sujeto libre capaz de elegir o ser electo sólo estaba en la élite. Y durante la crisis, nada se movió.

⁶ V. Bulmer-Thomas, *Political Economy of Central America*, p. 100.

CAPÍTULO 3

LA POLÍTICA, LA DICTADURA GARANTÍA DEL ORDEN TERRATENIENTE

En Honduras los conflictos interclasistas no fueron nunca importantes, y el control político se logró siempre con base en adhesiones partidarias, que luego se convertían en hostilidad liberal/conservadora. La inestabilidad en este país no tuvo los orígenes tradicionales por la tierra o el control del mercado de trabajo. Tampoco en Nicaragua, donde la dictadura Somoza es un resultado directo de la intervención norteamericana, autoritarismo personalista que no tiene raíces tradicional/oligárquicas. De hecho, Somoza no lo fue nunca por sus orígenes de clase.

En Costa Rica, el campesino, propietario y productor no se movió en el interior de una subordinación total, política, pues fue siempre mano de obra salarizada, moderna. La diferencia entre los extremos se expresa en el papel desempeñado por los militares como defensores del statu quo, en el uso de la fuerza en la vida política, en el temor a jugar en la democracia los recursos del poder. En la existencia de sectores medios, educados, urbanos, susceptibles de desarrollar intereses políticos propios.

1. EL CAUDILLAJE MILITAR DICTATORIAL: LA DEFENSA DEL ORDEN TERRATENIENTE

La democracia surgió en unos cuantos países de lo que O'Donnell llama el noroeste europeo, asociada a una etapa no preliminar del capitalismo, como expresión de un camino avanzado de modernización. La democracia política no solo está articulada al capitalismo sino que se nace en el marco del Estado-nación, que es una nueva forma de comunidad. A nuestras playas llegaron las experiencias de ultramar y copiamos, implantar es más apropiado, instituciones, normas y valores. No es el caso describir esa historia. En Centroamérica, en los años treinta, funcionaba un Estado-nación de inspiración liberal, no democrático, con una nación a la que dio forma como comunidad, que no reclamó una identidad colectiva de todos quienes la formaban sino sólo de la élite que lo dirigía. Y un capitalismo agrario en su fase de acumulación originaria. Todos eran nacionales, pocos fueron ciudadanos y la expresión del poder de esa configuración fue la dictadura.

Las raíces de la democracia y la dictadura tienen en estas latitudes variantes de su patrón original, que no pueden ser comprendidos si no son considerados como dimensiones históricamente contingentes. Las estructuras autoritarias se explican asociadas a la coacción extra económica en las relaciones sociales de la producción agrícola, también en la diferencia de la lógica del trabajo forzado frente a los efectos del asalariado libre. En ambas situaciones hay fortísimas expresiones de violencia contra los dominados. Sin la fuerza el cafetalero terrateniente no podría extraer renta y ganancia ni mantener sus privilegios del monopolio de la tierra, todo ello en contraste con el burgués rural, cuyo poder se origina en la propiedad del capital. En la región hay variación de posibilidades desde la democracia liberal

en Costa Rica, dos dictaduras oligárquicas en El Salvador y Guatemala, una dictadura familiar con apoyo de factores extranjeros no oligárquicos, en Nicaragua y un régimen más liberal que democrático, inestable más por los desencuentros en la cúpula que por conflictos con el campesinado, como en Honduras.

La subordinación de la peonada campesino-indígena, especialmente en Guatemala y El Salvador se obtuvo siempre por la fuerza, muchas veces violencia innecesaria, ajena al control político que los indígenas nunca rechazaron. Los cafetaleros produjeron formas ideológicas de control y subordinación, basadas en el racismo. En tales condiciones que se recrudecieron con la crisis, la autocracia del caudillo militar resultó inevitable. Esto explicaría el rechazo que estos regímenes enfrentaron en la posguerra, que se relata en el capítulo siguiente.

El fenómeno político más importante de los años treinta fue el recrudecimiento de la guerra antinorteamericana, en el norte de Nicaragua, encabezada por Sandino. Como ya se dijo, Nicaragua había sido invadida por los norteamericanos el 3 de octubre de 1912, fecha en que una escuadra de navíos de guerra entró en Corinto, en el Pacífico, y 1,500 infantes de marina desembarcaron en un intento de pretextos múltiples, el más visible de los cuales fue poner fin a la lucha entre conservadores y liberales. Los norteamericanos se marcharon en agosto de 1925 pero el fratricidio nicaragüense –la Tercera Guerra constitucionalista– les hizo volver en 1926, esta vez en mayor número.

Convencidos los ‘yankis’ que era necesaria una última prueba, llamaron a elecciones en 1928, que se conocen como “*the overseen elections*” (...‘las sobrevigiladas’...), con 5,642 marines que aseguraron la libre participación; elecciones sin fraude que ganó el partido Liberal, con José Ma. Moncada

como presidente. Se realizaron elecciones libres pero vigiladas en 1930 y 1932. En mayo de 1927, el coronel Rhea inicia la creación de la Constabularia (Guardia Nacional) que en 1933 pone en manos del coronel Anastasio Somoza.

Esta nueva intervención culminó con lo que se ha considerado como un acuerdo vergonzoso entre las fuerzas militares extranjeras y los políticos nicaragüenses tradicionales. Augusto César Sandino y un grupo de oficiales liberales disidentes se sublevaron en julio de 1927. Fue el comienzo de una guerra civil prolongada por más de seis años.

A principios de 1930 las unidades de la infantería de marina norteamericana estacionadas en Nicaragua se concentraron en las ciudades y dejaron las operaciones principales de la guerra en manos de la Guardia Nacional, creada por ellos. La marcha de la guerra era irregular, pero las ofensivas de Sandino y sus hombres cobraron fuerza durante el invierno de 1931-1932, posiblemente debido a la crisis económica y sus efectos entre el campesinado empobrecido de Las Segovias, una de las zonas productoras de café más importantes de Nicaragua. El presidente norteamericano Herbert Hoover anunció su intención de retirar los últimos infantes de marina después de las elecciones presidenciales que debían celebrarse en noviembre de 1932. Washington quería que el gobierno nicaragüense llegara directamente a un acuerdo con los sandinistas o continuase la guerra sin la ayuda militar de Estados Unidos.

El 2 de enero de 1933, un día después de que Juan Bautista Sacasa tomara posesión de la presidencia y dieran el mando de la Guardia Nacional al ya ahora general Somoza, las últimas tropas extranjeras zarparon de Corinto. A principios de febrero de 1933, Sandino llegó a un acuerdo de paz con el nuevo gobierno liberal, pero un año más tarde, el 21 de febrero de 1934, al salir de una cena con Somoza,

fue asesinado por la Guardia Nacional, por órdenes de su director. La guerra patriótica de Nicaragua tuvo repercusiones considerables en toda América Latina, pero especialmente en Centroamérica, donde exacerbó el descontento nacional y social producido por el paro, los salarios bajos y la escasez causados por la crisis económica.

Como ya se dijo de 1913 a 1931, la paz del orden terrateniente en El Salvador se aseguró mediante el monopolio del poder de las familias Meléndez y Quiñónez, que se sucedieron en la presidencia a través de esa bien conocida experiencia de elecciones sin democracia, de estabilidad con autoritarismo. A la oligarquía le satisfacen las elecciones como rito pero no como proceso en que se puede perder. El último de los jefes de Estado de esa dinastía fue Pío Romero Bosque, que en un gesto de independencia aseguró elecciones libres en 1931.

Por eso las ganó el Dr. Arturo Araujo, díscolo miembro de la élite salvadoreña, graduado en Gran Bretaña, quien formó el Partido Laborista e hizo su campaña ofreciendo cambios a favor de los pobres, incluyendo la reforma agraria. Su victoria con más del 50% de votos fue un hecho insostenible para la oligarquía y su candidato, Alberto Gómez Zárate. La depresión económica y sus efectos fueron como una caja de resonancia para la prédica laborista; fue ese el primer despertar de masas en una sociedad rural como lo era El Salvador.

Los cafetaleros del país decidieron echar al Dr. Araujo y el 2/XII/1931 los militares ejecutaron la orden, colocando al general Maximiliano Hernández Martínez como nuevo presidente. Es este el primer acto de lo que fue la más extendida república pretoriana en América Latina: *los militares se quedaron en el gobierno durante medio siglo*, desde esa fecha hasta 1979/82.

El fenómeno de mayor descontento procurado por la crisis mundial ocurrió con la rebelión campesina que estalló en la región de Izalco, en El Salvador (I/1932), a la que se sumaron algunos grupos urbanos, estudiantes, entre ellos Farabundo Martí. Fue sangrienta no por el lado del accionar campesino sino por la brutal reacción gubernamental a que dio lugar el levantamiento reivindicativo. La matanza de 30.000 campesinos indígenas fue un acto repulsivo que mancha la historia nacional. Los campesinos pedían trabajo y tierra, no democracia ni libertad, demandas estas que agregaron un grupo de estudiantes y sindicalistas de aproximación comunista. La represión fue atroz pero éstos, que no fueron sus instigadores, fueron sus víctimas.

De acuerdo con las disposiciones del Tratado de Paz y Amistad firmado entre los cinco países y Estados Unidos en 1923, Washington se negó a reconocer al nuevo régimen. Sin embargo, el general Hernández Martínez se mantuvo en el poder con el respaldo de la poderosa élite cafetalera hasta 1944. Un año después, en 1933, Estados Unidos reconoció al dictador, lo que puso fin tanto al Tratado Interamericano como a la política de no reconocimiento de regímenes ilegítimos, que hasta entonces seguía Washington frente a los golpes de Estado.

Las causas y el programa de la rebelión popular de enero de 1932 nunca se han aclarado suficientemente, pero es indudable que fue básicamente un levantamiento campesino y que en algunas regiones como Nahuizalco y Juayúa fue apoyado de forma vigorosa por comunidades indígenas. Durante varios días tropas bien armadas del gobierno reprimieron a los grupos insurrectos, armados con machetes y garrotes, que invadían sin orden ni concierto la parte occidental de El Salvador. La severidad de esta represión creó un clima de terror que se extendió más allá de las fronteras de este pequeño país y duró muchos años. Desde

entonces, el poder oligárquico prohibió las manifestaciones culturales indígenas en un intento de violencia antiétnica y de convertir a esta sociedad, por el miedo, en una sociedad ‘homogénea’.

Lo que ocurrió en El Salvador fue una “jacquerie” tropical, no un acto revolucionario bien planeado: la manifestación desorganizada del profundo descontento popular que además no era aislado en la región. La base artesanal del sector manufacturero centroamericano y la existencia de vastos sectores campesinos, paralizadas quizá por el terror, no evitaron de hecho que la protesta organizada llegase al sector del proletariado agrícola vinculado a las plantaciones de banano. El descontento social no se expresó de forma orgánica pues era una población que no tenía tradiciones de organización y luchas era general, pero hubo, sin embargo, huelgas en Costa Rica y Honduras.

En Costa Rica, adquirió un carácter relativamente más sistemático y activo cuando, en agosto de 1934, el malestar popular culminó con la huelga de los trabajadores de las plantaciones bananeras de la región de Limón. Esta huelga duró más de 45 días, disfrutó de amplia solidaridad popular y se convirtió por sus consecuencias en un acontecimiento decisivo en la historia social del país, como el inicio del movimiento sindical independiente.

Hubo también descontento y protestas sociales en las plantaciones del norte de Honduras. En febrero de 1932, estalló un movimiento huelguístico de amplia base pero efímero en la Tela Railroad Company, como consecuencia del despido de 800 trabajadores y una reducción general de los salarios. Al principio el gobierno de Vicente Mejía Colindres apoyó las reivindicaciones de los trabajadores, temeroso de que la actuación de la compañía —que exacerbó los efectos de la crisis económica— hiciera que el malestar colectivo se generalizara.

En cambio, el descontento entre los trabajadores bananeros del departamento de Izabal, en Guatemala, no dio origen a huelgas ni otras formas de protesta colectiva. Lo único que queda en la historia de las luchas sociales de este país es la represión preventiva que ordenó el presidente Ubico, a quien habían alarmado las noticias procedentes de los países vecinos. El incipiente movimiento sindical de base artesanal, de inspiración socialista, fue destruido cuando el gobierno fusiló 14 supuestos líderes, en 1933, entre los que había estudiantes y obreros, y encarceló decenas de sospechosos, de los que más de 15 permanecieron presos, sin ser juzgados, hasta 1944.

El orden oligárquico liberal estaba políticamente a salvo, en medio de la dura prueba a que lo sometió la fuerza subversiva del mercado. ¿Es necesario preguntarse sobre las bondades de este período de ‘estabilidad’ institucional? Más que estabilidad fue un sofocamiento de la vida social por medio de procedimientos que no tenían nada de democráticos. Fue como someter a un colectivo humano al control que una olla de presión ejerce sobre su contenido y que no lo deja escapar.

De hecho, lo que la crisis alimentó con fruición fueron las raíces de la tradición autoritaria y del caudillismo político. Fueron dictadores que asumieron el papel de guías políticos con uniforme militar, mesiánicos y sangrientos, que actuaron en última instancia en defensa de la “divina oligarquía”. El retraso cultural y político de casi 15 años demoró el desarrollo de la sociedad, una generación sofocada, inutilizada para la modernidad.

Aquí el sistema de dominación oligárquica en general, amenazado menos por el descontento popular que por sus inconsistencias económicas, reveló toda su enorme capacidad de resistencia al cambio que heredaron hasta los biznietos.

La burguesía rural no pudo, ni antes ni después, ser la fuerza social de la modernidad, de la democracia, de la renovación. Esto es particularmente evidente en la dimensión política, pues se reforzaron los aspectos más negativos de un sistema de poder que pareciera estar siempre a la defensiva. De tales aspectos, ocupó un lugar principal la incapacidad del régimen de tolerar cualquier forma de oposición, rasgo que es en opinión de Rouquié, el más característico de los componentes autoritarios.

Cuadro 5
Presidentes de Guatemala desde 1931

Período	Nombre	Tipo
1931-1944	Jorge Ubico	Dictador liberal
1945-1950	Juan José Arévalo	Demócrata
1951-1954	Jacobo Arbenz	Demócrata
1954-1957	Coronel Carlos Castillo Armas	Dictador militar
1957-1963	General Miguel Ydígoras Fuentes	Dictador militar
1963-1966	Coronel Enrique Peralta Azurdía	Dictador militar
1966-1970	Julio César Méndez Montenegro	Gobernante civil-militar
1970-1974	Coronel Carlos Arana Osorio	Dictador militar
1974-1978	General Eugenio Kjell Laugerud García	Dictador militar
1978-1982	General Romeo Lucas García	Dictador militar
1982-1983	General Efraín Ríos Montt	Dictador militar
1983-1985	General Oscar Humberto Mejía Víctores	Transición militar
1986-1990	Vinicio Cerezo Arévalo	Transición civil
1991-1993	Jorge Serrano Elías	Transición civil
1993-1996	Ramiro de León Carpio	Transición civil
1996-2000	Alvaro Arzú	Civil
2000-2004	Alfonso Portillo	Civil
2004-	Óscar Berger	Civil

Fuente: Archivo personal con base en información documental diversa.

El sistema electoral parecía haberse consolidado durante el decenio de los 20s, pues se mantuvo formalmente en todos los países. Nótese que excepto en El Salvador donde el general Hernández Martínez fue nombrado presidente en 1931 por la Asamblea Nacional, Ubico, Carías y Somoza fueron electos en 1931, 1933 y 1937 respectivamente y a partir de ahí se reeligieron ilegalmente hasta su caída, los dos primeros y antes de su muerte, el último. De hecho, Somoza padre fue “el último de los *marines* y el primero de la dinastía” familiar. En Guatemala el general liberal Jorge Ubico fue elegido en febrero de 1931, sin oposición, por el Partido Liberal Progresista. Su posición como caudillo pronto quedó confirmada cuando anuló la autonomía municipal, puso graves trabas a la independencia de la judicatura y, en general, concentró el poder en sus propias manos. Ubico fue reelegido en 1937 y de nuevo en 1943, tras sucesivas modificaciones de la Constitución.

En Honduras el general Tiburcio Carías Andino fue elegido en febrero de 1933, después de años de aventuras militares y dos intentos frustrados; al igual que Ubico, logró dotar al poder ejecutivo de autoridad total y centralizó en sus manos el control de la vida política del país, exceptuando la actividad en los campos de banano reservados a los propietarios extranjeros de las plantaciones. Una asamblea constitucional de 1936 promulgó una Constitución que modificaba la duración del mandato presidencial y autorizaba la continuación durante seis años más después de su expiración legal en 1939; nuevas ampliaciones autorizadas por el parlamento permitieron a Carías gobernar hasta 1948.

En Nicaragua el gobierno del liberal Juan Bautista Sacasa, elegido bajo la supervisión de Estados Unidos en 1932, fue derribado por un golpe de Estado dirigido por el impaciente general Somoza, también liberal y sobrino del depuesto, en 1936. Después de un breve período de transi-

ción, Somoza fue elegido en noviembre de 1936 y pasó a ser presidente de Nicaragua el 1 de enero de 1937. Así empezó la larga saga familiar de poder, riquezas, odios y entregas, que solo terminó hasta 1979 con la expulsión política del hijo y en 1982 con su muerte, en Paraguay.

Cuadro 6
Jefes de Estado de El Salvador desde 1931

Período	Nombre	Forma de asunción del cargo
1931-1934	General Maximiliano Hernández Martínez	Golpe
1934-35	General Andrés Ignacio Menéndez	Nombrado por Hernández Martínez
1935-1944	General Maximiliano Hernández Martínez	Elección fraudulenta
1944	General Andrés Ignacio Menéndez	Nombrado por Hernández Martínez
1944-45	Coronel Osmín Aguirre y Salinas	Golpe
1945-1948	General Salvador Castañeda Castro	Elección no competitiva
1948-1950	Junta militar-civil	Golpe
1950-1956	Mayor Oscar Osorio	Elección semicompetitiva
1956-1960	Tte. Cor. José María Lemus	Elección no competitiva
1960-61	Junta militar-civil	Golpe
1961-62	Junta militar-civil	Golpe
1962	Eusebio Rodolfo Córdón	Nombrado por asamblea constituyente
1962-1967	Coronel Julio Adalberto Rivera	Elección no competitiva
1967-1972	Coronel Fidel Sánchez Hernández	Elección semicompetitiva
1972-1977	Coronel Arturo Armando Molina	Elección fraudulenta
1977-1979	General Carlos Humberto Romero	Elección fraudulenta
1979-1982	Series de juntas militares-civiles	Golpe
1982-1984	Álvaro Magaña	Nombrado por asamblea constituyente
1984-1989	José Napoleón Duarte	Elección semicompetitiva
1989-1994	Alfredo Cristiani	Elección semicompetitiva
1994-1999	Armando Calderón Sol	Elección competitiva
1999-2004	Francisco Flores	Elección competitiva
2004-	Elías Antonio Saca	Elección competitiva

Fuente: *idem* cuadro 5.

CAPÍTULO 4

EL PROYECTO DEMOCRÁTICO EN LA POSGUERRA: VICTORIAS Y FRUSTRACIONES

El predicado general es que la crisis del 29/30 produjo un estancamiento en el desarrollo previsible de estas sociedades; fue más de una década pues la Segunda Guerra prolongó los trastornos hasta 1944/45. El fin del Gran Conflicto abrió de nuevo posibilidades de reinmersión en las tendencias del comercio mundial; al mismo tiempo, fue necesario un ajuste de cuentas en el plano de la política local. La imagen de la “olla de presión” es útil para sugerir que las paredes del orden autoritario fueron insuficientes para contener el poderoso apremio por el cambio. Las presiones aumentaron y el tapón saltó finalmente, dejando en libertad el malestar tanto tiempo reprimido.

En los cinco países la presión salió con ímpetus diversos que cambiaron las sociedades centroamericanas. Por eso, se puede hablar en propiedad que hubo transformaciones en todos, y en algunos fueron exitosos movimientos antioligárquicos que buscaron el acomodo de nuevas fuerzas sociales, como en Costa Rica y Guatemala. En otros, se produjeron ingratas restauraciones, como en Honduras y El Salvador. La olla de presión no tuvo ‘fugas’ en Nicaragua, pero continuó acumulándose hasta el estallido final de 1979.

En los escenarios de la posguerra hubo dos personajes señeros cuyas vidas políticas simbolizan posibilidades y límites de la modernidad buscada: las figuras de José Figueres y Jacobo Arbenz personifican respectivamente el ímpetu gradualista, exitoso y el revolucionario, impaciente, fracasado. El primero, militarista, centrista, oportunista con ideales, pro norteamericano; el segundo, militar, izquierdista, con rígidas convicciones democráticas, antimperalista. De muchas maneras emblemáticas reflejan dos realidades opuestas, Guatemala y Costa Rica.

Esta, la realidad costarricense, es digna de mención inicial porque el orden político *antes de ser democrático fue estable*, con una oligarquía paradigmática, llena de caudillos civiles, liberales, cultos, respetados y nunca temidos, elegidos por su prestigio, que actuaban mediante pequeños partidos de notables, formados por ciudadanos prestigiados por diversos motivos de su vida pública. Se caracterizaban por su capacidad de tolerar la existencia de la oposición política y de hacerse mutuamente fraude. Lo relevante es que *en este país había partidos políticos* y competencia electoral, que les permitió superar en gran parte la prueba de los efectos sociales de la depresión. De hecho, el último caudillo liberal, Ricardo Jiménez, no fue elegido sino nombrado por el Congreso en mayo de 1932, tras proponerle primero como candidato y proclamarle luego presidente. Aunque fue un fracaso, el intento de golpe de Estado en Bella Vista, reveló las limitaciones que ya eran evidentes en el antiguo modelo oligárquico.

Con todo, en febrero de 1936, León Cortés, del Partido Republicano Nacional y abierto simpatizante del fascismo, fue elegido sin que se produjera ninguna crisis importante. En 1940 el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, del ala católica del PRN, fue electo con el 84% de votos. Se dice que su excepcional política social produjo la división del poderoso

PRN, y sus alianzas el rompimiento con la élite oligárquica. En efecto se apoyó en la Iglesia católica –encabezada a la sazón por el arzobispo Sanabria– y Vanguardia Popular, el pequeño pero influyente partido de los comunistas dirigidos por Manuel Mora Valverde.

Cuadro 7
Presidentes de Honduras desde 1932

Período	Nombre	Partido
1932-1949	Tiburcio Carías Andino	Elección Partido Nacional
1949-1954	Juan Manuel Gálvez Durón	Elección Partido Nacional
1954-1956	Julio Lozano Díaz	Nombramiento Partido Nacional
1956-57	Junta Militar	Golpe Fuerzas Armadas
1957-1963	Ramón Villeda Morales	Elección Partido Liberal
1963-1971	General Oswaldo López Arellano	Golpe Fuerzas Armadas
1971-72	Ramón Ernesto Cruz Uclés	Elección Partido Nacional
1972-1975	General Oswaldo López Arellano	Golpe Fuerzas Armadas
1975-1978	General Juan Melgar Castro	Elección Fuerzas Armadas
1978-1982	General Policarpo Paz García	Elección Fuerzas Armadas
1982-1986	Roberto Suazo Córdova	Elección Partido Liberal
1986-1990	José Azcona del Hoyo	Elección Partido Liberal
1990-1994	Rafael Leonardo Callejas	Elección Partido Nacional
1994-1998	Carlos Roberto Reina	Elección Partido Liberal
1998-2002	Carlos Flores Facussé	Elección Partido Liberal
2002-2006	Ricardo Rodolfo Maduro Joest	Elección Partido Nacional
2006-	José Manuel Zelaya	Elección Partido Liberal

Fuente: *idem* cuadro 5.

El PRN hizo elegir a Teodoro Picado (con el 66%) en 1944, quien profundizó la política social; la votación fue calificada de fraudulenta, en medio de un clima radicalizado, en el que la acusación de fraude era paralela a la denuncia

anticomunista. El enfrentamiento condujo a un paro patronal el 23 de julio en 1947, la crisis se prolongaba por más tiempo y se exacerbó cuando en 1948 Calderón Guardia trató de recuperar la presidencia en elecciones calificadas de nuevo como fraudulentas. José Figueres, con apoyo de la llamada Legión del Caribe⁷ se levantó en armas en una rebelión que derrotó a las fuerzas gubernamentales.

Es oportuno precisar a esta altura de la historia, que a finales de la década de los cuarenta, es decir, inmediatamente después del triunfo aliado frente al fascismo, se rompió ese frente con ocasión de la “crisis de Berlín” y se planteó el encono antisoviético tan arriesgado como angustioso. Se presentó como el enfrentamiento a muerte de los sistemas capitalista y socialista: la Guerra Fría alteró las fronteras del quehacer político y situó a las izquierdas ‘del otro lado’ del mapa.

Hubo un anticomunismo liberal en Europa, pero otro fanático y cerril en los Estados Unidos que se tradujo en la periferia en un nutrimento para robustecer los peores rasgos autoritarios locales. Lo social y lo democrático, en la intransigente ideologización anticomunista, fue condenable como parte del arsenal enemigo. En un terreno culturalmente conservador, ausente de tradiciones de participación o conflictos sociales, sin hábitos de organización, el anticomunismo se convirtió en la medida para juzgar la defensa del statu quo. Tuvo efectos fatales para la democratización centroamericana.

⁷ Sobre la Legión del Caribe hay una mala historia. El trabajo de Richard E. Clinton jr., *The United States and the Caribbean Legion: democracy, dictatorship and the origins of the Cold War in Latin America*, tesis doctoral, Ohio University, 2001, contiene la información más precisa sobre este tema. La Legión fue originalmente respaldada por el gobierno de EEUU, por su reconocido anticomunismo.

Las dictaduras militares que en el decenio de 1930 se instauraron en cuatro de los países de América Central experimentaron una presión doble en las postrimerías de la segunda guerra mundial, que provocó lo que se ha llamado la “crisis de la oligarquía”. Por un lado, el clima internacional que creó la derrota del fascismo europeo animó a la gente a condenar las experiencias autoritarias locales, las dictaduras militares, pero también a los intereses que ellas defendieron.

Por otro lado, las fuerzas sociales interiores que se habían visto contenidas durante tantos años de estancamiento y dictadura trataron de organizarse y participar en la vida política, social y cultural, instaurar un proceso democrático por medio de mecanismos modernos: elecciones, competencia, pluralismo, partidos, debates. En breve, la crisis resintió a la oligarquía por cuanto todo lo que se empezaba a vislumbrar en los años veinte como modernización y que durante una generación los años de dictaduras habían impedido, surgieron como exigencias frente a ellos.

¿Se formuló un programa antioligárquico, o al menos propuestas programáticas para construir una democracia liberal? Las demandas políticas de emergentes intelectuales de las clases medias ‘soñadoras’, buscaban con la virtud de la continencia, establecer el imperio de la ley, tener elecciones libres, partidos políticos independientes, gobiernos civiles. Es decir, redefinir los mecanismos de constitución del poder y del acceso al mismo para democratizar al Estado. No había maximalismo ideológico ni estrategias de ruptura. Pero estas demandas, prudentes, constituían una negación de los valores y de los principios de la oligarquía y eran necesariamente inaceptables.

Competir electoralmente por el gobierno y perder no entra en la lógica del concepto elitista del orden, y disimula una astucia subversiva, a los ojos de la oligarquía. A la mitad de los años cuarenta el ingrediente subjetivo era débil y se

experimentó una contradicción porque las luchas contra las dictaduras adoptaron la forma de insurrección urbana. El método y las metas estaban objetivamente distantes entre sí.

En abril de 1944 una huelga general obligó al general Hernández Martínez de El Salvador a dimitir. La huelga fue un movimiento multclasista encabezado por profesionales de clase media y militares jóvenes. La campaña no logró convertirse en un movimiento nacional ni introducir cambios profundos porque sus líderes fueron descubiertos y fusilados. A consecuencia de ello, la crisis se resolvió en lo interno de las fuerzas armadas y el décrepito dictador fue substituido por el jefe de su policía, Osmín Aguirre. Más adelante, en marzo de 1945, en un proceso amañado, el Dr. Arturo Romero, que había fundado en meses el partido Unión Democrática, perdió frente a un general escogido apresuradamente, Salvador Castañeda Castro (1945-1948), del partido Agrario (sic). Los grupos democráticos no tuvieron fuerza para encabezar el cambio.

Como se dijo, la vida política de El Salvador siguió caracterizándose por la presencia militar permanente, tanto porque el ejército había sido un factor decisivo en la lucha por el poder desde 1932 como porque los altos cargos del gobierno habían salido siempre del estamento militar. En el período que estamos analizando, la crisis oligárquica y su equivalente, la modernización institucional y democrática, se manifestó tíbiamente en la llamada “revolución del 48”, movimiento de oficiales jóvenes y algunos profesionales civiles que dieron un golpe de Estado el 14 de diciembre de 1948, de limitado alcance ideológico y fundaron el Partido Revolucionario de Unificación Democrática (PRUD).

A partir de entonces se tomaron diversas medidas encaminadas a mejorar la economía y las instituciones estatales. Puede decirse de todas ellas, llevaron a una relativa modernización de la sociedad salvadoreña, aunque sin recurrir a

los riesgos de la democracia y sin tocar las bases económicas de la oligarquía del café. A pesar de estas limitaciones, la actuación tanto de la junta revolucionaria como del régimen del mayor Oscar Osorio (1950-1956) se caracterizaron por una errática voluntad de cambio. En 1950 se promulgó una Constitución más moderna, se creó la seguridad social y una nueva legislación laboral. El clima general de esta época explica por qué, como en los otros países, los derechos sociales de los trabajadores fueron reconocidos en leyes específicas; hubo rasgos nuevos, más funcionales en el papel del Estado en la economía y en los cambios que ésta debía experimentar. Resta decir que los derechos laborales fueron y aún son resistidos por la patronal.

De hecho, los militares centroamericanos de los años sesenta y setenta, y los salvadoreños especialmente, fueron keynesianos sin saberlo, o a disgusto en la estricta dimensión de su estadofilia muy marcada. Lo fueron a pesar de, o aun más, cuando su modernización impulsada por la Doctrina de Seguridad Nacional los convirtió en un ejército contrain-surgente. Quizá el rasgo más importante de estos años fue el esfuerzo por fomentar el crecimiento industrial empleando medios diversos. En este campo son significativos la construcción de la central hidroeléctrica de Río Lempa, que es la mayor de Centroamérica, y del moderno puerto de Acajutla, que tenía por objetivo fortalecer el comercio exterior. Ambas empresas estatales autónomas se construyeron con la participación del sector privado.

De hecho, el pensamiento reformista de estos jóvenes militares continuó después del régimen de Osorio y se prolongó hasta los primeros años del gobierno del coronel José María Lemus (1957-1960). La vida política del país, sin embargo, continuó caracterizándose por la presencia de un Estado intransigente y represivo, por una democracia electoral en la que el general escogido era electo, en las

llamadas elecciones autoritarias. Si antes la política era un asunto de familia, ahora es de los militares.

Descontentos porque Lemus no satisfacía los principios modernizadores del PRUD, un golpe marcial el 26/X/1960 lo retiró y lo sustituyó un efímero triunvirato cívico-militar que fue tildado de comunista y sustituido tres meses después por otro claramente de derecha. No obstante, varias medidas fueron tomadas como la nacionalización del Banco Central, la creación de un ente estatal para administrar los servicios de agua, leyes de alquiler, de descanso dominical y una ley electoral que propuso la representación proporcional. En septiembre de 1961 se funda el Partido de Conciliación Nacional (PCN), que desde entonces ha sido el partido de los militares.

En abril de 1962 nombran/eligen al coronel Rivera, que como sucedió con los gobiernos de los otros países, recibió la 'filosofía' y los recursos de la Alianza para el Progreso con un doble temor: echar a andar una política reformista de inspiración social y provocar así los poderosos gérmenes del descontento popular. Fue esta una experiencia transparente de una saludable política social, de inspiración externa, que se hunde en la inoperancia por el temor al cambio.

Le sucedió el general Sánchez Hernández (1967/1972), con una nueva ley electoral que alteró el panorama político; por ejemplo, en las elecciones parlamentarias de 1968 el PCN obtiene sólo el 47% del voto, y el 53% en 1966, es decir, comparten el poder, a disgusto, con la oposición política. Hay que consignar que los efectos movilizados de la revolución cubana ya influían fuertemente en sectores de oposición y había una feroz represión anticomunista. Al mismo tiempo la economía agrícola se diversifica y en julio de 1969 estalla la guerra de 'las 100 horas' con Honduras.

Cuadro 8

Jefes de Estado de Nicaragua desde 1937

Período	Nombre	Forma de asunción del cargo
1937-1956	Anastasio Somoza-García (y marionetas)	Golpe/elecciones arregladas
1956-1967	Luis Somoza-Debayle (y marionetas)	Elecciones arregladas
1967-1979	Anastasio Somoza-Debayle (y triunvirato de marionetas)	Elecciones arregladas
1979-1985	Junta de Reconstrucción Nacional (jefe, Daniel Ortega Saavedra)	Insurrección armada
1985-1990	Daniel Ortega Saavedra	Elección competitiva
1990-1997	Violeta Barrios de Chamorro	Elección competitiva
1997-2002	Arnoldo Alemán	Elección competitiva
2002-	Enrique Bolaños	Elección competitiva

Fuente: *idem* cuadro No. 5

El caso de Guatemala se diferencia en que las fuerzas democráticas triunfaron, aunque el nuevo período de vida democrática duró menos de un decenio. El derrocamiento de la dictadura del general Ubico en junio de 1944 y de la de su sucesor inmediato, el general Ponce, el 20 de octubre del mismo año, fue consecuencia de un movimiento nacional de protesta, de base amplia, estudiantes, profesionales, militares, empresarios, de clase media y media alta.

Se le ha llamado la Revolución de Octubre, que tuvo éxito por la división de los militares de una vieja y una nueva generación. Los generales del antiguo ejército de la dictadura fueron expulsados del país, el Partido Liberal desapareció y el escenario quedó abierto para su consolidación con la formación de un triunvirato (dos militares y un civil) y la elección de una asamblea constituyente. Se promulgó una moderna Constitución que substituyó a la antigua

constitución liberal vigente desde 1877. En esta se restablece la autonomía municipal y de la Universidad, se introducen normativas sociales y de desarrollo, se trazan políticas para la educación y la cultura.

Con la elección del doctor Juan José Arévalo, traído desde la Argentina donde se desempeñaba como docente universitario, en diciembre de 1945, se inició un proceso de reformas con amplia participación popular. El gobierno de Arévalo (1945-1951) fomentó la modernización de un país social y culturalmente atrasado, aplicó programas para el fomento y la diversificación económica, creó el Instituto de Fomento de la Producción y el instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pero, sobre todo, Arévalo estimuló las condiciones para la organización de diversos grupos de interés social y su participación. Cuando se valora comparativamente la íntima naturaleza de los cambios se concluye que el retraso era profundo y que era toda la sociedad la que estaba contra los vientos de la historia.

Lo más destacado fue el poderoso impulso para la educación pública, que en perspectiva solo fueron medidas iniciales en una sociedad con el 75% de alfabetos. Hubo descontento conservador desde el comienzo, el anticomunismo unificó a la Iglesia, a los cafetaleros, grupos militares y clases medias altas frente al prudente reformismo del gobierno. También lo hubo por los Estados Unidos ante la mera promulgación del Código de Trabajo y luego su aplicación en un movimiento reivindicativo de los trabajadores bananeros.

A Arévalo le sucedió el coronel Jacobo Arbenz (1951-1954), ministro de la Defensa y ex triunviro, también elegido por buena mayoría de votos y cuyo gobierno continuó el programa de Arévalo pero con un estilo más nacionalista y radical. Pero fue la reforma agraria el punto toral de su programa. Entre 1952 y 1954 se intentó renovar la antigua

estructura rural –propiedad de la tierra y relaciones de trabajo– aplicando una reforma agraria que hiciera avanzar el capitalismo en el campo. La modernización castigaba únicamente a las tierras solteras, sin cultivos, prohibía toda forma de servidumbre personal al utilizar la tierra, que entregó a los campesinos que la solicitaban, en usufructo vitalicio.

El propósito implícito era dismantelar la antigua estructura rural de clases y crear un mercado interior que fuera capaz de sostener el crecimiento industrial bajo el control de capital nacional y estatal; todo ello constituyó el más profundo desafío al orden social tradicional, nunca antes intentado, en toda la región. El programa agrario era antioligárquico pero no antiburgués, lo que no evitó que los grupos propietarios hicieran un poderoso frente común y llamaran después de 1953 al derrocamiento de Arbenz.

La expropiación de más de 560,000 hectáreas de tierra (equivalente a la cuarta parte de la tierra cultivable) entregada a cerca de 100,000 cabezas de familia junto con una intensa movilización de los campesinos hacia junio de 1954, marcó el momento culminante de la ofensiva antioligárquica en América Central. Muchos detalles como las indemnizaciones a los expropiados, el crédito campesino, un amparo que casi paraliza el proceso y otros ceden en importancia a la magnitud de la crisis política que se estaba viviendo. La expropiación de 15 mil hectáreas de la UFCO –el mayor terrateniente del país– provocó aún más la decisión norteamericana de acabar con lo que en clave de Guerra Fría calificó como una amenaza roja.

También alimentó el anticomunismo interno e internacional la estrecha amistad de Arbenz con altos dirigentes del PGT (comunista). Desde marzo de 1952 se montó un plan intervencionista, concretado meses después en la llamada

operación PB Success, que incluyó la participación de los gobiernos vecinos y de nacionales guatemaltecos en el complot.

Diversos hechos convergieron en el operativo antiarbenquista. Una invasión mercenaria, desde Honduras, encabezada por el coronel Carlos Castillo Armas; bombardeos a la ciudad de Guatemala y bloqueo comercial, conspiración con los mandos del ejército fomentada por el embajador norteamericano, John Peurifoy. La amplitud de la operación se concretó en la acción conspirativa de Peurifoy al exigirle a Arbenz que renunciara o ilegalizara al PGT, fusilara 20 dirigentes políticos y diera marcha atrás en la política agraria. Fue esto la culminación de una larga campaña anticomunista que tuvo un fuerte apoyo de masas interno. Los mandos superiores, finalmente, aceptaron las condiciones del embajador y exigieron a Arbenz una decisión.

Este decidió renunciar y lo hizo público la noche del 27 de junio de 1954, entregando el poder al jefe de las Fuerzas Armadas, coronel Carlos Enrique Díaz. Lo inesperado de la dimisión de Arbenz provocó una enorme confusión interior y facilitó que en el espacio de poco tiempo los partidos y las organizaciones populares fueran declarados ilegales y sometidos a una brutal represión. El éxito de la Operación PBSuccess llevó en el plazo de una semana el poder a manos de los líderes de la conspiración. El 5 de agosto de 1954 el coronel Carlos Castillo Armas fue nombrado jefe del Estado y así comenzó una ofensiva especialmente violenta contra el campesinado, que se había beneficiado de la redistribución de la tierra. La Guerra Fría explica la naturaleza de este anticomunismo histérico en relación con una sociedad que fue considerada ‘cabeza de playa’ soviética aunque nunca llegó a tener relaciones diplomáticas con la URSS.

La derrota del programa nacional popular no significó una restauración del ubiquismo, un retorno al pasado,

pero sí un serio retroceso en la construcción democrática y un abandono de las políticas de desarrollo con equidad. El poder contrarrevolucionario no pudo estabilizarse. Castillo Armas fue asesinado por uno de sus propios partidarios el 26 de junio de 1956, lo que desató una nueva crisis en el interior de las fuerzas de derecha. Sucesivos golpes de Estado y unas elecciones fraudulentas en 1957 llevaron finalmente a la elección en 1958, ganadas por el general Miguel Ydígoras Fuentes, que presidió un intento de transición conservadora a la democracia. Se restablecieron las libertades de organización, de expresión y de prensa y se trató de aplicar políticas, asaz contradictorias, de reconciliación nacional que le enemistaron con la coalición conservadora que le había llevado al poder. En noviembre de 1962 se produjo un amplio alzamiento militar contra la política de Ydígoras, de donde surgió el M-13, primer grupo guerrillero militar.

Fue destituido por un golpe militar en marzo de 1963 y sustituido por su ministro de guerra, coronel Enrique Peralta Azurdia (III/1963-V/1966) Este movimiento militar impidió el proceso electoral convocado y en donde seguramente habría ganado el ex presidente Juan José Arévalo; fue, además, un golpe del ejército votado por la Junta de Comandantes, una decisión institucional que marcó el inicio de un nuevo modelo de intervención militar. Ya en estos tiempos empezó a constituirse el Estado contrainsurgente, cuya violencia empezó a ser respondida por grupos de izquierda armada.

Las luchas democráticas contra la oligarquía y el autoritarismo militar no triunfaron en Honduras, como en los casos vistos; aquí, la campaña “antioligárquica” dirigida por los liberales tenía una dimensión limitada y era en esencia una batalla partidista contra el dictador rupestre, el doctor y general Tiburcio Carías Andino, que contaba con el apoyo de los intereses extranjeros propietarios de las plantaciones

y, por ende, con una base suficiente para la estabilidad del gobierno. No obstante, el descontento social limitó las ambiciones electorales del general Carías, que accedió que se celebrasen elecciones presidenciales en 1948 y permitió que los liberales participaran en ellas. El vencedor fue su ministro de la Guerra, Juan Manuel Gálvez.

En la Honduras de este período la elección de Gálvez (1949-1954) equivalió a una prolongación del régimen de Carías, aunque se produjeron varias novedades importantes. La primera fue la gran huelga del sector bananero en mayo de 1954, que empezó como simple protesta por el despido de 25 trabajadores de la Tela Railroad, que era propiedad de la United Fruit Company, y fue extendiéndose hasta convertirse en una campaña de aumento de salarios y mejores condiciones de trabajo.

Una opinión pública favorable al cambio y la búsqueda de calistenia democrática, que se expresaban de diferentes formas en toda la región, explican por qué el conflicto se extendió rápidamente a todas las plantaciones bananeras, a la mina El Mochito y a toda la zona agroindustrial de propiedad extranjera de la región de San Pedro Sula. El conflicto, que recibió apoyo activo de más de 40,000 trabajadores, terminó en julio después de 69 días de huelga. Fue importante no sólo por su conclusión victoriosa, sino también porque tuvo efectos decisivos en el conjunto de la sociedad política, el más importante de los cuales fue crear posibilidades reales de organización obrera y campesina. Fue, además, el punto de partida de la promulgación de leyes laborales y de seguridad social, así como de la creación del Ministerio de Trabajo.

Una dimensión positiva fue la toma de conciencia de que el problema nacional estaba estrechamente vinculado al problema social. Más adelante, el campesinado pobre y sin tierra se activó como fuerza política autónoma, un hecho

decisivo en el marco de una sociedad agraria atrasada. Un efecto negativo de la huelga en el mercado de trabajo fue que redujo el empleo en las plantaciones de 35,000 trabajadores en 1953 a 16,000 en 1959, a la vez que sus efectos en la producción fueron agravados por un huracán en diciembre de 1954.

Un segundo hecho importante en este período, en Honduras, fue la entrada fugaz de las fuerzas armadas en el ruedo político. En las elecciones de 1954 los partidos tradicionales, el Liberal y el Nacional, exhibieron de nuevo sus diferencias porque ninguno pudo obtener la mayoría absoluta. Aunque los liberales obtuvieron el 48% del total, una segunda votación fue corrompida por el fraude y provocó que el presidente interino Lozano Díaz, oportunista, se proclamara 'jefe supremo' y disolviera el Parlamento. Con una voluntad rectificadora, un golpe militar en 1956 lo retira del mando y se convoca a elecciones constituyentes. Fue esta la primera intervención militar en Honduras con una nueva calidad: no lo hicieron a nombre de un partido sino como cuerpo institucional y con una misión mediadora.

Es significativo que la constituyente reconociera como el vencedor de las elecciones de 1954 al Dr. Ramón Villeda Morales (1957-1963), lo cual supuso la vuelta de los liberales al poder después de 25 años de gobiernos conservadores. Antes de terminar su mandato, el primer golpe de Estado de las fuerzas armadas como institución lo interrumpió y tomó el poder el general Oswaldo López Arellano, que habría de figurar más de una vez en la política hondureña.

Un comentario oportuno se refiere a la cultura jurídica centroamericana que guarda un sentido mágico político por las constituciones. Entre 1945-50 los cinco países estrenaron Constitución y a partir de esa fecha se promulgaron por lo menos ocho en cuatro países. Solamente entre 1954 y

1985 Honduras y Guatemala tuvieron por lo menos cuatro constituciones. Este avorazado consumo de constituciones revela una falsa sabiduría que atribuye a la ley no un valor normativo sino reconstructivo, casi mágico. Por ello, las constituciones son violentadas por los militares, *ex ante* y con el golpe de Estado, se busca una nueva, *ex post*. El reino de la ilegalidad no puede existir sin constituciones, pero estas no resuelven la ilegalidad de la vida política.

En Nicaragua la ofensiva democrática, antimilitarista y antioligárquica no se produjo como en los otros países porque el régimen de Somoza representaba un modelo distinto, anómalo, que hemos calificado en otra parte como un “sultanato” tropical por los rasgos constitutivos del primer momento. Fue un poder familiar apoyado en un partido propio, un ejército pretoriano y un Estado donde lo público y lo privado se confundieron con desorden premeditado; nepotismo y un siniestro juego de represión y recompensas, lealtades compradas, exigidas o castigadas, todo ello hecho posible por el respaldo total de los Estados Unidos. En Nicaragua, la “familia” pudo tener éxito porque los intereses de renovación social y política, democráticos, por los cuales había luchado una generación de ciudadanos desde los años treinta, se vieron oscurecidos por la histórica gresca, fratricida, entre caudillos liberales y conservadores, pero peor aún, por las rivalidades internas, divisiones y alianzas que el genio de Somoza estimuló para servirse de ellas para su permanencia en el poder.

En el período de la posguerra que se viene describiendo y que provocó seísmos políticos en cuatro de los países de la región, en Nicaragua sólo produjo un leve movimiento de tierra. Como una réplica de lo ocurrido en las sociedades vecinas, los grupos juveniles y estudiantiles del Partido Conservador, participaron de manera activa en la lucha

contra la dictadura de Somoza, pero ninguno de los partidos de oposición logró dar a su accionar político un contenido popular.

A pesar de ello, Anastasio Somoza I fue obligado a desistir de hacerse reelegir insolentemente en 1947. Sometido a presiones tanto nacionales como internacionales, el dictador hizo elegir a su subalterno el doctor Leonardo Arguello el 19 de febrero de 1947, pero lo destituyó el 24 de mayo de ese año; luego se apresuró a colocar a Benjamín Lacayo Sacasa en la presidencia y después de 22 días de gobierno provisional, se celebraron elecciones de las cuales salió vencedor otro liberal dócil, Víctor Román y Reyes. Ambos eran parientes de Somoza, que nunca abandonó su cargo de jefe de la Guardia Nacional y volvió a convertirse en presidente en enero de 1950, apoyado en el ‘pacto de los generales’, de ambos partidos. De hecho siempre retuvo el control del poder a través del control militar.

Durante este período Nicaragua pasó por una etapa de importante crecimiento económico basado en las exportaciones de algodón, que dieron cierta estabilidad para la continuación del poder familiar. Sin embargo, en la mitad de la campaña para su tercera reelección, fue asesinado “Tacho” padre, el 21 de septiembre de 1956, en la ciudad de León. El control que la familia Somoza ejercía sobre el Estado por medio de la Guardia Nacional (en manos de Anastasio Somoza, hijo) y del Congreso (presidido por Luis Somoza, hijo también) garantizó que los mecanismos de sucesión se resolvieran consanguíneamente, “ganando” Luis las elecciones de febrero de 1957, apoyado por el Partido Liberal y el Ejército contra la feroz oposición de grupos de liberales independientes y del Partido Conservador.

La muerte de Somoza provocó una represión violenta contra la oposición pese a que el asesinato lo cometió un joven poeta, Rigoberto López Pérez, por motivos personales. La elección de Luis Somoza fue ratificada por el Congreso en febrero de 1957. Dirigió un gobierno fantasma que se benefició del auge del algodón y de las primeras inversiones que estimuló el Mercado Común Centroamericano. Luisito murió de muerte natural unos cuantos días antes de los comicios de febrero de 1963, con los cuales la dinastía familiar buscaba reelegirlo.

Hubo una breve interrupción porque finalmente el decoro por las formas a veces es oportuno; se hizo elegir para esas elecciones de 1963 un ‘amigo’ de la familia, René Schick, que ayudó a pacificar la creciente oposición a los Somoza. Es reemplazado por el vicepresidente Lorenzo Guerrero, más obediente porque crea el espacio para la elección del 5 de febrero de 1967 que gana Anastasio Somoza II, hijo.

La historia de Nicaragua se caracteriza por pactos frecuentes entre los dos partidos ‘históricos’. En 1972 se hizo uno de estos pactos cuando el doctor Fernando Agüero, líder de una fracción conservadora, accedió a actuar en calidad de miembro de un triunvirato que se creó para que presidiera el país hasta las nuevas elecciones en 1974. El terremoto del 23 de diciembre de 1972, que destruyó Managua, le dio la oportunidad trágica de gobernar al autonombrarse presidente del “Comité Nacional de Emergencia”. Impaciente por lo simbólico, en septiembre de 1974 es elegido nuevamente como jefe de Estado.

El terremoto interrumpió este sistema y debe mencionarse porque sus efectos telúricos fueron tan desastrosos como los que tuvo en la situación política. Reveló la debilidad interna de la Guardia Nacional, incapaz de mantener el orden cuando lo que hacía falta era la asistencia humanitaria;

acabó con la formalidad del “triumvirato” cuando Somoza se hizo elegir coordinador del Comité Nacional de Emergencia; se desveló de manera dramática la miseria de las masas populares y las movilizó, especialmente en la ciudad de Managua. Estas condiciones no impidieron que Somoza se hiciera elegir presidente otra vez, en 1974.

En Costa Rica la experiencia democrática liberal tenía profundas raíces históricas, pero las formas políticas que la caracterizaban parecieron tocar a su fin en el decenio de 1940. Fue el final no sólo de los caudillos liberales, sino también de una forma política de gobierno basada en el gobierno de una élite envejecida en el poder. En 1940, como ya se dijo, se eligió al reformista Calderón Guardia y en 1944 a su heredero Teodoro Picado. Bajo considerable presión política a causa de los planes de reelección de Calderón Guardia, el gobierno cedió el control del Tribunal Electoral Nacional a una de las facciones de la oposición. Las elecciones se celebraron el 8 de febrero de 1948, pero los resultados no se conocieron hasta el 28 del mismo mes, día en que se anunciaron la derrota del Partido Republicano Nacional de Calderón y la victoria de Otilio Ulate. El 1 de marzo el Congreso Nacional, cuya mayoría era favorable a Calderón, anuló las elecciones presidenciales. No tardaría en producirse un levantamiento y el 10 de marzo estalló la “revolución del 48”.

Los acontecimientos militares de la guerra civil costarricense, que duró dos meses, tienen poca importancia si se comparan con los fenómenos sociales y políticos que acompañaron el desarrollo y la resolución del conflicto. La alianza oligárquica anticalderonista se dividió por contradicciones aún más hondas. En un bando estaba la poderosa oligarquía hacendada y comercial cuya base era el café y que organizó la oposición más combativa en defensa de sus intereses económicos y sociales. En el otro se encontraban los intelectuales y políticos de la clase media urbana, que habían

salido a la escena política más recientemente motivados por su interés en la modernización y el cambio. Sus líderes eran José Figueres, Rodrigo Facio y jóvenes organizados en el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, que politizados por esos años de crisis acabarían formando el Partido Liberación Nacional, fundado el 12 de octubre de 1951 al unirse diversas fuerzas sociales bajo inspiración socialdemócrata, ideología que ya estaba presente en una de las corrientes que lo formaron, la que dirigía Figueres.

Al final de la crisis, Figueres, que encabezaba la triunfante coalición de la clase media urbana y una fracción de la oligarquía, se proclamó a sí mismo jefe de la Junta Fundadora de la Segunda República y gobernó el país durante 18 meses (de abril de 1948 a noviembre de 1949). Paradójicamente, las políticas que se tomaron entonces y después, profundizaron el ímpetu reformista que pusieran en marcha Calderón Guardia y los comunistas. Por ejemplo, Figueres suprimió el impuesto sobre el trigo con el fin de rebajar el precio del pan, facilitó los incrementos salariales para los trabajadores agrícolas y fundó el Consejo Nacional de Producción y el Instituto Costarricense de Electricidad, que nacionalizó la producción y redujo el coste de la electricidad. El 21 de junio de 1948 introdujo un impuesto del 10% sobre el capital y nacionalizó los bancos privados. Fueron estas las medidas más audaces que jamás se hayan tomado bajo inspiración reformista. La nacionalización de la banca fue una decisión revolucionaria porque alteró la correlación de las fuerzas políticas a favor del campesinado y del mundo rural.

Una Constitución nueva, redactada por una asamblea constitucional con mayoría conservadora en 1949, abolió el ejército y lo substituyó por una guardia nacional rural y cuerpos de policía urbana. Al gobierno de transición de

Figueres lo substituyó luego Otilio Ulate (de noviembre de 1949 a noviembre de 1953), líder conservador que participó en la controvertida elección y le había ganado a Calderón Guardia.

En las elecciones de 1953, como candidato del PLN, Figueres fue finalmente elegido de modo constitucional presidente de Costa Rica (1953-1958) y durante su mandato continuó de manera aún más vigorosa unas políticas que contribuyeron a la modernización social y económica del país, al perfeccionamiento de procedimientos estrictamente electorales y a la definición de un nuevo papel para el Estado.

Los cambios políticos que se pusieron en marcha en la década de los 50s favorecieron no sólo una ampliación de la democracia política, sino también una etapa de crecimiento económico basado en la diversificación y la modernización de la agricultura y la creación de industria ligera en los centros urbanos. La nacionalización de los bancos debilitó los vínculos entre el capital comercial-financiero y los exportadores de café y democratizó el crédito. La política socioeconómica no tenía un propósito antioligárquico bien definido; fomentó un vasto programa de modernización de las plantaciones de café que benefició a todos los plantadores al tiempo que creaba un sistema cooperativo para comercializar el café con el fin de limitar el monopolio comercial. En esencia, esto estimuló un nuevo papel para el Estado en la intervención económica activa tanto para modernizar las bases productivas de la burguesía como para limitar sus rasgos monopolísticos.

La política social que siguió con vigor permitió al PLN crear una nueva base de apoyo en el campesinado del país. Al mismo tiempo, contradictoriamente, después de 1948 el movimiento obrero urbano, bajo la influencia del comunista Partido Vanguardia Popular (PVP), fue gravemente derrotado y desorganizado. El anticomunismo de Figueres, que des-

pués modificó, le redituó fuertes dividendos políticos con los norteamericanos. En términos centroamericanos la ideología y la política socialdemócratas del PLN constituyó una modalidad avanzada del pensamiento democrático burgués, sin embargo poco parecido al reformismo radical del arbencismo guatemalteco de entonces.

Cuadro 9
Presidentes de Costa Rica desde 1949

Período	Nombre	Partido político
1949-1953	Otilio Ulate Blanco	PUN
1953-1958	José Figueres Ferrer	PLN
1958-1962	Mario Echandi Jiménez	PUN
1962-1966	Francisco Orlich B.	PLN
1966-1970	José Joaquín Trejos Fernández	Unificación
1970-1974	José Figueres Ferrer	PLN
1974-1978	Daniel Oduber Quirós	PLN
1978-1982	Rodrigo Carazo Odio	Unidad
1982-1986	Luis Alberto Monge Alvarez	PLN
1986-1990	Oscar Arias Sánchez	PLN
1990-1994	Rafael Ángel Calderón Fournier	PUSC
1994-1998	José Figueres Olsen	PLN
1998-2002	Miguel Ángel Rodríguez Echeverría	PUSC
2002-2006	Abel Pacheco de la Espriella	PUSC
2006-	Oscar Arias Sánchez	PLN

Fuente: *idem* cuadro 5.

CAPÍTULO 5

LOS TRASPIÉS DE LA MODERNIZACIÓN ECONÓMICA DE LA POSGUERRA

El final de la Segunda Guerra Mundial señaló el lento y contradictorio comienzo de una nueva etapa de la vida económica de los países de esta región. El contexto internacional fue en términos generales favorable debido a la recuperación de la economía europea y el restablecimiento de los vínculos comerciales y de inversión con Estados Unidos. De hecho, a pesar de pequeñas recesiones en 1949 y 1954, la región se benefició de los efectos de la fase de prosperidad más larga jamás vista en la economía mundial. Al mismo tiempo, el crecimiento económico de posguerra fue acompañado de una discutible modernización, cuantitativa, de la sociedad centroamericana.

Un dato significativo es que las tasas de crecimiento demográfico durante la totalidad del período 1945-1980 superaron el 3,2%. En 1945 la región tenía poco más de 7 millones de habitantes mientras que en 1980 su población era de 20 millones. También fueron decisivos otros cambios sociodemográficos. En particular, el nivel de urbanización aumentó del 14 al 43% entre 1945 y 1980 y hubo en especial una expansión del número de habitantes de las capitales, que llegaron a representar más del 25% de la población total.

Pero el fenómeno de la posguerra que merece inicial atención fue el conjunto de circunstancias internacionales manifestadas localmente que presionaron sobre el viejo Estado liberal, autista y sanguinario al mismo tiempo, y empezaron a modificar el papel que empezó a desempeñar en el fomento del desarrollo, mediante la modernización de sus instituciones; por ejemplo, los bancos centrales, la creación de bancos de desarrollo, compañías públicas de teléfonos y electricidad, cambios en la estructura impositiva, incorporación de las técnicas de la planificación indicativa de inspiración cepalina y otras. También hubo factores sociales como la diferenciación clasista visible en la activa presencia de clases medias, cantera de cuadros políticos, técnicos e intelectuales. La universidad pública creció y los partidos políticos nacieron y murieron pero constituyeron un espacio potencial para futuras ciudadanías.

La producción tradicional centroamericana, que había continuado respondiendo a la demanda interior pero se había visto deprimida por el descenso del mercado internacional, pronto volvió a ser estimulada desde fuera. Durante los primeros años el ciclo económico se basó exclusivamente en la subida de los precios internacionales y la reapertura de los tradicionales mercados exteriores. No puede atribuirse a ninguna inversión productiva importante de los finqueros centroamericanos, que como de costumbre, reaccionaron lentamente por medio de incrementos en la extensión de tierra dedicada al cultivo. Esta operación se llevó a cabo utilizando tierra del sector campesino y substituyendo los cultivos para el mercado interior por cultivos de exportación. El cultivo de tierra nueva y los riesgos de la inversión de capital para mejorar la productividad no aparecieron sino hasta finales del período que nos ocupa.

A pesar de ello, el aumento en el valor del comercio exterior fue el primer factor que afectó favorablemente a estas economías.

El incremento del valor de los términos de intercambio hasta 1954 demuestra cómo, durante un tiempo, mejoró la capacidad de intercambio en la región y cómo esto tuvo un efecto inmediato en el aumento más que proporcional de las importaciones, detenidas durante mucho tiempo, en especial durante la guerra.

El caso más crítico fue el de Honduras, cuya vida económica continuó girando alrededor de la producción de bananas. A comienzos de los cuarenta y debido a la llamada “enfermedad de Panamá” (sigatoka), que afectó a gran proporción de las plantaciones, la producción quedó casi paralizada y fue necesario trasladar las plantaciones de la zona de Trujillo a nuevas tierras situadas entre San Pedro Sula y La Ceiba. Las inversiones de las compañías extranjeras se anotaban como entradas de capital que no se reflejaban en el crecimiento de la producción ni de las exportaciones. Según cálculos de Bulmer-Thomas, el Producto Nacional Bruto, en este país, que era de 257 dólares per cápita en 1929 (precios de 1970), descendió hasta quedar en 191 dólares en 1939 y sólo se recuperó hasta alcanzar los 225 dólares en 1949, lo que contrasta con las cifras de los países vecinos.⁸

Los tres países productores de café reaccionaron en momentos diferentes. El Salvador, que era el mayor productor de la región, fue el primero en aprovechar las nuevas oportunidades de la posguerra y en 1949 ya producía 73,000 toneladas métricas de café, cantidad que no se superó hasta 1957, en que la cifra fue de 83,200 toneladas. Guatemala empezó a incrementar su producción a partir de 1951, año en que fue de 63,000 toneladas, y mantuvo un crecimiento constante en todo el período. Costa Rica no aumentó los niveles de producción hasta 1954, e incluso entonces sólo muy lentamente.

⁸ V. Bulmer-Thomas, *op. cit.*

Cuadro 10
Perfil de desarrollo en 1970
-Índices- a/

	Guatemala	E.S.	Honduras	Nicaragua	C.R.	Argentina
Indicador promedio de desarrollo b/	34.6	40.8	32.6	46.5	63.4	72.3
Alfabetismo	26.8	37	n.d.	34.4	62.8	74.1
Ed. primaria y secundaria	15.2	32.4	34.3	31.0	57.3	63.2
Expectativa de vida	32.2	44.0	32.2	n.d.	65.9	63.4
Mortalidad infantil	46.5	58.2	31.1	n.d.	21.0	17.8
Agua potable	36.8	37.9	30.7	31.6	68.2	63.1
Trabajadores asalariados	47.4	52.4	n.d.	57.5	80.3	57.0
Trabajadores agrícolas	28.4	31.1	17.2	36.5	52.5	48.9
Trabajadores profesionales	30.3	34.2	n.d.	54.6	77.7	59.7
Consumo de proteínas	35.6	40.0	34.3	62.1	66.4	60.1
Circulación de periódicos	44.2	67.7	43.0	n.d.	66.3	67.0
Televisores	38.2	48.5	31.3	50.1	63.1	74.7
Teléfonos	32.9	37.2	23.5	41.6	61.4	71.7
Producción agrícola /PEA	39.1	39.5	31.2	54.5	62.0	62.6
Producción manufacturera/PEA	35.7	45.3	n.d.	54.5	59.2	74.4
Consumo de acero	27.3	22.5	26.2	34.7	52.9	51.7
Consumo de energía	27.4	29.7	31.7	44.3	51.3	50.9
Inversión/PEA	37.9	35.0	39.2	52.5	61.3	62.3
Comercio exterior	40.3	44.8	50.4	57.5	72.6	72.6
PIB per cápita	45.8	37.5	35.8	52.3	58.9	67.9

James Wilkie, ed., *Statistical Abstract of Latin America*, Los Angeles, 1980, diversos cuadros.

a/ Se consideran países desarrollados a los que presentan índices mayores de 70.

b/ Promedio simple de los índices respectivos exceptuando el PIB per cápita.

El sector cafetalero se benefició con los aumentos en los precios del mercado internacional, que se trepó a un 600% entre 1940 y el período máximo en 1954-1957. Al finalizar la Segunda Guerra (promedio de 1940-1944) el precio que se cotizaba por una libra (0,454 kilos) de café en Nueva York era de unos 11,7 centavos; en 1949 había subido hasta quedar en 28,7 centavos, y entre 1955 y 1957 el precio fue de 57,4 centavos⁹.

1. LA CONTRADICTORIA MODERNIZACIÓN DE LA ECONOMÍA EXPORTADORA

Este período es importante no sólo porque aumentó la producción de un artículo tradicional como el café, sino también porque comenzó una diversificación decisiva de los productos agrícolas como la madera, el cacao, el cáñamo y, sobre todo, el azúcar, la carne y el algodón. La siembra de algodón alcanzó niveles extraordinarios en El Salvador y Nicaragua y más adelante en Guatemala, y merece analizarse de modo específico tanto por sus consecuencias económicas como por sus efectos en la sociedad y la política. El cultivo de algodón cambió el paisaje rural en zonas importantes de la húmeda costa del Pacífico de Centroamérica.

La rapidez con que se destinaron extensas zonas al cultivo del algodón se debió a que las tierras utilizadas eran antiguas tenencias dedicadas al pastoreo extensivo, tierra ocupada por la “agricultura de mediería”, o propiedad de campesinos parcelarios y, por supuesto, los terrenos improductivos. La “fiebre del algodón”, que empezó en 1945 en Nicaragua y El Salvador y en 1950 en Guatemala, no sólo

⁹ James Wilkie, ed., *Statistical Abstract of Latin America*, Los Angeles, 1980, cuadro 2526.

causó trastornos en extensas zonas ocupadas tradicionalmente por un campesinado dedicado a la agricultura de subsistencia combinada con el cultivo de productos básicos para el mercado, sino que también modificó la naturaleza de la tierra de la hacienda de colonato y las aparcerías.

La historia se repite, esta vez como drama, pues el ingreso del capitalismo agrícola destruyó el equilibrio social de miles de campesinos, acabando con sus vínculos patriarcales con el patrón o la certeza relativa de la mediería o la seguridad del colono. Se volvieron campesinos libres porque se quedaron sin tierra y sin las viejas relaciones de trabajo. Libres pero más desiguales y más pobres.

También el equilibrio ecológico resultó alterado en una medida que la euforia de aquella coyuntura no lo apreció. Antiguas zonas boscosas y de pastos fueron destruidas en los departamentos de Escuintla y Retalhuleu de Guatemala, en La Paz y Usulután en El Salvador y en Chinandega y León en Nicaragua.

La modernización en la agricultura empezó con el algodón, que inmediatamente se convirtió en ejemplo conspicuo de la empresa agrícola moderna. La estructura de tales empresas tiene características comunes en los tres países. El típico empresario algodonerero era un funcionario civil o militar, un líder político o un comerciante, y sólo de vez en cuando provenía de las antiguas clases propietarias.

Esto tenía que ver con el papel que desempeñaba el Estado, que fomentaba y protegía la siembra de algodón al punto que se hablaba de un “cultivo político”. En efecto, la agroindustria nació estimulada por grandes oportunidades estatales en crédito, conocimientos técnicos y lo más esencial, por medio de tierras arrendadas. Esta modalidad constituye una novedad por cuanto el arrendamiento

Cuadro 11
Centroamérica: comercio exterior (en millones de dólares),
términos de intercambio y poder adquisitivo de las exportaciones
(1970 = 100) 1946-1958

Año	Exportaciones	Importaciones	Términos de intercambio	Poder adquisitivo de las exportaciones
1946	128,4	127,0	93,5	21,2
1947	192,4	197,0	87,7	24,4
1948	238,9	221,0	95,9	29,5
1949	242,1	215,6	108,4	31,8
1950	299,6	233,3	135,0	40,2
1951	343,4	279,7	149,9	43,0
1952	367,9	322,1	144,4	44,5
1953	390,1	338,0	152,7	48,4
1954	410,8	380,8	176,6	48,5
1955	420,0	414,5	159,3	50,7
1956	438,8	469,2	162,1	51,5
1957	469,5	524,9	151,9	54,4
1958	453,6	509,9	132,6	52,8

Fuente: James W Wilkie y P. Reich, eds., Statistical Abstract of Latin America, Los Angeles, 1979, Vol. 20, cuadro 2730, p. 412.

capitalista de tierra convertía al plantador de algodón en un empresario vinculado a la tierra de manera indirecta pues el arrendamiento moderno formaba parte del capital de inversión.

El promedio regional de crecimiento de la producción y la exportación de algodón fue del 10% durante los primeros años; al finalizar el decenio de 1950 el algodón centroamericano ya representaba el 6,6% del total de las exportaciones mundiales y su producción era la tercera en orden de importancia en América Latina. La productividad alcanzó los 843 kilos por hectárea en El Salvador, 700 en Guatemala y 580 en Nicaragua. Egipto, otro productor de

algodón de secano, producía 520 kilos por hectárea durante este período. El Salvador inició el llamado “auge del algodón” porque antes de 1945 la producción nacional era bajísima y se disponía de poca tierra. Las 13,000 hectáreas sembradas en 1945 aumentaron hasta alcanzar las 40,000 en 1956; en un decenio la extensión de tierra dedicada al cultivo de algodón, el rendimiento y el valor de la producción aumentaron hasta ocupar toda la región costera del Pacífico. Los efectos sociales fueron distintos: pobreza y desarraigo.

El crecimiento de la productividad fue rápido y después de 1954, El Salvador, según fuentes oficiales, tenía los rendimientos más elevados del mundo, después de Nicaragua¹⁰. Fue en Nicaragua donde el cultivo de algodón encontró la mejor oportunidad como un rubro nuevo, en expansión, moderno, y tuvo consecuencias sociales y políticas de gran alcance. En efecto, ya en 1950 Nicaragua era la principal productora de algodón de Centroamérica, con más de 18,000 toneladas métricas, y en 1954 exportaba más de 47,000 toneladas.

En el decenio siguiente, las exportaciones de algodón ocuparon el primer lugar y representaban el 35% del total. La producción y la exportación de este artículo consolidó un grupo empresarial que ya era importante y que dirigió el período de expansión más dinámico que jamás hubiera experimentado este país. En contra de lo que se ha dicho erróneamente, la participación del “grupo Somoza”, fue menor en relación con los grupos empresariales liberales y conservadores independientes del Estado.

En los tres países productores el cultivo fue importante no sólo por las elevadas tasas de producción, que aumentó de 11.000 toneladas métricas en 1947 a 110.000 toneladas

¹⁰ CEPAL, *Análisis y proyecciones del desarrollo económico. El desarrollo económico de El Salvador*, México. 1959, p. 21.

en 1958 (sin contar la semilla de algodón y sus derivados), sino también por la instalación de despepitadoras¹¹ agroindustriales y como fuente de transformación social por parte de las empresas por un lado y la masa de trabajadores agrícolas por otro.

Fue también en esta época cuando la producción de azúcar y la carne de ganado para la exportación empezaron en gran escala. Ambos sectores fueron fuentes importantes de modernización en la agricultura y de diversificación económica, y contribuyeron a poner fin a la tradición monoexportadora. El estímulo para la inversión azucarera empezó antes que la cuota cubana llegara como parte de una nueva política norteamericana. El reparto entre las pequeñas economías de Centroamérica y el Caribe fue, en su momento, importante.

A partir de 1947 la proporción de tierra plantada, la producción y la productividad empezaron a crecer, lentamente al estilo tradicional, pero se pasó de 96.000 toneladas de azúcar en 1949 a 236.000 en 1958. En el decenio siguiente el volumen aumentó más y el azúcar pasó a ocupar el tercer lugar entre los principales productos de exportación regional. En Costa Rica el área de caña se duplicó entre 1950 y 1973 y la producción se triplicó: en Guatemala la superficie sembrada creció doce veces entre 1967 y 1976.¹²

Los cinco países sin excepción pasaron a ser autosuficientes y, después de 1953/54, empezaron a exportar a Estados Unidos. No obstante, la industria regional del azúcar nunca alcanzó costes de producción rentables. Con la caída de los precios en el mercado mundial durante los años setenta la industria se encontró en un estado de crisis sin recu-

¹¹ Máquinas que separan las semillas de la pulpa del algodón.

¹² Datos estadísticos tomados de Carlos Vilas, *Mercado, Estado y Revoluciones, Centroamérica 1950-90*, UNAM, México, 1944, pp. 39-42.

peración previsible. Sólo Guatemala continuó exportándola competitivamente gracias a elevados índices de modernización en la fase industrial y a que destinó parte de la melaza a producir un buen ron.

Cuadro 12
Estructura de clases
—Porcentajes de la PEA—

País/Años	Clase							
	Clase dominante		Técnico burocrática		Proletariado Formal Informal		Pequeña burguesía informal	
	1970	1980	1970	1980	1972	1980	1970	1980
GUATEMALA	1.6	1.1	3.1	3.7	22.3	69.7	40.0	3.3
EL SALVADOR	0.2	0.5	3.0	4.2	5.2	68.5	39.8	23.1
HONDURAS	0.6	n.d.	2.5	n.d.	1.1	82.4	n.d.	13.4
NICARAGUA	0.9	n.d.	5.2	n.d.	8.7	69.4	n.d.	15.8
COSTA RICA	1.7	n.d.	8.0	n.d.	28.5	48.3	19.0	13.5

Fuente: A. Portes and K. Hoffman, Latin American Class Structures: their composition and change during the Neoliberal Era, *Latin American Research Review*, Vol. 38, No.1,2003,56.

La producción de carne de vacuno tiene una biografía similar, en el sentido que siempre hubo un hato ganadero nacional, particularmente en Honduras y Nicaragua, y que el impulso para las exportaciones empezó a partir de 1955 como efecto de la creciente la demanda norteamericana. El mercado en este país se abrió como consecuencia de la epidemia de peste aftosa en algunos de los grandes mercados exportadores de carne. La centroamericana fue particularmente destinada a resolver las necesidades del área de California en los negocios de hamburguesas. Hermoso destino de nuestra buena carne: para el ‘fast food’ de ciudadanos norteamericanos de pocos

recursos. Gracias a su apetito las exportaciones crecieron de 3,2 millones de kilos a finales de los cincuenta a 8,6 millones en 1972. Nicaragua exportaba hacia fines de los setenta el 40% del total regional y Costa Rica el 25%; en Guatemala el volumen de exportación de carne se multiplicó por ocho en los setentas.

El impulso a la importación directa de productos agrícolas creó enormes beneficios económicos para los grupos exportadores y trágicos daños sociales. Por ejemplo, agravó los desequilibrios rurales, ya que por un lado se sacrificó la mejor tierra del Pacífico convertida en áreas de pastoreo y en plantaciones de algodón, y, por otro lado, desplazó el cultivo de cereales básicos a tierras de mala calidad y redujo la extensión de tierra dedicada al cultivo de productos para el mercado nacional. El tipo de estructura agraria basada en formas desiguales de tenencia de tierra se agravó con ocasión de esta fase de la modernización agrícola.

El número de campesinos desplazados, expropiados o simplemente desarraigados de su 'habitat' tradicional no se conoce bien.¹³ Ellos fueron empujados a un inevitable proceso de proletarización, es decir, obligados a emplearse estacionalmente como obreros agrícolas al perder la tierra. En la medida que no hubo trabajo para todos, ni aún en los momentos pico de las zafras, no hay proletarización sino simplemente un empobrecimiento a partir de una situación que ya era crítica. Los daños sociales causados de esta manera se reflejaron más adelante como factores de la hecía revolucionaria.

Recuérdese que la formación histórica de la agricultura comercial para la exportación en sociedades con desigualdades estructurales, se tradujo en mayores inequidades sociales.

¹³ En el Anexo de este trabajo hay información sobre estos aspectos relativos a la estructura rural y social.

Se produjo una distribución de funciones en virtud de la cual el sector campesino de subsistencia o el pequeño parcelario refuerzan su condición y/o se convierten en productores de artículos de consumo local, bienes alimenticios para la población pobre. Y (parte de) el sector terrateniente se convierte en productor para la exportación, moderno y con apreciables márgenes de ganancia.

El mercado expresa el "dualismo estructural" en la bien conocida dicotomía de sectores de baja y alta productividad, con desigual incorporación de tecnología, bajos salarios; riqueza y miseria generándose recíprocamente por las funciones que se cumplen frente al mercado externo o nacional. Las economías campesinas migraron hacia la frontera agrícola, que en El Salvador ya no existía y que en Guatemala era zona de pésima productividad.

La modernización de la agricultura de exportación benefició a los cinco países pero perjudicó a aquellos donde ella fue más exitosa, ratificando de nuevo que el crecimiento económico produce bienestar para pocos, pero sobre todo pobreza para los que ya lo eran. Además, no fue este un ciclo prolongado que dejara cambios estructurales permanentes; fue en rigor una coyuntura temporal de dos décadas gracias al dinamismo del mercado norteamericano, al punto que el algodón, que fue el que más ganancias y perjuicios acarreó, fue calificado como un cultivo aventurero, fugaz. ¿Cuáles fueron los efectos modernizadores que dejara este inquieto producto en las sociedades cafetaleras?

Finalmente, hay que mencionar el último de los efectos del progreso, la tendencia a la escasez de alimentos básicos, bienes/salario, como el maíz, el arroz, los frijoles, etc. El período que nos ocupa (1958-1975) puso a prueba la capacidad de los países centroamericanos para mantener la autosuficiencia alimenticia. De hecho, a pesar de que

hubo variaciones entre un país y otro, la producción para el mercado interior ya estaba estancada o en franca recesión a finales de los cuarenta. El crecimiento demográfico y la disminución de la oferta de alimentos de consumo popular produjo una regresión en los niveles de nutrición de amplios sectores de la población.

La producción de maíz en 1949 fue de 950,000 toneladas; la de arroz, de 63,000 toneladas; y la de frijoles, de 106,000 toneladas. En 1958, la producción regional total de maíz apenas alcanzó las 1.023,000 toneladas, a la vez que la de arroz fue de 77,000 toneladas y la de frijoles, de 103,000 toneladas, lo cual significó que la cantidad disponible per cápita primero se estancó y luego disminuyó en cada una de las categorías de producto, especialmente el maíz. La tasa media de crecimiento acumulativo entre 1949 y 1959 fue del 2,58%, mientras los productos exportables aumentaron en un 7,14% en comparación con el 1,6% de los destinados al consumo interior¹⁴.

Cuadro 13
Valor agregado por el sector manufacturero
—Millones de dólares de 1988—

País/Años	1970	1980	1984	1985	1986	1987	1988
Guatemala	1175	2149	1946	1931	1944	1976	5025
El Salvador	678	907	769	797	817	842	862
Honduras	245	460	494	483	496	537	564
Nicaragua	641	815	891	849	866	853	628
Costa Rica	587	1201	1190	1214	1303	1375	1430

Fuente: *Centroamérica en Cifras*, FLACSO 1990, Cuadro 2.3.4, p. 115.

¹⁴ La información estadística que contiene esta sección se obtuvo de CEPAL, *Primero y segundo compendio estadístico centroamericano*, Nueva York, 1957, 1962.

Este panorama presenta una dolorosa paradoja: la agricultura centroamericana creció a un ritmo más rápido que la de casi todos los otros países latinoamericanos y, sin embargo, ello no se tradujo en un incremento de las oportunidades de empleo para la población rural ni en una mejora de los niveles de consumo de alimentos para la población de ingresos bajos. Al mismo tiempo, el crecimiento y la transformación del sector de exportación se basó en una agricultura que aumentó de valor no sólo por medio de los altos precios, sino también porque después de los primeros años de la posguerra, y en especial durante el decenio de 1960, hubo incrementos de la productividad y la modernización en algunos de sus sectores. El universo agrario vio el cambio de los actores y la faz de los mismos, copiando los hábitos oligárquicos y los viejos estilos de dominación política. El estigma del atraso estimulado por la modernización produce efectos contradictorios.

Después de 1945 la tasa de formación de capital fue muy baja y se tiene la impresión de que se trataba de economías sin acumulación de capital en el sentido de que el aumento de la capacidad productiva no desempeñó ningún papel destacado. Después de 1955 hubo un crecimiento de la inversión de capital estrechamente relacionado con mejoras en la capacidad de importar, que mantuvo su ritmo ascendente a pesar del crecimiento acelerado de las importaciones. El proceso de lenta destrucción del artesanado urbano y semirural y su substitución por empresas industriales pequeñas y medianas, no se ha estudiado de modo suficiente para valorarlo.

Sin duda estos hechos están relacionados con la mejora de la demanda interior, resultado de un nuevo clima político y cultural y reforzado por un aumento de las clases medias, el crecimiento demográfico y la urbanización. Otro factor fue una mejoría en las oportunidades de obtener bienes de

capital, materias primas, combustible, etc., que acompañó a la rápida subida de las importaciones durante todo el período. Son estos resultados lo que el viento no se llevó.

2. EL PROYECTO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA: SOMBRAS Y LUCES

Los censos que se hicieron alrededor de 1950 registran la presencia de numerosos establecimientos manufactureros con menos de cinco empleados, de carácter artesanal y llamados generalmente “talleres”, los cuales satisfacían casi toda la demanda de alimentos, bebidas, zapatos, textiles, productos de la madera, artículos de cuero, etc. En medio de este mar artesanal existían dos o tres fábricas grandes con abundante capital, gran concentración de mano de obra y naturaleza monopolística. Ejemplos de este tipo de establecimientos son las fábricas de cerveza que habían existido en Guatemala y El Salvador desde 1890, una fábrica textil Guatemala, El Salvador y Costa Rica, las fábricas de cemento de Nicaragua y Guatemala. El censo consideró fábricas allí donde había procesos agroindustriales como las plantas torrefactoras del café, la limpieza y embalaje de algodón, los aserraderos, las plantas donde se trilla arroz y otras.

Hasta los años sesenta no crecen las importaciones de bienes de capital, pero la propensión al consumo de bienes importados, muchos de ellos suntuarios, creció lentamente en la posguerra con el incremento relativo tanto de la renta como de la capacidad de importar y sobre todo, por el ‘efecto-de-demostración’ al que son tan sensibles las clases altas. Ello fue desfavorable para la oferta artesanal y se inició así la decadencia de este sector, que resultaría más evidente durante la época del Mercado Común Centroamericano, que señala el inicio de una industrialización que se quedó en la minoría de edad, a tono con la madurez de sus empresarios.

El valor de la producción industrial total regional representaba alrededor del 12% del PIB, con mayor desarrollo en Nicaragua y Guatemala y menos en Honduras y El Salvador. En 1946 el valor de la producción de alimentos, textiles y bebidas fue de 29 millones de dólares en Guatemala, 31,7 millones en Nicaragua, 21,2 millones en Costa Rica, 7,6 millones en El Salvador y 6,3 millones en Honduras. Once años después, en 1957, el valor de la producción de los mismos artículos para el consumo inmediato había aumentado hasta situarse en 50 millones de dólares en Guatemala, 73,1 millones en Nicaragua, 50,6 millones en Costa Rica, 35,4 millones en El Salvador y 17,2 millones en Honduras.

Esto representaba un crecimiento ciertamente modesto, menor en algunos casos que el de la población, e insuficiente para satisfacer la expansión de la demanda interior, que dependía de forma creciente de las importaciones. El comercio exterior registró una expansión y por ello, el índice de importaciones aumentó del 16,3% en 1950, al 21,1% en 1960.¹⁵

Cuadro 14
Participación del sector agrícola en el PIB a)
—Porcentajes—

País/Años	1970	1975	1980	1984	1985	1986	1987	1988	1989
Guatemala	29.8	30.6	27.1	27.9	28.2	27.9	28.0	28.1	25.7
El Salvador	28.1	27.1	27.8	27.9	27.2	26.2	26.0	25.4	23.0
Honduras	30.9	25.6	24.5	25.1	25.4	24.8	25.4	25.1	23.9
Nicaragua	24.1	23.8	23.2	24.3	24.1	22.2	21.7	23.6	23.0
Costa Rica	23.5	20.9	17.8	20.4	19.1	19.0	18.8	19.3	19.6

a) Agricultura, caza, silvicultura y pesca.

Fuente: *Centroamérica en..., op. cit.*, p. 104.

¹⁵ El valor de la producción en El Salvador y Costa Rica se calcula en dólares de 1950; el de Honduras, en dólares de 1948, y el de Nicaragua, en dólares de 1958. CEPAL, *Primero y segundo compendio estadístico centroamericano*.

Como se viene diciendo, el final de la Segunda Guerra Mundial fue el principio de una nueva época en la historia de Centroamérica: la tasa media de crecimiento anual del PIB correspondiente al conjunto de la región fue de *más del 5,3% durante casi 25 años*. Sin embargo, en los diez años comprendidos entre finales de los cincuenta y finales de los sesenta –el período llamado “la década de oro del crecimiento”– el comportamiento de la economía fue aún mejor. Los factores que vigorizaron la economía regional fueron de diversa calidad y produjeron diferencias importantes entre los países y en la naturaleza del ciclo.

La creación del programa del Mercado Común Centroamericano (MCC) en 1960 fue el factor principal que, a su vez, en su nacimiento fue el efecto de dos fenómenos concurrentes: la relativa homogeneidad política de los regímenes, el crecimiento de la economía internacional y la recuperación de la demanda exterior. El factor histórico algo pesó, el recuerdo de la Federación creada en el momento de la Independencia y más de una docena de intentos de unificación son antecedentes de algún valor. Hay una excusa más, la concurrencia aleatoria de una generación de distinguidos economistas y políticos que creyeron en la integración regional. Es un factor humano difícil de repetirse.

La integración económica no fue el resultado del agotamiento del sector exportador. De hecho, el dinamismo de dicho sector fue precisamente lo que favoreció el proceso de integración que se proclamó el 16 de junio de 1951 y precedió a iniciativas parecidas en otras partes de América Latina. Entre 1951 y la firma del Tratado Multilateral para el Libre Comercio y la Integración Económica, el 10 de junio 1958, las relaciones económicas se basaron en tratados entre dos países, de corto plazo y limitados a mercancías específicas. El comercio intrazonal fue primero bilateral.

La idea de un mercado mayor unificado surgió en la Comisión Económica para América Latina, de la ONU (CEPAL), con la inspiración fecunda de Raúl Prebisch, cuya labor precursora puso de relieve la importancia de la planificación regional y el papel del Estado. El proyecto recibió el apoyo programático y técnico de CEPAL; en aquel momento tanto los intereses comerciales locales como los grupos políticamente dominantes en Centroamérica eran favorables al objetivo de la cooperación económica, aunque tenían poca experiencia y no estaban seguros de cómo alcanzarlo. Poca duda cabe que los sectores dominantes que habían pasado a controlar el poder del Estado en la posguerra eran mucho más favorables a empresas de esta naturaleza que la oligarquía terrateniente. Estos solo creyeron en la fatalidad primario exportadora, una forma de ceguera empresarial que los mostró incapaces de desarrollar otros intereses para ellos y para la nación.

Se produjo así una convergencia de factores políticos, económicos e ideológicos, que favorecieron la firma del Tratado de 1958, que a su vez llevó al Tratado General de Integración Económica Centroamericana, del 13 de diciembre de 1960. Este tratado proyectó una zona de libre comercio durante un período de cinco años, sentó la base para una unión aduanera e introdujo una serie de incentivos fiscales, crediticios y de servicios que fomentaron el crecimiento del comercio interregional.

Si las ideas originales que propuso la CEPAL se comparan con el borrador definitivo del tratado de 1960, resulta evidente que se habían abandonado varios principios clave como la idea de gradualismo y la complementariedad industrial, es decir, una visión de reciprocidad para tener industrias locales no competitivas, distribuidas en los cinco países signatarios y de acuerdo con un plan conjunto. Este cambio debió sacrificarse por la oposición de los Estados Unidos que argumentó que se estaban creando monopolios, contrarios

Cuadro 15

Exportaciones intra-centroamericanas: valor (en millones de dólares) y porcentaje del total de exportaciones, 1950-1987

Año	Valor	% del total de exportaciones	Año	Valor	% del total de exportaciones
1950	8,5	2,9	1970	286,3	26,1
1951	10,7	3,2	1971	272,7	24,6
1952	10,4	2,9	1972	304,7	22,9
1953	11,0	2,9	1973	383,3	23,0
1954	13,4	3,3	1974	532,5	25,2
1955	13,0	3,1	1975	536,4	23,3
1956	14,9	3,5	1976	649,2	21,6
1957	17,6	3,8	1977	785,4	19,1
1958	20,9	4,7	1978	862,7	22,4
1959	28,7	6,7	1979	891,7	19,9
1960	30,3	6,9	1980	1,129,2	25,4
1961	36,2	8,0	1981	936,8	25,5
1962	44,7	8,7	1982	765,5	22,4
1963	68,7	11,7	1983	766,6	21,6
1964	105,3	15,6	1984	719,2	18,9
1965	132,1	17,4	1985	488,4	13,9
1966	170,3	20,4	1986	447,9	11,1
1967	205,6	24,0	1987	525,9	13,8
1968	246,9	26,1			
1969	250,1	25,7			

Fuente: SIECA, Series Estadísticas Seleccionadas de Centroamérica (Guatemala).

a la libertad de mercado, lo que tuvo apoyo de algunos empresarios centroamericanos. Precoces neoliberales, ambos actores estaban dispuestos a liberar el comercio de todas las restricciones y reducir el papel del Estado al de mero administrador del libre comercio¹⁶.

¹⁶ En febrero de 1959, Douglas Dillon, subsecretario de Estado de EEUU, “puso fin a las iniciales objeciones norteamericanas, identificó los requisitos de Washington para el comercio regional en América Latina –el movimiento más libre posible de mercancías, capital y mano de obra– y actuó rápidamente para que se aplicaran”. A. Guerra Borges, *Desarrollo e Integración en Centroamérica: del pasado a las perspectivas*, México, 1988, p. 20. Sobre la aparición y el desarrollo del Mercado Común Centroamericano, véase en particular SIECA, *El desarrollo integrado de Centroamérica en la presente década*, 13 vols., Buenos Aires, 1973.

- CEPAL, “Industrialización en Centroamérica 1960-1980”, en Estudios e informes de la CEPAL. No. 30, Santiago, 1983.

El proyecto de cooperación regional, que no llegaba a la integración económica total, estaba animado de ideales, como contrarrestar el empeoramiento histórico del modelo de exportación agraria, dando empleo a la creciente oferta de mano de obra, elevando la renta nacional per cápita y el nivel de vida de la población urbana, reduciendo la vulnerabilidad exterior determinada por la relación de dependencia con el mercado mundial. En el decenio de 1960 el promedio de crecimiento anual de la producción industrial fue, de hecho, del 8,5%, casi el doble de la tasa de crecimiento del PIB.

Se ha dicho con acierto que el proyecto de integración fue, sobre todo, un proyecto de y para empresarios industriales y comerciantes. Ellos fueron quienes se beneficiaron directamente del mismo y quienes en las negociaciones de los organismos dirigentes le daban la forma que más conviniere a sus intereses, incluyendo al capital norteamericano. Cuando hablamos de empresarios nos referimos tanto a los hombres de negocios tradicionales, como a una naciente élite industrial que se diferenciaba poco, en términos sociales, de la oligarquía agraria.

El programa del “mercado común” creó una incipiente base industrial que debió apoyarse en un agro reformado capaz de crear un mercado interno para la manufactura, un consumo por parte de la inmensa mayoría rural. Pero al contrario de la versión clásica eurocéntrica, el proceso industrial se indujo sin necesidad de llevar a cabo reformas en el agro. No se produjo el enfrentamiento histórico entre la aristocracia rural desplazada por una emergente burguesía urbana industrial. Pero, tanto en su concepto como en su aplicación supuso un acuerdo tácito de no inmiscuirse en los asuntos de los grandes intereses rurales. El mecanismo de construir un espacio económico mayor con cinco mercados pequeños, aplazó la tarea política de reformar la vieja estructura rural. Se perdió así una extraordinaria

oportunidad política para reformar, sin expropiaciones, las caducas estructuras del agro. De hecho, esta fue la propuesta del arbencismo: abrir el campo para la oferta industrial y esto fue lo que hizo el figuerismo en Costa Rica.

En resumen, al principio el proyecto de Mercomún avanzó rápidamente porque los gobiernos acordaron sin grandes problemas crear un arancel exterior común, reducir los impuestos sobre los productos locales y promulgar leyes destinadas a fomentar la industria. Estas crearon “paraísos” fiscales pequeños y competitivos para las inversiones extranjeras. Como hemos visto, el resultado fue una activa zona de libre comercio, la aparición de industria ligera que substituyeron las importaciones en el nivel más básico de productos para el consumo inmediato y un florecimiento hasta entonces desconocido del transporte, los seguros y otros servicios vinculados al crecimiento de nuevos polígonos industriales.

El programa de integración económica ha sido objeto de elogios y críticas que se contradicen claramente porque sus efectos así lo fueron. Hoy podemos juzgar las cosas con mayor perspectiva. Durante el decenio de los sesenta, la política económica que buscó fomentar la industria por medio de este programa dio buenos resultados dentro de sus inevitables limitaciones estructurales. En su mejor momento, más del 80% del valor del comercio intrazonal consistía en productos industriales, de consumo inmediato, que incluían bebidas, alimentos, zapatos, manualidades y algunos textiles. La substitución de las importaciones fue, *ipsis literis*, una substitución de las partes componentes del exterior, calificada irónicamente como ‘industrias-de-toque-final’, lo cual significaba importarlo todo y ‘armarlo’ aquí, por lo que el coeficiente de importaciones subió de forma paralela al crecimiento de la industria y alcanzó una tasa media del 25% en los cinco últimos años del decenio.

La utilización de bienes de capital importados, anticuados en sus países de origen, fue una novedad y ahorra mano de obra, por lo que el sector manufacturero no absorbió el exceso de la misma. Bajo la influencia norteamericana, se creó una industria competitiva que en esencia estaba en manos del capital extranjero, lo cual dio por resultado la desnacionalización y nuevas dimensiones de dependencia financiera. La integración *no creó mercado interno* y no favoreció la homogeneización social; reforzó el poder de las oligarquías locales que estaban volcadas como siempre hacia el exterior, sólo atentas a la competitividad de sus inversiones como socios menores, constituyendo un freno a la modernización social y cultural.

La experiencia centroamericana en la industria además de la que dejó la diversificación en agricultura (y en el crecimiento económico en general), ofrece un buen ejemplo de cómo los aumentos de riqueza en sociedades con grandes desigualdades sociales crea mayores disparidades. La teoría «de la filtración» o del ‘goteo’ que ocurriría llegado a cierto nivel de riqueza de la élite, fue en el inicio, una promesa incumplida y después, un torpe engaño, cuando del goteo se habló “del derrame”. Hubo derrame de pobreza con un crecimiento inequitativo, que redistribuyó desgracias. Lo que existe en realidad es una “exclusión competitiva” permanente en la cual los que pierden son siempre los pobres y sobre todo, los campesinos.

No cabe duda de que el dinamismo agrícola cambió el paisaje rural; modernizó importantes sectores agrarios y creó un empresariado con un pie en la tradicional hacienda extensiva, otro en la aventura empresarial y, años más tarde, en el sector financiero. En cambio, el avance del capitalismo agrario causó la desestructuración de las economías campesinas. El fenómeno fue especialmente agudo en Guatemala y El Salvador. En Nicaragua, el desplazamiento de la

producción de cereales básicos de la costa del Pacífico al interior y su substitución por el algodón crearon un mercado laboral formado por asalariados transeúntes hasta el extremo de que la ‘salarización’ de los trabajadores rurales ya era total al empezar el decenio de 1960.

CAPÍTULO 6

LAS LUCHAS POLÍTICAS SE TRANSFORMAN EN VIOLENCIA ARMADA

1. LOS CAMBIOS POLÍTICOS

Las sociedades centroamericanas –en un cuarto de siglo a partir de la Segunda Posguerra– cambiaron en las variables dimensiones en las que arbitrariamente ella puede ser considerada. Las ocurridas en el plano económico, han quedado consignadas con los detalles, las cifras y los breves análisis presentados. También hubo profundas modificaciones en las clases sociales sólo perceptibles a partir de sus relaciones de conflicto y cambios políticos, no independientes pero tampoco causalmente producidas por lo ocurrido en la estructura productiva. En una visión histórico deductiva, son los actores y sus intereses lo que cuentan, intereses que alguna relación de transferencia tienen con causas que no son estrictamente políticas.

Hay dos cuestiones de método vinculadas a lo anterior. Por un lado, la idea de proceso como la actuación encadenada de actores que se mueven en escenarios que ellos solo parcialmente han construido. Los procesos sociopolíticos, económicos, culturales, son creaciones contingentes del enfrentamiento entre fuerzas sociales, actores políticos, las que

no deben considerarse por ello como resultados inevitables de estructuras de las cuales los actores son simples portadores. Por el otro, la noción de que los actores son clases o grupos sociales con algún nivel de organización, intereses reconocibles y peso específico, capaces de influir en el curso histórico con resultados visibles a partir de proyectos sociales. Ellos son importantes para la historia de la sociedad en que se mueven y que lo hacen, en última instancia, dentro de límites que no pueden traspasar.

Durante los últimos años cincuenta, el conjunto de América Latina había experimentado un crecimiento lento. Indicio de la necesidad de abrir nuevos cauces de desarrollo por medio de la cooperación fue la creación del Banco Interamericano de Desarrollo en 1961. El interés por este asunto encontró expresión en Punta del Este, Uruguay, en marzo de 1961 inmediatamente después de que la administración Kennedy creara la Alianza para el Progreso (ALPRO). Su finalidad era estimular la cooperación entre Estados Unidos y América Latina por medio del crecimiento económico y la democratización política ante la amenaza que representaba la revolución cubana. Aunque la Alianza para el Progreso dio por resultado la concesión de más empréstitos a Centroamérica, planteó *la legitimidad de la idea* de la reforma agraria y el cambio estructural.

La ALPRO se produjo en los tiempos duros de la Guerra Fría y por eso también dio lugar a un aumento de la ayuda militar, en particular para El Salvador y Nicaragua, introdujo la Doctrina de la Seguridad Nacional y el concepto del ‘enemigo interno’ con lo cual se pavimentó la ruta que condujo a la modernización de las fuerzas armadas, con técnicas, instrumentos de guerra e ideologías; de hecho, la renovación del anticomunismo como ideología de la represión. A los ejércitos se les dio la misión mayúscula de defender el orden interno al precio de la democracia. No necesitaban ninguna

instrucción para cumplir con una tradición institucional de su competencia, al punto que cegados por una estrategia de violencia, literalmente, construyeron un Estado terrorista. El resultado de esta combinación siniestra fue empujar a los militares al poder, ya sin hacer las reformas sociales que la ALPRO también recomendada.

Las consecuencias fueron inmediatas, la aparición de gobiernos militares en Honduras, Guatemala y El Salvador, profundamente represivos en estos dos últimos. Se construyó a partir de 1966 y 1962 respectivamente una modalidad de dictadura militar con un régimen de elecciones periódicas, que respetaban la alternancia del poder ejecutivo, pero sólo dentro del estrecho círculo de opciones militares.

El ciclo de estas “democracias de fachada” empezó en El Salvador cuando el ejército creó el Partido Conciliación Nacional (PCN), inspirado en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) mexicano. Aunque este había resuelto el problema de la legitimidad por medio de elecciones periódicas que no perdía, así como el problema de la sucesión con el nombramiento, mediante mecanismos secretos, del candidato que saldría ganador, el contexto histórico era muy diferente en esta región.

El PCN fue creado en 1961 a raíz del golpe militar que puso fin a las tendencias reformistas de una junta civil-militar y a los prudentes proyectos de modernización de los coroneles Osorio y Lemus (1956-1960). Este golpe señaló el comienzo de un renovado monopolio político del ejército, que por medio de elecciones totalmente controladas, típicas elecciones no democráticas, garantizaron la selección de los oficiales Julio Rivera (1962-1967), Fidel Sánchez (1967-1972) y Carlos Humberto Romero (1972-1979).

En Guatemala se instauró un sistema parecido con la misma secuencia después del golpe de Estado del coronel Peralta Azurdia, 1963, ya mencionado. Con el ritual de siempre, una asamblea constitucional, una nueva constitución y elecciones presidenciales, fue elegido el abogado Julio César Méndez (1966-1970), civil, prisionero por su debilidad de un anillo de poder esencialmente militar. Se autodesignó el “tercer gobierno de la Revolución de Octubre” cuando en realidad fue el primero de las llamadas “democracias de fachada”. El poder marcial continuó con la elección sucesiva del coronel Carlos Arana (1970-1974) y los generales Kjell Laugerud (1974-1978) y Romeo Lucas García (1978-1982). Durante el segundo ocurrió el terremoto que destruyó parte de la ciudad de Guatemala y decenas de pueblos indígenas. El último, Lucas, será recordado como el mayor asesino de la cadena de violencia que formó el Estado terrorista.

Durante más de 16 años El Salvador y Guatemala vivieron bajo un régimen militar constitucional cuyo rasgo ambiguo fue utilizar las formas legales de la democracia electoral, experiencia inédita que incluyó un pluralismo dentro del anticomunismo, existencia de partidos políticos conservadores. Hubo victorias electorales de una oposición tolerada que se movió respetuosa dentro de estrictas reglas de juego. Un resultado de esta apertura fue que en los dos países hubo alcaldes de la ciudad capital electos por la oposición y un porcentaje de diputados en el Congreso donde los militares se aseguraban que sus partidarios siempre estuviesen en mayoría. Fue este un modelo de democracia limitada en aspectos sustantivos en que deja de serlo: a la elección presidencial concurrían varios candidatos pero sólo ganaba el general nominado por el Ejército. Como ya se sabe, sin la abierta colaboración civil esto no hubiese sido posible.

La “democracia de fachada” se aseguró siempre la desmovilización permanente de la organización popular y una despolitización general de la vida política, acompañada de forma sostenida con la represión brutal de las fuerzas políticas reformistas, democráticas y radicales. El movimiento sindical y los campesinos, la universidad pública, sectores de la Iglesia, cuadros y militantes de los partidos reformistas, incluso aliados temporalmente con el ejército, fueron aplastados de modo permanente y sangriento. Ocurrió aquí una de las muchas paradojas de la historia centroamericana, esa insondable relación en que el pasado corrompe al futuro y se vive un presente carente de sentido: los años de estos regímenes militares, guardianes celosos de las formas, corresponden a) al peor período de represión violenta contra las fuerzas democráticas; b) al período más importante de la modernización económica nunca antes habido y c) a la etapa preinsurreccional, el momentum en que las luchas sociales se convierten en lucha armada.

La base de estos regímenes era una sólida alianza militar-empresarial, cuyos intereses económicos fueron promovidos de manera puntual porque fue esta la época de la modernización del modelo exportador y del Mercomún; esa coincidencia movió una opinión pública de ‘clases medias’ ganadas por el anticomunismo; y el apoyo múltiple de Estados Unidos, que no puede calificarse sólo de ayuda militar y económica, ya que incluía importantes elementos culturales e ideológicos en el marco de la seguridad contra la insurrección, que aún no existía. *Se prepararon e hicieron la guerra contra un enemigo todavía ausente.*

Otra consecuencia política fue la consolidación corporativa de los grupos empresariales, que terminaron de perfeccionar sus gremios meticulosamente convertidos de poderosos grupo de interés en expresiones políticas. En su vida activa, las organizaciones del gran capital, Fusades (El

Salvador) y el CACIF (Guatemala), el COHEP (Honduras), el COSEP (Nicaragua) actuaron como una fuerza política con un nivel de agresividad más alto que la magnitud de sus intereses económicos. De hecho sustituyeron al partido-de-la-burguesía, que no existió nunca en estos tiempos.

La entrada de los sectores medios en la vida política centroamericana ocurrió en ocasión de las luchas democráticas de 1945/48 cuando los dictadores de Guatemala/El Salvador cayeron, el de Honduras renunció y en Costa Rica las fuerzas civiles renovaron el viejo 'establishment' al organizarse en el eficaz Partido de Liberación Nacional. Es un fenómeno de ciudadanización urbana de grupos con buenos niveles de educación aunque no de ingreso, con un 'elan' progresista, civilista, estrictamente democráticos. Su estreno político fue claramente antioligárquico en el sentido de pelear un espacio propio, una voluntad de hacer política independiente. Una lucha contra la exclusión y el elitismo cerrado, aristocrático, antipolítico, racista, con valores del orden terrateniente.

Los grupos de clase media no estaban solos pues invariablemente se rodearon de la simpatía de las organizaciones populares y sindicales a las que pronto encabezaron. Formaron partidos y, algunos llegaron al gobierno, entraron a dirigir las universidades, la prensa, la cultura. La Guerra Fría dividió a las clases medias y una fracción importante abandonó su inicial posición *anti statu quo*. Se volvieron aliados y/o servidores de la burguesía, al parecer su inevitable destino político; y muchos, sirvientes de los militares. Otra fracción, se movió hacia la izquierda y a posiciones radicales que en su momento los llevó a encabezar los estallidos revolucionarios. En general, en esa época, fueron los actores de una importante renovación intelectual y cultural y la formación de una opinión pública relativamente moderna.

En Honduras, Ramón Villeda Morales gobernó con mano modernizadora pero vacilante y puso en marcha cambios que eran siempre incompletos y retrasados a pesar del apoyo de la Alianza para el Progreso. El 3 de octubre de 1963, semanas antes de la fecha prevista para las elecciones, el coronel López Arellano se apoderó del poder, pero se encontró con que tenía que hacer frente a la movilización campesina más importante de la historia regional, con la ocupación en masa de grandes extensiones de tierra que no sólo no se cultivaban sino que se poseían en condiciones de tenencia precaria.

La ocupación de tierras estatales comunales a menudo revelaba que los grandes terratenientes las poseían ilegalmente. La dinámica de las ‘invasiones’ agrarias fue paralela con la organización de varias federaciones de campesinos cuya importancia en la vida política empezó a ser decisiva. Para aliviar las presiones y la proliferación de conflictos en el campo, el gobierno de López Arellano promulgó en 1967 un programa de reparto de tierras que afectó a cientos de familias salvadoreñas que carecían de título de propiedad de las tierras que ocupaban en el sur del país desde la crisis de 1930.

Sin duda los campesinos salvadoreños sufrieron abusos por parte de las autoridades hondureñas y más de 100,000 fueron expulsados durante un período de tres meses. Honduras sufría un déficit comercial permanente e importante con El Salvador a resultas del mercado común. Había animosidad y un partido de fútbol provocó el estallido de disturbios cuya gravedad no reside ni en sí mismo, ni en el conflicto entre ambos países, que tardó 100 horas, sino en las consecuencias que tuvo a largo plazo. Es difícil identificar las causas precisas de la acertadamente llamada “guerra inútil” que estalló en julio de 1969¹⁷. El ejército salvadoreño, mejor pertrechado,

¹⁷ Véase Thomas E Anderson, *The War of the Dispossessed: Honduras and El Salvador 1969*, Lincoln, Neb., 1981; y D. Slutsky y otros, *La Guerra Inútil*, San José, 1971.

invadió Honduras pero se retiró tres días después debido a la mediación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la presión de Estados Unidos.

La ruptura total de las relaciones entre los dos países debilitó el proyecto de integración económica y creó un foco de discordia que no encontró solución en tres décadas después, debido en igual medida a la falta de definición de la frontera y a la continua exasperación del sentimiento nacionalista. El acontecimiento afectó seriamente la estructura de las exportaciones salvadoreñas, el 20% de las cuales iba dirigido al mercado hondureño, y creó un grave problema demográfico-económico en la región rural más pobre de El Salvador, que ya estaba superpoblada.

El acontecimiento puso de relieve serias deficiencias sociales en Honduras, especialmente injusticias en el campo y la futilidad del conflicto interno. Al principio López Arellano intentó ser reelegido con el pretexto de que los peligros de la nueva guerra requerían su presencia, pero un patriotismo superior al encono politiquero empujó un proyecto de unidad nacional que propusieron el ejército, el COHEP (Consejo Hondureño de la Empresa Privada) y el movimiento sindical. Se aplicó una solución basada en la elección de un presidente apoyada por los dos partidos, al estilo colombiano de dividir los puestos del gobierno a razón de mitad y mitad.

Así, en junio de 1971 se eligió al anciano abogado Ramón Ernesto Cruz, del Partido Nacional. Pero la fórmula para la reconciliación nacional fue de corto plazo, debido más al atraso político de los caudillos tradicionales que a la ineptitud senil del presidente. El 4 de diciembre de 1972, López Arellano volvió a echar por tierra el débil orden jurídico que se había conseguido y con obvio desprecio del proyecto de estabilidad y unión, faltó a la palabra en que comprometía al ejército.

Nicaragua conoció también los proyectos reformistas del decenio, tanto del tipo que adoptaba un aspecto más o menos ritual inspirados por la administración Kennedy, como los que tenían su origen en un verdadero deseo de cambio. La muerte del presidente Schick en 1966 creó la posibilidad de que la interrupción temporal del control del gobierno por parte de la familia Somoza diera paso a un período más largo de competencia democrática. Sin embargo, la oportunidad histórica se perdió con la imposición electoral de Somoza Debayle, de la que ya se habló páginas atrás.

La historia de este período en Costa Rica sigue una senda más civilizada. La “guerra” de 1948 y los acontecimientos sucesivos fueron la forma costarricense de ajustar cuentas con la vieja oligarquía del café, con su cultura política y con la necesidad de modernización institucional y económica. Este designio se llevó a cabo en el contexto de las nuevas condiciones que aparecieron en el decenio de 1950 con la ascensión del PLN y la renovada fuerza de una importante generación de políticos e intelectuales militantes de la corriente socialdemócrata.

La fuerza de la tradición política permitió perfeccionar los mecanismos electorales y abarcó la construcción de un Estado capaz de estimular el crecimiento y el desarrollo. Los gobiernos de Figueres (1953-1958), Mario Echandi (1958-1962), Francisco Orlich (1962-1966), José Joaquín Trejos (1966-1970), José Figueres otra vez (1970-1974) y Daniel Oduber (1974-1978), manifiestan una oscilación pendular en el ejercicio del proceso electoral, que incluyó dos victorias para la oposición, en 1958 y en 1966.

La renovación de la sociedad costarricense incluyó la construcción de un Estado que definió su relación de centralidad con la economía y la sociedad, fomentando un desarrollo social donde la influencia del mercado era menos

desordenada; reforzó las empresas pequeñas y medianas, especialmente en la agricultura; democratizó el crédito, no sólo con la nacionalización de los bancos, sino también con la creación de juntas locales encargadas de administrarlos. Se ampliaron las variedades de café y se nacionalizaron los servicios básicos como electricidad, transportes, seguros, teléfonos y puertos mediante un régimen de instituciones autónomas y semiautónomas. Se amplió también el sector de la educación. La entrada en el Mercomún, demorada por el aislacionismo de algunos grupos económicos, permitió un desarrollo gradual de la industria ligera, que ya era importante al empezar los años setenta.

Las políticas anteriores fueron posibles por la presencia de un Estado interventor, sitio donde se plantearon y resolvieron los conflictos de la élite. Con la elección de Mario Echandi, 8/II/1958, de la oposición conservadora se dice que la democracia moderna en Costa Rica se consolida, porque las heridas de la 'guerra del 48' se van cerrando y las políticas modernizadoras las aplican por igual social demócratas y social cristianos. El Estado, eje del cambio, se dice que pasa de interventor a paternalista y en los setentas a un Estado empresario. Con la crisis de los ochenta, la configuración estatal finalmente cambia. Dado que Costa Rica es un país pobre, cabe sacar la conclusión elemental de que prosperó porque había sido bien administrado.

2. LOS ESTALLIDOS REVOLUCIONARIOS

A la mitad del decenio de 1970 la crisis política completó un largo ciclo de gestación al adquirir la forma de un desafío armado y masivo al orden institucional en Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Las raíces de la crisis eran largas y diversas y variaban de un país a otro. Lo que tuvieron en común era una clase agraria dominante, una oligarquía que

cuidaba sus egoísmos económicos renunciando al ejercicio del poder que dejaba en manos de los ejércitos amigos. En su ejercicio, aplicaron la violencia con obstinada permanencia hasta tener un Estado terrorista que lo fue tanto por la crueldad que aplicó a los alzados, como por los efectos que produjo en la población civil: un miedo generalizado para unos, una absoluta impunidad para otros, una trivialización del horror para todos.

Si es cierto que la crisis fue la última expresión de una voluntad de cambio social reiteradamente frustrada y no necesariamente la acumulación de agravios a lo Barrington Moore, por las formas que adoptó en cada país puede decirse que fue *el derrumbe de los cauces institucionales de la participación legal lo que multiplicó la protesta*. Fueron menos subversivas las demandas por la libre participación política, por la justicia social, la libertad y la tierra que la extrema violencia del Estado, para enfrentarlas. Esta es la respuesta de un Estado débil, sin legitimidad, que produjo reacciones que culminaron con respuestas violentas.

Un clima de guerra civil fue envolviendo a todos los actores en un camino sin regreso. Los años de preparación para la guerra ocupan la década de los setentas; los tres países por factores distintos, de pronto, se parecen entre sí dando la impresión en esta casual coetaneidad que hay un acuerdo entre los guerrilleros de los tres países para avanzar juntos. En este juego sincrónico de apariencias los ideólogos de la derecha argumentaron que en el desorden de la revolución centroamericana había manos externas una conspiración pertinaz con aires del Caribe.

En las sociedades que están políticamente bloqueadas, la subordinación o las exclusiones, ya sea vividas o imaginadas, son superiores como fuerza movilizadora, a la explotación económica como tal. La contradicción clasista es

inferior a la tensión política, agravada con la represión. Nada pudo estar más lejos de los espacios iniciales de las luchas por la democracia en el decenio de 1960 que estas coaliciones policlasistas, ya impacientes por ir a la guerra en el decenio de 1970. Es la misma generación pero ahora portadora de objetivos de cambio radical, partidarias de métodos violentos, el contraterror.

El Estado terrorista, en clave teórica, deshumaniza al enemigo, lo define ideológicamente en forma 'vertical' y le aplica con total impunidad cualquier método para aniquilarlo: la verticalidad alude a que el enemigo está en todas partes del cuerpo social y por ello es culpable, primero el subversivo, luego sus parientes, enseguida sus amigos, colegas, vecinos hasta el simple conocido y concluye con el sospechoso porque usa barba o se exhibe con libros bajo el brazo. La represión castigó incluso hasta los que según el dictum totalitario 'si no están conmigo, están contra mí'. El resultado es que de los 300 mil muertos, sólo el 10% murió en 'las líneas de combate'. También la izquierda armada secuestró y asesinó a quienes definió como sus enemigos: empresarios, embajadores, políticos, militares e incluso a muchos militantes de sus propias filas, sospechosos o comprobados agentes infiltrados. Pero no admite comparación el tamaño desigual del victimario y de las víctimas de ambos bandos.

La crisis política no se caracterizó exclusivamente por manifestaciones de violencia armada ni se limitó de forma rigurosa a las acciones de la guerrilla. Antes y después del cenit de las actividades insurreccionales hubo movilizaciones de masas cuya magnitud no tenían precedentes, como, por ejemplo, en Guatemala la marcha de los mineros en Ixtahuacán que eran más de 100,000 cuando arribaron a la capital (noviembre de 1977); la huelga general de empleados públicos en 1978; y la huelga de 30,000 trabajadores agrícolas en la costa sur (febrero de 1980). La ocupación del Ministerio

de Trabajo, la toma de iglesias y la huelga general de 1977-1978 en El Salvador, y los grandes levantamientos urbanos junto con las huelgas generales que siguieron al asesinato de Pedro Joaquín Chamorro en Nicaragua entre 1978 y abril de 1979 reflejan el mismo proceso.

El Frente Sandinista de Liberación Nacional fue fundado el 23 de julio de 1961, cobra finalmente peligrosidad estratégica en el ámbito de una creciente oposición al somozato, después de 1975. El Partido Liberal se escinde y cobra fuerza la fracción de Ramiro Sacasa y luego la dirigida por Pedro Joaquín Chamorro. En Nicaragua el desarrollo del conflicto fue más bien breve pero intenso por los diversos sitios donde se ejecutó y la amplitud de los actores. Es importante recordar que el XII-1974 se creó la Unión Democrática de Liberación en torno al Partido Conservador, dirigida por Pedro Joaquín Chamorro y en X-1977, surgió el Grupo de los Doce, que formaron la dimensión no sandinista de la oposición. El asesinato de Chamorro en I-1978 empuja a la oposición burguesa del lado del movimiento armado. Fue importante la toma del Palacio Legislativo en agosto de 1978, que permitió la liberación de 60 cuadros sandinistas, incluyendo Tomás Borge.¹⁸

En Estelí, Monimbó y otros pueblos hay levantamientos espontáneos. En mayo de 1978 se lanza un llamado a la insurrección general y un año después, en mayo de 1979 las tres tendencias del FSLN forman una Dirección Nacional y dirigen la ofensiva final. La ciudad de Estelí es tomada dos veces y toda la región de Las Segovias está en armas hacia mediados de 1979. En el frente sur, frontera con Costa Rica se libera parte del territorio. La combinación de formas de movilización revolucionaria madura las condiciones

¹⁸ En mayo de 1976 muere en combate Carlos Fonseca Amador, fundador del FSLN y líder máximo.

para derrocar al tirano. En junio de 1979 se malogra la insurrección de Managua. El apoyo norteamericano, firme sostén de la dictadura termina el 16 de julio. Somoza II huye a Miami con varios generales y la Guardia Nacional, creatura norteamericana para combatir a Sandino se desploma frente a los sandinistas, que entran en Managua el 19-VII-1979. La revolución había triunfado.

Cuadro 17
Fuga de capitales, deuda externa y producto interno bruto
–Millones de dólares–

	Fuga acumulada 1971-1987	Cambio en la deuda externa 1971-1987	PIB 1987	Fuga acumulada, Porcentajes de	
				Cambio en la deuda	PIB
GUATEMALA	4447	2696	7980	164.9	55.7
EL SALVADOR	1547	1537	4214	100.8	36.7
HONDURAS	2156	3213	3807	67.1	56.6
NICARAGUA	5120	7167	2905	71.4	176.2
COSTA RICA	5644	4444	4186	127.0	134.8

Fuente: Centroamérica en cifras, FLACSO. San José. 2000.

Entre 1962 y 1965 un grupo de ex soldados y oficiales de las tropas de asalto del ejército, rangers entrenados en EEUU., empezó la primera acción guerrillera en Guatemala después de la fallida insurrección militar del 13 de noviembre de 1960. Más adelante se formaron las Fuerzas Armadas Rebeldes, con grupos radicales de estudiantes y trabajadores urbanos y militantes del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), de filiación comunista. La creación del MR-13 y de las FAR no constituyó un desafío militar en el sentido técnico, pero sin duda expresó el profundo descontento popular que se venía acumulando después de la caída de Arbenz.

Fueron derrotados entre 1966/68 por una acción conjunta de la policía y el ejército y por los efectos de una insensata pelea interna, menos ideológica que personal.

La guerrilla guatemalteca tuvo el precedente de la derrota de 1964-1968, y hasta el período 1978-82 no aparecieron con fuerte arraigo entre indígenas/campesinos. Las experiencias previas y el recrudecimiento de la represión estatal llevaron a la estrategia de acumulación de fuerzas. Un sector guerrillero permanece en las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), que logran crecer al atraer grupos de jóvenes de la Democracia Cristiana y de sectores obreros. Otro grupo, también un desprendimiento de las FAR, se organiza en la región selvática del noroccidente del país haciéndose de una base campesina, y surge como Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), el grupo más importante al lograr el apoyo de importantes comunidades indígenas del altiplano. La tercera, fue la Organización del Pueblo en Armas (ORPA) que se tomó casi una década para surgir (1979) también con apoyo indígena, en la región fronteriza con México.

La represión de los setenta en Guatemala fue sin duda la más sangrienta de la región. Entre 1976/80 fueron asesinados los cuadros más importantes del movimiento cooperativo, del sindicalismo urbano, centenares de activistas campesinos, estudiantiles, periodistas, religiosos. En Guatemala, donde operó la guerrilla más antigua de la región, no pudo unificarse sino hasta después de su debacle militar. A diferencia de la situación salvadoreña, aquí no hubo guerra civil sino un conflicto social armado, un estado de beligerancia del ejército contra toda expresión de oposición. A principios de 1980 los tres grupos guerrilleros contaban a lo sumo 2,000 combatientes armados, que empezaron a recibir apoyo de unos 100,000 indígenas no combatientes en las superpobladas zonas de las tierras altas del centro y el norte. La movilización de esas comunidades indígenas

fue el rasgo más sobresaliente de la crisis porque planteó la reivindicación étnico-nacional y, en realidad, constituyó la mayor revuelta indígena desde la era de la conquista. Aquí no hubo guerra civil, sino dos momentos guerrilleros y 36 años de represión.

La derrota guerrillera en 1981/82 se acompañó con una campaña de tierra arrasada en extensas zonas indígenas, con el saldo de un genocidio de más de 50 mil indígenas civiles asesinados. La guerrilla continuó la lucha con escaso apoyo popular. La resistencia urbana, un foco importante, fue brutalmente aniquilado hacia 1983/84. El Estado creó en 1982 las Patrullas de Autodefensa Civil, que fue la incorporación forzosa de casi un millón de campesinos, convirtiendo el conflicto en un sangriento enfrentamiento entre indígenas.

Las operaciones contra los insurrectos fueron dirigidas con “espíritu de cruzada” contra los infieles. La ofensiva del ejército (1981-1982) no aniquiló a los guerrilleros, pero les obligó a replegarse a sus zonas primeras al tiempo que destruía 600 aldeas indígenas, daba muerte a 75,000 mayas y provocaba un desplazamiento de población que afectó a 500,000 personas. Fue esta la mayor matanza étnica de la historia latinoamericana. La operación “Victoria 82” ha sido calificada como un acto de genocidio que destruyó en parte las bases materiales y sociales de la cultura indígena. Es discutible el resultado aunque no la voluntad racista de una buena parte de la sociedad guatemalteca, cómplices del sacrificio indígena. En este conflicto, ni el ejército ni la URNG triunfaron, pero con terca perístasis lograron prolongar el ‘conflicto’ hasta 1996.

En El Salvador militantes comunistas fundaron en marzo de 1970 las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) y jóvenes radicales demócratacristianos el Ejército Revolucionario

del Pueblo (ERP) en 1972. Ya antes, en 1969, el Partido Comunista había formado la Unión Democrática Nacional (UDN). El auge de la lucha favoreció el surgimiento de la Resistencia Nacional (RN) y del Partido Revolucionario de Trabajadores Centroamericanos, y sus correspondientes frentes de masas, el FAPU y el MLP, respectivamente. En 1975 y 1979. La represión militar convirtió paulatinamente la protesta cívica en respuestas armadas, en las que cayeron centenares de militantes de izquierda, pero también políticos, empresarios y militares del régimen. El 14 de marzo de 1980 fue asesinado monseñor Romero en medio de un baño de sangre. En junio de ese año se unifican los grupos guerrilleros en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y en enero de 1981 lanzan la llamada ofensiva final. La guerra civil había empezado.

El FMLN, que tenía 2,000 hombres en 1981, termina con cerca de 10,000 en 1991. La abierta cooperación norteamericana reorganiza el ejército nacional que de 14 pasa a tener 45 mil hombres, helicópteros, armamento moderno. De no haber recibido inmediata ayuda norteamericana en proporciones masivas, no hubieran sido capaces de resistir la insurrección popular. La ayuda de 35 millones (1981) subió a 67.5 (1982), 72.5 (1983) y 150.4 millones al año siguiente hasta alcanzar casi 700 millones y un centenar de asesores. El FMLN se consolidó en zonas importantes del país, lo que le permitió estratégicas iniciativas militares como en 1983 frente a los recién creados Batallones de Reacción Inmediata, 3,000 hombres entrenados por los boinas verdes. Y 1986/87 cuando la ‘Operación Fénix’ sobre el volcán Guazapa o la “Unidad para Reconstruir” sufren reveses a manos de los farabundos.

Se pelea una guerra de posiciones en un escenario de extrema violencia. La toma de la ciudad de San Salvador, en noviembre de 1989 por el FMLN es el mayor síntoma,

contradictorio, de la fuerza y debilidad de ambas fuerzas, el Ejército Nacional y la guerrilla. Para entonces las pláticas de paz estaban en curso y culminarían exitosamente en febrero de 1992.

Y ahora, algunas reflexiones sobre la insurgencia. ¿La heterogeneidad social estimuló el pluralismo ideológico de las fuerzas guerrilleras? Probablemente no porque eso supone que cada sector clasista tiene su propio enfoque ideológico. Las demandas de democracia para todos y justicia social para los pobres reúne valores políticos y morales que son independientes de la clase o del estrato social. Y más bien fue la convergencia múltiple de ideologías lo que explica la heterogeneidad social. Lo cierto es que se produjo esta original combinación de sacerdotes y católicos con la teología de la liberación, numerosos demócratas progresistas portadores de un jacobinismo radical y numerosos militantes y cuadros políticos adscritos a los varios tipos de marxismo.

Los rasgos que acabamos de describir reflejan la naturaleza social e ideológica del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua (FSLN); el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador (compuesto por cuatro organizaciones político-militares); y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) (que comprende tres organizaciones de diferente tamaño). El ‘crecimiento’ de estas organizaciones, es decir, su capacidad efectiva de amenazar al Estado débil¹⁹ se alcanzó de diversas maneras, dependiendo de la historia de cada país.

¹⁹ El Estado es débil por ilegítimo, ilegal, sin recursos financieros propios, fuertemente corporativo, ineficaz. Por lo general, bien armados, salvajemente represivos. Un Estado artillado, como lo era el somocista, era un poder débil.

La modalidad guerrillera cuando no es el típico ‘foco’, una élite voluntariosa, artificial, ajena, sino que es la expresión superior de una organicidad articulada de intereses, principios, objetivos, revela con su constitución y en sus métodos un acto supremo de desesperación política; la impaciencia juvenil, en el límite, es la convicción de la victoria, la expresión positiva de la suma de fracasos. La subversión es una respuesta obligada al terror blanco, es la mediación política de un proceso contra el *statu quo*. El Estado terrorista, al combatir la subversión con mayores dosis de ilegalidad, fue moralmente condenable y políticamente peligroso.

Volvamos un momento a la historia internacional: el 11/II/1979 el ayatola Jomeini llega a Teherán, y el Shah de Persia huye siendo el aliado más sólido en el medio oriente; en marzo de ese año un gobierno pro cubano se instala en Grenada encabezado por el marxista M. Bishop. El FSLN entra en Managua en julio de 1979 y el hijo predilecto de los norteamericanos sale rumbo a Miami; en octubre de ese año, el general Romero es derrocado por un golpe de jóvenes coroneles en El Salvador. Meses después, el 24/IV/1980 fracasa vergonzosamente la liberación de los rehenes norteamericanos en Teherán; y en enero de 1981 el FMLN sale de San Salvador iniciando su proclamada ofensiva final; justo en esas fechas, el EGP ejecuta el primer amago militar en Guatemala. Pero los golpes serios son la revolución iraní que expulsó al egregio peón de occidente y la invasión soviética a Afganistán. Tal vez el escenario internacional adverso impidió la reelección de Carter y estimuló la obsesión reaganiana frente a Nicaragua.

La caída de la dictadura Somoza en julio de 1979 fue un momento de grandes proporciones históricas en la crisis centroamericana por diversas razones. En primer lugar, no fue sólo el final de una larga dictadura familiar, militar y hereditaria, sino que también el derrumbe de una forma de

poder burgués y de un Estado sultanesco construido sobre bases militares (la Guardia Nacional), políticas (el Partido Liberal), económicas (control directo y sinuoso del 20% del PIB en 1978) y sobre todo diplomático (EEUU). Una forma personalizada de poder que desde lo público avasalló el mercado y que produjo un entorno de oposición burguesa. Lo que era competencia feroz en el mercado se convirtió en violenta oposición política en la vida pública por parte de significativos grupos empresariales.

Cuadro 18
Efectivos militares en Centroamérica

País	1977	1985
Guatemala	14.300	51.600
Nicaragua	7.100	61.800
Honduras	14.200	23.000
El Salvador	7.300	51.500

Fuente: A. Rouquié, *Guerras y paz... op. cit.* p. 225.

En segundo lugar, fue la victoria política y militar de una amplia coalición multclasista de carácter nacional con un programa para la regeneración cultural, moral y política de una sociedad atrasada. En tercer lugar, fue la derrota de una expresión conspicua de la política exterior de Estados Unidos, que se manifestaba por medio de ayuda y protección militar; los recursos de poder de la dictadura de los Somoza fueron siempre norteamericanos, pues la familia y su poder fueron una criatura suya.

Por último, constituyó una forma revolucionaria de resolver la crisis que también afectaba a El Salvador y a Guatemala, donde movimientos insurreccionales estaban preparando el camino para la toma del poder, en otras condiciones. La conformación histórica de Nicaragua facilitó lo que se ha llamado

una victoria de la sociedad contra el Estado; el triunfo no fue sólo del sandinismo porque fue, *strictu sensu*, un levantamiento nacional. Y ocurre aquí un efecto contradictorio porque la hazaña sandinista estimuló los ímpetus insurreccionales, pero al ser irrepetible la experiencia original de una unidad antidictatorial nicaragüense en El Salvador y menos en Guatemala la victoria se volvió elusiva. Además, alertó a los Estados Unidos, por lo que el éxito nicaragüense impidió el salvadoreño; en Guatemala nunca fue posible. El triunfo sandinista bloqueó el eventual triunfo del FMLN; se dice no hay dos milagros sucesivos, no suele haberlos.

3. PROLEGÓMENOS AL PROYECTO DEMOCRÁTICO

Entre la primera junta civil-militar en El Salvador y la última (IX/79 a X/80), los demócratacristianos habían cobrado fuerza, a la vez que en 1982 el banquero Álvaro Magaña se hacía cargo de la presidencia a título provisional. Este fue el período en que la presencia norteamericana se consolidó firmemente como el factor más importante en la vida nacional. El Senado de Estados Unidos instó a la “legalización” del poder y el régimen provisional convocó a elecciones para una asamblea constituyente (III/82) en el momento en que la guerra civil se constituía. Para sorpresa de todos, las ganó una coalición de extrema derecha encabezada por Roberto D’Aubuisson, joven oficial torturador y fundador de ARENA, aunque los demócratacristianos salieron de los comicios como el partido más importante del país. ¿Es este un feral comienzo de la transición a la democracia?

Sucesivos golpes de Estado en Guatemala (marzo de 1982 y agosto de 1983) también llevaron a la celebración de elecciones constitucionales (junio de 1984) bajo el sombrío liderazgo del general Humberto Mejía Vítores. Los resultados fueron parecidos: una fuerte representación de los

partidos derechistas y, sin embargo, con la mayoría relativa en poder de los democristianos. En mayo de 1984 y diciembre de 1985 los líderes democristianos José Napoleón Duarte (El Salvador) y Vinicio Cerezo (Guatemala) fueron elegidos para la presidencia en comicios sin fraude. Por primera vez en 55 años en El Salvador y 20 años en Guatemala la victoria fue para candidatos civiles de la oposición.

La oleada democratizadora en medio de la crisis, la guerra y la franca intervención de Estados Unidos también llegó a Honduras. La erosión de los gobiernos militares que controlaban el país desde 1971 (López Arellano, 1971-1975; Juan Alberto Melgar Castro, 1975-1978; Policarpio Paz García, 1978-1980) era muy grande. El origen del cansancio político popular frente a los coroneles hondureños no estaba causado por las obligaciones represivas de éstos, sino en lo fútil de su gobernanza corrompida, exhibiendo vidas alcohólicas, promiscuos, delincuentes. López Arellano y dos ministros fueron denunciados por soborno flagrante, después de que su propio gobierno, por primera vez en la historia, gravara con impuestos la producción y la exportación de bananas.

Sus sucesores optaron por una política de inactividad prudente, pero también se vieron envueltos en escándalos por el tráfico de drogas y esmeraldas al convertirse Honduras en un apéndice de la corrupción colombiana internacional. Cabe recordar que pese a su papel anti sandinista y a la militarización del país, se recurre al inevitable ritual centroamericano de redactar una nueva Carta Magna y la entrega del poder. Las elecciones de abril de 1980 dieron vía libre al retorno del gobierno civil, de los liberales y el fortalecimiento de la influencia estadounidense. La administración Carter contribuyó mucho a la victoria de Roberto Suazo Cardova, y la presencia norteamericana adquirió una nueva dimensión regional directamente organizada contra el gobierno sandinista de Nicaragua.

La visión obsesiva del recién elegido presidente Reagan transformó Honduras no sólo en un “refugio” para bandas de mercenarios nicaragüenses sino también en una organización ofensiva en la que había varias bases militares y un lugar para la celebración agresiva de maniobras conjuntas que empezaron en 1982. La supervivencia del poder civil en estas circunstancias es sólo una de las formalidades básicas que fue conveniente mantener y tiene poco que ver con la crisis interna del ejército hondureño, especialmente en el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas (CONSUFFAA), que obligó a los generales Gustavo Álvarez Martínez y Walter López a dejar el poder y salir del país.

Durante el gobierno de Suazo hubo un grave enfrentamiento entre el brazo ejecutivo, el Congreso, y la judicatura que se resolvió gracias a la mediación del ejército, los sindicatos y la embajada estadounidense. Otro conflicto, que esta vez fue interno de los partidos tradicionales y se resolvió mediante la intervención de estos mismos, amenazó con poner fin al sistema de dos partidos. En las elecciones presidenciales (24/XI/1985) hubo tres candidatos del Partido Liberal y dos del Nacional, y el que recibió más votos (Rafael Leonardo Callejas) perdió mientras que Azcona de Hoyo, que obtuvo 200,000 votos menos, ganó porque a los suyos se añadieron los votos de todos los demás candidatos liberales, en una versión uruguaya provisional. En cualquier otro momento de la historia del país, una crisis como ésta hubiera provocado rápidamente la intervención de las fuerzas armadas.

En Costa Rica la estabilidad institucional no se ha visto turbada a pesar de que el gobierno conservador de Rodrigo Carazo (1978-1982) trató de seguir una política económica liberal. En contra de lo que se esperaba, Carazo se negó a negociar con el FMI y permitió la utilización de su territorio por parte de la oposición antisomocista de Nicaragua. Las elecciones que siguieron permitieron el retorno del PLN con

Luis Alberto Monge (1982-1986), pero la crisis económica ya había llegado. La política norteamericana intentó convertir Costa Rica en otra pieza de su ofensiva antisandinista, lo que logró en medio de una inevitable inestabilidad.

Monge actuó de manera contradictoria por la impotencia económica que lo limitaba, la presión de Estados Unidos y la tendencia general a la derechización de la política centroamericana. En enero de 1984 Monge proclamó la neutralidad permanente, desarmada y activa de Costa Rica, pero en agosto se libró de funcionarios importantes que pertenecían al ala progresista de su partido con el fin de facilitar las actividades de los antisandinistas en el país.

En 1986, a pesar de las dificultades que se experimentaban en la política social y económica, el PLN volvió a ganar las elecciones bajo el liderazgo de Oscar Arias en la que fue la primera vez que el partido concurría a los comicios enfrentándose a una oposición conservadora organizada en un partido con una clara identidad ideológica, el PUSC. Al consolidarse este movimiento, el país reforzó un modelo bipartidario, pero con pocas diferencias programáticas entre sí. Las fuerzas de izquierda se sumieron en una crisis y perdieron su ya escaso apoyo electoral.

Arias se propuso llevar al país a una posición de neutralidad real; su iniciativa fue convocar una reunión de presidentes en febrero de 1987 a la cual contradictoriamente no invitó al presidente Ortega, de Nicaragua. Sucesivos esfuerzos del presidente Cerezo para lograrlo culminaron en la reunión Esquipulas, en agosto de 1987 y donde los cinco presidentes firmaron un documento conocido como “Esquipulas II” Procedimientos para la Instauración de una Paz Firme y Duradera en América Central, que señaló pasos y objetivos para la paz y la democracia en la región. Esta propuesta recibió el apoyo de los países del grupo Contadora

(México, Panamá, Colombia y Venezuela), que venía actuando desde 1983 a favor de la paz, los pertenecientes al Grupo de Apoyo (Brasil, Argentina, Perú y Uruguay), el Parlamento Europeo, y cuatro de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estados Unidos se abstuvo ¿estaba contra la paz regional?

La situación en Nicaragua, durante este período de sandinismo desbordado, se caracterizó por las políticas de renovación total de la sociedad con apoyo intensivo de las masas movilizadas, pero en el marco de proyectos contradictorios para liquidar el pasado. El FSLN quiso practicar una democracia participativa, como la campaña de alfabetización, sanidad y otras. Proclamó como principios fundamentales una economía mixta, el pluralismo político y la no alineación; y basándose en ellos, creó un sector económico de propiedad estatal y una alianza (el Frente Patriótico Revolucionario o FPR) que incluía varios partidos situados a la derecha y a la izquierda de un arco iris al que le faltaban algunos colores.

El ambicioso programa de renovación nacional fue aplicado con un entusiasmo estimulado por la improvisación. La voluntad de las masas es a veces superior a la realidad porque se espera el cambio a partir de las buenas intenciones colectivas. Pero esa dinámica de cambio en Nicaragua encontró pronto sus límites a causa, por un lado, del atraso económico y político del país y, por el otro, de la virulenta oposición de la administración Reagan. Con la suspensión indefinida de la ayuda bilateral de Estados Unidos (febrero de 1981) y el bloqueo de los empréstitos por parte de las organizaciones internacionales (a partir de noviembre de 1981), la economía del país fue paralizándose lentamente debido a la dificultad de sustituir piezas de repuesto, además de la escasez de bienes intermedios, de capital y materias primas.

La colaboración del sector privado resultó difícil en el seno de una matriz económica politizada, de los problemas causados desde fuera, a que el mercado perdió toda su soberanía en la toma de decisiones a cambio de una creciente intervención del Estado, la nueva actitud de los trabajadores e incluso debido a que una burguesía sin ejército (¿sin poder?), como señaló un perspicaz líder civil, no es una burguesía. El comportamiento tradicional del sistema económico pasó de un modelo que se movía por el principio de acumulación a un sistema que buscaba la satisfacción de necesidades básicas de la población. Con un mercado movido por las ‘leyes’ de la justicia social, los empresarios especularon, descapitalizaron sus compañías y sacaron los recursos del país.

En el frente político, el FSLN se constituyó en partido y las organizaciones de masas formaron una amplia base de apoyo social con los Comités de Defensa Sandinista. Inmediatamente se formó un campo de fuerzas de oposición en el cual el Consejo Superior de Empresa Privada (COSEP) y los niveles superiores de la jerarquía de la Iglesia desempeñaron destacados papeles complementarios. En diciembre de 1981, Estados Unidos tomó la iniciativa de organizar un grupo mercenario, los “contras”, y dar comienzo a una cadena de acciones encubiertas (como el minado de puertos) e iniciar una de esas modalidades más siniestras, la ‘guerra de baja intensidad’ donde la victoria militar interesa menos que el desgaste material, moral y político de la población que apoya la revolución.

Las victorias del FSLN en lo político y social no fueron acompañadas en lo económico, lo cual señaló de forma elocuente los límites del nuevo sistema. Entre los esfuerzos de reconstrucción y defensa ocurrieron acontecimientos importantes: el conflictivo aumento de la cuestión étnica (con los grupos misquitos, sumos y ramas de la costa Atlántica que se sumaron a la contrarrevolución), donde los errores cometidos al principio dieron luego paso a una solución original y

atrevida: la autonomía regional. El pluralismo político —siete partidos menores— se vio puesto a prueba en las primeras elecciones libres (XI/84), que ganó el FSLN y Daniel Ortega con el 67% de votos. Supervisores internacionales dieron fe de la honestidad, libertad y competitividad del sufragio.

Antes de las elecciones, ya era evidente que la oposición carecía de una opción política que tuviera sentido en lo que se refería al proyecto revolucionario. El candidato de la oposición leal, el Dr. Arturo Cruz ex miembro de la Junta de Gobierno se retiró 48 horas antes. La administración Reagan prestó cuantiosa ayuda —de origen público y privado— a esa fuerza militar contrarrevolucionaria bien organizada y financiada pero que no poseía la capacidad de gobernar. No obstante, los previsibles efectos de la “guerra de baja intensidad” fueron negativos. Los sandinistas obtuvieron victorias militares especialmente en 1983-1987, pero el agotamiento de la economía a causa de la movilización de recursos, la destrucción gradual de cooperativas, puentes, escuelas, las numerosas muertes de civiles, etc., crearon una situación difícilísima para la población y para el gobierno. El esfuerzo por ganar militarmente se tradujo en una derrota política.

Esta situación ilustra la vulnerabilidad económica de una sociedad atada por mil cuerdas a la economía de Estados Unidos, fragilidad que aumenta con el atraso social. Esta serie de fenómenos políticos y económicos constituyen ejemplos, por si hubiera dudas, de las enormes dificultades que debe afrontar un país pequeño para obtener la independencia nacional y superar el subdesarrollo. La guerra impuesta a Nicaragua no hizo más que aumentar la dificultad de la tarea y llevó aparejados pesados sacrificios para la población pobre. La reforma agraria y otras medidas que se tomaron en el campo contribuyeron a alterar la vieja estructura social y a aliviar parcialmente las dificultades de producción, pero la crisis económica que afectaba al resto de los países de la región, pero a la sociedad nicaragüense en ma-

yor medida, obligó a los comandantes, a golpes de realismo, a buscar la paz, en un clima termidoriano. Negociar con la “contra” mercenaria, por un lado y ofrecer elecciones a la oposición política, por el otro.

Unas breves referencias a los mecanismos de la paz son oportunos. Las circunstancias y particularidades de las negociaciones de paz fueron una derivación significativa del conflicto armado y, a su vez, ayudan a explicar los regímenes democráticos resultantes. Fue una paz negociada y el resultado, democracias pactadas. Algunos argumentan que las transiciones a elecciones civiles se realizan en el contexto de la guerra y en la posguerra, se consolidan. Lo cierto es que la guerra conforma las elecciones y estas los procesos de paz.

El antecedente bien conocido de los proyectos de paz, fue la iniciativa del Grupo de Contadora, (5/I/83), formado por México, Venezuela, Colombia y Panamá que se propuso impedir la regionalización del conflicto, favorecer el diálogo y crear condiciones para la paz, el desarrollo y la democracia. Su influencia fue decisiva al crear el ambiente que facilitó las cumbres presidenciales en la región; el Acta de Contadora, presentada en enero de 1985 solo fue firmada por Nicaragua y fue la base del decisivo “Acuerdo de Esquipulas II” (7/VIII/87). Este documento constituyó la base de todos los mecanismos de negociación que se pusieron en movimiento en la región desde finales de los ochenta.

El hundimiento del socialismo real, por estas mismas fechas, el fin del ‘imperio del mal’ hizo que la política exterior norteamericana empezara significativamente a variar de contenido, que se desinteresara por la contención del comunismo y buscara ordenar democráticamente su traspatio. El más que simbólico acercamiento soviético norteamericano se hizo cuan-

do la amistad entre Reagan y Jrushev²⁰ fue publicitada. Hacia mediados de los ochenta la dirigencia cubana abandonó en silencio el apoyo activo a sus consocios centroamericanos, convencida de que una victoria militar era imposible.²¹

En el deseo local por alcanzar la paz pesaron los agravios mortales de la guerra, los efectos directos y los que acompañaron la muerte de más de 300,000 personas, 2 millones de refugiados/desplazados y la destrucción de importante infraestructura básica. Y una doble certeza: que la guerra no podía tener vencedores pues los vencidos al final fueron (casi) todos; y entre los grupos burgueses, que los costos de la democracia eran menores que el precio de la guerra. En los tres países fue favorable la intervención de la alta jerarquía de la Iglesia católica como reserva moral para la conciliación nacional. Lo alcanzado en la mesa de negociaciones no tiene nada en común con los principios políticos que, años atrás, acompañaron a los levantamientos insurgentes. Está probado que en el transcurso de la guerra, todo cambia, incluyendo los ideales. Se tranzó la guerra, se olvidaron los programas, se negoció la democracia liberal. Los vivos quedaron con la memoria herida, que vale para no olvidar a los muertos.

El papel desempeñado por Naciones Unidas y más precisamente por su secretario general²² debe destacarse

²⁰ El 8 de enero de 1991, el secretario de Estado James Baker y el canciller soviético Eduard Shevardnadze hicieron una declaración conjunta respaldando la solución negociada del conflicto salvadoreño, Prensa Internacional.

²¹ Estas afirmaciones requieren un apoyo documental; se aclara que son el resultado de entrevistas con algunos actores clave en aquellos momentos. El lector queda en libertad de aceptar o poner en duda tales asertos. Se nos ha dicho, además, que La Habana querría en Centroamérica gobiernos democráticos, pero anti norteamericanos en línea con lo que ha sido en estos años su política en América Latina.

²² Lo nuevo del papel de la ONU reside en que no fue solo una instancia intermediaria sino negociadora, con iniciativas propias y con capacidad de verificación y control.

por su iniciativa y originalidad. En El Salvador primero y luego en Guatemala, las partes del conflicto invitaron a las NU a ejercer una mediación activa y comprensiva en aspectos diversos y luego con actos de verificación,²³ que resultaron decisivos por la fuerza moral y el prestigio de la organización frente a actores díscolos. Se explica su éxito en Centroamérica al aplicar el “axioma de que no deberían separarse los esfuerzos del *peace-making*, del *peace-keeping* y el *peace-building*”.

En Nicaragua el éxito pacificador fue menor pues sólo se intentó una misión de carácter militar, en El Salvador y Guatemala se produjo una integración de los tres enfoques señalados y los resultados fueron sobresalientes al favorecer la implantación institucional y estimular recursos políticos diversos, nacionales e internacionales, favorables a la vida democrática. Sin la presencia y verificación de ONUSAL O MINUGUA hubiera sido más difícil y prolongado el proceso de paz en El Salvador y Guatemala y honrar los acuerdos por parte de los militares y los gobiernos conservadores que los firmaron. La naturaleza de la verificación y el control realizados constituyen una nueva forma de intervención positiva en países soberanos.

A estas alturas, la crisis centroamericana ya poseía una importante dimensión internacional en la que intervenían nuevos actores a medida que la hegemonía norteamericana en la región empezaba a manifestar algunas señales de decadencia. Significativamente, se formaron grupos de “países amigos” a las iniciativas de paz y al Acta de Contadora. Aunque la paz del conjunto de la región nunca corrió verdadero peligro,

²³ *Guatemala y Mozambique ante el reto de la paz. Un análisis comparativo de los procesos de mediación* (Sánchez, 2001), contiene una parte teórica importante para la comprensión de estos temas. Y un análisis de las experiencias decisivas de la mediación aparecen en *Paz, ilusión y cambio en Guatemala, el proceso de paz, sus actores, logros y límites* (Pásara, 2003).

los conflictos de Nicaragua y El Salvador sí representaron una grave amenaza para la estabilidad de los países vecinos, particularmente Honduras.

La toma de posesión de un nuevo presidente en Washington en enero de 1989 aumentó las esperanzas de que los Estados Unidos siguieran una política más moderada en la región. Es evidente su influencia sobre todo en los ejércitos, para finalizar las guerras o conflictos locales, que extraviaron sus objetivos frente al fin de la Guerra Fría. No obstante, la solución de la crisis sería “la construcción de la paz”, de la democracia y la reconciliación nacional que pasó a depender sobre todo de las iniciativas políticas de los propios centroamericanos.

CAPÍTULO 7

EL HURACÁN DE LA CRISIS: ¿UNA DÉCADA O VEINTE AÑOS PERDIDOS?

En los momentos finales del decenio de 1970 era evidente que la sociedad y la economía centroamericana estaban distantes de lo que habían sido inmediatamente después de la Segunda Guerra. Entre 1950 y 1980 el PIB subió de 1.950 millones de dólares a 7.520 millones (precios de 1970) y la población pasó de 8 millones a 21 millones de habitantes. Las exportaciones pasaron de 1.1 a 4.7 millones de dólares (precios corrientes) entre 1970-80. La estratificación social se diversificó en varios sentidos y algunos analistas creen que estaba más segmentada mientras que otros dicen que era más pluralista. La población urbana saltó del 15 al 45% del total durante este período y se “rejuveneció” en el sentido de que el grupo de edad entre los 15 y los 24 años aumentó más en las ciudades.

La actividad manufacturera también creció del 14,6 al 24,1% del PIB, y, en general, el aparato productivo fue semimodernizado. La integración nacional se logró por medio de redes de carreteras, servicios de electricidad y teléfono, y en 1980 la región tenía un nivel físico de

comunicaciones muy superior a las que existían incluso diez años antes como resultado de grandes inversiones en infraestructuras. El comercio interregional alcanzó 1.100 millones de dólares en 1980.

No se registraron avances parecidos en la provisión de servicios de educación, trabajo, sanidad y vivienda; incluso los cambios importantes que sí tuvieron lugar adolecían de limitaciones sociales debido a las políticas limitativas del gasto social aplicadas por la ubicua presencia de la mentalidad oligárquica, esclerotizada aun más por el conflicto. La sensibilidad social de la élite dominante, su sentido de responsabilidad histórica ha sido comparado —diferencias establecidas— ca la que tuvo la aristocracia rusa cuando la tormenta bolchevique estaba a punto de barrer el viejo orden señorial.

Sin apelar a la fatalidad del destino, sufrimos una coincidencia de resultados trágicos. La crisis económica más severa desde 1930 empezó cuando la crisis política se transformó en guerra civil, el peor desorden civil nunca experimentado en la región. La crisis económica estancó el sistema productivo, la violencia política sumó causas y efectos. Aquí no hubo una década perdida sino una extensa generación sacrificada, muy especialmente en Nicaragua y Guatemala por la virulencia en sectores sociales del conflicto. El hombre y la naturaleza se han confabulado contra ellos mismos para hacer de esta región una zona que no logra salir de su atraso. Los desastres naturales más importantes en los últimos años son el terremoto de 1972 en Managua, el huracán Fifi en 1974 en Honduras, el terremoto de 1976 en Guatemala, la erupción del volcán Irazú en 1963 en Costa Rica, el terremoto de 1986 en El Salvador, el huracán Juana de 1988 en Nicaragua, el huracán Mitch en 1998 en Honduras, Nicaragua y Guatemala, el terremoto de 2001

en El Salvador. Son diez catástrofes a las que siguen intensos períodos laboriosos de reconstrucción, que vuelven a perderse una y otra vez. Es el mito de Sísifo vuelto realidad entre nosotros.

En los años setenta los problemas económicos habían empezado a intensificarse a consecuencia de la subida del precio del petróleo en 1973, el inicio del desorden en el mercado financiero internacional en 1974, las oscilaciones de los precios de los productos de exportación centroamericanos. La tasa media de crecimiento real era todavía del 5,6% anual, pero la vulnerabilidad externa aumentaba sin parar (del 16,2 al 27,3% del coeficiente de importaciones). A partir de 1981 las tasas de crecimiento negativas se generalizaron en toda la región.

La industrialización substitutiva de importaciones había producido una dependencia creciente de la importación de materias primas, componentes intermedios y bienes de capital. Cuando la crisis económica se manifestó por medio de la reducción de empréstitos, la disminución de las inversiones y la caída de los precios de las exportaciones agrícolas, el sector industrial se vio afectado directamente y provocó una crisis en el comercio interregional. No obstante, el proyecto de integración económica había sido cautamente positivo al estimular la producción industrial, modificar las estructuras económicas, fomentar el empleo, alterar las pautas de producción y consumo y, sobre todo, introducir nuevos enlaces económicos, políticos y culturales entre los centroamericanos. Algunos se hicieron evidentes más adelante en las declaraciones presidenciales.

Cuadro 19
Producto interno bruto
–Millones de dólares de 1980–

País/Años	1970	1975	1980	1984	1985	1986	1987	1988	1989
Guatemala	4492	5893	7801	7404	7363	7383	7648	7938	8256
El Salvador	2582	3354	3497	3107	3162	3177	3262	3311	3278
Honduras	1467	1769	2497	2532	2571	2701	2810	2920	2993
Nicaragua	1999	2561	2070	2227	2136	2114	2100	1932	1874
Costa Rica	2079	2761	3545	3553	3579	3769	3969	4081	4285

Fuente: CEPAL, *Istmo Centroamericano, Medio Siglo de Estadísticas Macroeconómicas, 1950-2000*, UN, 2001, Cuadros diversos.

Antes de que fuera evidente el alcance maligno de la crisis económica, posterior a 1979, la situación era excepcionalmente mala para la mayor parte de la población. En las postrimerías del decenio de 1970, el 20% de los grupos de renta más elevada ganaba más del 50% de la riqueza, con grandes variaciones entre países. La ruptura social se hizo más amplia y el número de centroamericanos que vivían en situaciones de extrema pobreza iba en aumento.²⁴

Después de 30 años de crecimiento ininterrumpido, aunque a veces irregular, de la renta per cápita, se produjo un derrumbe cuya magnitud social era incalculable. A finales de 1985 la renta per cápita en Costa Rica y Guatemala era la misma que en 1972; en Honduras había descendido hasta los niveles de 1970; y en El Salvador y Nicaragua, hasta los de 1960 y 1965, respectivamente. La crisis la desencadenaron factores externos, pero los efectos de éstos se vieron multiplicados por el atraso de las estructuras sociales existentes y, sobre todo, por la violencia política que producía una honda inestabilidad.

²⁴ M. E. Gallardo y R. López, *Centroamérica: la crisis en cifras*, San José, 1986, cuadro 1.8, p. 1.

El decenio de 1970 creó problemas económicos, en particular las primeras alzas importantes de los precios del petróleo, aunque también hay que señalar la inconstancia del precio del café y de otras exportaciones centroamericanas. Por consiguiente, se dio mucha importancia a la utilización de capital extranjero, gran parte en la forma de empréstitos que buscaron evitar los déficit fiscales y permitir a los gobiernos no sólo compensar la falta de inversiones locales, sino también responder a las catástrofes naturales que golpearon la región (varias sequías, terremotos, huracanes ya mencionados).

Cuando se produjo la segunda gran “sacudida del petróleo” en 1979, Centroamérica ya acusaba los síntomas de lo que fue su prolongada enfermedad, los efectos de la recesión internacional en la caída de su tasa de crecimiento. Las compras de petróleo, que habían representado el 2,7% de las importaciones en 1970, subieron hasta el 21,1% en 1982, lo cual aceleró la inflación y provocó un verdadero desastre en la cuenta comercial. La capacidad de atender los pagos de una deuda que ascendió de 895 millones de dólares en 1970 a 8.456 millones en 1980 y 18.481 millones en 1987²⁵ se vio reducida radicalmente cuando las exportaciones encontraron grandes problemas, los tipos de interés subieron y la balanza comercial empeoró. Las perspectivas de desarrollo tropezaron con graves obstáculos en todos los frentes.²⁶

²⁵ Salvo indicación en contrario, los datos vienen de *Centroamérica en cifras*, San José, diversos años.

²⁶ Banco Interamericano de Desarrollo, *Progreso económico y social en América Latina*, Washington, 1980-1987.

Cuadro 20
América Central: distribución de la renta y niveles de renta en 1980 (en dólares de 1970)

	Estratos	20% más pobre	30% por debajo de la media	30% por encima de la media	20% más rico
Costa Rica	Porcentaje	4,0	17,0	30,0	49,0
	Renta media	176,7	500,8	883,0	1.165,2
El Salvador	Porcentaje	2,0	10,0	22,0	66,0
	Renta media	46,5	155,1	341,2	1.535,5
Guatemala	Porcentaje	5,3	14,5	26,1	54,1
	Renta Media	111,0	202,7	364,3	1.133,6
Honduras	Porcentaje	4,3	12,7	23,7	59,3
	Renta Media	80,7	140,0	254,6	796,3
Nicaragua	Porcentaje	3,0	13,0	26,0	58,0
	Renta Media	61,9	178,2	350,2	1.199,8

Fuente: CEPAL, basado en cifras oficiales de los países.

La recesión económica regional del decenio de 1980 golpeó con mayor gravedad a Nicaragua y menos a Costa Rica, que fue el único país que registró algún crecimiento entre 1985-89. Medidas de ajuste estructural y estabilización creadas y, en realidad, impuestas por el FMI empezaron a aplicarse en Guatemala en 1981 y pronto en todos los demás países con diversos grados de éxito. Los objetivos de reducir la inflación, controlar el déficit fiscal y mejorar la balanza de pagos ni siquiera se cumplieron a costa de sufrir estancamiento, que estuvo garantizado por una caída de las importaciones cifrada en más del 50% y fuertes reducciones del gasto público.

La inquietud por los efectos políticos que esta grave situación estaba creando, despertó en Estados Unidos una iniciativa que tuvo inciertos resultados: la comisión Kissinger formada por miembros de los dos partidos principales y que rindió un sesudo informe en 1984. Se reconoció la gravedad de los problemas sociales y la forma de enfrentarlos. En ese año se lanzó la llamada «Iniciativa de la Cuenca del Caribe» del presidente Reagan. Sin embargo, las concesiones arancelarias que se hicieron al amparo de dicha iniciativa tuvieron poco efecto en la crisis económica general de la región.

Como se ha dicho, hay un enorme contraste entre el período anterior a los ochenta y lo profundamente negativo de este decenio resultado de la crisis económica y política. En un ejercicio comparativo, los efectos políticos se observan en la fuga de capitales con elevados déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos, incrementos en la deuda externa y retrasos en el pago de intereses, la desinversión tradicional agrícola, la renuente actitud política empresarial, más grave en Nicaragua y menos en Honduras y Costa Rica. La región tuvo una caída general de la actividad productiva (más en la primera mitad), inestabilidad macroeconómica e incertidumbre y problemas en ahorro y la inversión.

También hubo migraciones internas e internacionales y graves daños por la destrucción de infraestructura física. La pérdida de vidas humanas fue cuantiosa, como lo fueron los mutilados de guerra. La fuga del capital humano rebasó el ámbito regional y abarcó México y los Estados Unidos. Se estima que en la segunda mitad de los años ochenta ya se habían desplazado cerca de 2 millones de personas de su lugar de residencia, principalmente en el área rural y casi un millón al exterior.

La política económica se concentró en el ajuste estructural y la estabilización macroeconómica, con el fin de controlar los graves desequilibrios internos y externos, expresados en déficit fiscales elevados, desajustes de balanza de pagos, pérdidas de reservas internacionales, alta inflación, y desarreglos monetarios y cambiarios. Cada uno de los países tuvo dificultades y desajustes en momentos y con grados de intensidad y extensión diferentes. En Guatemala, El Salvador y Nicaragua los esfuerzos de estabilización macroeconómica estuvieron fuertemente condicionados por los costos económicos de los conflictos. Los gastos de la guerra exigieron aumentos de los presupuestos públicos en el área militar y en la reparación de daños.

Aunque en el transcurso de los años ochenta la mayoría de países adoptó medidas de cambio estructural, sólo a inicios de los años noventa se puede decir que la región transita por el proceso de construir una nueva estrategia de desarrollo, la cual presentó muchos rasgos en común que se analizan en el capítulo 9.

CAPÍTULO 8

LAS DEMOCRACIAS DE BAJA INTENSIDAD

Un rasgo particular de toda experiencia guerrillera, sobre todo si es prolongada, es que ella está sujeta a pruebas que producen un cambio ideológico documentable; involuntariamente lo sufre todo proceso de lucha armada, de violencia social. Empiezan de una manera y terminan de otra. Los principios del primer momento de una revolución política están claramente establecidos, tienen métodos de lucha propios, un liderazgo joven, un programa maximalista. El tiempo cronológico tiene efectos destructivos en todos los aspectos. Lo programático se transforma de ser un objetivo ideal en un medio para subsistir, con un liderazgo que envejece. Lo que era un fin se vuelve un medio.

El uso de la fuerza armada tiene su propia inercia que padece cambios en el significado castizo de moverse según los cambios del entorno político. Se pierde la naturaleza revolucionaria, que en el caso centroamericano fue un efecto del derrumbe del socialismo, que dejó el proyecto transformador sin referentes de apoyo ideológico y emocional. En esta nueva realidad, dificultosamente asumida, las negociaciones con el enemigo para alcanzar el fin del conflicto son asumidas inevitablemente como una transacción. No es que se negocia

la revolución pues esta ya no es posible, se transa la oportunidad de mantener la oposición pero ya en el campo del Estado al que se combatió.

Cuadro 21
Habitantes por médico
–Número de habitantes–

País	1980	1993
Costa Rica	1473	1265
El Salvador	2899	2487
Guatemala	1748	2056
Honduras	2945	1403
Nicaragua	2154	1450

Fuente: FLACSO: Centroamérica en cifras, San José, 2002.

Las negociaciones de paz, aceptadas de mal grado, ya no pueden conducir a la “victoria”, siguiendo la lógica elemental de que guerrilla que negocia pierde su razón de ser, paralela a la lógica castrense que frente a la insurgencia solo cabe la solución militar, la derrota del enemigo. Por eso el sabor desabrido del diálogo inicial. Asumido el escenario internacional de distensión por el fin de la Guerra Fría y la amistad de los antiguos enemigos, un porcentaje de razones se terminan: otras son de naturaleza local, ya que en Nicaragua hubo paz por el derrumbe socioeconómico del sandinismo, en El Salvador, por el empate estratégico asumido así por ambas partes, en Guatemala por inanición de los rijosos en conflicto y el cansancio interno. Esas no son sino las causas necesarias y empobrecería el análisis quedarse sólo con ella. La causa suficiente para la paz la pusieron los gobiernos civiles, electos democráticamente.

El poder militar no lo habría hecho nunca, por lo que se argumenta aquí que por ello, en Centroamérica, la democracia

se adelanta a la paz; primero se sientan las bases del poder civil, capaz de negociar el fin del conflicto, haciendo algo distinto de lo que ha ocurrido en múltiples experiencias, en las que la democracia es un resultado de la paz.

La construcción de la democracia política supone dos momentos en la transición. Uno, que ocurre cuando hay guerras y elecciones al mismo tiempo y que en otros trabajos hemos calificado como un momento *pre o protodemocrático* porque ya no es una dictadura militar sino un gobierno civil el que organiza la sociedad pero aún cohibido por el poder del ejército. Hay liberalización y ejercicio de los derechos políticos, pero violación a los derechos humanos y una inercia represiva imparable. Algunos le llaman una ‘iliberale democracy’. Luego viene la ‘segunda’ transición, que empieza cuando llega la paz y se busca la estabilidad institucional. Los tiempos y la naturaleza de este momentum varían mucho en función de dos antecedentes: ¿por qué y cómo se planteó el conflicto y cómo se alcanzó la paz?

El caso más complejo es Nicaragua porque ahí se acumulan dos ‘herencias’ que se refuerzan malignamente. Por un lado su tradicional inestabilidad resultado del fraccionamiento de sus élites dirigentes, muy enflaquecidas por su tendencia a emigrar, y por el otro, los graves problemas sociales que Somoza dejó y que los últimos años del sandinismo agravaron por la suma de la crisis económica mundial, la crisis política nacional y los errores de los comandantes. La democracia se construye en condiciones de suma precariedad por esa herencia.

Al igual que los otros de la región, es este un país de desigualdades abismales en donde la naturaleza peculiar del Estado somocista hizo de la insurrección un hecho inevitable: se peleó contra el ‘sultanismo’ de un tipo de poder no oligárquico pero con fuertes raíces externas. El escenario lo califican su condición canalera, ocupada 25

años por fuerzas extranjeras, con una oligarquía que nunca se pudo unificar en torno al proceso de formación del Estado Nacional, que no tuvo una clase dominante capaz de tener un proyecto a la manera del resto de la región, una burguesía agraria en el ejercicio de un poder propio aunque dependiente. Aquí hubo una subordinación de sabor colonial frente a los Estados Unidos. Sus instituciones básicas son resultado de iniciativas externas: el ejército, el banco central, sus cuadros electorales, los líderes políticos, intelectuales, el idioma de casa. La mejor herencia de la ocupación fue el béisbol.

Es en el interior de ese régimen político que la revolución encontró sus razones y sus límites. La sociedad vivió la experiencia trágica de dos momentos de guerra civil, primero en la lucha contra el somozato, sangrienta expresión de una insurrección popular, entre 1977/79 y luego una guerra de intervención extranjera, entre 1983/89. La originalidad aquí es que la democracia se filtra a través de la revolución. El régimen sandinista fue internamente un poder fuerte por el apoyo de masas y legítimo por su victoria militar, pero vulnerable por su historia de nación ocupada durante un cuarto de siglo continuada por cuarenta años de un poder cuasicolonial.

Cuadro 22
Alumnos matriculados en el
sistema universitario
—Miles de personas—

País	1980	1996
Costa Rica ^{1/}	56	57
El Salvador	17	112
Guatemala	51	129
Honduras	27	n.d.
Nicaragua	35	50

^{1/} Se refiere a educación superior, universitaria y parauniversitaria pública y privada. Fuente: CEPAL. Anuario Estadístico para América Latina y el Caribe 2001. Santiago de Chile, 2001.

Las fuerzas para triunfar son de naturaleza distinta de las fuerzas sociales para gobernar, sobre todo aplicando un programa económico nacional social-popular en un escenario internacional ensombrecido por la Guerra Fría y la enemistad norteamericana. La historia de este país pone a prueba el cambio, la revolución como acto soberano; en su desarrollo autónomo surgen los espacios donde esta cumple sus metas y las restricciones donde estas se estrellan. Por supuesto, que debe aclararse que los límites a la revolución no los determinó la política norteamericana solamente sino la historia misma del país.

La paz en Nicaragua no fue resultado de ganar la guerra sino de la estrategia sandinista de salvar la revolución. La llamada Resistencia Nacional, mercenaria, fue derrotada por el Ejército Popular Sandinista. Pero lo que el FSLN olvidó es que “las guerras de baja intensidad” no buscan la victoria militar sino la desmoralización y el desgaste del enemigo. El precio desmesurado de ganar la guerra fue político y sumir a la economía (1988) en la más completa bancarrota, con una debilidad política extrema. Así se fue tejiendo la paz.

La verdad de las negociaciones fueron las cumbres presidenciales: en Costa del Sol (13/14-II-1989) el presidente Ortega ofreció adelantar las elecciones diez meses, para febrero de 1990,²⁷ que la oposición política aceptó.²⁸ El conflicto se trasladó al plano de la política, donde ya estaban perdiendo. Les ocurrió lo contrario de la URNG, que era militarmente débil pero con un perfil político que les permitió negociar fuertemente.

²⁷ El gesto fue más que simbólico. Según la Constitución, las elecciones generales debían celebrarse en noviembre de 1990 y la investidura de las nuevas autoridades, en enero de 1991.

²⁸ En la cumbre de Tela (1989) se pidió la creación de la Comisión Internacional de Apoyo y Verificación (CIAV) de la OEA y más tarde Grupo de Observación de las NU para Centro América (ONUCA) que ayudaron a la pacificación del país.

La paz se alcanzó a saltos. Negociando en Sapoá (III/1988), primer paso, el FSLN ofreció convocar a elecciones a cambio del cese de fuego y la desmovilización de la Resistencia Nacional. Perdidas las elecciones en 1990 llegó el segundo paso, una negociación doble, con la UNO y con la Resistencia Nacional. Las Naciones Unidas, que ayudaron en los otros países en conflicto, fueron menos efectivas en Nicaragua donde el problema no fue parar la guerra mercenaria sino el problema político de alcanzar, *ipsis literis*, la sustitución de un sistema político Estado-céntrico en extremo, revolucionario en su retórica y en algunas de sus prácticas sociales, por otro, liberal, con mercado libre y con apoyo financiero externo.

La victoria electoral de la Unión Nacional Opositora (UNO), obligó a una transición compleja a través del llamado Protocolo de Procedimientos para la Transición del Poder Ejecutivo (27/III/90). Como la RN no formaba parte de la oposición política debió firmar el Acuerdo de Toncontín para el Desarme y la Desmovilización que abrió las posibilidades para terminar con la fuerza mercenaria. La RN exigió la colaboración del CIAV y ONUCA, que algo ayudaron para lograr la efectiva desmovilización. De hecho, el cese de fuego y el fin de las hostilidades solo se alcanzaron hacia 1994. Así, la paz llegó a saltos y con los sandinistas ya en la oposición.

Bien vistas las cosas, esta es una larga transición que empezó en 1985/87, ya como un Termidor que se prolongó hasta que la oposición llega al gobierno, el régimen de la Chamorro. El dato mayúsculo de la contribución sandinista a la democracia fue la fuerza que inyectó a la sociedad civil: masas muy pobres pero fuertes por su organización, participando más que activamente con una presencia que ninguna otra transición experimentó.

El régimen de la Sra. Chamorro no tuvo programa conocido capaz de valorarse. Sus políticas económicas y sociales fueron muy conservadoras; el neoliberalismo lo introdujeron los sandinistas a disgusto y lo continuó la Señora sin éxito, con nacionalizaciones, cortes en el gasto, presupuesto balanceado, aranceles bajos, etc. La desmovilización militar agravó la desocupación. Pese a todo fue un momento de reconciliación y consolidación democrática, a contrapelo de la presión norteamericana y de la derecha que querían remover odios para el castigo a los sandinistas. En 1993, la posición del país en el Índice Mundial de Desarrollo Humano cayó del lugar 85 al 117.

Cuadro 23
Año de obtención del voto femenino

País	Año
Costa Rica	1949
El Salvador	1950
Guatemala	1946
Honduras	1955
Nicaragua	1955

Fuente: CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). Participación, liderazgo y equidad de género en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile, 1999.

La herencia sandinista fue siendo asumida gradualmente. El general Humberto Ortega mantuvo la jefatura hasta 1994, pero el ejército bajó de 80 mil a 15 mil hombres y luego retomó su nombre apropiado, Ejército Nacional. La Ley de la Estabilidad en la propiedad 209 (1996) intentó poner orden en el tema de la distribución desordenada de bienes que los sandinistas repartieron. El tema de la propiedad y su legalidad fue objeto de enconos y desencuentros, pues no solo comprendía la tierra entregada como parte de la reforma agraria, sino los recursos materiales y financieros que “la piñata” distribuyó, de prisa y con visibles rasgos de corrupción.

La ofensiva del neosomocismo y de EEUU hacia 1995 fue descarnada en su celo por borrar las herencias sandinistas; por ejemplo, financiaron los proyectos de todas las alcaldías de la derecha especialmente al Alcalde de Managua, Arnoldo Alemán, a quien convirtieron en el mejor alcalde de los últimos años (1990). Unificaron los sectores afines al liberalismo y el viejo partido Liberal somocista fue recreado y con el nombre de Alianza Liberal ganó las elecciones de 1996. El clima político reprodujo las polarizaciones de la época de la guerra, se festinaron medidas electorales a última hora y personal no calificado administró el proceso. Lleno de anomalías, los resultados finales se dieron un mes después con acusaciones de fraude. No lo hubo, pero sí anomalías que lo enturbian. Arnoldo Alemán le ganó a Ortega por 51% a 37.7% (42 y 36 diputados) y tomó posesión en enero 1997.

Es esta una victoria diferente a la de la Sra. Chamorro, que cumplió el papel de puente gradual hacia un régimen de extrema derecha. Se debe consignar que Alemán salió de las filas del somocismo, a cuyo equipo perteneció y que fue un activo contrarrevolucionario. Inteligente y audaz, con métodos de caudillo, gobernó como un ejemplo completo de un neopopulista de derecha, corrupto en línea directa de su origen somocista.

El sandinismo vive una existencia circular, se divide y conserva su hechizo de masas; se desacreditó con “la piñata” y luego se debilitó con la separación del Movimiento Renovador Sandinista, que en 1995 se llevó valiosos intelectuales y cuadros de clase media. El medio político fue favorable al manejo demagógico de Alemán, por el desastre que dejaron los sandinistas con la piñata, y la oposición de la Iglesia. La intransigencia liberal los llevó a denunciar, con ánimo politiquero, la legitimidad del Código Militar de 1994, las reformas a la Constitución de 1995, y la de Ordenamiento

de la Propiedad, que provocó un caos legislativo cargando de odios el escenario político. En XI/97 finalmente la Asamblea Nacional aprobó la Ley de la Propiedad Reformada Urbana y Rural.

El ex presidente Alemán ha sido considerado como el hombre público más eficaz en la corrupción de la historia postsomocista. Alemán fue juzgado y condenado por el saqueo a la hacienda pública por más de 100 millones de dólares. La profunda inquina ideológica y personal, el furor polarizado no impidió que Alemán/Ortega hicieran un pacto antidemocrático en 1999 que politizó los nombramientos de instancias que deben garantizar la imparcialidad, como el procurador de los DH, la Contraloría General; hicieron cambios en la ley electoral para proteger el bipartidismo, modificaron la Constitución para facilitar la reelección, etc. En 2001 ganó la presidencia el liberal Enrique Bolaños, apoyado por, y luego enemigo de Alemán, gobernando en medio de un caos permanente que paralizó más de dos años al gobierno. El huracán Mitch en X/98 causó terribles daños, 24 mil muertos y dejó un quinto de la población sin casa, los daños fueron valorados en más de 1.5 billones de dólares.

Un cisco interno en el PLC hizo que este partido por iniciativa de Bolaños y en alianza con el FSLN llevaran a la cárcel, por desvergonzada corrupción, al ex presidente Alemán. La democracia en Nicaragua es aun inestable por la falencia de sus instituciones, las fracturas de sus élites dominantes, la desconfianza y la polarización ideológica y política, la fuerza por momentos desbocada de las organizaciones sociales. La ingobernabilidad traza límites en que de hecho hay libertinaje en el ejercicio de los derechos políticos pero ausencia efectiva de los derechos civiles y sociales.

Recordemos que en El Salvador, la evolución de la guerra civil fue paralela a las medidas por institucionalizar la

democracia electoral. Mientras la guerra planteaba la lógica de los hermanos/enemigos, la sociedad política se movía en una dirección democratizadora con base en la dialéctica de los hermanos/contendientes, forzando la implantación institucional que va definiendo también aquí una *situación predemocrática*. Bajo la tormenta de la guerra civil, los dos primeros presidentes, Duarte y Cristiani, no fueron dictadores y su elección no fue fraudulenta. Pero la guerra mantenía en pie muchas instituciones y prácticas autoritarias, entre otras, matanzas campesinas, estudiantiles, bombardeo a población civil, llegando al cenit sangriento con el asesinato de los jesuitas de la Universidad católica (1990).

Durante los años ochenta la democracia fue una experiencia política gris, confusa en sus componentes y turbia en la conducta de sus actores, que se mantuvo así por varios años, con elecciones competitivas y sin fraudes. El escenario *protodemocrático* se convirtió pausadamente en uno favorable al régimen democrático y los acuerdos de paz fueron el vehículo de la implantación institucional. Es importante recordarlos.

Tras casi cuatro años de negociaciones entre el FMLN y el Gobierno se firmó el Acuerdo de Chapultepec (16/I/1992) y terminó la cruenta guerra civil. El diálogo sólo empezó después de la elección de Alfredo Cristiani, candidato de ARENA, de derecha. En México (VIII/1989) ambas partes pidieron la intermediación de las Naciones Unidas para entablar el diálogo. Dos hechos forzaron al gobierno para negociar: la ofensiva del FMLN que tomó dos veces la ciudad de San Salvador y el asesinato de los jesuitas de la Universidad Centroamericana, que aisló al Ejército por esta acción criminal y limitó el apoyo de Estados Unidos.

Los primeros Acuerdos con objetivos precisos se lograron en Ginebra (4/IV/90) y en Caracas (21/V/90) y luego un mes

después el llamado Acuerdo de San José, donde se estableció el mecanismo de respeto irrestricto a los derechos humanos y se sugirió la creación de la Misión de Observadores de NU (ONUSAL), establecida formalmente el 26/VII/91. Paralizó el proceso negociador el desencuentro sobre la reforma Constitucional para incorporar las recomendaciones políticas y económicas. En el límite temporal para aprobarlas, el Congreso incluyó las reformas políticas y excluyó las económico-agrarias, tal como lo establece el Acuerdo de México (27/IV/91). Hubo otra demora, cuando el FMLN exigió reformas en el Ejército como condición para el cese del enfrentamiento y como garantías para su inserción en la sociedad.

La firma del acuerdo preparatorio en New York (31/XII/1991) fue resultado de una poderosa presión de EEUU y la URSS sobre el presidente Cristiani, enfrentado a la negativa del ejército a aceptar su reducción y la instalación de una Comisión de la Verdad. Resueltos tales desencuentros la paz se firmó en Chapultepec. Empieza un período en que la paz le da la mano a la democracia.

Ayuda a valorar la consolidación democrática, las reformas judicial, policial y militar y las políticas sociales. Los acuerdos de paz propusieron cambios sustantivos relativos a las funciones del ejército en la nueva época: la defensa de la soberanía; y la policía ocupada de la seguridad interior bajo el poder civil, junto con las labores de inteligencia; se acordó la reducción de la tropa en un 50%. Una Comisión Ad Hoc, civil, se ocupó de evaluar la conducta militar durante el conflicto, las violaciones a los derechos humanos, la competencia profesional y la disposición a ajustarse a la sociedad democrática. Más de 100 oficiales fueron removidos en medio de una grave crisis interna, que empezó casi como una revuelta y terminó casi como una derrota.

Los militares aceptaron la medida, los de más alta graduación mediante un generoso cheque en dólares. Todos,

en el fondo, celebrando una grosera impunidad. En general pueden valorarse los cambios como positivos, aun cuando los militares perdieron prerrogativas pero retienen mucho de su autonomía institucional (presupuesto, movimientos de tropa, ascensos).

El escenario político se modificó con la incorporación de la izquierda guerrillera al ejercicio democrático; el FMLN se convirtió en partido político en un breve y original esfuerzo de ajustes internos y legales. Como resultado del acomodo político una fracción militarista se separó y pasó directamente al campo de la derecha. Pero el proceso democratizador avanzó con la celebración de las elecciones más plurales jamás habidas: a las elecciones de 1994, en que ya participó la izquierda, se les llamó “las elecciones del siglo”, que ganó en segunda vuelta el partido de la derecha, ARENA que venía triunfando desde 1987. Armando Calderón Sol sacó 68.3% y el FMLN el 31.6% en la segunda vuelta; hubo una abstención del 51% y 46% en las dos oportunidades.

Justamente, un rasgo descalificador de la democracia en El Salvador es la abstención electoral, que ha ido en aumento: en 1982, hubo un 63.6% de votantes y en 1991, ya sólo el 45.8%. En ningún momento se ha alcanzado el 50% a pesar de la vibrante competencia que alimenta la polarización ideológica: se enfrentan en la liza democrática quienes hasta hace poco fueron enemigos mortales. Se argumenta que hay un débil apoyo popular más bien como efecto de cansancio del conflicto; el desinterés ciudadano en las instituciones o la apatía en lo político puede atribuirse también y en parte a la cuantía de la pobreza.

La legislación electoral fue modificada por Arena y el PDC restringiendo más el proceso en contra de los partidos menores (registro y asignación de puestos). Las elecciones de 1997 constituyeron una esperada victoria para el FMLN: 35%

con 27 diputados frente a 28 de Arena y alcaldes en 6 de 14 cabeceras y 53 de 262 municipios, incluyendo la importante de San Salvador. Las elecciones presidenciales de 1999 le dieron de nuevo la ganancia a Arena, con Francisco Flores con el 52% del total. En esta ocasión la participación volvió a ser baja, un 38% de votos. La última elección presidencial ocurrió en 2003 y fue extremadamente polarizada porque se presentó como candidato del FMLN, el comandante Shafik Handal, del sector más radical.

Estas fueron ganadas por cuarta vez por Arena, con Antonio Saca. Los dos últimos candidatos de la derecha, ganadores, son figuras que vienen de la clase media, que no han salido del núcleo empresarial poderoso, dirigente efectivo de la política nacional, por lo que ARENA ha podido presentarse como un partido político de raigambre popular. Este partido constituye hasta ahora la fórmula más exitosa de la participación/representación política de la burguesía centroamericana.

En síntesis, la democracia electoral salvadoreña gana y pierde estabilidad con sufragios limpios pero descalificados por la abstención electoral y extremas modalidades de polarización en la campaña por el voto y que remueven los aspectos más repugnantes de la guerra. El modelo económico dolarizado no alcanza a crecer como se esperaba, la pobreza se disimula por la dependencia de las millonarias remisiones de dólares de los emigrantes, pero las desigualdades aumentan. Las políticas sociales son prudentes y el malestar económico se mantiene. La violencia criminal es muy profunda con una tasa de homicidios parecida a la colombiana, del 50.36 por mil; las pandillas juveniles, ‘maras’, constituyen el problema más desafiante para la seguridad interna, cuyo desborde de ilegalidad afecta a todos. Los países de la región conservan así, en el tema de la criminalidad y la inseguridad, un largo parecido de familia.

En Guatemala todo es lento y confutatorio. El conflicto terminó por inanición; el cese de fuego se había alcanzado nueve meses antes del Acuerdo, pero las pláticas de paz tardaron nueve años y abarcaron cuatro gobiernos y tres comisiones negociadoras. El 11/IX/87 se creó la Comisión Nacional de Reconciliación encabezada por monseñor Rodolfo Quezada Toruño, que inició contactos con la URNG. En Oslo (29/III/90) se estableció el primer acuerdo básico para la búsqueda de la paz. A partir de allí se recorrió un largo camino hasta que el ejército (siempre tras una salida militar) y la guerrilla (que creyó en la victoria hasta 1995) se convencieron de lo inevitable de una salida política negociada. Un segundo momento empezó con el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos (México, 29/III/94) que buscó la protección y la verificación internacional de las Naciones Unidas, al crear una Misión correspondiente (MINUGUA).

Se aprobaron Acuerdos importantes como el de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática y sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, entre otros, que definen un futuro ideal para Guatemala. La voluntad del presidente Alvaro Arzú fue decisiva en el último año cuando se firmaron varios acuerdos importantes y el terminal Acuerdo de Paz Firme y Duradera (29/XII/1996). No se creó una Comisión de la Verdad sino un mandato general para establecer los hechos criminales cometidos, sin mencionar autores, la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Se limitó la rebaja solo en un 33% el tamaño del ejército. El acuerdo del 29 de diciembre es importante no sólo porque puso fin a un conflicto armado sino también propicia el desmantelamiento del Estado contrainsurgente.

De la primera elección democrática en 1986, que gana Vinicio Cerezo, se habló anteriormente al recordar que fue coetánea de una etapa álgida de la violencia. Una segunda

elección ocurre en 1990 y en la segunda vuelta gana el candidato minoritario Jorge Serrano Elías; la liberalización del régimen se amplifica, la participación social aumenta y los síntomas negativos del conflicto disminuyen. La condición minoritaria en el Congreso y las contradicciones electorales con la oposición crean una condición de *ingobernabilidad por arriba*, que Serrano intenta resolver mediante un gobierno con ‘más libertad, al margen de la constitución’ y sin el estorbo de las instituciones democráticas.

En una situación de hecho, violentando la legalidad produce un “autogolpe”(V/1993), que fracasa por la acción coincidente de empresarios, organizaciones sociales y el sector de inteligencia del ejército y con la complicidad/parálisis de los partidos. Los efectos del ‘serranazo’ fortalecieron en el mediano plazo la institucionalidad democrática, pues la solución a la crisis se hizo en el interior de un sólido consenso aunque no en la legalidad *sensu strictu*: cuando el Congreso Nacional eligió al procurador de los Derechos Humanos, Ramiro de León Carpio, como presidente provisional.

Los gobiernos civiles favorecieron la búsqueda de la paz. A diferencia con El Salvador, aquí se conformó la llamada Asamblea de la Sociedad Civil, que tuvo varias intervenciones en la redacción propositiva de algunos Acuerdos. Las numerosas organizaciones que formaron esa Asamblea, no todas fueron dependientes de la URNG. Ello y otras razones explican la soledad política de la guerrilla en el momento de su aparición electoral en 1997, como partido, en abierto contraste con el FMLN y el FSLN.

Alvaro Arzú, electo en la tercera elección democrática, XI/95, ya representó de manera directa a sectores de la élite tradicional y a algunos intereses empresariales, haciendo un gobierno de derecha, a tono con los del resto de Centroamérica. Carente de un programa de cambio olvidó que sus representantes firmaron acuerdos sustantivos que pudieron suplir la

ausencia de un programa de gobierno. Pero Arzú personifica una biografía contradictoria pues sin su enérgica decisión no se habrían alcanzado importantes Acuerdos de Paz, que pronto olvidó. Aplicó medidas de corte neoliberal, como las que redujeron las funciones del Estado, hizo tres nacionalizaciones, congeló el gasto social. Se desinteresó de la Consulta Popular para modificar la Constitución y volverla compatible con los Acuerdos.

El desarrollo democrático podría haber avanzado si Arzú hubiese mantenido el vigoroso ánimo de 1996, que ya no se vio en los años siguientes. Fue sucedido por Alfonso Portillo (XI/99/2003), candidato de un partido de derecha, el FRG, haciendo una campaña electoral con una retórica popular y antioligárquica. Llegó con la legitimidad de un fuerte apoyo electoral y su pasado de militante de izquierda. El país está necesitado de un poder que fortalezca las instituciones del Estado democrático en un doble sentido: legitimidad diaria con base en la eficacia, lo que se llama ‘un buen gobierno’ que ayuda a la confianza ciudadana y modernización del Estado, dotándolo de recursos financieros y humanos.

El presidente Portillo hizo todo lo contrario. No pudo ser el inicio de ese esperado cambio por la doble atadura personal de su elección: no tener partido propio y ser candidato del FRG, el partido de Ríos Montt. Contradictorio también, su asocio con militares y civiles vinculados al crimen y al narconegocio no le impidió rodearse de un importante grupo de intelectuales y cuadros políticos de reconocida militancia de izquierda, que actuaron a título personal y que nada pudieron hacer. Se los tragó el sistema. Portillo despertó esperanzas y las frustró, porque al final, no gobernó. Quizá ese sea su mayor pecado político, que se hizo capital con sus actos de corrupción.

Cuadro 24
Participación del sector agrícola en el PIB
-Porcentajes-

País/Años	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
GUATEMALA	23.00	22.80	22.40	22.00	21.70	21.40	21.30	21.00	20.70	20.40	20.20
EL SALVADOR	16.50	16.00	16.10	14.80	13.60	13.40	13.30	12.80	12.30	12.60	12.00
HONDURAS	20.50	21.30	20.80	19.30	19.90	20.60	20.60	20.70	19.60	18.20	18.70
NICARAGUA	30.80	30.00	30.40	31.10	33.20	33.30	34.00	34.90	34.70	34.70	36.00
COSTA RICA	12.70	13.30	12.60	12.40	12.10	12.50	12.60	12.20	12.20	11.80	11.60

Flaco, Centroamérica en cifras 1980-2005 San José, 2005, Cuadro 2.2.1.2.

La quinta elección general ocurrió en XI/03 donde ganó Oscar Berger, representante de un agregado heteróclito de empresarios, políticos, terratenientes, todos amigos pero sin programa ni rumbo; este gobierno conservador y claramente pro empresarial carga con culpas de incompetencia a prueba de oportunidades. Perdió el apoyo empresarial, se debilitó su fuerza legislativa, aplicó pocas políticas sociales y no pudo mejorar ni la lucha contra la criminalidad y el narcotráfico ni evitar la violencia contra las organizaciones sociales. Este es un nuevo tropiezo para la construcción democrática pues la debilidad de algunas instituciones básicas permanece. Y dos funciones básicas en la democracia no se realizan: ni las políticas sociales ni la seguridad ciudadana. Con Berger y su contradictorio grupo de apoyo, la incoherencia gubernamental da paso a una fatal conclusión, la debilidad del Estado y de la democracia por ausencia de una 'clase' con ideología y organicidad dirigente. Hacia fines de su gestión el gobierno Berger constituye, como respuesta, un fracaso ostensible del poder burgués.

El escenario de la sociedad guatemalteca está calificado en este período por la exacerbación del tema étnico. No es posible hacer un repaso de algo que tiene, al menos dos factores de signo contradictorio: por un lado, la matanza perpetrada por el Estado contra la población indígena, que por su magnitud y naturaleza tiene rasgos genocidas. No hay explicación que no sea el racismo explícito para entender por qué el ejército y los grupos paramilitares (civiles ladinos e indígenas) quemaron 600 aldeas, asesinaron cerca de 80,000 personas en el lapso de 18 meses, de las que el 90% eran civiles (con alto porcentaje de mujeres y niños), ultimados con crueldad racista. Y, por el otro, el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, que reconoce la condición multiétnica de la nación guatemalteca y traza, literalmente, un programa que basado en esa condición, reconoce derechos que permitan superar la situación histórica de ignominia, explotación y discriminación que padecen.

En los últimos veinte años se han dado importantes pasos en dirección de los derechos a la igualdad y a la diferencia de los pueblos mayas. Pero aún hay un largo camino por recorrer, difícil, complejo, lleno de trampas. Las estructuras de poder que alimentan la minusvalía indígena y el racismo deben ser removidas. Los regímenes democrático liberales hasta aquí, aún no son funcionales a las necesidades de una sociedad pluriétnica, donde las diferencias culturales exigen políticas democráticas creativas y más incluyentes. Hay que construir en Guatemala un Estado plural y democrático para una nación multiétnica.

Las crisis políticas que ya vimos alimentó explosiones de violencia guerrillera en los tres países vecinos, tuvo en Honduras un desenlace distinto, sin guerra pero con algunos de sus efectos. Y aunque Honduras comparte los rasgos negativos del atraso económico social y de las dictaduras militares de la región, no hubo guerra civil ni conflictos violentos. Es este resultado el que conviene explicar. Hay varios factores.

Uno, histórico estructural, aquí no se formó nunca una élite cafetalera terrateniente. El café no fue un producto de exportación importante, como lo fue el banano, producido por capital extranjero en la Costa Atlántica. La élite agraria fue ganadera y mantuvo con los campesinos relaciones sin graves conflictos, sin expropiaciones rurales. Había tierra para todos incluyendo numerosos campesinos ‘de frontera’ y no se requirió como con el café numerosa mano de obra forzada. Los conflictos por el control del Estado, peleas políticas intra élite, fueron frecuentes y sangrientos. *Fueron luchas políticas en estado puro*. A cambio, de forma original, las luchas sociales importantes fueron las de los trabajadores agrícolas con la UFCO. La más importante, en 1954, llamada ‘huelga bananera’ tuvo efectos positivos y negativos de largo plazo.

Cuadro 25
Valor agregado por el sector manufacturero
-Millones de dólares a precios constantes de 1995-

País/Años	1990	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
GUATEMALA	1485.70	1570.70	1616.20	1663.90	1717.80	1,750.40	1,797.90	1,863.10	1,910.40	1,949.20
EL SALVADOR	1540.40	1792.50	1765.10	1895.40	2025.30	2060.50	2225.20	2372.70	2461.10	2570.70
HONDURAS	573.20	623.40	661.00	654.60	683.10	722.70	766.00	792.20	812.70	852.80
NICARAGUA	293.20	296.00	296.10	298.40	306.90	314.20	326.20	333.20	345.60	352.70
COSTA RICA	1,792.60	2,045.10	2,178.40	2,244.50	2,337.20	2,349.60	2,529.50	2,817.30	3,507.30	3,404.20

FLACSO, *op. cit.* Cuadro 2.3.4. p. 147.

Un segundo factor, cultural y político, fue la división de la élite económica entre ganaderos y cafetaleros del interior y comerciantes e industriales en la costa norte, formada por inmigrantes árabes, interesados en la capacidad de compra del proletariado bananero. La división política, desde el S. XIX creó un bipartidismo multiclasista, liberales y nacionales (conservadores), rivales por el poder y con los rasgos ideológicos que esta tradición tuvo en el resto de Centroamérica: los conservadores más próximos a la iglesia, al terrateniente, al ejército. Esta situación produjo gobiernos de militares, del Partido Nacional, pero no del ejército como Institución.

Un tercer factor, coyuntural político, fueron varias circunstancias que debilitaron cualquier situación de polarización o conflicto: una reforma agraria impulsada por López Arellano (1972/75) que no expropió a nadie, salvo a campesinos salvadoreños y redistribuyó tierra a una quinta parte de campesinos pobres o sin tierra. El régimen militar cooptó a las poderosas organizaciones campesinas en la defensa de los empresarios industriales hondureños que la competencia del Mercomún estaba afectando. El sentimiento de unidad nacional que ello produjo aumentó con la ‘guerra inútil’ de 1969 cuando El Salvador invadió el país. Lo patriótico se confundió con lo económico y lo gremial y neutralizó cualquier radicalismo, al punto que los partidos patrocinaron juntos en 1970 una candidatura presidencial. Todo lo anterior explica por qué la represión política, los conflictos sociales, la polarización ideológica fueron menores y nunca parecidos a los extremos que presentan los otros países vecinos.

Más que violentos, los soldados fueron corruptos. Al aceptar un soborno de la UFCO. CONSUFFAA²⁹ ‘destituyó’ en

²⁹ El Consejo Superior de las Fuerzas Armadas se convirtió en el locus del poder real, corporativo e institucional. Fue durante varios años el verdadero poder ejecutivo en una estructura que tuvo el pleno respaldo norteamericano.

1975 a López Arellano, sucedido por el coronel Juan Alberto Melgar, a su vez acusado por tráfico de drogas y sustituido en 1978 por el coronel Policarpo Paz García. Intrigas y pudrimiento marcan las peleas intramilitares que se resolvieron al margen de los partidos por el celo dirigente de CONSUFFAA, asiento del verdadero poder. El coronel Paz García resultó por azar de las venturas de la política norteamericana el actor del cambio político. Fue requerido de urgencia por Washington (III-1979) para comprometer la complicidad del ejército hondureño en la ofensiva antisandinista a cambio de entregar el poder a los civiles y, asegurar así la modernización de ese enclenque ejército, derrotado una década atrás en la ‘guerra inútil’ con El Salvador.

La ambigüedad del proceso democratizador centroamericano se repite con originalidad en Honduras y se explica por la militarización de la vida social que ocurre cuando a partir de 1981 los ‘contras’³⁰ instalan sus campamentos en la frontera y el país se llena de bases aéreas y navales norteamericanas, como parte de una visible estrategia contrarrevolucionaria. Se instala la gigantesca base de Palmerola, cerca de Comayagua y otras en Puerto Lempira, en el borde del río Coco; se hacen maniobras conjuntas (Big Pine I, II y III); en Puerto Castilla funciona un Centro Regional de Entrenamiento Militar y hay tantos soldados y aviones extranjeros que el país es calificado como un ‘portaviones insumergible’³¹. La vida política está

³⁰ Un numeroso contingente de ex guardias somocistas se refugiaron en Honduras; fueron denominados contrarrevolucionarios (‘contras’) y organizados como fuerza interventora por los Estados Unidos en la frontera con Nicaragua.

³¹ Las fuerzas de la ‘contra’ (luego llamadas Resistencia Nacional) suman hacia 1985 más de 15 mil hombres. Según fuentes oficiales de Nicaragua entre 1980 y 85 la ‘contra’ lanzó 309 ataques, incursiones sangrientas cada vez más en profundidad (Rouquier, 1994: 207, 215).

Cuadro 26
Producto Interno Bruto
-Millones de dólares a precios constantes de 1995-

País/Años	1990	1991	1992	1993	1994	1995
GUATEMALA	11,840.80	12,283.10	12,888.90	13,409.00	13,961.80	14,656.20
EL SALVADOR	7,184.00	7,383.50	7,923.30	8,433.20	8,936.80	9,495.10
HONDURAS	3,345.40	3,435.70	3,635.90	3,894.00	3,819.50	3,960.10
NICARAGUA	1,737.10	1,729.30	1,744.80	1,738.00	1,806.80	1,887.00
COSTA RICA	9,102.60	9,234.60	10,043.30	10,636.60	11,277.20	11,715.80

País/Años	1996	1997	1998	1999	2000
GUATEMALA	15,094.50	15,758.10	16,564.40	17,202.40	17,736.50
EL SALVADOR	9,663.40	10,069.90	10,448.00	10,790.60	11,001.60
HONDURAS	4,104.70	4,307.80	4,449.00	4,383.60	4,604.70
NICARAGUA	1,982.40	2,090.30	2,176.90	2,337.60	2,446.40
COSTA RICA	11,812.10	12,450.60	13,483.40	14,576.00	14,823.70

CEPAL (Comisión Económica para la América Latina y el Caribe), Anuario Estadístico 2001, Chile. Consultado en marzo de 2002.

sofocada pero hay elecciones, partidos y parlamento, *in fini, una experiencia pre-democrática.*

La legalización del poder por intermedio de elecciones libres y sin fraude, revivió el bipartidismo y se creó una paradójica *situación protodemocrática*, prefiguración de lo que luego vendrá. La legitimidad del régimen en transición es incompleta o mejor dicho, insuficiente por que el poder Ejecutivo está bajo la tutela militar, cuyo poderoso protagonismo justifica su papel de aliado local de la estrategia norteamericana antisandinista. Los militares dirigen el Estado, como dueños, con políticas de orden autoritario y al servicio contrainsurgente, los civiles administran el gobierno como simples mayordomos. La distancia entre esas funciones es lo que contribuye a definir lo que líneas arriba y a lo largo de este texto se ha calificado como una *experiencia semidemocrática.*

A disgusto, llamaron a elecciones primero para Asamblea Constituyente y luego presidenciales, que ganó Roberto Suazo, del Partido Liberal (XI/1981), sin dejar de ser, aquellos, el más importante factor de poder. Pero la transición democrática había empezado y continuó con la elección del también liberal José Azcona Hoyo (1986/90); ambos gobernaron en un ambiente tensado porque el país entero vivió un ambiente de guerra sin haberla, con los militares (nacionales y norteamericanos) como ejecutores políticos. Un par de intentos guerrilleros, sin respaldo popular, fueron aniquilados pero dieron oportunidad para un período de ‘guerra sucia’ contra militantes y organizaciones de izquierda.

Los generales Gustavo Álvarez Martínez y Walter López Reyes, con respaldo del ejército norteamericano, retuvieron las decisiones básicas entre 1982 y 1990 pese a los gobiernos civiles. Pero cuando la guerra de intervención en Nicaragua finalizó, el apoyo a los militares hondureños, financiero y político, fue súbitamente retirado, abriendo posibilidades

más democráticas en el país. Terminado el conflicto en Nicaragua, Honduras deja de ser lo que un político llamó un país con tres ejércitos, un portaviones de tierra.

En 1990 ganó la presidencia Rafael Leonardo Callejas, del Partido Nacional; una Comisión Ad Hoc responsabilizó al ejército de 184 desaparecidos y una política de ordenamiento económico fue aplicada y continuada por su sucesor, el liberal Carlos Roberto Reina (1994/98) cuya gestión, además, realizó un exitoso programa de contención militar: convirtió a la temida Dirección Nacional de Inteligencia en una oficina civil de investigación criminal (DIC) y transformó la fuerza policíaca militar en una Policía Nacional Civil, y modificó la Constitución para abolir el reclutamiento militar forzoso, el control del sistema de comunicaciones, el departamento de inmigración, la marina mercante y redujo el presupuesto. Sin embargo la autonomía del ejército se mantiene, aun cuando además se redujo su número a 12 mil hombres (1997).

Luego, fue electo el también liberal, Carlos Flores Facussé (1998/2002), cuya mayor propósito era el crecimiento de la economía hondureña y se enfrentó a los destrozos incalificables causados por el huracán Mitch. La devastación causada ha marcado a la sociedad y la conducta de los políticos hondureños. Ricardo Maduro, del Partido Nacional, fue electo presidente (2002/05) en el difícil entramado de la reconstrucción nacional. Su mayor problema, sin embargo, ha sido la crisis causada por las pandillas juveniles y la criminalidad, que también va en aumento. Como resumen, se subraya cómo la democracia hondureña tiene problemas para elevar su calidad y aunque estabilizada, no avanza en ninguna de las direcciones que lleven a superar el mero ejercicio electoral.

El desarrollo estable de un país, con escasas riñas entre su élite dominante o con las masas, es un ejemplo de cómo

esa estabilidad crea u aprovecha condiciones que conducen a la democracia política. Los antecedentes histórico-estructurales de Costa Rica son bien conocidos pero hay dos que consideramos igualmente decisivos porque vienen desde el XIX: uno, son los prematuros pero altos niveles de educación pública, y otro, la estabilidad de la vida social, vale decir, ausencia de conflictos violentos entre clases y/o con el Estado.

No es prudente establecer una relación causal entre alta educación y horror a los pleitos sociales. Pero revela un orden político con predominio cultural de ciudadanos con alguna cultura política que la tradición refuerza y un Estado como eje político y no de la Iglesia ni los militares. La educación popular dejó de hacerla la Iglesia desde el XIX.

La estabilidad como sinónimo de paz social facilita los cambios porque estos tienden a ser graduales y no cataclísmicos. Si son graduales no concitan las oposiciones violentas, facilitan una cultura política de diálogo y transigencia y de forma indirecta, simpatías por lo público donde no hay vencedores ni derrotados. Los cambios revolucionarios son como cataclismos sociales, producen cambios, sin duda, pero también reacciones violentas. Propician culturas de ruptura, de condiciones subjetivas suma/cero en las que siempre hay perdedores y ánimos de revancha. La primera situación, educación generalizada y estabilidad social prolongada, todavía no son democracia pero sin duda, la facilitan.

El resultado de la ‘guerra civil’ en relación con la democracia fue inusitadamente múltiple: abolió al ejército, promulgó la avanzada Constitución de 1949 que es la versión local de un proyecto de modernidad política, situó al Estado en el centro motor del desarrollo. De manera particular, estableció claros derechos sociales y garantía de libertades democráticas, y un Tribunal Supremo Electoral que aseguró

las elecciones sin el fraude, por cierto consentido en el período oligárquico.

Y a partir de 1953 la nación costarricense experimentó un sostenido proceso de modernización política, económica y social que ya se mencionó, señalando cómo el *ethos* reformista del Partido Liberación Nacional, sin fracturas, convirtió a Costa Rica en 25 años en una sociedad menos desigual, con un pueblo alfabeto con la educación primaria generalizada, urbano e industrial, con índices de modernidad social de los más altos en América Latina y sin duda con la mayor estabilidad política. La oposición política no fue antirreformista; mantuvo los cambios con otra retórica nada más.

Entre 1953 y 2002 el PLN ha ganado siete elecciones y la oposición socialcristiana, al centro derecha, cinco, en una alternancia sin cambios. La hazaña modernizadora suele atribuírsele al Estado creado por Figueres y a la generación de los cincuenta, pero hay factores estructurales e Instituciones culturales que corresponden a características nacionales. Hacia 1980 el modelo socialdemócrata tropical ya funcionaba mal y el neoliberalismo fue implantado por dos presidentes ‘liberacionistas’, Luis Alberto Monge (1982/86 y Oscar Arias (1986/1990).

Esta política provocó menos traumas y adoptó una modalidad suave gracias a la simpatía norteamericana por un régimen que se oponía al sandinismo. Costa Rica recibió entre 1982 y 1988 un millón diario de dólares como apoyo político y económico. Los efectos neoliberales, sin embargo empobrecieron a los pobres y a sectores de clase media, debilitaron el papel dirigente del Estado y despolitizaron la participación electoral.

Algunos problemas han empezado a acentuar sus efectos. La participación electoral ha estado disminuyendo

del 82% al 71% en 1998 y al 68% en 2002. El bipartidismo está en crisis de identidad programática pues ambos ofertan lo mismo. Hay un agudo descreimiento en los políticos y la política, notoria concentración de la riqueza y aumento de las desigualdades que, en todo caso, son inferiores en relación con Centroamérica. Pero el mayor dato, que ha producido devastadores efectos, es el develamiento de la corrupción de tres ex presidentes, Rafael Angel Calderón F. (1990/94), hijo de presidente, Miguel Angel Rodríguez (1998/02), ambos del PUSC (socialcristianos), y José Figueres Olsen (1994/98), hijo de presidente (y liberacionista).

La política anda mal en Costa Rica, la economía, no, pero si el ánimo del ciudadano de la más antigua democracia cree que ésta pareciera llegar a su fin, tiene una percepción equívoca. No hay motivos suficientes para pensar así. Su legitimidad sigue siendo muy sólida, aunque menguada o en todo caso con altibajos crecientes. De lo que se trata es de tiempos de cambio, especialmente en el sistema de partidos y consecuentemente en la redefinición del peso y papel de los nuevos actores. De un bipartidismo de colusión se esta en tránsito a algo diferente, a un sistema multipartidario, que deberá definir el papel del Estado en esta época antiestatal. Es importante que haya renovación, hay nuevos aires en la vida política nacional con la reelección de Oscar Arias, en 2006.

CAPÍTULO 9

LOS AÑOS NOVENTA: POLÍTICAS MACROECONÓMICAS DE ESTABILIZACIÓN Y REFORMA³²

Un factor de peso en la renovación de esta región fue la conclusión de los conflictos armados internos pues situó la política económica en el marco de mayor respeto por las prácticas democráticas. Y los recursos fiscales y las divisas tienen ahora la oportunidad de utilizarse mejor. En tres países, para la reconstrucción de infraestructura y para el gasto social. La paz permite que el diseño, aplicación y evaluación de las políticas económicas tome en cuenta a la sociedad civil, y para que las cuestiones públicas dejen de ser coto exclusivo de la acción gubernamental. Para darle permanencia es necesario que efectivamente se inserte a las economías de Centroamérica en la senda del crecimiento con una distribución más equitativa de sus beneficios. Lo ocurrido hasta ahora aún muestra limitaciones que le impiden avanzar en la resolución de los problemas de pobreza y desigualdad.

³² Lo que sigue ha sido tomado parcialmente del trabajo de la CEPAL “Centroamérica: Desarrollo, política macroeconómica y sustentabilidad social”, 5 de septiembre de 2001, y del texto preparado por Juan Carlos Moreno Brid y Rafael Márquez Arias “El crecimiento económico de América Central en los noventa ¿un nuevo estilo de desarrollo?”, 16 de mayo de 2003.

Desafortunadamente, la disminución del ritmo de actividad económica en el 2001 interrumpió y revirtió parcialmente estos avances, lo que se agravó en el 2002, al continuar la desaceleración económica. La pobreza es extensa, al grado de que en varios países más del 50% de su población es pobre o indigente. El ritmo de actividad ha sido inestable y es frágil ante “choques” adversos en los mercados internacionales. Desde hace cuatro años el istmo se encuentra en una fase de desaceleración económica asociada al deterioro en sus términos de intercambio y al debilitamiento de sus exportaciones. De hecho en 2001-02 el PIB por habitante se contrajo en términos reales.

Con la crisis internacional de la deuda externa en los ochenta América Latina comenzó a redefinir su estrategia de desarrollo. Centro América no fue ajena a esta reorientación. De hecho en los noventa hubo una convergencia en el diagnóstico compartido por los gobiernos de la región y los organismos financieros internacionales, que identificó a la “sustitución de importaciones” como la causa del atraso y vulnerabilidad económica. Se originó un nuevo consenso en torno a las políticas macroeconómicas para impulsar el crecimiento económico, y el papel que deben jugar el sector público, el privado y el capital externo. Esas políticas se aplicaron con ortodoxia pero los resultados fueron adversos.

La nueva visión estratégica tuvo tres ejes centrales:

a) una mayor integración de Centroamérica –y de Latinoamérica en general– a la economía internacional con base en la apertura de los mercados locales y actividades exportadoras no tradicionales; b) un proceso de reformas para acotar la intervención estatal en la economía; y c) la estabilidad macroeconómica como el factor indispensable para el crecimiento.

El advenimiento de regímenes democráticos civiles ocurridos entre 1985 y 1991 y la paz, marcaron un hito en la construcción de la nueva estrategia de desarrollo. El caso de Nicaragua es sobresaliente, ya que el cambio de gobierno en 1990 (Chamorro, 1990-1996) significó un drástico viraje de la lógica y la práctica de la política económica. Las nuevas autoridades de Honduras (Callejas, 1989-1993) y El Salvador (Cristiani, 1989-1994) introdujeron importantes programas reformadores. En Costa Rica el Gobierno de Calderón (1990-1994) reforzó las medidas de cambio estructural adoptadas por sus antecesores, mientras que el Gobierno de Guatemala (Serrano Elías, 1991-1993) anunciaba un ambicioso plan de reformas económicas que ni el ni sus sucesores realizaron.

Estos objetivos se planearon en un contexto de nuevas e importantes restricciones internas y externas. En lo interno, las economías enfrentaron el esfuerzo de recuperar el crecimiento económico, la reconstrucción de la infraestructura destruida por la guerra y la rehabilitación de la confianza junto a la necesidad de superar la obsolescencia del aparato productivo en las nuevas condiciones del comercio internacional. A su vez, se confrontó un importante conjunto de objetivos y restricciones derivados de los Acuerdos de Paz. Debe señalarse que paradójicamente la paz acarreó la reducción de ayuda externa, abundante en los años ochenta.

Finalmente hubo significativas transformaciones económicas internacionales, como la consolidación del cambio en los patrones y normas del nuevo comercio, la producción y la inversión a escala internacional, y el cambio tecnológico, liderado por la revolución de las comunicaciones. La región se retrasó en esa dimensión y se encontró a inicios de los noventa con la constitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), que tendría implicaciones en los flujos de comercio, inversión y producción global.

Aunque a inicios de los años noventa Centroamérica retomó la senda del crecimiento económico, persistían serios desequilibrios financieros como una elevada inflación, alto déficit fiscal y cuantiosos saldos negativos en la cuenta corriente de la balanza de pagos. La coincidencia democrática en cuatro países entre 1989 y 1991 propició la convergencia en la estabilización financiera a través de instrumentos de corrección monetaria y fiscal con variaciones en cada país.

En general, la política fiscal se orientó a reducir el sector público y su déficit, consecuentemente se privatizaron las pocas empresas públicas existentes, se propuso una débil remodelación tributaria. La reducción del Estado implicó, obviamente, la contracción de su gasto de inversión pero también el de tipo corriente, que provocó el despido masivo de empleados y la eliminación de numerosos subsidios. La remodelación de los regímenes tributarios solo se proyectó y algunos cambios se hicieron, pero se prefirió el impuesto al Valor Agregado y, en algunos casos, impuestos “especiales”, de carácter temporal y se modificaron las tarifas de servicios públicos.

El peso de la estabilización descansó principalmente en la política monetaria, y más precisamente en el control inflacionario mediante la adopción de tipos de cambio relativamente inflexibles. La estrategia tuvo éxito al cortar las presiones inflacionarias, pero con el riesgo de provocar una apreciación persistente del tipo de cambio real. De manera complementaria se buscó controlar la liquidez de la economía mediante el uso del encaje bancario y, recientemente en algunos casos, mediante operaciones de compra-venta de certificados gubernamentales (denominadas operaciones de mercado abierto) apoyadas en la liberalización de las tasas de interés. Con estas, el Estado es el perdedor.

A decir verdad son pocos los avances logrados, la subregión no ha logrado consolidar su estabilización macroeconómica, el crecimiento se encuentra en franca desaceleración hace varios años, mientras que el déficit comercial y en cuenta corriente llega –en algunos países– a proporciones elevadas. Las reformas estructurales están inconclusas, sobre todo la que mas urge, la reforma fiscal.

*EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LOS
NOVENTA: FORTALEZAS Y DEBILIDADES*

Durante 1990-2000 el PIB real agregado de los cinco países, medido en dólares constantes aumentó a una tasa anual media de 4.4%. Tal resultado fue aproximadamente cuatro veces más dinámico que el 0.95% de la década previa. En lo que concierne a la inflación, después de algunos casos superiores al 100%, hace ya más de cinco años que solo se tienen alzas de un dígito en casi todos los países de la región. Son diversas las causas de la reanimación de las economías en los noventa, tales como el prolongado e intenso crecimiento de la economía de Estados Unidos y del comercio mundial, la mejora en los términos de intercambio, el restablecimiento del flujo de recursos del exterior. Una porción importante de estos flujos ingresó como inversión directa atraída por los procesos de privatización. Un caso único fue INTEL en Costa Rica y el auge en las maquiladoras en Guatemala, El Salvador y Honduras, con productos de vestido para el mercado de Estados Unidos.

Más débiles, hay algunas causas endógenas en la reactivación productiva como la corrección de presiones inflacionarias, colocar al sector exportador como motor de la inversión en la región y reconvertir la planta industrial para enfrentar a la competencia internacional importando bienes de capital. La apertura de los mercados centroamericanos a

la competencia del exterior incentivó la transformación de la estructura productiva de la región, colocando a las exportaciones como motor del crecimiento económico. Lo que obligó a cerrar a productores que no pudieron modernizar sus plantas. Muchas importaciones desplazaron buena proporción de producción local y, de hecho, se modernizó poco el sistema exportador con productos no tradicionales, que van cobrando importancia.

Esta nueva fase, si bien permitió salir del estancamiento de la “década perdida”, polarizó algunas desigualdades entre las economías del istmo. En efecto la economía más dinámica fue Costa Rica mientras que Honduras y Nicaragua fueron las menos adelantadas. En conjunto, el PIB per cápita centroamericano creció en términos reales a una tasa anual media de 1.8% entre 1990 y el 2000, lo cual se compara favorablemente con la media latinoamericana (1.4%). En el decenio, el PIB per cápita de Honduras y Nicaragua registró bajos crecimientos con 0.3%, 0.7%, respectivamente; en Guatemala el alza fue de 1.4%, en El Salvador 2.3% y en Costa Rica 2.2%.

Centroamérica resintió en menor grado el impacto de las perturbaciones financieras internacionales de 1998-99 o crisis asiáticas. Y en 1997-99 la economía de la región mantuvo tasas de expansión cercanos al 5% anual. En cambio, la tasa de expansión del PIB real para América Latina se desplomó a 2.2% en 1998 y a 0.3% en 1999. La economía norteamericana estimula a Centroamérica, y su desaceleración tuvo un grave impacto en la subregión debido al peso de ese mercado como destino de nuestras exportaciones. En 2001 el PIB regional per cápita se contrajo 2.2% en términos reales (el de América Latina cayó 0.6%).

BASES DEL NUEVO ESTILO DE DESARROLLO CENTROAMERICANO

Las políticas de apertura comercial y de crecimiento económico han generado cambios en la producción. La economía regional tiene hoy en día vínculos más profundos con los mercados internacionales que al comenzar los noventa y destacan las actividades exportadoras no tradicionales, eje de una estrategia orientada hacia fuera, la industria maquiladora, el turismo y las actividades informales. Véanse los rasgos más importantes:

i) Cambios en el comercio exterior. Para la región, el índice de apertura comercial (relación de las exportaciones e importaciones respecto del PIB) se elevó de 52.5% en 1990 a 78.9% en 1999 (Honduras registró una reducción). Las exportaciones regionales crecieron en un 11.6% anual en el período y su participación en el PIB centroamericano pasó de 24.5% en 1990 a 36.4% en 1999, en parte por la incorporación de nuevos rubros exportables. En importancia las ventas externas de Costa Rica pasaron de 30.4% a 53.8% y menos pero importante fue el aumento en El Salvador, Guatemala y Nicaragua.

En Nicaragua las importaciones se elevaron de 28% en 1990, a 42.5% en 1999. Le siguen en importancia El Salvador y Costa Rica con 16 y 14 puntos, respectivamente. La reactivación del comercio intrarregional al llegar la paz tuvo también una notable influencia en los cambios estructurales mencionados. Las exportaciones se elevaron de 664 millones de dólares en 1990 a 2 360 en 1999. De esta forma, la incidencia del comercio intrarregional llegó a significar el 17% del comercio externo total en ese último año, frente al 15% que registró en 1990.

Cuadro 27
Centroamérica: participación del
comercio exterior en el PIB
(Porcentajes sobre la base de precios de 1995)

	1990		1999	
	Exportaciones	Importaciones	Exportaciones	Importaciones
Total regional	24.5	28.0	36.4	42.5
Costa Rica	30.4	34.6	53.8	48.5
El Salvador	16.8	23.9	31.2	40.5
Guatemala	17.5	18.8	24.1	31.4
Honduras	33.5	44.4	39.0	49.2
Nicaragua	27.0	42.7	37.2	82.3

Fuente: CEPAL, Centroamérica: desarrollo, política macroeconómica y sustentabilidad social, México, 2001, cuadro 2, p. 31.

Nota: Las exportaciones y las importaciones incluyen bienes y servicios.

ii) Los nuevos productos de exportación. La generación de divisas del sector exportador casi se triplicó al elevarse de 4.407 millones de dólares en 1990 a 14.194 en 1999, debido en gran medida al crecimiento de las exportaciones no tradicionales. Ellas se expandieron de 1.803 millones de dólares a 9.703 millones, es decir, se multiplicaron por cinco. Así, en ocho años, su participación en el total de exportaciones se elevó de 37% a 73%. Las exportaciones emergentes están constituidas por nuevos productos agropecuarios tales como frutas, verduras y plantas ornamentales, y productos manufacturados como la maquila. El desarrollo más acelerado se registró en Costa Rica y Honduras, y menos en Guatemala y Nicaragua.

iii) Maquila y zonas francas. El fenómeno relevante de los noventa fue la fuerte expansión de la industria maqui-

ladora, resultado de la creciente estabilidad económica, cambios en los precios relativos, así como la mejoría en las condiciones sociopolíticas en la región. En especial destacan los regímenes fiscales favorables que aparecieron hacia mediados de los noventa. La maquila está concentrada en el sector textil y vestuario, con destino a Estados Unidos y su montó se multiplicó por siete al pasar de 753 millones de dólares en 1990 a 5.264 millones en 1998, creciendo a una tasa media anual de 27.5%.

Cuadro 28
Centroamérica: indicadores del sector
maquilador, 1996

País	Total de empresas	Empleos	Valor agregado (1998) a/
Total regional	792	243 355	2 158
Costa Rica	189	47 972	396
El Salvador	19	42 000	1 189
Guatemala	220	61 800	285
Honduras	174	78 583	288
Nicaragua	19	13 000	...

Fuente: CEPAL (1999), "Centroamérica, México y República Dominicana: maquila y transformación productiva", *Cuadernos de la CEPAL* N° 85, Santiago de Chile.

a/Millones de dólares. Corresponde a la diferencia entre el valor de las exportaciones y el de las importaciones declaradas.

En 1998 la maquila aportó divisas a la región por más de 2.200 millones de dólares, un apoyo importante para el déficit de la balanza de pagos. Por otra parte, este sector genera un importante número de empleos. En 1996 ocupó

a aproximadamente 250,000 personas en toda la región, cifra que se ha elevado en el segundo quinquenio de los noventa.

iv) Turismo. La estabilidad política ha estimulado al turismo en los noventa y tanto el ingreso de divisas como la generación de empleo se elevaron. La industria turística había disminuido en los ochenta, cuando la región captó 206 millones de dólares que para 1990 se habían duplicado al llegar a 520 millones. Ocho años más tarde se triplicó alcanzando 2,007 millones de dólares.

Cuadro 29
Centroamérica: ingresos de
divisas por turismo a/
(Millones de dólares)

	1980	1990	1999 b/
Costa Rica	84.9	285.0	1 066.0
El Salvador	13.4	76.0	222.3
Guatemala	61.6	117.9	356.2
Honduras	24.5	29.0	237.4
Nicaragua	21.6	12.2	125.2

Fuente: CEPAL idem, cuadro 23.

a/ Se refiere al concepto de viajes de la balanza de pagos.

b/ Cifras preliminares.

Hacia 1980 la distribución regional de los ingresos del turismo estaba concentrada en Costa Rica (41%) y Guatemala (30%); para los otros era Honduras 11%, Nicaragua 10% y El Salvador 6%. En los años noventa, en Costa Rica esta industria creció a más del doble gracias al régimen especial

de fomento. En cambio, Guatemala sufrió un descenso al ser sólo el 18% del total regional. Honduras y Nicaragua mostraron una recuperación hacia fines de la década recuperando su participación.

v) La economía informal. Pese a la reactivación del crecimiento económico en los noventa y los cambios en la estructura productiva, el sector informal retiene su importancia como fuente de empleos e ingresos. La recuperación del dinamismo económico en los países donde hubo conflictos probablemente fue insuficiente para superar el tema del mercado de trabajo formal. A la existencia de gran número de desempleados y subempleados que vienen de la década pasada, se suman cada año contingentes de nueva población económicamente activa.

Aquí, la informalidad presenta una gran heterogeneidad y por sus actividades y su naturaleza se distancia de la categoría de microempresa. Se expresa además en una marcada diferenciación de oferta y demanda de trabajo y en la diversidad de unidades económicas. La crisis de los años ochenta, que fue estancamiento, agudizó el problema de la informalidad. Tomando en cuenta que la pobreza afecta al menos a dos tercios de la población en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, y que la mitad de los nuevos pobres ahora son urbanos, la informalidad constituye un componente clave del empleo urbano. A fines de los ochenta, representó el 48% del empleo urbano en Managua, el 33% en Guatemala y casi el 30% en San Salvador y Tegucigalpa. En San José, el sector informal significaba el 22%.

Según encuestas recientes, en Guatemala, Tegucigalpa y Managua la informalidad tiene un carácter de subsistencia, es un fenómeno de autoempleo, de bajo ingreso y productividad, sin acumulación de activos o rudimentos de administración,

elementos que caracterizan a la informalidad denominada “dinámica”. El aumento del sector informal ha constituido un importante factor de amortiguación de las presiones sociales junto con las migraciones hacia países vecinos y el ingreso de remesas familiares.

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA FINANCIERA

i) La estructura bancaria. Desde fines de los ochenta, los países de la región adoptaron reformas en el sistema cuyos rasgos fundamentales son: i) la independencia del banco central y la reducción de sus funciones reguladoras; ii) el impulso a la tendencia de la banca múltiple; iii) la abolición de la banca estatal de desarrollo en su papel de intermediario; iv) la restricción al financiamiento gubernamental por parte del banco central, y v) el reemplazo de la fiscalización bancaria por la vigilancia preventiva. Los países han abordado las reformas en distintos momentos y grados de profundidad: en El Salvador y Costa Rica fueron relativamente rápidos; en Honduras apenas comenzaron; en Guatemala se caracterizan por su gradualidad y en Nicaragua por su parcialidad.

La flexibilización de requisitos de entrada al sistema bancario provocó la duplicación del número que operaban en la región. Entre 1990 y 1997 los bancos pasaron de 69 a 112, se modificaron los coeficientes de capital y reservas respecto de los activos. Se elevaron considerablemente en Costa Rica, en cuya estructura predominan los bancos estatales, y en El Salvador y Honduras. Se redujeron en Guatemala, que había registrado el mayor incremento de bancos, y en Nicaragua. También se presenta una tendencia a ampliar el abanico de medios de captación de recursos, los servicios bancarios y las operaciones auxiliares. Otro de los hechos relevantes de la estructura del sistema financiero fue

la expansión del mercado de valores. En 1990 existían dos bolsas de valores en la región (Costa Rica y Guatemala); en 1997 el número de instituciones había aumentado a ocho.

Otro cambio provocado por la liberalización ha sido el destino del crédito por actividades productivas. Sobresale la reducción del financiamiento destinado a las actividades productivas –agricultura, manufactura y construcción–, y su aumento para el sector comercial y de servicios. Esta tendencia ha potenciado el encarecimiento del costo del dinero en términos reales, puesto que son las actividades de mayor rentabilidad y cortos períodos de recuperación, características del comercio y los servicios.

ii) La importancia creciente de las remesas. Una de las consecuencias económicas y sociales más relevantes de los conflictos fue un considerable proceso migratorio en los casos de El Salvador y Guatemala y menos Honduras. En El Salvador, a fines de los años ochenta la guerra había expulsado a cerca de un millón de personas. Se estima que a fines de la década pasada cerca de 600,000 salvadoreños habían ingresado ilegalmente a EEUU. El fenómeno migratorio fue como válvula de escape ante la presión de la guerra y la insuficiente generación de empleos e ingresos. Todos los países expulsan, salvo Costa Rica, y por países de destino destacan Guatemala, Costa Rica, México y Estados Unidos. En 1998 Centroamérica percibió una suma cercana a los 2.200 millones de dólares por concepto de remesas familiares, en comparación con los 520 millones que ingresaron en 1990. En el lapso de ocho años los recursos se multiplicaron por cuatro al crecer a una tasa anual del 20%.

Cuadro 30
Centroamérica: remesas familiares
(Millones de dólares)

	1990	1992	1994	1996	1998 a/	2001	2002	2003
Total	519.0	930.7	1 356.9	1 672.7	2 184.2	3615	5425	6072
El Salvador	357.5	687.3	966.7	1 086.6	1 332.0	1911	2206	2316
Guatemala	96.5	173.4	255.2	362.7	423.2	584	1690	2106
Honduras	50.0	60.0	85.0	128.4	220.0	460	770	862
Nicaragua	15.0	10.0	50.0	95.0	200.0	660	759	788

Fuente: CEPAL, *idem* fuente del cuadro 23.

a/ Cifras preliminares.

Cuadro 31
Porcentaje remesas en relación con el PIB

País	Porcentaje
Guatemala	9.3
El Salvador	17.1
Honduras	22.1
Nicaragua	11.9
Costa Rica	2.0

Fuente: BANGUAT-marzo, 2005.

SITUACIÓN SOCIAL

Como se ha dicho, en la década de los noventa hubo crecimiento económico, que en el clima neoliberal no ha sido equitativo para los distintos sectores de la población, lo que acentuó la desigualdad y los niveles de pobreza. No obstante la recuperación del ingreso por habitante en los años noventa, salvo Costa Rica y El Salvador, no ha sido suficiente para alcanzar el nivel de ingresos de 1980. Esta tendencia pone de manifiesto el profundo y largo proceso de recuperación económica que han tenido que enfrentar estos países.

Durante esta década, el sector del mercado de trabajo que mostró mayor dinamismo en la creación de empleos fue el de baja productividad, por lo que la brecha entre los sectores alto y bajo siguió creciendo y no ayuda a reducir la desigualdad en la distribución del ingreso. En los últimos años los gobiernos han mostrado desigual voluntad política para enfrentar el rezago social. Por los problemas vividos en los ochenta, el gasto social sufrió una contracción considerable. Sin embargo, ha habido aumentos, pero el gasto social como porcentaje del PIB sigue siendo extremadamente bajo.

Cuadro 32
Centroamérica: producto interno bruto y gasto social

	Producto interno bruto a/ Porcentajes			PIB por habitante b/ (Base 1980 = 100)			Gasto social/PIB c/ (Porcentajes)		
	1980-1985	1985-1990	1990-1997	1980	1990	1998	1980	1990	1996-1997
	Costa Rica	0.2	4.3	3.7	100.0	94.0	106.4	16.3	15.7
El Salvador	-2.8	2.1	5.2	100.0	87.0	106.8	6.2	3.0	7.7
Guatemala	-1.1	2.9	4.1	100.0	86.2	96.8	4.0	4.4 e/	4.2
Honduras	1.5	3.2	3.7	100.0	92.3	98.5	6.0	7.9	7.2
Nicaragua	0.6	3.5	2.4	100.0	67.4	66.2	10.9 f/	13.2	10.7

Fuente: CEPAL (1998), Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe (LC/G.2043-P), Santiago de Chile;

(1998) Panorama Social de América Latina (LC/G.2050-P), Santiago de Chile y (1999) Indicadores sociales básicos de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe (LC/MEX/L.387), México, D. F.

a/ Tasas de crecimiento promedio anual. b/ Dólares a precios constantes de 1990. c) Incluye gasto del gobierno central consolidado en educación, salud, seguro y asistencia social, vivienda y servicios comunitarios y otros servicios.

d/ Cifra correspondiente a 1996. e/ Cifra correspondiente a 1989. f/ Cifra correspondiente a 1983.

i) Empleo y desempleo. También en la mencionada década ha habido cambios en los mercados de trabajo. Lo que otras sociedades logran es difícil alcanzarlo en Centroamérica: descenso en el crecimiento de la población, y permanencia de los jóvenes en el sistema educativo, que reduce el crecimiento de la fuerza de trabajo. La constante incorporación de la mujer al mercado laboral y el poco dinamismo en la creación de empleos productivos condicionan una oferta laboral en aumento a pesar de que la emigración ha aliviado la presión sobre los mercados de trabajo.

El crecimiento económico ha tenido un efecto limitado en la creación de empleos productivos; esto explica que la tasa de desempleo abierto no haya disminuido durante los noventa y que el sector de baja productividad absorba la mayor parte de la población que por primera vez se incorpora al mercado laboral. Y debido a que la transformación productiva requiere mayor intensidad de capital, se ha generado una emigración de trabajadores del sector “moderno” de la economía hacia actividades informales. La disparidad de ingresos se ha acentuado, pues el deterioro de los ingresos del que trabaja en el sector “moderno” ha sido relativamente menor del que está en el sector informal.

La tasa de desempleo abierto exhibe un comportamiento irregular pues en la primera mitad de la década, salvo en Nicaragua, la tendencia fue claramente descendiente. Y para la segunda mitad nuevamente con excepción de Nicaragua, en el resto el desempleo ha estado creciendo, para llegar en Costa Rica y Guatemala al mismo nivel de 1990 y en El Salvador, Honduras y Nicaragua, a niveles inferiores a los de 1990. A diferencia de muchos países latinoamericanos, en Centroamérica la tasa de desempleo abierto urbano afecta con mayor intensidad a los hombres que a las mujeres. Y por educación, el nivel de desempleo abierto mayor corresponde a los que tienen un nivel medio-alto de instrucción; los jóvenes sufren con mayor intensidad el desempleo.

Cuadro 33
Centroamérica: tasas de desempleo abierto urbano, según sexo
Y nivel de instrucción a/ (Tasas medias anuales)

	Desempleo abierto urbano				Años de instrucción b/				
	1990	1994	1998	0-5	6-9	10-12	13 y más		
Costa Rica	5.4	4.3	5.4	5.5	7.3	6.1	3.4		
Hombres	4.8	6.4	5.4	3.2					
Mujeres	7.2	9.0	7.1	3.6					
El Salvador	10.0	7.0	7.2	5.3	8.0	9.6	6.4		
Hombres	8.8	9.4	9.8	5.4					
Mujeres	1.6	5.8	9.3	7.4					
Guatemala	6.0	3.3	5.9		
Hombres					
Mujeres					
Honduras	7.8	4.0	5.8	4.8	5.4	6.3	3.6		
Hombres	6.6	6.0	5.9	3.3					
Mujeres	2.2	4.5	6.7	4.0					
Nicaragua	11.1	20.7	13.2 b/	10.9	14.3	14.9	11.6		
Hombres				12.5	14.7	15.1	10.7		
Mujeres				9.0	13.8	14.7	12.7		

Fuente: CEPAL (1998), *Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe (LC/G.2043-P)*, Santiago de Chile.
a/ Se refiere a la población de 15 años de edad en adelante. b/Cifra correspondiente a 1997.

Los pobres se las arreglan y la informalidad se ha convertido en un amortiguador para los que viven en la pobreza, ya que ayuda a aumentar la tasa de ocupación de los hogares pobres. A pesar de que la tendencia general observada presenta particularidades en cada país, el porcentaje de la población urbana ocupada en sectores de baja productividad es sumamente alto en todos. Mientras en Costa Rica el 40% de la población urbana ocupada se encuentra en sectores de baja productividad, en Nicaragua esta cifra alcanza el 60%.

La heterogeneidad laboral es fuente de dispersión salarial y de distintas dinámicas en el ingreso de los trabajadores. Mientras que el salario medio del grupo de más alta productividad se beneficia con ingresos crecientes, en el resto ha tendido a mantenerse casi en el mismo nivel o a disminuir. Por ello aumenta la brecha en el ingreso, siendo los casos extremos los de Honduras y Guatemala, donde los trabajadores con ingresos altos reciben en promedio 325% y 517% más que los trabajadores no profesionales ni técnicos en establecimientos de hasta cinco personas.

ii) Distribución del ingreso. En los noventa, la distribución del ingreso muestra signos de mayor desigualdad. Si la economía experimentó una reactivación, el desempeño en materia de distribución del ingreso es bastante pobre. El único país que muestra signos favorables es Honduras, ya que los primeros cuatro quintiles aumentaron su participación, mientras que el de mayores ingresos la redujo. En ese sentido, durante la última década su coeficiente de Gini mostró una tendencia positiva al disminuir en el área urbana de 0.487 a 0.448, y en lo rural de 0.465 a 0.427. Pero a pesar de lo anterior, positivo/a, el país tiene la peor distribución del ingreso pues el 20% más rico percibe el 52% de la riqueza, el 20% más pobre apenas un 5%.

Cuadro 34
Indicadores condiciones de vida
Medios de comunicación

País	Teléfonos		Celulares		Televisores		Radios	
	1980	1990	1995	1999	1980	1999	1980	1997
Costa Rica	69	101	5.5	35.0	68	229	202	271
El Salvador	15	24	2.5	62.0	66	191	342	464
Guatemala	12	21	2.8	30.0	25		51	80
Honduras	8	17	n.d.	12.0	18	95	140	395
Nicaragua	11	13	1.1	9.0	57	69	239	278

Fuente de teléfonos, televisores y radios: WB (World Bank), 2001; World Development Indicators CD-ROM.

Fuente de teléfonos celulares: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, EEUU: Informe de Desarrollo Humano, 2000 y 2001.

Como es sabido la distribución del ingreso es función de la evolución y comportamiento del empleo y los ingresos laborales. La evolución del empleo descrita ha contribuido a acentuar ciertas tendencias regresivas. Aunque en la mayoría de los países creció el ingreso promedio de los hogares, el porcentaje de los que reciben ingresos por debajo de ese promedio, oscila en torno al 70% en todos los países y en el mejor de los casos se mantuvo constante durante toda la década.

Ahora ya se sabe que el aceleramiento del crecimiento económico no basta por sí solo para reducir las desigualdades pues es necesaria la intervención del Estado. El deterioro de los ingresos suele ser más marcado en las ocupaciones de baja productividad y la insuficiencia en la generación de trabajo con productividad y remuneraciones por encima de la pobreza, tiene consecuencias directas sobre la desigualdad, la brecha en los ingresos y la polarización de la sociedad centroamericana.

iii) Pobreza e indigencia. La situación de la pobreza e indigencia en Centroamérica muestra diferencias en magnitud y evolución en los últimos años. Los niveles de pobreza, salvo Costa Rica, son extremadamente altos. La información disponible prueba que Guatemala, Honduras y Nicaragua tienen los niveles más altos en América Latina.

Durante los noventa con el regreso del crecimiento económico se esperaba una reducción de la pobreza y la indigencia, que sólo se logró en Costa Rica por el papel activo del Estado que rebajó la magnitud de la pobreza. En cambio, Honduras, donde tres de cada cuatro hogares son pobres, la disminución de los índices de pobreza fue marginal. Los resultados sobre los niveles de indigencia muestran una tendencia similar a la de la pobreza.

Cuadro 35
Centroamérica: magnitud de la pobreza urbana y rural, 1990-1997
(Porcentajes)

	Año	Hogares en situación de pobreza a/			Hogares en situación de indigencia b/		
		Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural
Costa Rica	1990	24	22	25	10		12
	1997	20	17	23			
El Salvador	1995	48	40	58	18	12	27
	1997	48	39	62	19	12	28
Guatemala	1989	63	48	72	37	23	45
Honduras	1990	75	65	84	54	38	66

Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 1993, 1995, 1996, 1997 y 1998, Santiago de Chile.

a/ Porcentaje de los hogares cuyo ingreso es inferior al doble del costo de una canasta básica de alimentos. Incluye hogares en situación de indigencia.

b/ Porcentaje de hogares cuyo ingreso es inferior al costo de una canasta básica de alimentos.

A pesar de que Centroamérica tiene una distribución porcentual similar entre la población urbana y rural, la pobreza y la indigencia afectan más dramáticamente a la sociedad rural. Esta característica es cada vez más pronunciada, ya que la pobreza y la indigencia urbanas bajan a tasas mayores que la rural. El caso de El Salvador es más preocupante porque mientras la pobreza urbana disminuye, la rural muestra una tendencia ascendente. La escasez de oportunidades en el medio rural hace que el círculo vicioso de la pobreza sea más difícil de romper. Esto afecta en mayor proporción a los niños y jóvenes de este sector, ya que forman el grupo más numeroso, tienen tasas altas de desnutrición y, en la mayoría de los casos, más que el acceso a, el problema del niño campesino es su permanencia en el sistema educativo. Guatemala tiene mayor pobreza e indigencia en el mundo rural, donde la mayoría son indígenas.

EL FUTURO O LA INCERTIDUMBRE DEMOCRÁTICA

Centroamérica ha avanzado en el plano de la democracia como estructuración institucional, como régimen político y como proceso electoral. La democracia se reafirma celebrando elecciones que hasta ahora sólo son formalidades de renovación de gobierno. Sin embargo, el balance general, tanto en el plano de los resultados del desarrollo económico como de la equidad y las políticas sociales, es muy negativo. Se ha divulgado ya la noción que la democracia es algo más que un régimen democrático. Se reconocen los avances en la democracia política, pero, en términos de construcción de ciudadanía y de organización y participación política, éstos son limitados e incluso pueden haberse detenido.

Lo anterior más que una paradoja es una contradicción entre la relativamente alta inclusividad política y la baja

integración económica y social, lo que ha llevado a los agudos contrastes y conflictos que vivimos en los últimos años, pero también al punto de inflexión que ahora está experimentando la región centroamericana. En otras palabras, es la viabilidad democrática lo que está en cuestión: ¿cuánta pobreza soportara aún nuestra democracia electoral?

Es importante examinar cuál es el orden estatal de nuevo tipo que está emergiendo, ¿qué es lo que va a reemplazar al llamado “orden neoliberal”? De qué manera encarar un proceso de innovación en muchos planos: del desarrollo económico, de la igualdad social y de la modernización cultural. Ni en el plano político, ni en el plano intelectual uno puede encontrar respuestas absolutas o modelos acabados. Hay, sí, algunas tentativas que aún esperan la prueba de la vida.

Encontramos una coincidencia, a grandes rasgos, de diversas ofertas políticas, muchas de sabor conservador. Hay una oferta que casi no lo es, basada en la continuidad de lo que se viene haciendo; este es un escenario de espera que la oportunidad llegará, como muchas veces sucedió en el pasado, del exterior y mientras tanto se aplica una política-de-parche con gasto social limitado para detener las explosiones sociales que pueden surgir, junto con una manipulación mediática y política. Otra, es la que apoya iniciativas en que sólo hay que *aggiornar* o modificar el modelo neoliberal, limando sus aristas y asegurando el crecimiento económico para aplicar alguna política social. Este es un escenario de confianza en los efectos positivos de la globalización y del TLC. Hay una tercera, que trata de combinar crecimiento económico con justicia social y profundización de la democracia ciudadana con construcción institucional. Este supone un escenario en que un Proyecto Nacional de largo plazo recibe el apoyo, la coincidencia de diversas fuerzas políticas y sociales. Esta opción supone una plena conciencia del momento histórico

que se vive. El eje de estas tres opciones es el tipo de Estado que se quiere tener y las coaliciones políticas que lo apoyen. La fuerza de esas propuestas depende de que haya intereses populares en crecimiento, organizados, fuertes; que se pueda aprovechar y superar la racionalidad tecnocrática y las ventajas relativas del mercado. En la región, sin duda, hay fuerzas sociales, actores, intelectuales, que están interesados en una u otra opción.

¿Y el populismo? Es bueno saber caracterizarlo. Si lo entendemos solamente como una manipulación política del control de un líder personalista, retórico, puede ser por cierto una tendencia preocupante para las democracias. Pero si lo entendemos como una forma de responder a la multiplicación de expectativas insatisfechas, a la incorporación activa de nuevos actores sociales, fruto de los resultados de procesos históricos, entonces el populismo tiene otro significado y otros efectos: renovación del orden social y político. Esto ya no es populismo sino una estrategia popular.

Lo que es central y no debe perderse de vista, es el papel del Estado como actor del desarrollo y como herramienta central de la democracia y la ciudadanía. Los 75 años de historia prueban el fracaso secular de un poder débil. La fuerza de las herencias durante casi un siglo plantean la urgencia de rectificar. Debe entenderse, por ejemplo, la necesidad de contar con un Estado fuerte, como se describe en alguna parte del texto: promotor del desarrollo social conjuntamente con el mercado, cuya productividad debe crecer. Control del mercado para producir procesos de integración social. Reconocer ciudadanías y garantizar el ejercicio de los derechos a ellas inherentes.

No es posible lograr una democracia sostenible si no hay procesos de inclusión y de integración social genuinos. Y por el otro lado, no se puede abrigar la expectativa de que

Centroamérica se desarrolle si no tiene una estrategia activa frente a la globalización. El único actor que da garantías e instrumentos para hacerlo es el Estado modernizado. Hay mucho por reformar, resolver desde el Estado los problemas de clientelismo, las estructuras corporativas tan arraigadas en sus elites dirigentes y en las estructuras sociales. Fortalecer el Estado para que por fin, en Centroamérica aparezcan ciudadanos socialmente activos, titulares de derechos sociales en movimiento. Políticamente organizados. Estos 75 años de historia arrojan suficientes experiencias para que la nueva generación rectifique, se renueve, se modernice e impulse el cambio en provecho de todos.

NOTAS SOBRE EL TLC CON ESTADOS UNIDOS

En la última década el crecimiento económico de Centroamérica ha sido estable, pero moderado e insuficiente. En este contexto se ha empezado a aplicar el RD-CAFTA (siglas en inglés de Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana), que vincula a una zona subdesarrollada con la principal potencia económica mundial y con el que se mantienen importantes asimetrías. Tras la década perdida de 1980, el modelo económico promovido por el Consenso de Washington y aplicado servilmente por los gobiernos, no ha logrado dinamizar el crecimiento económico en Centroamérica. En los últimos años la tasa media anual de crecimiento regional se ha situado entre el 3,2% y el 3,5%.

La homogeneidad política de la región, una razonable estabilidad macroeconómica y un leve crecimiento del comercio intrazonal son aspectos positivos que contrastan con la falta de competitividad y la desigualdad en la distribución del ingreso. Hay un retraso significativo en competitividad, pues según el índice del World Economic Forum para 2005,

los países tenían las posiciones 56^a (Costa Rica), 60^a (El Salvador), 95^a (Guatemala), 96^a (Honduras) y 97^a (Nicaragua), de una muestra de 117 países. El modelo que trató de implantarse ha conseguido aumentar y diversificar las exportaciones no tradicionales, en particular las destinadas a EEUU que absorbe la mitad de sus exportaciones. Se ha logrado un importante incremento de la participación de las manufacturas en las exportaciones extrarregionales (la maquila de ropa y en el caso de Costa Rica, productos electrónicos). El éxito del modelo fue facilitado por la concesión unilateral desde 1984 de preferencias comerciales por EEUU a los productos regionales en el marco de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC).

El pequeño tamaño de las economías centroamericanas, las profundas desigualdades que entorpecen el crecimiento y limitan la demanda, y los desastres naturales son factores adversos que completan el escenario donde el RD-CAFTA se ha empezado a aplicar a partir de mediados del 2006. Después de la firma del tratado del Mercado Común Centroamericano (MCCA) en 1960, como se dijo en otra parte de este trabajo, el DR-CAFTA se convierte en el principal acuerdo comercial suscrito por estos países. Este tratado fue firmado en el 2004 y debía cobrar vigencia el 1 de enero de 2006. Sin embargo, en el momento de redactar este texto no ha sido ratificado por Costa Rica. Se espera su entrada en vigor hacia julio de 2006.

El contenido del DR-CAFTA es parecido a los TLC ya firmados por EEUU con México y Chile y próximo a hacerlo con Colombia y Perú. Tienen en común la casi total liberalización del comercio recíproco de bienes y servicios y la inversión extranjera; incluye medidas en materia de propiedad intelectual, derechos laborales y medioambientales y compromete a los Gobiernos a establecer algunas instituciones para administrar el tratado.

A corto plazo no es previsible una importante creación de comercio ya que la mayor parte de los productos exportados por Centroamérica ya cuentan con preferencias arancelarias temporales en el mercado norteamericano en el marco de la ICC. A medio y largo plazo, es de esperar que crezca el flujo comercial tanto por el acceso de nuevos productos centroamericanos a EEUU como por el aumento de las cuotas de los productos exportados. Los beneficios esperados vendrían por medio de inversiones directas y del fortalecimiento de un marco jurídico más estable que las estimularía; vinculado a ello está la adopción de disciplina comercial y el tratamiento de inversiones extranjeras con estándares más elevados que los actuales.

La valoración cuantitativa del potencial impacto del RD-CAFTA es fundamental ya que se vincula con el principal socio comercial de la región y con el que existen importantes asimetrías económicas. La mayor parte de los estudios realizados coinciden en tres resultados fundamentales: a) El DR-CAFTA tendrá un leve y desigual efecto en el crecimiento centroamericano en relación con otras alternativas que no contemplan un tratado de libre comercio; b) el efecto positivo se ampliaría si el DR-CAFTA se acompaña de una profundización de la integración centroamericana; y c) la distribución de esos beneficios será desigual en el interior de cada país así como se sugiere que el crecimiento económico sería mayor en dos de los cinco países (¿Guatemala y El Salvador?).

No existen estudios econométricos que analicen el potencial beneficio del DR-CAFTA por sectores productivos, pero se pueden identificar algunos de los probables sectores ganadores del comercio libre. En el sector primario el grupo de productos agrícolas no tradicionales (frutas, hortalizas y plantas) pueden consolidar las ventajas otorgadas por la ICC. Entre los sectores agrícolas tradicionales, el potencialmente

más beneficiado será el sector azucarero. Y desastrosos en los productos alimenticios de consumo popular. En el sector secundario, los textiles y confección pueden impulsar el desarrollo de una industria textil regional y no sólo de la maquila de confección a condición de que haya iniciativas empresariales sólidas. El RD-CAFTA permitirá el uso de hilos e hilazas de los siete países firmantes en la fabricación de telas exportadas a EEUU libres de aranceles. Para aprovechar tales ventajas será necesario que los productores centroamericanos actúen coordinadamente e impulsen encadenamientos productivos tales como el basado en la cadena algodón-textil-confección.

Los Gobiernos centroamericanos esperan que se genere empleo y se contribuya a reducir la pobreza, pero existe el riesgo de que el TLC tenga un impacto negativo pues no se prevé que aumente los empleos en los sectores vinculados a la ICC, sino que, a lo sumo, se mantengan. Además es probable que se pierdan empleos en el sector textil y de la confección, como consecuencia del desmantelamiento del Acuerdo Multifibras y la aparición de países exportadores con menores costes laborales (China, Pakistán, la India, Vietnam y Bangladesh). Los trabajadores de la pequeña y mediana empresa (PYME) serán los más perjudicados. En el sector agrario tradicional y ganadero es evidentemente previsible una pérdida importante de producción y de empleo. No se olvide que el DR-CAFTA no obliga a EEUU a eliminar su política de subsidios a sus agricultores. En este contexto, el sector agrario tradicional (especialmente, maíz y frijoles) y el sector ganadero (leche, pollo, cerdo y carne vacuna) van a sufrir la competencia desleal de productos altamente subsidiados, lo que traerá importantes pérdidas para campesinos productores y aumentará la pobreza en estos sectores ya vulnerables.

El DR-CAFTA puede tener algún efecto de crecimiento económico para Centroamérica pero dependiendo del papel del Estado y su iniciativa en la promulgación de leyes complementarias. Si el Estado es pasivo, lerdo o incompetente los efectos negativos pueden aumentar. La evidencia empírica sobre experiencias de liberalización comercial coinciden en que un TLC por sí solo no genera crecimiento, a no ser que esté acompañado por políticas económicas de aprovechamiento de oportunidades y reducción de riesgos. Componentes esenciales son las políticas de atracción de inversiones, de fortalecimiento de la competitividad y las políticas sociales. Para ello, los Gobiernos tiene que aplicar una reforma fiscal integral que incremente sus ingresos.

La entrada en vigor del RD-CAFTA disminuirá los ingresos fiscales por aranceles. Simultáneamente a una urgente reforma fiscal, se podría acudir a los préstamos externos y a la cooperación internacional para financiar la agenda de acompañamiento. La mayor parte de las políticas de la agenda de acompañamiento deberían tener una dimensión regional, pues *la profundización del proceso de integración centroamericana es un elemento clave para aprovechar las oportunidades* ofrecidas por el libre comercio. Aunque es cierto que se han producido avances en el MCCA, todavía queda mucho por hacer. Si no se adoptan las medidas necesarias para fortalecer el proyecto de creación de una unión aduanera centroamericana, la entrada en el DR-CAFTA puede incluso hacer peligrar muchos de los avances conseguidos en los últimos años. La armonización del arancel externo común (AEC) es un ejemplo que ilustra esta situación.

Es este punto, uno de los más importantes pues el establecimiento simultáneo de un arancel común en el marco del MCCA con un TLC con EEUU puede debilitar la armonización conseguida. La entrada en vigor del DR-CAFTA no se producirá de forma homogénea en todos los países centroamericanos; las

concesiones arancelarias fueron negociadas bilateralmente, lo que significa que el cronograma de desgravación arancelaria del RD-CAFTA será distinto en cada país y, por tanto, el AEC no será aplicado en su totalidad por todos los países durante los 20 años del período de desgravación arancelaria. El hecho de que EEUU es el principal socio comercial, que suministra cerca del 40% de sus importaciones convierte la aplicación del DR-CAFTA en un potencial factor perturbador de la unión aduanera centroamericana.³³

³³

Fernando Rueda Junquera, Real Instituto Elcano, El futuro económico de Centroamérica tras el RD-CAFTA: una oportunidad no exenta de riesgos, fotocopia, s/f.

CAPÍTULO 10

LA DESPEDIDA: BALANCE FINAL

La información histórica que termina aquí, hace referencia a lo que a juicio nuestro son algunos de los hechos fundantes del desarrollo centroamericano y que apuntan al fracaso de la modernización. La dimensión política y la económica forman parte de una visión unitaria que no busca determinaciones recíprocas sino relaciones contingentes. En la definición de los momentos clave resaltan por decisivas la acción social (los actores), la fuerza de las ideologías (las ideas), las herencias estructurales (la historia), las influencias múltiples de lo imprevisto (el azar). Como se dijo en la Introducción, un hilo rojo recorre todo el texto de manera implícita pero dándole unidad, *la búsqueda de la modernidad*: los procesos de cambio, las transformaciones encontradas, son analizadas como momentos en que se deja el pasado, en que la sociedad se desembaraza de su condición tradicional, en que los actores juegan a la contemporaneidad. ¿Por ejemplo, por qué el pasaje del atraso a lo moderno es más fácil encontrarlo en Costa Rica que en Honduras? ¿Qué tipo de acciones puede favorecer esa transición?

Varias aclaraciones ayudan a responder tales preguntas. No existe un modelo normativo de modernización, ni como

proceso ni como meta. No es la imagen envidiable de algunos países europeos o de la América del norte lo que la brújula señala. Tampoco existe un único tipo de atraso sino rasgos diversos, casuísticos. En el plano teórico tampoco encontramos un solo modelo interpretativo. La modernización como proceso alude al desarrollo económico y al desarrollo político que entendemos como modernización económica o política. A nuestro juicio, la noción de democracia, *la condición histórica de democracia puede ser asumida como la síntesis del proceso de modernización*. Lo que se quiere decir es que en la historia centroamericana, obstáculos y regresiones incluidas, dejar atrás las dictaduras oligárquicas es sinónimo de progreso y alcanzar la plena constitución de un Estado democrático es sinónimo de modernización. ¿Por qué tal sinonimia?

Hay variadas razones, presentadas en desorden y no de prevalencia causal, cuya síntesis se refiere, por ejemplo, a que la democracia requiere de una sociedad urbana; ciudades donde sus habitantes son ciudadanos no sólo por los derechos de que son titulares y que ejercen libremente, sino porque supone la formación de sujetos con una personalidad que se mueve por la aceptación de valores y normas adquiribles, porque es portador de una cultura secular, laica, abierta al debate y al cambio, sujeto de relaciones sociales racionales porque es autónomo y libre en sus decisiones. La democracia supone además una diferenciación económica y especializaciones funcionales en un mercado capitalista de base industrial, requiere de una sociedad dividida en clases sociales bien perfiladas con fuerte movilidad geográfica y social, desigualdades étnicas o clasistas con tendencias a disminuir, clases medias numerosas, familia nuclear. Activa vida intelectual, artística, académica. Cuando todo esto son logros de un recorrido histórico es porque ya existen, con adelantos o retrasos, libertad para organizarse políticamente

o para cualesquiera propósitos, libertad de expresión, derecho a votar y ser votado. La elegibilidad a los cargos públicos no como una formalidad como tampoco las elecciones regulares, competitivas, justas y plurales. Se tienen diversas opciones de fuentes de información, posibilidad de criticar a los gobernantes y luchar por alternativas políticas.

La democracia está impregnada por un componente liberal que se expresa en la idea de que existen ciertos derechos que el poder estatal no puede negar. ¿Era esto efectivo en la república cafetalera salvadoreña? ¿Podían los indígenas, los campesinos aparceros optar a un cargo público en el Estado oligárquico guatemalteco? Dice con razón O'Donnell que en democracia la única manera de acceder al poder es a través de elecciones: ¿se comportaban así los Somozas, en Nicaragua? La democracia liberal que ha empezado a funcionar, finalmente, en los años finales del siglo pasado en Centroamérica, es más liberal que democrática porque las políticas por la igualdad social no se aplican o no tienen los resultados necesarios todavía.

Modernidad es una época, es la institucionalización del Estado nacional, cohesivo, de derecho, esencialmente democrático, es un mundo de progreso, en que el presente situado en una relativa perspectiva temporal es más valioso que el pasado y en el que sin falsas determinaciones el futuro es posible como realización del presente. El balance de 75 años de historia no estimula el entusiasmo. No buscamos con la enumeración de las condiciones para la democracia alcanzar un mundo feliz. Pero sí sociedades menos injustas, menos excluyentes, menos violentas. El desafío está planteado para que no haya regresiones. Nuevos problemas, más arduos surgirán, pero distintos, lejanos, de los que acogotaron la existencia social de millones de centroamericanos, en estos 75 años de dictaduras cafetaleras, de predominio oligárquico, de esta élite agraria e iletrada que todavía se resiste a morir políticamente.

CAPÍTULO 11

INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA

Pocas son las obras que se ocupan de la región centroamericana en su conjunto y a la vez respetan los rasgos nacionales. El de Kenneth Grieb, *Central América in the Nineteenth and Twentieth Centuries: An Annotated Bibliography*, Boston, 1988 es una buena introducción al siglo XIX. Franklin Parker, *The Central American Republics*, Londres, 1964, contiene un análisis de la economía, la sociedad y las instituciones de cada país, así como información útil, en el período que termina en 1960. Más completo es Ralph Lee Woodward, Jr., *Central America: A Nation Divided*, Nueva York, 1985, que subraya la homogeneidad regional y contiene también una sección exhaustiva titulada «Selective Guide to the Literature on Central America». Importantes por sus proposiciones interpretativas regionales son Edelberto Torres Rivas, *Interpretación del desarrollo social centroamericano*, San José, C. R., 1971, una de las primeras obras que se ocuparon de la región en su conjunto; y Héctor Pérez Brignoli, *Breve historia de Centroamérica*, Madrid, 1986. La historia política más detallada en el siglo XX es James Dunkerley, *Power in the Isthmus: A Political History of Modern Central America*, Londres, 1988.

Varios libros se ocupan del conjunto regional, pero se concentran en aspectos o períodos concretos. Rodolfo Cerdas Cruz, *La hoz y el machete*, San José, C. R., 1986, examina el papel de la Tercera Internacional en América Central, en 1920-1936. Para temas específicos véanse Thomas M. Leonard, *The United States and Central America, 1944-1949*, Tuscalosa, Ala., 1984; Andrés Opazo, *Estructura agraria, dinámico de población y desarrollo capitalista en Centroamérica*, San José, C. R., 1978, es un análisis detallado de los cambios habidos en la agricultura y los movimientos demográficos. En *The Religious Roots of Rebellion: Christians in Central American Revolution*, Nueva York, 1984, Phillip Berryman explica los cambios que experimentó la Iglesia centroamericana y el papel del clero en la lucha política.

De las numerosas obras que se han escrito sobre la crisis política que se manifestó a finales del decenio de 1970, tres contienen proposiciones analíticas especialmente claras: Donald E. Schulz y Douglas H. Graham, eds., *Revolution and Counterrevolution in Central America and the Caribbean*, Boulder, Colo., 1984, colección de ensayos históricos y teóricos; Walter LaFeber, *Inevitable Revolution: The United States in Central America*, Nueva York, 1984, edición revisada en 1993, examen de la política norteamericana en la región; y Morris Blachman, William LeoGrande y Kenneth Sharpe, *Confronting Revolution: Security Through Diplomacy in Central America*, Nueva York, 1986, colección de ensayos sobre las relaciones internacionales en la crisis de América Central. Véase también Peter Calvert, *The Central American Security System: North-South or East-West?*, Cambridge, Ing., 1988. Roy Gutman, *Banana Diplomacy: The Making of American Policy in Nicaragua (1981-87)*, Nueva York, 1988, es un estudio bien documentado de la oposición norteamericana al experimento sandinista en Nicaragua.

Sobre la economía centroamericana hay varios libros indispensables. El primero es una investigación que llevó a cabo la SIECA (Secretaría de Integración Económica Centroamericana), llamado también el informe Rosenthal en honor del economista que dirigió el proyecto: *El desarrollo integrado de Centroamérica en la presente década: bases y propuestas para el perfeccionamiento y la reestructuración del Mercado Común*, Buenos Aires, 1973, comprende trece volúmenes que contienen el estudio más completo de la economía regional. Dos estudios con perspectiva regional escritos por economistas norteamericanos son John Weeks, *The Economies of Central America*, Nueva York, 1985, y Robert C. Williams, *Export Agriculture and the Crisis in Central America*, Chapel Hill, N. C., 1986, documentado análisis de los efectos del «auge» económico regional de los años sesenta y setenta. W. A. Durham, *Scarcity and Survival in Central America: Ecological Origins of the Soccer War*, Stanford, Calif., 1979, contiene un riguroso análisis cuantitativo de los problemas demográficos de El Salvador y una interpretación de la llamada «guerra inútil» de 1969. También importante es Richard Fagen, ed., *Transition and Development: Problems of Third World Socialism*, Nueva York, 1986, que reúne varios análisis de la política económica en la Nicaragua revolucionaria y ofrece un estudio teórico de su viabilidad. Juan Alberto Fuentes, *Desafíos de la integración centroamericana*, San José, C. R., 1989, análisis de los problemas a los que se enfrenta actualmente el mercado común de Centro América y de la experiencia de veinte años de integración económica. Programa Regional del Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC), *Cambio y polarización ocupacional en Centroamérica*, San José, C. R., 1986, estudio del empleo, el mercado laboral y el sector no estructurado. Finalmente, el estudio de Rafael Menjívar y Juan Diego Tejos, *La pobreza en Centroamérica*, San José, C. R., 1990, resume los

efectos sociales del estancamiento económico y el aumento de la pobreza.

Victor Bulmer-Thomas, *The Political Economy of Central America Since 1920*, Cambridge, 1987, es sin duda la mejor obra publicada hasta la fecha sobre América Central. Contiene no sólo una historia económica de los últimos sesenta años, sino también un análisis de la vida política y social de la región. Ana Isabel García y Enrique Gomáriz, eds., *Mujeres centroamericanas: efectos del conflicto*, 2 vols., San José, C. R., 1989, es importante para entender la región en clave de género.

Otros trabajos importantes, son: Torres Rivas, Edelberto et al. *Centroamérica hoy*, México, Siglo XXI Editores, 1975. *Costa Rica y los hechos políticos de 1948*, San José, Editorial Costa Rica, 1969. Billault, Jean-Paul, *La démocratie costaricienne, mythe ou réalité*, monografía de DES de Ciencias Políticas, París I, 1974 (mimeografiada). Arson, Cynthia, "The Salvadorian Military and Regime Transformation" en Grabendorff, Wolf, Heinrich W. Krumwiede y Jorg Tödt, *Political Change in Central America. Internal and External Dimensions*, Boulder, Westview Press, 1984, pp. 97-106. Institute for Comparative Study of Political Systems, *El Salvador Election Factbook*, Washington, marzo de 1967. Montes, Segundo, *El Salvador, las fuerzas sociales en la presente coyuntura (enero de 1980 a diciembre de 1983)*, San Salvador, UCA, Departamento de Sociología, abril de 1984. Salazar Valiente, Mario. "El Salvador, crisis, dictadura, lucha (1920- 1980)", en Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, *América Latina: Historia de medio siglo*, tomo II, México, Siglo XXI, 1981, pp. 87-138. White Alastair, *El Salvador*, Nueva York, Praeger Publishers, 1977. Adams, Richard N., *Crucifixion by Power: Essays on Guatemala National and Social Structure, 1944-1966*, Austin, Texas, University of Texas Press, 1970.

También son importantes, Aguilera Peralta, Gabriel, Jorge Romeo Imery et al., *Dialéctica del terror*, San José, EDUCA, 1970. Immerman, R. H., *The CIA in Guatemala: The Foreign Policy of Intervention*, Austin, Texas, The University of Texas Press, 1982. Jonas, Susan y David Tobies, *Guatemala, una historia inmediata*, México, Siglo XXI, 1976. *Area Handbook for Honduras*, The American University Foreign Area Studies, Washington, US Government Printing Office, 1971. Fernández, Arturo, *Partidos políticos y elecciones en Honduras*, Tegucigalpa, Guaymuras, 1981. Marinas Otero, Luis, *Honduras*, Tegucigalpa, Editorial Universitaria, 1983. Meza, Víctor, “Crisis del reformismo militar y coyuntura política” en Boletín del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, Universidad Autónoma de Honduras, septiembre de 1980. Posas, Mario, *El movimiento campesino hondureño*, Tegucigalpa, Guaymuras, 1981. Stokes, William S., *Honduras, an Area Study in Government*, Madison, Wisconsin, 1950 y Deborah J. Yashar, *Demanding Democracy, reform and reaction in Costa Rica and Guatemala, 1970/50s*, Stanford University Press, Stanford, 1997

Sobre Nicaragua, Chamorro, Pedro Joaquín, *Los Somoza, una estirpe sangrienta*, Buenos Aires, El Cid Editor, 1979. Corragio, J.L., *Démocratie et révolution au Nicaragua*, París, CETRAL, L’Harmattan, 1988. Gorostiaga, Xavier, “Los dilemas que enfrenta la revolución sandinista a tres años del triunfo popular”, en *Envío*, Instituto Histórico Centroamericano, núm. 13, julio de 1982. López, Julio, et al., *La caída del somocismo y la lucha sandinista en Nicaragua*, San José, EDUCA, 1979. Millet, Richard, *Guardianes de la dinastía*, San José, EDUCA, 1979. (Primera edición en inglés, Nueva York, Orbis Books, 1977). Sauvage, Léo, *Les États-Unis face à l’Amérique Centrale*, París, Balland, 1985. Carlos M. Vilas *La Revolución Sandinista*, ed. Legasa, Bs.As. 1984, p. 144. Nueva York, Monthly Review Press, 1986. Wheelock, Jaime, *Imperialismo y dictadura*, México, Siglo XXI, 1979.

Los textos sobre aspectos particulares de la crisis y la revolución son numerosos. Sobre aspectos ideológicos J. Weeks, *An Interpretation of the Central American Crisis*, en *Latin American Research Review*, Univ. of New México, Vol. 21:2, p 31 y sigs.; Jon Sobrino, *Christology ant the crossroads*, Orbis Books, 1978; E. Torres-Rivas, *Encrucijadas e incertezas en la izquierda centroamericana*, FLACSO, Guatemala, 1995; Jeff Goodwin, *No other way out, States and Revolutionary Movements, 1945-1991*, Cambridge University Press, Cambridge, 2001, Alain Rouquie, *Guerras y Paz en América Central*, FCE, México, 1994, Gilles Bataillon, *Genése des Guerres Internes in Amérique Central (1990-1983)*, Les Belles Letres, Paris, 2003..

Aspectos generales sobre la guerra y la paz en Carlos M. Vilas, *Mercado, Estados y Revoluciones en Centroamérica 1950-90*, UNAM, México, 1994; Howard H. Lentner, *State Formation in Central America, The Struggle for Autonomy, Development and Democracy*, Greenwood Press, Westport, 1993; Charles D. Brockett, *Political Movements and Violence in Central América*, Cambridge University Press, Cambridge, 2005; y sobre temas nacionales, Elisabeth J. Wood, *Forging Democracy from Below, Insurgent transitions in South Africa and El Salvador*, Cambridge University Press, Cambridge, 2000; Hugh Byrne, *El Salvador's Civil War, a Study of Revolution*, Lynne Rienner Pub., Boulder. 1995; Juan Manuel Villasuso (ed) *Procesos de cambio en Costa Rica, Reflexiones al inicio del siglo XXI*, FES-Cedal, San José, 2003.

Constituyen una fuente inapreciable de información estadística la serie publicada por FLACSO, *Centroamérica en Cifras*, San José, 1986, 1991, 2002 y 2006; y los *Informes Nacionales de Desarrollo Humano* publicados en los cinco países de la región y dos *Informes Regionales*. El correspondiente a Costa Rica se llama *El Estado de la Nación*, de los que se han publicado diez números anuales.

A N E X O

¿CÓMO ÉRAMOS HACE MEDIO SIGLO?

ALGUNOS RASGOS CUANTITATIVOS DE LA SOCIEDAD CENTROAMERICANA (1945/1955)

I. PRIMERA PARTE:

CRISIS, OLIGARQUÍA, ASPECTOS SOCIALES

1. INTRODUCCIÓN: ELEMENTOS DE LA HISTORIA PREVIA

Esta introducción aclaratoria fue escrita en 1995. Se ha hablado abundantemente acerca de las causas y el desarrollo de la crisis centroamericana que en la forma de conflicto armado o guerra civil se manifestó a *mediados de la década de los setenta*. La explicación más general sugiere que las frustraciones por alcanzar la democracia liberal y un crecimiento económico equitativo, con menos exclusiones tienen diversas causas, y muchas de ellas ocurrieron en la inmediata Segunda Posguerra.

En estas notas, se hace referencia estadística, cuantitativa, a algunos de tales causas referidas a los años cuarenta y cincuenta. El relativo valor de este ensayo referido a la inmediata posguerra, si así se considera, es que utiliza in extenso datos estadísticos desconocidos u olvidados y que se traen a cuenta como referencias históricas sobre la magnitud del atraso de estas sociedades.

Sin embargo no fue el atraso sino la modernización incompleta lo que aparece como la matriz de la crisis. No

se explica por algún tipo de estancamiento o parálisis de la sociedad, sino por el contrario, por las características de lo que llamaríamos “el movimiento de la estructura”, por las formas e impulsos de su crecimiento económico, por la naturaleza de la modernización capitalista en el seno de una sociedad atrasada y que afecta desigualmente a los actores políticos.³⁴ El “modelo” de crecimiento supone el juego de fuerzas sociales e institucionales, de origen interno y externo, cuyo valor explicativo también se intenta desentrañar como antecedentes, unos más próximos, otros más remotos, de la crisis.

A mediados de la década de los cuarenta, la estructura de dominación política entra en una fase crítica en la forma de una ofensiva popular contra los regímenes tradicionales oligárquicos. El cuadro 1 contiene un resumen de fechas y acontecimientos importantes de lo que a juicio nuestro fue esa fase crítica de la dominación oligárquica y de algunos de sus resultados. Obviamente, el tema merece un tratamiento más detenido que no es posible sino esquematizar de la siguiente manera:

34

Los países pobres o atrasados se definían a partir de un *set* de variables o indicadores de naturaleza negativa, por comparación con los aspectos positivos que acompañan a las sociedades ricas o adelantadas. Un país pobre, dicen Meier y Baldwin, tiene esencialmente seis características básicas: producción agrícola, presión demográfica, no desarrollo de sus recursos naturales, población económicamente atrasada, falta de capital y fuerte apertura externa. G. Meier y R. Baldwin, *Economic Development: Theory, History, Policy* (New York: John Wiley & Sons, 1959), p. 173.

Cuadro 1
Centroamérica: Información sobre la crisis de posguerra

País	Acontecimientos	Fecha	Resultados
Guatemala	Huelga de maestros, de la universidad y huelga general en la ciudad de Guatemala; división del ejército.	Junio/Diciembre 1944	Renuncia del dictador general Ubico; triunfo militar; triunfo cívico militar; primeras elecciones libres asambleas Legislativas y Constituyente; elección presidencial.
El Salvador	Conspiración y división del ejército; manifestaciones y violencia en San Salvador; huelga en la universidad y huelga general.	Marzo/Abril 1944	Caída del dictador general Hernández; Gobierno coronel Aguirre; triunfo cívico militar y elecciones (1946).
Honduras	Malestar y manifestaciones populares; ² huelgas generales frustradas; violencia contra líderes de la oposición.	1945-1947 1948	Elección candidato único, Juan Manuel Gálvez, como solución de continuidad. ^{1/}
Nicaragua	Descontento y manifestaciones populares; crisis y división del Partido Liberal y Conservador; huelga general frustrada.	1945 Febrero 1947	Somoza evita su reelección y eligen a L. Argüello; 28 días después golpe militar para nombrar a Víctor Román; ² segunda reelección de Somoza (1949).
Costa Rica	Amplio descontento por métodos electorales; régimen de Calderón Guardia: violencia contra la oposición: guerra civil.	1946-1947 Junio 1948	Fundación 2ª República; nueva Constitución; nuevo sistema electoral; elecciones libres; gobierno de J. Figueres.

Fuente: recopilación de información documental, diversos orígenes.

NOTAS^{1/}: Gálvez había sido en los últimos diez años abogado de la UFCO.

^{2/}: Román y Reyes era tío carnal de Somoza, fue impuesto y convocó a elecciones después de dos años.

Como puede verse en el resumen sinóptico anterior, ocurren casi de manera coetánea conflictos políticos contra los regímenes de cada país, conflictos que tienen diversos desenlaces, pero cuyo denominador común es la lucha por la democracia política, que es en sí misma una reivindicación anti-oligárquica, contra la historia reciente y contra las características autoritarias de la sociedad. Otro elemento similar en toda la región es la aparición en la escena política de líderes, organizaciones e intereses intelectuales (para no hablar de ideología) de clase media y de grupos obrero-artesanales urbanos.

2. DOS PALABRAS SOBRE LO “OLIGÁRQUICO”

Como se ha venido utilizando el término, es conveniente explicar qué significa lo *oligárquico* en el razonamiento que venimos haciendo; sin ánimo peyorativo, tiene un profundo sentido equívoco que conviene precisar hasta donde es posible. La literatura latinoamericana en ciencias sociales lo ha utilizado para hablar de una modalidad del Estado y/o para referirse a una clase o fracción de ésta por su estilo de ejercicio del poder. Es mejor utilizarlo como una categoría descriptiva que alude a una forma particular de dominación política, a una manera de relación y conflicto histórico entre clases.³⁵

En tal sentido, lo oligárquico es la conducción política que corresponde al período de formación del Estado nacional, momento que corresponde al largo trecho histórico de consolidación de la economía comercial para la exportación, es decir, cuando se establecen de manera estable, orgánica, los

³⁵ Este tipo de formulación implica una revisión personal que debería concluir con una autocrítica. Pero los “golpes de pecho” que no se prolongan en una nueva propuesta, bien formulada, sólo lastiman la epidermis sin conmover la conciencia. Por ello, el desarrollo de esta revisión está pendiente.

lazos con el mercado mundial y, al mismo tiempo, cuando internamente las instituciones del orden colonial quedan redefinidas o superadas en un proyecto de integración y modernización capitalista.

La élite que es capaz de hacerse de tierra y capital para sembrar, procesar o comerciar café, se convierte en una fuerza social dominante, violenta en sus métodos. Sus intereses son intereses mayores hasta alcanzar dimensión nacional y por ello el poder político se pone directamente a su servicio. El “Estado oligárquico” como fuerza coactiva, recoge el poder de la burguesía agraria en su fase de formación, cuando todavía es una representación incompleta del capital y cuando los mecanismos de la acumulación originaria despliegan su ofensiva para constituir un importante fondo de tierras.

En la constitución de esta dominación política –y por lo tanto, no es sólo el Estado lo que cuenta, sino las otras instituciones, como la Iglesia, los partidos políticos, las diversas expresiones ideológico/culturales, etc.– se va conformando una relación profundamente desigual y autoritaria entre un pequeño grupo de propietarios terrateniente/comerciantes y una masa de campesinos o peones agrícolas (descontados pequeños grupos sociales intermedios que no cuentan en el momento constitutivo de que hablamos) a los que se sojuzga por la fuerza.

La subordinación política –paralela a la sobreexplotación económica– se apoya en una extensa y profunda estructura de privilegios sociales reales, con la base que otorga la propiedad de la tierra, o la tradición que acompaña el color de la piel o el apellido, la herencia de la posición social, el origen familiar. Apoyándose en elementos autoritarios de la estructura precedente (la poderosa raíz colonial), la dominación a lo “oligárquico” pudo descansar en instituciones que recrearon internamente y sirvieron para reforzar la subordinación de clase, tales como las elecciones de segundo grado y el voto

censitario, el partido de notables, la representación delegada en abogados y generales.³⁶

Fue una forma de dominación política basada en la violencia institucionalizada, en la exclusión permanente de las masas y en tipos de conflicto social interclasista. Buscaba su legitimidad en un balance de fuerzas sociales en que sólo contaban pocos. De ahí la tendencia a reducir a sinónimo “oligarquía” y “élite” (pequeño número) y a definir como un rasgo constitutivo sus múltiples posibilidades autorreclutadoras, la transmisión familiar hereditaria del poder, el carácter cerrado, endogámico, profundamente racista del grupo.

La conducta política del hombre oligarca³⁷ fue competitiva y tolerante inter-pares y profundamente despótica hacia abajo a quienes no reconocía derecho alguno. En el ámbito de un juego político restringido, la formalidad proclamada como normas y valores fundantes, obedecía más para llenar espacios simbólicos que a las necesidades de la legitimación y el consenso.

El ejercicio del poder que supone estos actores y un escenario como el que se ha descrito brevemente, no queda bien enmarcado si no agregamos dos elementos diversos y que no por citarse de último pueden ser considerados marginales a la

³⁶ A. Borón le llama “estado liberal” en su trabajo *The Formation and Crisis of the Liberal State in Argentina, 1890-1930* (Cambridge: Harvard University Press, 1976); Marcos Jiménez Zapiola, *El régimen oligárquico* (Buenos Aires: Amorrortu, 1975); el Instituto de Estudios Peruanos ha publicado numerosos trabajos sobre este tema, sólo citamos a S. López, por tratarse de un esfuerzo de síntesis: “El Estado oligárquico en el Perú: un ensayo de interpretación”, en *Estudios Sociales Centroamericanos*, No. 20 (1978).

³⁷ La expresión sintética “hombre oligárquico” fue propuesta por F. Barricaud en su ensayo sobre la oligarquía peruana.

explicación. Uno, de naturaleza interna, apunta a la existencia de una extendida economía campesina-familiar de subsistencia, que sólo parcialmente va quedando articulada a la dinámica del polo agroexportador. Otro, de naturaleza externa, es la existencia de un sistema internacional de estados-nacionales en el que hay también relaciones de poder y dominio.

La plantación bananera, que comienza justamente con ese siglo y la influencia diplomático/militar norteamericana que es precoz en el tiempo y competitiva en el espacio, constituyen elementos en la conformación de esto que tan reiteradamente hemos llamado la cultura oligárquica. Esta no fue inicialmente pro-norteamericana pero aplicó políticas públicas de desarrollo a través del modelo de “concesiones”, de privilegio con los extranjeros.³⁸

Con los elementos analíticos anteriores conviene intentar un resumen y desarrollar el tema que interesa. Ya se dijo que Centroamérica atravesó un período de estancamiento económico entre el “crack” financiero internacional de 1929 y el fin de la Segunda Guerra, salvo un leve repunte a la mitad de los treinta. La estabilidad política se conservó a base de regímenes militares autoritarios, salvo Costa Rica. El estancamiento, que fue en verdad un sofocamiento de la vida total de estas sociedades, termina a mediados de los cuarenta, por lo que la posguerra tiene el efecto de una ruptura. En efecto, en este período se inicia la crisis política que ya describimos muy rápidamente, que es paralela a la revalorización coyuntural de la agricultura de exportación.

³⁸ Fue frecuente que el Estado negociara con empresarios extranjeros el desarrollo de algún servicio público o alguna producción para lo cual no había suficiente capital y técnicas. El concesionario recibía una amplia protección estatal en la forma de dotación de tierras, exenciones hasta por 99 años, etcétera.

Ya vimos que la crisis política de los cuarenta no se resuelve por la derrota política de las elites terratenientes, ni lo oligárquico es sustituido por una cultura democrática, ni en su contenido ni en su forma.

Ahora, nos interesa describir cómo era la sociedad centroamericana en el momento en que se produce eso que llamamos la ruptura provocada por el período de posguerra. En las páginas que siguen damos alguna información sobre la sociedad regional y luego estudiamos la estructura agraria y los problemas que se plantean a las diversas fuerzas sociales que concurren a la producción.

3. DATOS CUANTITATIVOS SOBRE LA SOCIEDAD DE POSGUERRA

Cuando termina el conflicto mundial y se restablecen las condiciones del comercio mundial, estos países salen de una larga noche de hibernación social con sus estructuras rural/agrícola más rígidas y con las señas del atraso más visibles. La naturaleza del cambio económico, social y político estuvo condicionada por el carácter de la estructura de la propiedad de la tierra y de las relaciones sociales que con ocasión de su utilización se fueron conformando desde los orígenes mismos de la economía agroexportadora.

La caracterización de lo que es *atraso* tiene una connotación relativa; alude al escaso desarrollo de fuerzas y relaciones productivas de naturaleza capitalista en un contexto internacional que contribuyó a implantarlas, y que por diversas causas también las desarrolla desigualmente. La sociedad centroamericana no era “atrasada” porque el sector agrario, decisivo, también lo era. Sucede que al contrario de la visión tradicional hasta ahora sostenida, es en la agricultura donde se originaba el mayor dinamismo de la vida económica. Es el conjunto societal el que tiene

rasgos profundamente desiguales y contradictorios, donde conviven estructuras de períodos históricas diversos.

Nos proponemos probarlo a continuación, utilizando fuentes de información que tienen sin duda diverso grado de confiabilidad.³⁹ Más que la descripción de los números, lo que interesa subrayar son las tendencias cualitativas que sin duda reflejan. Un dato no vale por sí mismo sino en el marco de una interpretación apropiada, de tal suerte que no se busca la verificación de hipótesis con ayuda de indicadores estadísticos.

UN PRIMER RASGO, LA POBLACIÓN RURAL

En 1945 la región tenía 7 millones de habitantes, con más de la mitad en minoría de edad y con un porcentaje promedio del 70% decididamente rural. Esta última característica es difícil de precisar no sólo en su dimensión estrictamente estadística sino en su significación social y cultural. Los criterios censales utilizados no sólo han variado de país a país, sino también en diversas épocas del mismo. No es difícil, sin embargo, estar de acuerdo en el acentuado carácter rural de la vida social, calificada por el aislamiento físico y cultural y por la ausencia de instituciones, servicios y formas de participación y consumo propias de la cultura burguesa urbana.

³⁹ Se ha buscado información a partir de 1945. No resulta fácil encontrar datos que sean completos, confiables y con una base mínima comparativa. Sin embargo, como se indica en el texto, los números no confirman hechos sino señalan tendencias, y son estas las que resultan útiles de analizar.

Cuadro 2
Centroamérica: Población urbana, 1950
(por mil habitantes)

País / Región	En ciudades con más de 10,000 habitantes		En pueblos con más de 2,000 habitantes		Población total
	No. Absoluto	%	No. Absoluto	%	
Guatemala	320	11.4	630	22.5	2788
El Salvador	321	17.2	478	25.7	1858
Honduras	135	9.4	224	15.6	1428
Nicaragua	201	19.0	289	27.3	1057
Costa Rica	150	18.7	220	27.5	801
Centroamérica	1124	15.1	1841	23.7	7930

Fuente: Censos nacionales, diversas fechas; los porcentajes son sobre el total de la población de cada país.

Es probable que el período del estancamiento, del cual se estaba saliendo, hubiese reforzado también la ruralización de la sociedad por intermedio del reforzamiento de las formas de existencia social propias de un campesinado de subsistencia abrumadoramente mayoritario. Los datos del cuadro 2 indican que sólo el 15% de la población centroamericana vivía en ciudades con 10,000 o más habitantes. Según la legislación de Ubico, eran urbanos también a partir de asentamientos mayores a los 2 mil habitantes.

Si lo rural implica en cierto sentido aislamiento físico y cultural, hay que destacar además que en aquel momento las sociedades de la región estaban desconectadas entre sí y con un diverso grado de fraccionamiento regional. El aislamiento no se refiere sólo a la falta de comunicación de las diversas regiones con un centro urbano –la ciudad capital, casi siempre–, sino a la dislocación de las zonas productivas, con sus puertos, sus fronteras o los mercados internos más importantes. Guatemala y Nicaragua no tenían a la altura

de 1950 ninguna carretera que comunicara los centros más importantes con el Atlántico, siendo este mar el sitio natural de sus transacciones comerciales. Tampoco Costa Rica tenía comunicación terrestre con el mar Caribe, y Honduras, con algún puerto del océano Pacífico. Debe destacarse que la integración parcial de estas sociedades se alcanzó con el ferrocarril, pero en condiciones extremadamente desiguales y desventajas, que adelante se indican.

A comienzos de la década de los cincuenta sólo el 9% del sistema vial estaba asfaltado y el 52% de las carreteras no eran transitables en la época lluviosa, vale decir, durante un promedio de seis meses. La construcción de una infraestructura física de comunicaciones y transporte terrestre se realizó de manera muy lenta en el comienzo del período que analizamos. Era esta una manera de crear capital social básico que como se comprobó después, tuvo efectos decisivos en el mejoramiento económico. De hecho, fue importante la continuación de los esfuerzos por terminar la llamada Carretera Interamericana. Aunque fueron razones estratégicas las que manejaron este proyecto –iniciado en 1941 en el período de guerra–, sólo un 34% de esa ruta estaba asfaltado hacia 1951. Quedaban pendientes de construirse, además, importantes tramos que conducían de San José (Costa Rica) a la frontera panameña, así como otros tantos de Guatemala a México y de Nicaragua a Honduras.⁴⁰

⁴⁰ La ayuda externa, en el inicio del período de posguerra se orientó en gran medida a la construcción de caminos. El BIRF otorgó 18.2 millones al gobierno que sucedió a Arbenz para terminar la ruta al Atlántico y 4.2 millones a Honduras para comunicar Tegucigalpa con San Pedro Sula; a Costa Rica el Eximp Bank otorgó 10.3 millones para terminar la Interamericana. US Department of Commerce and Bureau of Foreign Commerce, *Investment in Central America: Basic Information for United States Businessmen* (Washington, D.C. USDC, 1955), pp. 5-6.

¿FERROCARRILES AL SERVICIO NACIONAL?

La comunicación interna se alcanzó parcialmente con la construcción de los ferrocarriles, iniciada desde la década de los ochenta del siglo XIX y terminados todos ellos, ya entonces bajo control extranjero, a comienzos del XX. De hecho, nunca constituyeron una red orientada por intereses nacionales. Su trazado dio como resultado que salvo la articulación entre Guatemala-El Salvador (con la IRCA), importantes zonas económicas resultarían inaccesibles y que los sistemas nacionales quedarían aislados entre sí. No es por ello casual, como se lee en el cuadro 3, que más del 50% de la estructura ferroviaria estuviera funcionando en el interior del “enclave” bananero y que el conjunto que aparece como ferrovía extranjera pero de servicio público (37% del total), también estuviese al servicio más o menos directo de las exportaciones bananeras.

En realidad, el sistema de comunicaciones por ferrocarril se construyó para facilitar el transporte de la fruta, lo que se completó con el control extranjero del sistema portuario a ambos lados de la costa centroamericana.⁴¹ No obstante todo lo anterior, en un primer momento el sistema ferroviario fue útil no sólo en la conformación de economías comerciales de exportación, pues facilitó el embarque de café, sino que contribuyó a valorizar la tierra y a facilitar la comunicación entre espacios anteriormente aislados entre sí. Probablemente la excepción a estas ventajas la constituyen los ferrocarriles

⁴¹ La plantación bananera controló casi desde el inicio el sistema de puertos, generalmente a base de concesiones públicas por largos períodos de tiempo. En Guatemala, controlaron Puerto Barrios y San José, en el Caribe y el Pacífico, respectivamente; en El Salvador, el puerto de Cutuco; en Honduras, Cortés, Tela y La Ceiba, sobre el Atlántico; en Nicaragua, el ferrocarril y los puertos fueron nacionales; en Costa Rica, Puntarenas, Limón, Quepos y Golfito, el primero y los dos últimos en el Pacífico.

Cuadro 3
Centroamérica: Propiedad del sistema ferroviario, 1945
(longitud en kilómetros)

Compañía según país	De servicio público		Plantaciones (extranjera)	Total país
	Nacional	Extranjero		
<i>Guatemala</i>				1150
International Railways of Central America		816	288 ^{/a}	
Ferrocarril Verapaz	46			
<i>El Salvador</i>				612
IRCA, División El Salvador		452		
El Salvador Railway Co. Ltd.		160		
<i>Honduras</i>				1259
Ferrocarril Nacional de Honduras	100			
Tela Railroad Co.			622	
Standard Fruit Co.			537	
<i>Nicaragua</i>				347
Ferrocarril del Pacífico	347			
<i>Costa Rica</i>				1276
Ferrocarril Eléctrico Pacific		131		
Northern Railway Co.		185	334	
Compañía Bananera de Costa Rica			627	
Total Centroamérica	493	1,744	2,409	4646

FUENTE: *Investment in Central America*, op.cit., pp.15-16.

NOTA: ^{/a}: Este ferrocarril pertenece en realidad a la UFCO, que a su vez es accionista mayoritaria de IRCA.

de Honduras, construidos todos de manera paralela a la costa y, por lo tanto, sólo comunicando entre sí zonas bananeras con los puertos inmediatos del Caribe.

LA INCOMUNICACIÓN DE CARRETERAS DE VERANO

Las ventajas y limitaciones de esta estructura de comunicaciones, de propiedad extranjera y al servicio casi total de intereses económicos de la plantación bananera, se fueron limitando progresivamente después de la década de los cincuenta. Si la terminación de la Carretera Interamericana

fue importante, porque vinculó las cinco ciudades capitales de la región, por primera vez, a través de sus 1,927 kilómetros de longitud (atraviesa importantes zonas de agricultura comercial, salvo en Honduras), fueron igualmente decisivas las que en diferentes momentos de esa década se construyeron hacia puertos del Atlántico o del Pacífico.

En esa importancia no sólo contó el hecho de romper el monopolio ferroviario extranjero, sino que las carreteras construidas hacia el puerto Matías de Gálvez (Caribe, Guatemala), hacia el puerto de Acajutla (Pacífico, El Salvador), la de puerto Limón (Caribe, Costa Rica) y la del Rama (Atlántico, Nicaragua) agilizaron los servicios de carga y los abarataron en términos de tiempo. De hecho, a la altura de la mitad de este siglo, la mayor parte de las locomotoras, los carros y la misma vía no habían sido renovados oportunamente.

La obsolescencia del material metálico, su pérdida de valor estratégico en el sistema nacional de comunicaciones, más que la voluntad nacionalista de los gobiernos locales, hicieron posible diversas formas de “nacionalización” forzada desde el lado de los propietarios. En efecto, el declive del transporte ferroviario puso final a las concesiones extranjeras; en Guatemala, El Salvador y Costa Rica, en diversos períodos de los sesenta y comienzos de la década siguiente, los ferrocarriles fueron entregados al Estado. Sólo en Honduras la situación permanece igual. Una vieja reivindicación ‘antimperialista’ que la historia debilitó.

La mejora en el sistema vial constituye un dato importante del cambio de la sociedad centroamericana aunque aún es incompleto lo logrado. En el cuarto de siglo transcurrido, la región casi decuplicó la extensión de carreteras pavimentadas (véase cuadro 4, *infra*) ya que a la altura de 1980 había más de 10 mil kilómetros de vías en esas condiciones. Las desigualdades intrarregionales, sin embargo, son importantes. El Salvador construyó en 1955 la Carretera del Litoral, que abrió la última

frontera agrícola salvadoreña, región utilizada para la creación de plantaciones algodoneras. La construcción de la carretera al Rama, Nicaragua, a su vez facilitó el comercio exterior de importaciones, que históricamente ha llegado por el lado del Atlántico; sin embargo, aún están pendientes de integrarse por carretera las vastas zonas del Atlántico territorial de este país.

Costa Rica y El Salvador terminaron en la década de los sesenta la construcción de un sistema vial básico. Honduras y Nicaragua no lo logran sino de manera incompleta y años después, todo lo cual dificulta la constitución de bases materiales para el intercambio económico; el funcionamiento del mercado se facilita sin duda cuando un sistema de transporte termina con el aislamiento secular de numerosas y pequeñas economías regionales, forzosamente autosuficientes. Tal el caso de estos dos países y parcialmente de Guatemala, donde la desarticulación de zonas productivas ha ido terminando lentamente, mientras se abre con la Carretera Transversal del Norte, una nueva frontera agrícola. Para completar la información del cuadro 4, recordemos que hacia 1950, Nicaragua sólo tenía 170 kilómetros de carreteras asfaltadas,⁴² en tanto que Honduras, en 1957, sólo contaba con 81 kilómetros en esas condiciones.⁴³

Los esfuerzos realizados después de 1960 han permitido la comunicación por tierra entre las ciudades más importantes de Centroamérica, lo que sin duda facilitó los mecanismos comerciales auspiciados por el proyecto de mercado común. Después de 1970 todas las ciudades con más de 20 mil habitantes están comunicadas entre sí y aparte de las cifras

⁴² CEPAL, *El desarrollo económico de Nicaragua* (New York: Naciones Unidas, 1996), p. 172.

⁴³ CEPAL, *El desarrollo económico de Honduras* (México: Naciones Unidas, 1960), p. 99.

ya dadas sobre rutas pavimentadas, hay un total de 43,445 kilómetros de caminos de toda clase (12% pavimentadas).⁴⁴ El número de vehículos automotores (de todo tipo) también ha crecido; estos datos deben tomarse con precaución pues la información obtenida es sólo sobre automóviles particulares (no de uso público), pero sin duda en 1945 no habrían más de 50 mil vehículos en toda la región y para 1980 se calculaban más de 400,000.⁴⁵

⁴⁴ Para una comparación con otro país, de tamaño físico y demográfico parecido al total de Centroamérica, como Chile, veamos que este tenía en 1976, 79.912 kilómetros en carreteras, de las que 9.031 estaban asfaltadas y contaba con 255.780 vehículos, *SALA, op. cit.*, Cap.6.

⁴⁵ Información calculada como proyección sobre la base de las importaciones de automóviles en el período 1973-76.

Cuadro 4
Algunos indicadores del tamaño del mercado centroamericano
(años y cantidades según indicador)

Indicador	Año	Guatemala	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Costa Rica	Centroamérica
Población (miles)	1945 ^{/a}	2438	1742	1261	923	695	7059
	1980 ^{/b}	6330	4590	3270	2510	2200	18900
Teléfonos (absolutos)	1953 ^{/c}	6421	15012	7017	3487	10859	42358
	1978 ^{/b}	70614	70400	14984 ^{/1}	55830	145069	356897
Radioreceptores ^{/2}	1953 ^{/d}	24	22	12	20	35	22
	1976 ^{/b}	43	333	49	280	75	156
Carreteras pavimentadas	1953 ^{/c}	205	373	-	188	497	1263
	1975 ^{/b,3}	2638	1408	1327	1597	1949	8909
Vehículos automotores	1953 ^{/c}	16704	15704	7074	8200 ^{/4}	10585 ^{/5}	57816
	1976 ^{/b}	82700	41000 ^{/6}	20500	32000 ^{/7}	59800	236000
Periódicos (x 1000 hab.)	1952 ^{/d}	19	35	19	49	84	35
	1975 ^{/b}	39 ^{/8}	51 ^{/6}	-	26 ^{/9}	88	

Indicador	Año	Guatemala	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Costa Rica	Centroamérica
Consumo papel impreso	1953 ^d	1.15	2.7	0.5	1.3	4.6	2.0
	1975 ^b	2.8	6.3	1.5	3.9	11.4	5.1
	1949 ^b	26	39	29	29	130	50
Consumo energía eléctrica	1976 ^{b*}	200	231	201	475	791	391
	1945 ^{e**}	795	336	264	176	203	1774
PIB (en US\$ 1970)	1976 ^e	3093	1895	898	1078	1632	8566

Fuente:^{a/6}: Proyección censo nacional de 1950; ^b: *Statistical Abstract of Latin America* (Los Angeles: UCLA/Latin American Center, 1980), J. Wilkie, ed., Vol. 20, Cap. 6; ^c: *Investment in Central America*, op. cit., cuadro 2.5, p. 34; ^d: *Investment in Central America*; la información sobre circulación de periódicos, para hacerla comparable, tuvo que ser calculada sobre número de ejemplares por mil habitantes; el consumo de papel impreso está dado en toneladas métricas cortas (2000 libras) y las cifras indican consumo per cápita expresado en libras; la información sobre radioreceptores de 1953 está dada en número de aparatos per cápita, porque en ese momento había registro oficial de radios; hoy día el dato es aproximado a base de cálculos de UNESCO, *Statistical Yearbook*, diversos años, especialmente 1980, Cuadros 9.3, 10.1 10.2 y 10.3; ^e: CEPAL-SHCAL, pp. 14-19, reproducido en SALA, Vol 20, citado, cuadro 2200.

Notas: ^{1/}: 1975; ^{2/}: Radios por mil habitantes; ^{3/}: Longitud en kilómetros; se excluyeron caminos o carreteras transitables que no estuvieran asfaltadas por lo menos; ^{4/}: 1955; ^{5/}: 1952; ^{6/}: 1974; ^{7/}: 1973; ^{8/}: 1972; ^{9/}: Información incompleta que corresponde sólo a tres diarios.

*: Consumo per cápita de kWh; **: Cálculos del PIB en dólares constantes de 1970, al costo de factores; la información de algunos años fue calculada por CEPAL.

EL ATRASO COMO OSCURIDAD

Otro indicador importante para establecer comparaciones a través de un cierto período de tiempo y referidas a cambios materiales en la sociedad, lo encontramos en la producción, valor y uso de energía eléctrica, por cuanto constituye un servicio básico para la vida personal y sin duda, para el eficaz crecimiento de la estructura productiva. En este aspecto, tanto la naturaleza de la capacidad instalada como la extensión de la demanda, exhiben el extraordinario retraso en relación con las necesidades elementales no cubiertas, no sólo como un servicio social que facilita la vida personal, sino como desarrollo técnico de las fuerzas productivas.

La producción de energía eléctrica y el consumo correspondiente no alcanzaban a cubrir el 15% de la población total de Centroamérica en 1950 y con la excepción de Costa Rica, sólo la ciudad capital y un segundo centro urbano contaban con servicio de luz eléctrica *en la vía pública*.⁴⁶ El consumo per cápita en 1949 era equivalente a 50 kilovatios/hora en tanto que el promedio del consumo en América Latina se estimaba en 96 kwh en 1937. El promedio centroamericano subió a 129 kwh en 1961 y a 391 en 1976.⁴⁷

⁴⁶ Las dos terceras partes del total de energía producida en el país se consume en la ciudad de Guatemala. International Bank for Reconstruction and Development, *The Economic Development of Guatemala* (Washington, D.C.: IBRD, 1951), p. 219.

⁴⁷ CEPAL, "Estadísticas de energía eléctrica en Centroamérica y Panamá" (E/CN.12/CCE/SC) p. 20.

Cuadro 5
Producción de electricidad
–Millones de kilovatios hora– 1980 y 1998⁴⁸

País	1980	1998
Costa Rica	2226	5794
El Salvador	1484	3837
Guatemala	1818	4456
Honduras	906	3471
Nicaragua	1068	2266

Fuente: WB (World Bank), 2001: World Development Indicators CD-ROM.

En rigor, los bajos niveles de mercado en 1945 fueron superados, pero el crecimiento de la demanda privada y las necesidades del servicio público no han podido ser satisfechas de forma mínima sino hasta la década de los setenta. Todavía en 1957, el 90% de la población hondureña apenas consumía 8 kilovatios/hora equivalentes a 3 vatios de potencia;⁴⁹ y según los censos de 1963, en Nicaragua, sólo el 71% del total de viviendas en poblaciones urbanas disponía de energía eléctrica; pero del total de viviendas, sólo el 33% contaba con ese servicio.

Hablamos de la excepción costarricense por el desarrollo que este servicio ha tenido desde hace mucho tiempo; en 1955, por ejemplo, sólo el 4.5% del territorio contaba con servicios eléctricos, pero por la concentración de la población en la meseta central, un 55% de la misma recibía esos servicios.⁵⁰ El Salvador presenta los índices de crecimiento de la capacidad instalada más altos, pero aun

⁴⁸ Cuadro insertado para esta publicación, no formaba parte del original.

⁴⁹ *El desarrollo económico de Honduras*, op.cit., p.103.

⁵⁰ *Investment in Central America*, op. cit., p.58.

así, en 1957 apenas había alcanzado un consumo de 76 kwh por habitante.⁵¹

Hasta 1945-47 las necesidades fueron satisfechas generalmente a base de pequeñas plantas diesel o térmicas, de propiedad privada o municipal, pero de características técnico-económicas poco satisfactorias. Había algunas plantas hidroeléctricas pero el sistema de interconexión siempre limitó el uso. Visto el problema en perspectiva, el Estado nunca consideró que la energía eléctrica era una mercadería cuya producción y distribución le correspondía, y dejó en manos del sector privado extranjero el cumplimiento de eso que ahora se considera una función pública.

No es posible examinar con detalle lo que significa el carácter privado de la producción eléctrica; en nuestra experiencia, esto significa simplemente que en 1950 más del 20% de la capacidad instalada no solamente era propiedad extranjera sino que estaba al servicio exclusivo de la plantación bananera, de los ferrocarriles y de otras empresas privadas.⁵² Por ello si se descuenta este uso, el promedio del consumo personal es aún menor.

La información del cuadro 4 permite apreciar las diferencias nacionales donde resalta el retraso relativo de Nicaragua y Honduras; otras informaciones permiten subrayar la naturaleza del cambio operado, en el sentido de

⁵¹ Compárese, para el mismo año, el consumo de 104 kwh en Colombia, 269 en México, 881 en Italia y 4,200 en Estados Unidos. CEPAL, *El desarrollo económico de El Salvador*, op. cit., p.61.

⁵² Las principales empresas en Guatemala y Costa Rica eran subsidiarias de la American & Foreign Power Co., y en El Salvador, de la Canadian International Power; en Honduras, el servicio público era atendido por pequeñas plantas de la Standard Fruit Co., en La Ceiba, la Rosario Mining Co., la Tela Railroad Co., y otras aún menores, de propiedad municipal.

la creciente importancia de las plantas hidroeléctricas sobre las de origen térmico o de vapor, que por su tamaño obligaron a grandes inversiones estatales y a préstamos externos. También es importante subrayar la nacionalización parcial de la producción y distribución del fluido y el aumento relativo del consumo para uso público. En 1978 se había logrado la interconexión de los sistemas nacionales. Obviamente con esa información no puede sino apreciarse de manera aproximada uno de los aspectos más sobresalientes del retraso centroamericano. Júzguese, por ejemplo, que en 1945, la mayor parte de la energía eléctrica era de origen térmico o producido por motores diesel, que consumía petróleo y madera con costos muy altos por unidad producida.⁵³

En esas fechas Nicaragua (52%) y Honduras (80%) muestran tal origen, en tanto que en los países restantes, la energía de origen hidroeléctrico era tendencialmente más importante.⁵⁴ No es necesario insistir en las consecuencias integrales que el disfrute de la energía eléctrica ha traído para millones de personas cuyas vidas literalmente hablando estaban en la oscuridad, reproduciendo su existencia a base de energía humana y animal.

⁵³ Un estudio de 34 plantas en Centroamérica y Panamá demostró que el costo promedio de producción en plantas con diesel era de 5.5 veces más que el de las centrales hidroeléctricas y 75% mayor que las movidas a vapor. “Estadísticas de energía eléctrica”, *op. cit.*, p.114.

⁵⁴ *El desarrollo económico de Nicaragua*, *op. cit.*, p.158; *El desarrollo económico de Honduras*, *op. cit.*, p.103.

Cuadro 6
Centroamérica: Producción de energía eléctrica pública y privada
 (per capita, en kwh)

País / Región	1950		1959		Porcentaje de aumento	
	Servicio público	Total incluido S. privado	Servicio público	Total incluido S. Privado	Servicio público	Total incluido S. Privado
Guatemala	33	41	55	67	67	61
El Salvador	35	46	90	93	161	102
Honduras	10	36	23	46	121	28
Nicaragua	23	84	57	123	194	44
Costa Rica	197	227	320	343	60	49
Centroamérica	45	66	87	106	96	61

FUENTE: "Estadísticas de energía eléctrica de Centroamérica y Panamá" (TAO/Lat.25) Octubre 1960, reproducido en *El desarrollo económico de Honduras*, op.cit., Cuadro 77, p. 102.

BAJOS INGRESOS SIN SALARIO

El estado de desarrollo de la sociedad centroamericana no se entiende sin referencia a la matriz agraria, que era la base económica fundamental en aquel período. El camino seguido por el crecimiento capitalista en el medio siglo anterior, apoyado en la propiedad extensiva de la tierra y en la explotación semi-forzada de la fuerza de trabajo, fue lento, lleno de contradicciones y profundamente desigual. No hubo salario en moneda sino excepcionalmente, pues en la finca se usaba el sistema de fichas de hojalata o de cartón canjeables en la tienda del patrón.

Un indicador que deriva de esa situación lo encontramos en la distribución del ingreso, que es la proporción en que la riqueza social producida en un momento determinado es repartida entre quienes participan en su creación. Es difícil encontrar datos confiables y mas bien habría que decir que se trata de un intento indirecto y relativo, cuya utilidad comparativa entre países o períodos de tiempo tiene que ser tomado con cuidado, pues las fuentes no son siempre precisas. En realidad, los datos compilados no corresponden a series históricas, son aislados y comparables con más audacia que certeza.

No obstante algo dicen pues, por ejemplo, resulta significativo que a la altura de 1947, el ingreso anual regional per cápita correspondiera a 94 dólares, o que el Producto Nacional Bruto, ajustado a dólares de 1970 (y por ello, más aproximado como cálculo real en relación con su nivel de 24 años después) fuese de 249 dólares por persona, durante un año. Esta información complementada con los promedios diarios de salario y con la oferta de dinero, calculada a base de disponibilidad personal de probables recursos monetarios, indica no tanto una distribución desigual de la riqueza social sino los niveles mínimos de monetarización de este peculiar 'mercado'.

La existencia de un amplia franja de agricultura de subsistencia y las características de los mercados rurales de trabajo, fuertemente impregnados todavía por dispositivos extraeconómicos servían para retener o movilizar fuerza laboral, sugieren la existencia de un mercado monetario extremadamente reducido y por lo tanto, la vigencia de relaciones sociales con un intercambio próximo al trueque.

Hay que recordar que la estructura de la propiedad territorial no cambia en Centroamérica sino muy lentamente y siempre después de 1950; la lenta “puesta al día” de la estructura monetaria y bancaria, por ejemplo, tampoco fue inmediata. La disponibilidad de recursos monetarios por persona es un indicador no tanto de la capacidad de consumo de una persona, sino del total de oferta de moneda existente en un momento determinado.

Esto refleja sin duda un nivel raquíutico en la dinámica de los negocios o transacciones en los que la moneda es utilizada. Así, expresaría uno de los posibles límites del mercado. Los datos del Cuadro 7 (véase *infra*) contribuyen a dar una idea del “tamaño” del mercado, no tanto como expresión de la división social del trabajo y diferenciación de la actividad productiva, sino mas bien como volumen y extensión en la capacidad de compra o consumo de la población.

No ha sido posible encontrar información sobre distribución del ingreso en cada uno de los países de Centroamérica para un período próximo a 1945. Debe recordarse que no hubo Cuentas Nacionales sino hasta una época posterior a 1946-47 y el sistema de censos nacionales, de factura técnicamente completa, sólo se tuvo en 1950.⁵⁵ Aún en la actualidad, resulta difícil encontrar información fidedigna sobre los desigua-

⁵⁵ Las misiones que visitaron Centroamérica entre 1945-49 como parte de la política de promoción conocida como Punto Cuarto (Gobierno de Truman), aplicaron sus propias técnicas para calcular por primera vez el ingreso nacional, el PIB y otras categorías

les niveles del ingreso; tal información, existente sin duda, es manejada con incomprensible secretividad. No obstante para aquel período se dispone de algunos datos dispersos.

En Costa Rica, el salario de un peón agrícola equivalía en 1949 a 0.66 dólar por día, en tanto que un obrero industrial percibía 1.16 y uno de transportes 1.34 dólar diario.⁵⁶ Debe anotarse que aún en Costa Rica, el ingreso del peón agrícola comprendía en esa época un porcentaje de salario no monetario, proporción que sin ninguna duda es mayor en el resto de países. En 1950, el 8% de la población salvadoreña percibió más del 50% del ingreso nacional.⁵⁷ Según estimaciones preliminares, el ingreso per capita de la población indígena en Guatemala era de 70 dólares anuales, en tanto que la población ladina (no indígena) tenía un ingreso calculado en 246.⁵⁸

estadísticas. Véase *The Economic Development of Guatemala*, op.cit., p. 10; o *Costa Rica: A Study in Economic Development* (New York: The Twentieth Century Foundation, 1952), p.30.

⁵⁶ *Costa Rica...*, op. cit., p. 32.

⁵⁷ *Medidas para fomentar el desarrollo económico de El Salvador* (New York: Naciones Unidas, 1954), p.16.

⁵⁸ Adler, Schlesinger and Olsen, *Public Finance and Economic Development* (CITA incompleta en el original)

Cuadro 7
Centroamérica: Información sobre salario e ingreso (diversos años, en dólares)

Indicador	Guatemala	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Costa Rica	Centroamérica
Salario industrial ^{1/a}	3.12	2.40 ^b 4.54 1.76 ^c 4.54	3.10 2.50 ^d	2.28 5.40 1.25 ^e	1.50 ^f	
Salario en la agricultura ^{1/a}	1.98 ^b	0.98 ^g 1.50 ^h 0.70 ⁱ 1.26 ^j	0.50 ^k 2.04 ^l 1.92 ^l	0.61 ^e 2.81 3.28	1.39 ^m 2.74 1.20 ⁿ 2.71	
PNB per cápita (en US\$ 1970), 1950 ²	271	218	190	249	318	249
PNB per cápita (en US\$ 1970), 1974 ²	379	300	268	447 ^m	533	385
Oferta de dinero US\$ per cápita ³	23.8	35.7	22.4	31.1	51.3	
Ingreso nacional US\$ per cápita, 1947 ⁴	120	85	60	65	140	94
Ingreso nacional US\$ per cápita, 1953 ⁵	180	175	160	170	225	182

Fuente: ^{1/}; *Statistical Abstract of Latin America, op. cit.*, Vol. 20, cuadro 1400; ^{2/}; *Idem*, Vol. 18, p. 397, la información se refiere a 1950 y 1974; ^{3/}; *Investment in Central America, op. cit.*, p. 31, se refiere a 1953; ^{4/}; *The Economic Development of Guatemala, op. cit.*, p.11; ^{5/}; *Investment in Central America, op. cit.*, p.14, se refiere a ingreso de 1953.

Notas: ^{a/}; Salario diario, en dólares, calculado con base en la información de la fuente ^{1/}, para 1963 y 1976, salvo indicación en contrario; ^{b/}; Área metropolitana de San Salvador, salario de hombres; ^{c/}; *idem*, para mujeres; ^{d/}; 1957, *Honduras: A Problem in Economic Development* (Washington, D.C.: The Twentieth Century Foundation, 1950), p. 9; ^{e/}; 1953, salario de obrero y jornalero del campo, también calculado diario, "Boletín Bimestral", 1955, p. 9, con información de la Dirección General de Estadística y Censos, Managua; ^{f/}; Información muy aproximada, tomada del *Annual Economic Report, US Embassy, San José, Desp.1102, 1952, p.36*; ^{g/}; Salario de trabajadores agrícolas permanentes, hombres, 1970; ^{h/}; *idem*, para 1976; ^{i/}; *idem*, mujeres, 1970; ^{j/}; *idem*, 1976; ^{k/}; 1957, *Honduras: A Problem... op. cit.*, p. 99; ^{l/}; 1957, se refiere al salario que paga la UFCO y la Standard Fruit Co., respectivamente, *op. cit.*, p.100; ^{m/}; Trabajadores de fincas de café, hombres y mujeres, que sólo reciben salario monetario en forma parcial completado con casa y alimentos; ^{n/}; Salario en la ganadería en fincas, hombres y mujeres y en forma incompleta como se dice en el punto anterior; ^{o/}; 1971; ^{p/}; Salario pagado por la UFCO, en Guatemala, 1949, según fuente ^{4/}, p. 48.

En una investigación realizada en 1954 en Managua⁵⁹ para determinar el costo de la vida de la población de escasos recursos y estrategias para sobrevivir, se encontró que en una muestra de 439 familias, sólo 65 de ellas (14%) tenían un ingreso salarial o monetario superior a los 14 dólares por semana y *todas* las familias reportaron un déficit en el total de sus ingresos (por trabajo o ganancia). Es esta una situación típica de las condiciones de existencia social de una vasta mayoría de la población (no sólo de Nicaragua), por cuanto el salario —en el caso del obrero urbano o del jornalero campesino— o el lucro o ganancia en los artesanos o pequeños agricultores, no constituye la única fuente de ingreso, ni deriva del mismo la satisfacción de las necesidades del grupo familiar.

La renta total familiar incluye diversas formas de ingreso no monetario que no corresponde a la remuneración del trabajo (donaciones, trabajo ocasional, préstamo y hasta empeño de prendas, etc.). Es notable el hecho que el déficit semanal fue menor entre los pequeños agricultores y mayor en los obreros industriales. Así, la capacidad de subsistencia del campesino aparece en esta época como superior a la de la masa asalariada urbana; esta situación habría de cambiar lentamente en detrimento de los sectores rurales.

Esta situación de disociación entre el salario y el ingreso total en sectores sociales de bajo ingreso es frecuente encontrarla en situaciones en que el mercado capitalista no se ha conformado totalmente y en el que por lo tanto, el salario sólo remunera parcialmente al trabajo por la capacidad de autosubsistencia. En otras palabras, la reproducción de la fuerza de trabajo, como grupo familiar, se completa fuera del mercado de trabajo en tanto el salario no satisface totalmente esa necesidad básica.

⁵⁹ “Dirección General de Estadísticas y Censos”, abril 1955, pp.14 y 18.

Esta no sólo es una situación propia de la economía campesina de subsistencia. Aparece también cuando esta empieza a descomponerse o en los primeros niveles de la industrialización. Una estimación del Banco de Guatemala hecha sobre el ingreso de 550,000 familias (1947) encontró que el 24% de ellas tenía un ingreso anual inferior a *100 dólares* y que 69%, vivía con menos de *400 dólares* anuales.⁶⁰ Como se trata de ingreso familiar anual, estas cifras no corresponden a las que aparecen en la información del cuadro 7, pero son indicativas no sólo de la desigualdad en la distribución de la riqueza, sino también de los niveles extraordinariamente bajos de los que se partió; dos terceras partes de la población guatemalteca tenían un ingreso en dinero de dos centavos (dólar) diario, por semana.

No hay duda que la existencia de formas muy vigorosas de economías de subsistencia explican la sobrevivencia de una parte importante de la población nacional, tanto como la presencia de formas no asalariadas para retribuir la prestación de servicios. Esta población está formada por grupos indígenas que habitan las tres quintas partes del territorio guatemalteco.

Puede intentarse otro ejemplo a través del consumo per capita, para reflexionar acerca de la calidad y extensión de la demanda y con ello, establecer indirectamente las tendencias en la distribución del ingreso. En 1945, cada ciudadano hondureño disponía de 91 (dólares) como gastos de *consumo anual*; al establecer la composición interna de ese gasto

⁶⁰ Esta información arrojó informaciones sorprendentes, pues debe recordarse que se trata del *ingreso del grupo familiar*, compuesto por cinco personas como promedio. “Considerado el alto costo de la vida —dice el informe del International Bank for Reconstruction and Development— es evidente que muy poca contribución puede esperarse a la formación de capital por parte de esta masa de población”. *The Economic Development of Guatemala, op. cit.*, p.11.

(51% en alimentos) en el transcurso de un periodo que va de 1945 a 1958,⁶¹ se ha comprobado por una parte, que no se registró mejoría en los niveles medios de alimentación de la población (relación entre el consumo de alimentos y expansión demográfica); por la otra, que en ese período hubo un fenómeno de redistribución regresiva del ingreso nacional, al aumentar en tres veces el valor de bienes de consumo inmediato.⁶²

Como tantos otros factores de la vida social, los bajos niveles de ingreso no se explican solamente como si fueran un dato estructural, inherente al funcionamiento de la economía. Ciertamente esta última facilita una radical desigualdad cuando coexisten en estrecha relación economías campesinas con empresas comerciales de exportación, o una numerosa estructura artesanal junto a dos o tres industrias modernas; la heterogeneidad estructural puede estar en la base de la injusta distribución de la riqueza social producida, pero el volumen de esta sólo es resultado del bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas en su conjunto. Y la desigualdad redistributiva es un fenómeno político que tiene que ver por un lado, con la capacidad organizada para demandar una participación mayor por parte de los grupos sociales menos favorecidos, por el otro, con las políticas estatales en tanto los intereses de la mayoría son importantes como fuente de legitimidad y consenso.

⁶¹ Naciones Unidas, Departamento de Estudios Económicos, *El desarrollo de Honduras* (México, 1960), pp. 39, 33 y 47.

⁶² En 1950, sólo el 30% de la población usaba zapatos. *Honduras: A Problem in Economic Development, op. cit.*, p.16.

Cuadro 8
Centroamérica: Acceso a servicios básicos

Indicador	Año	Guatemala	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Costa Rica	Centroamérica
Educación primaria	1945 ^{/a}	141000	106000	62000	83200 ^{/a}	83000	478200
	1980 ^{/2}	802853	900623	543021	363781	368624	2.9 (m)
Educación secundaria	1945 ^{/1}	13000 ^{/a}	9000 ^{/a}	2000	8000 ^{/c}	4000	36000
	1980 ^{/2}	172531	78107	102964 ^{/d}	99506	135830	588938
Educación universitaria	1945 ^{/1}	1000	1000 ^{/a}	1000 ^{/a}	1000 ^{/c}	1000	5000
	1980 ^{/2}	34301 ^{/b}	32058	23317	9385 ^{/e}	55000	154061
Mortalidad infantil ^{/f}	40-44 ^{/3}	119.2 ^{/g}	114.3 ^{/g}	108.5 ^{/h}	111.2 ^{/g}	130.7 ^{/g}	
	1978 ^{/3}	69.2	50.8	31.4 ^{/i}	42.9	32.3	
Médicos por habitante [*]	1960 ^{/3}	4644	5232	5132	2809	2729	4109
	1977 ^{/3}	4338 ^{/j}	3685	3297	1592 ^{/i}	1524 ^{/i}	2887

Fuente: ^{/1}; *Statistical Abstract of Latin America, op. cit.*, Vol.18, pp. 193-198; ^{/2}; *SALA, Vol.22*, cuadro 1106; ^{/3}; *Idem*, cuadros 709 y 800.
Notas: ^{/a}; Información correspondiente a 1950; ^{/b}; Sólo comprende la Universidad Nacional de San Carlos y corresponde a 1978; ^{/c}; 1951; ^{/d}; 1978; ^{/e}; 1970; ^{/f}; Niños menores de un año muertos por mil habitantes nacidos vivos; ^{/g}; Datos parcialmente completos; ^{/h}; Datos estimados sobre una base del 60% confiable; ^{/i}; 1975; ^{/j}; 1973.

*: La información se refiere a población por médico en servicio.

LOS DÉFICIT EDUCATIVOS

Se ha dejado en penúltimo lugar uno de los rasgos tal vez más sensibles de la condición social y su funcionamiento de la sociedad, la educación formal. Es importante porque contribuye a perfilar cómo era la sociedad centroamericana de hace casi medio siglo en algunos aspectos de la educación, la calidad del acceso para lograr el equipamiento cultural mínimo para un desempeño productivo y social más efectivo. Los niveles educativos tiene que ver con todos los indicadores presentados anteriormente; sin embargo esa relación no puede postularse como una articulación casual entre, por ejemplo, el ingreso económico (cuadro 6) y el acceso a ciertos servicios o consumo (cuadros 4 y 7).

Solamente se sabe que hay un cierto ‘status de congruencia’ entre la posición social de quienes tienen un ingreso determinado y a su vez tienen teléfono propio, consumen periódicos y libros, tienen automóvil y ostentan una educación formal, etcétera.

Aunque las cifras no son totalmente precisas, se sabe que a la mitad de los años cuarenta, el 70% de la población centroamericana era analfabeta; hoy día, con apoyo censal, sabemos que para la mitad de los setenta, el promedio de iletrados era de 37.6% regional, con variaciones muy grandes entre un 11% en Costa Rica y un 54% en Guatemala.⁶³ Los programas educativos, de alfabetización y educación primaria pese a ser básicos no recibieron nunca la atención debida. La política estatal liberal a pesar de sus verdades proclamadas, dejó en manos de la Iglesia y del sector privado la cuestión

⁶³ El Salvador tenía (1976) un 38%; Honduras (1974) un 54% y Nicaragua (1976) un 42%. Las diferencias *intranacionales* son aún más marcadas. Por ejemplo, la mujer campesina en Guatemala es iletrada en un 77% y en Honduras, en un 56%. UNESCO, *Statistical Yearbook*, 1980, cuadros 1-3.

educativa⁶⁴; falta de fondos, de escuelas, de personal bien entrenado dieron como resultado que el acceso a la escuela estuviera reducido a uno o dos años de la educación primaria, para recibir el entrenamiento mínimo de saber leer, saber firmar y saber sumar.

De nuevo, la excepción notable fue Costa Rica, que desde el siglo pasado aplicó una política de educación pública cada vez más extendida. La situación es peor ahora a la que ya tenía Guatemala, donde la ideología racista de la oligarquía siempre restó estímulos a la educación de la población indígena. De todas maneras, en el período del estancamiento hubo un notable retroceso en los servicios públicos de educación popular y en los cinco países los gastos para educación se mantuvieron estancados, lo que en términos relativos significa que el número de inscripciones, profesores y escuelas disminuyeron de forma evidente.

Lo anterior explica que en 1945, apenas el 6% de la población (total) estuviese inscrita en escuelas primarias, mientras que en 1980 el porcentaje hubiera aumentado al 15.3 y que el número de estudiantes universitarios haya pasado de 1.6 estudiante en 1945 por cada mil habitantes a 8.1 en el año escolar 1980. Esto es sólo una aproximación que tiene valor

⁶⁴ Un viajero inglés que pasó por Guatemala en el siglo pasado, quedó sorprendido por la actitud de un alto funcionario sobre la educación popular: “Hay una gran diferencia entre la educación que un hombre sabio necesita y las necesidades del populacho. La matemática celeste y otras ciencias no son para la gente común”. En la época de la visita hubo un eclipse y el funcionario subrayó: “¿Cómo explicar el eclipse a un trabajador sino es recurriendo a la fábula bien conocida del dragón?... Si ese hombre trabaja bien hay que dejarlo que se imagine el sistema planetario como quiera...”. Esto, publicado en un periódico del gobierno, aparece en: Chester L. Jones, *Guatemala: Past and Present* (Saint Paul: The University of Minnesota Press, 1940), p. 328, citando a G.A. Thompson, *Narrative of An Official Visit to Guatemala* (London: John Murray, 1869).

por sus efectos comparativos y porque señala tendencias que se desarrollaron en estos años. La información de aquella época no era precisa.

Resulta confiable la estadística educativa posterior y por ello se presenta una información que destaca los avances relativos y las diferencias que ocurren entre las cinco sociedades centroamericanas: en 1960 había un 49.5% de estudiantes (de 6 a 11 años) inscritos en relación al total del grupo de edad elegible. Esto supone que un óptimo educacional sería equivalente a 100. En 1980 el promedio centroamericano había subido a 70.4%, siendo de nuevo Costa Rica el que ofrece el nivel óptimo con un 97.5% y Guatemala solo la mitad de ese grupo de edad en la escuela (53.3%).⁶⁵

El resto de la información del Cuatro 8 completa en forma también relativa el perfil de la sociedad centroamericana en aspectos tan importantes como a los que apuntan los indicadores de mortalidad infantil y existencia de médicos por habitante en servicio, en relación con un promedio ideal de población que deben atender. En el tramo quinquenal 1940-44 no es posible sacar el promedio centroamericano por lo incompleto de los datos nacionales; para ese mismo período, la mortalidad infantil en Argentina era de 82.8 y para 1978, había bajado a la mitad, con 40.8. Honduras, Nicaragua y Costa Rica tenían para el mismo año una mortalidad inferior, prueba de los avances que en sanidad pública se realizaron con desigual empeño en el conjunto de la región.

⁶⁵ Entre 1960-1980 Costa Rica pasó de 74.4 a 97.5, seguido por Honduras, de 49.5 a 71.3; El Salvador, que pasó de 48.7 a 69.2; Nicaragua, 42.0 a 60.8 y finalmente Guatemala, que tuvo en esos años 32.0 y 53.3 respectivamente. Por comparación, Argentina tuvo porcentajes de 91.2 y 99.9, lo que supone que ningún niño entre los 6 y 11 años se quedó sin escuela. *Statistical Abstract of Latin America*, Vol. 22, p.189.

Muchos aspectos han sido dejados de lado; los datos dispersos nos aproximan al conocimiento del tipo de sociedad que era Centroamérica en la posguerra. Quizá la conclusión más importante sea doble, por un lado las diferencias casi constantes que existen en relación con Costa Rica, y por el otro en el hecho de que ya en aquella época la sociedad era profundamente desigual y tenía en su interior grupos empobrecidos como los que en mayor número tiene la región en el 2005.

II. SEGUNDA PARTE: LA ESTRUCTURA AGRARIA

El lector joven, a quien está destinado este trabajo, debe saber que los ciudadanos de esta región no se informaron nunca antes de 1950 cómo era la estructura de tenencia de la tierra en su país. Se sabía de injusticias y monopolios, pero no en la magnitud en la que ello ocurría. Cuando entre 1950-52 se realizaron por vez primera los censos agropecuarios en estos países, los resultados sorprendieron a todos y alarmaron a algunos: se tuvo por fin una radiografía de la estructura agraria.

El desarrollo de la economía exportadora había creado desde hacía decenios una especialización productiva que se apoyaba en una alta concentración de la propiedad y en el funcionamiento de un mercado de trabajo formado esencialmente por campesinos sin tierra, con parcelas muy pequeñas o peones vinculados de forma permanente a las grandes unidades productivas, llamados mozos colonos.

La situación era distinta en cada país, variando esencialmente las situaciones intermedias. La polarización era aguda en los casos de Guatemala y El Salvador en donde casi el 90% de las fincas tienen menos de una hectárea de tierra, lo que revela ya en 1950 la existencia de un campesino

empobrecido, incapaz de sobrevivir en el marco limitado de su condición parcelaria.

La situación de Costa Rica y Nicaragua no es exactamente lo opuesto, pues también allí tienen más del 50% de unidades menores de una hectárea, pero la existencia de mediana propiedad era relativamente importante en ambos, donde puede decirse que existía un campesino medio capaz de reproducir su existencia con base en la propiedad de sus tierras. La cúspide monopólica formada por *grandes terratenientes cafetaleros, plantaciones bananeras y grandes haciendas de colonato aparecieron en el censo concentrando más tierras de lo imaginado.*

Cuadro 9
Estratificación rural por tamaño de la tenencia de la tierra, 1950^{/a}

País	Concentración de propiedad (%)	Número propietarios (absoluto)	Concentración de la tierra (%)
1. Plantaciones y grandes propiedades terratenientes (+ 2500 ha.) ^{/b}			
Guatemala	0.03	158	27.5
El Salvador	0.02	35	8.6
Honduras	0.11	68	13.2
Nicaragua	0.23	106	22.3
Costa Rica	0.10	50	20.9
2. Otras empresas agrarias y grandes fincas (+ 200 ha. – 2,499 ha.) ^{/c}			
Guatemala	0.21	927	22.8
El Salvador	0.50	952	31.6
Honduras	0.71	213	24.8
Nicaragua	1.43	739	19.5
Costa Rica	2.51	1,195	30.1
3. Mediana propiedad rural (+ 50 ha. – 199.9 ha.) ^{/d}			
Guatemala	1.80	6,488	21.8
El Salvador	1.80	3,166	10.2
Honduras	3.51	5,379	18.9
Nicaragua	10.90	5,656	28.5
Costa Rica	6.51	3,092	17.5
4. Campesinado (diversas tenencias) (10 ha. – 49.9 ha.) ^{/e}			
Guatemala	9.4	33,041	13.4
El Salvador	8.9	15,534	21.3
Honduras	20.7	32,372	27.1
Nicaragua	35.8	18,516	23.9
Costa Rica	36.7	17,374	26.1
5. Propiedad parcelaria o minifundio (+ 1 ha. – 9.99 ha.) ^{/f}			
Guatemala	40.7	142,223	11.0
El Salvador	48.2	84,121	16.6
Honduras	65.1	101,709	15.7
Nicaragua	31.6	16,350	4.8
Costa Rica	47.1	22,635	5.0
6. Campesinos sin propiedad (- 1 ha.) ^{/g}			
Guatemala	47.5	165,850	3.3
El Salvador	40.4	70,416	2.2
Honduras	9.9	15,394	0.4
Nicaragua	19.8	10,214	0.7
Costa Rica	6.2	2,940	0.01

Fuente: Censos nacionales, 1950-1951.

Notas: ^{/a}: El primer censo agropecuario de Honduras se hizo en 1952 y en Nicaragua hubo ese año una encuesta agropecuaria, publicada por el Ministerio de Economía en 1953. ^{/b}: El límite fue de 2,450 hectáreas en Costa Rica, 2,236 en Guatemala y 1,750 hectáreas en Nicaragua. ^{/c}: El límite inferior fue de 447.20 hectáreas en Guatemala y 350.0 en Nicaragua. ^{/d}: El límite inferior fue de 70 hectáreas en Costa Rica, 44.72 en Guatemala y 70 en Nicaragua. ^{/e}: El límite inferior fue de 10.5 hectáreas en Costa Rica, 7.0 en Guatemala y 14.0 en Nicaragua. ^{/f}: El límite inferior fue de 1.05 hectáreas en Costa Rica, 1.40 en Guatemala y 3.50 en Nicaragua. ^{/g}: Corresponde a unidades menores de 1.04 hectáreas en Costa Rica, 1.39 en Guatemala y 3.49 en Nicaragua; la información en manzanas y las distribuciones de frecuencias obligan a estas irregularidades. Los porcentajes tienen el 100% de base nacional.

Los datos censales del cuadro 9 son una aproximación a la naturaleza de la estructura agraria de los países de la región, pero los censos fueron hechos en momentos distintos y no con una metodología homogénea, lo que hace aventurado el ejercicio comparativo. Es en todo caso un intento de resumen estadístico de la relación concentración de la propiedad/concentración de la tierra para fines comparativos prudentes. La sensatez debe aumentar si se discuten las seis categorías socioeconómicas propuestas, que están inspiradas en un intento clasificatorio cuyos polos los ocupan, arriba, los grandes terratenientes y abajo, los campesinos sin tierra, el proletariado agrícola. Todo es discutible pero no puede negarse el valor informativo de algo que fue así hace medio siglo y que de cierta manera se prolonga hasta hoy día como el fardo negativo del peso de la noche.

Utilizando cifras absolutas, imposibles de incluir por razones de espacio y sólo como un ejemplo significativo recordemos que un poco más de mil propietarios disponen en Guatemala de casi 2 millones de hectáreas (1.085 fincas totalizan 1.8 millones de hectáreas). La concentración de la tierra en las grandes unidades daría las siguientes cifras promedio, que son expresivas por sí mismas de lo que ellas significan comparativamente con la pobreza rural: Honduras, a la cabeza, apareció con un promedio de 3.391 hectáreas por finca; esto se explica, al igual que el dato sobre Guatemala y Costa Rica, porque los censos exhibieron a la United Fruit Co., y a las otras dos plantaciones extranjeras, como los más grandes terratenientes de toda la región.

En Guatemala, el promedio sería de 1.727 hectáreas por finca, seguido por Nicaragua, con 1.175 hectáreas a disposición de cada hacienda; Costa Rica, con 760 hectáreas y finalmente El Salvador, con 626 hectáreas promedio. Hay que decir que estos promedios no deben ser tomados sino como datos comparativos y con la definitiva relatividad que

ellos tienen. Así, pareciera que la oligarquía salvadoreña dispone, relativamente, de menos tierras que sus homólogas del resto de Centroamérica, cuando se trata de todo lo contrario.

En este país, 987 propietarios concentran el 40.2% de la tierra cultivable (equivalente a 618 mil hectáreas); son las dimensiones mismas de El Salvador las que definen localmente lo que es “grande” o “pequeña” propiedad. En cambio, lo que no depende del tamaño físico de una país es el mínimo de tierra con el cual se puede subsistir. Y dadas las características de la tierra ocupada por el sector parcelario o minifundista, se calculó que un campesino con una familia de cinco personas necesita entre 8 y 10 hectáreas⁶⁶ para vivir.

Esta estructura agraria, entendida como la forma de relación entre propietarios y no propietarios de la tierra con ocasión de la producción y de la apropiación del excedente, era sin duda la base del poder político y del sistema de dominación social prevalecientes. Siendo la agricultura el eje de la vida económica, el control sobre la propiedad de la tierra y de las otras instancias productivas otorgaba a los terratenientes, a los torrefactores y comerciantes cafetaleros condiciones para el disfrute de privilegios sociales y culturales que reforzaron su predominio político.

⁶⁶ Un estudio hecho para Guatemala, en 1947, calculó que para mantener los bajos niveles de vida actuales, se requieren como mínimo 3 hectáreas. Si el rendimiento promedio de maíz fluctúa alrededor de 10 quintales métricos por hectárea, una parcela de 3 produciría “en el mejor de los casos, un ingreso bruto de 200 quetzales [= dólar] al año. Es pues difícil concebir que una familia de agricultores que no reciba ingresos de otras fuentes ajenas a su finca, pueda mantener un mínimo confort con una extensión inferior a 10 hectáreas”. E.C. Highbee “The Agricultural Regions of Guatemala”, *The Geographic Review*, Vol. 37, No. 2 (1947), p. 178.

Es frente a este sistema de dominación y control que se alzó la crítica de los sectores medios y de las fuerzas sociales populares, en la forma de ofensiva contra las expresiones políticas más autoritarias, los gobiernos militares inaugurados a comienzos de los treinta. Pero aunque es cierto que el poder terrateniente hizo crisis en toda la región en el segundo lustro de los cuarenta y que los elencos gubernamentales fueron tarde o temprano sustituidos, unos violentamente, otros a través de mecanismos más formales de sucesión, es evidente que la economía centroamericana empezó a vivir un período de expansión que benefició especialmente al sector cafetalero y que fortaleció –de manera no prevista ni buscada– sus bases de poder.

Al examinar los cambios políticos que se sucedieron, pero sobre todo, por la manera como se produjo la inyección de dinamismo económico que se transmitió a todo el cuerpo social, consideramos que el período de posguerra comprendido entre 1944-48 y 1950-54 es el momento de mayores tensiones por el cambio.

En el segundo quinquenio de la década de los cuarenta la agricultura se encontraba en una situación de grave estancamiento, creciendo a un ritmo menor que el crecimiento de la población. El carácter atrasado del mundo agrario no reside exclusivamente en la conformación de la tenencia de la tierra (cuadro 9) sino en el funcionamiento y relación de los tres subsectores que lo conforman: la plantación bananera, moderna, en manos del capital extranjero y relativamente aislada de los ejes económicos locales; la hacienda cafetalera, tradicional, casi totalmente de propiedad nacional⁶⁷ y articulada a la de-

⁶⁷ Aunque los mecanismos de comercialización con el exterior del café (y otros productos) estaban parcialmente controlados por capital inglés, alemán y más adelante, norteamericano, tanto la distribución como la producción fue de propiedad nacional. Sin embargo esto no fue total en Costa Rica y aún menos en Guatemala.

manda del mercado internacional; y la pequeña propiedad campesina, cuya producción se reparte entre el autoconsumo familiar y la venta de excedentes al mercado local/regional y vigorosamente activada en todo el período anterior.

En los hechos, solamente el sector campesino de la economía mejoró en forma débil; la crisis capitalista exacerbó las condiciones para el funcionamiento y ampliación de la economía mercantil simple, como una alternativa frente al debilitamiento relativo del sector mercantil exportador. La producción de los llamados “granos básicos”, especialmente el maíz y el frijol, se acrecentó, confirmando en los hechos la noción de que economías mercantiles simples pueden reaparecer allí donde los productores independientes mantengan sus medios de producción y la demanda interna aumente, presionando por el lado de la oferta de alimentos.⁶⁸ Examinemos brevemente cada uno de esos tres sectores.

A) LA PLANTACIÓN BANANERA

La plantación fue la forma de organización de la gran empresa agrícola colonial, no sólo en el Caribe, sino en

Hasta 1944, el 31% de la producción de café, el 50% de la de azúcar y el 30% aproximadamente del ganado estaba en manos alemanas. Reynold Carson “Economic Development in Central America” *Interamerican Economic Affairs*, 2:2 (1948), p. 14.

⁶⁸ Datos sobre esta situación aparecen en J.C. Boyer “Agrarian Capitalism and Peasant Praxis in Honduras” (Ph.D. Diss., Duke University, 1983), 2ª. Parte. Por su parte Bulmer-Thomas habla de un proceso de “sustitución de importaciones agrícolas” en los treinta, como resultado del crecimiento de la oferta de productos de consumo popular, producidos localmente. Obviamente, esta sería sólo una demostración indirecta del auge de la economía campesina. Cf.: V. Bulmer-Thomas, “The Central American Economics in the Inter-War Period” (London University, Queen Mary College, unpublished), p.19 y ss.

aquellos sitios donde la producción en gran escala aprovechaba la existencia de factores productivos abundantes y baratos, como la buena tierra y la mano de obra abundante. El “genio” del colonizador, más sus recursos económicos dieron como resultado la creación de una verdadera subcultura social y económica, un microcosmos que vivió umbilicalmente atado a Europa o a los Estados Unidos, en la época en que el mercado de materia prima agrícola y alimentos era importante.

En Centroamérica, la plantación extranjera se estableció con ocasión de la producción del banano; alcanzó como tal su mejor momento en la década de los veinte y luego en el período inmediatamente posterior a la segunda guerra. Después de 1960 inició una reestructuración a fondo no sólo con nuevas variedades de fruta, con un nuevo sistema de empaque local y otras técnicas sino que terminó, ya en los setenta, más como una empresa comercial, apoyada en cosechadores locales y, por lo tanto, con otra estructura en el mercado.

La plantación bananera se estableció en Centroamérica desde finales del siglo XIX y fue desde su inicio una forma de agricultura altamente tecnificada, con fuertes inversiones de capital y la organización propia de la gran empresa moderna. El control de grandes extensiones de tierra (entre un 5.4% y un 8.1% de la tierra efectivamente cultivada), la disponibilidad gratuita de agua (control sobre los grandes ríos del Atlántico), el monopolio sobre el transporte ferroviario, las principales fuentes de energía eléctrica, salida portuaria inmediata, etc., aseguraron a la plantación extranjera condiciones óptimas para su desarrollo. Siempre fue una empresa protegida por el Estado nacional.

La operación a gran escala, gracias al sistema de concesiones que el Estado otorgó, permitió a la empresa frutera incursionar con éxito en otros rubros productivos, de tal manera que justamente en el momento de la guerra mundial,

el gobierno norteamericano demandó de estos empresarios la siembra y producción de aceites esenciales, abacá, palma africana y kenaf, cuya oferta estaba interrumpida por las operaciones bélicas.

La plantación bananera estableció una agricultura moderna en el seno de una economía agrícola decididamente rezagada; el grado de asilamiento del mercado local es sin duda relativo pero eficaz para el funcionamiento de una empresa que está integrada “verticalmente” no sólo con una casa matriz, metropolitana, de la cual es subsidiaria, sino con una enorme cadena de distribución en el exterior también, a través de un sistema de transportes de su propiedad.

El aislamiento relativo debe ser subrayado, aun cuando la figura del “enclave” tenga más éxito como referencia gráfica que como forma de articulación entre una empresa agrícola moderna y el mercado nacional. De hecho, este mercado o no existe (Honduras) o es muy débil (Costa Rica y Guatemala), pues como veremos de inmediato, estaba formado por una estructura también exportadora que se relacionaba de manera dominante con importantes economías campesinas en diversa condición autosuficiente.

La plantación bananera creció a impulsos de la demanda externa y bajo condiciones extremadamente favorables de carácter local, pero la ganancia sólo ocasional y parcialmente se reinvertió en ampliaciones de la misma empresa; el pago de sueldos y salarios a la mano de obra, más algunos impuestos fiscales en dirección del Estado, no alcanzaron nunca a transmitir dinamismo a la economía nacional; tampoco podría venir energía de las escasas compras de alimentos agrícolas de origen local (maíz, frijol, arroz, etc.) que se producían en el sector campesino, ya que los precios de estos productos estaban tasados por debajo de su valor como consecuencia del funcionamiento del conjunto de la economía.

Cuadro 10
Información sobre el enclave bananero, 1945-1947

País	Superficie	Trabajadores	Valor producción
Costa Rica	29861	19100	28.4 (1949) ^{/a}
Guatemala	28900	13600	18.2 (1947) ^{/b}
Honduras	27889	35809	35.5 (1950) ^{/c}

FUENTE: ^{/a}: *Costa Rica: A Study...*, *op. cit.*, Cuadro 4, p.50; ^{/b}: *El desarrollo económico de Guatemala* (México: CEPAL, 1951), p. 51; ^{/c}: *El desarrollo económico de Honduras*, *op.cit.*, p.24. La superficie está dada en hectáreas efectivamente cosechadas.

La naturaleza de la plantación como enclave extranjero tuvo sin duda significación distinta allí donde junto al banano, hubo otros productos de exportación igual o más importantes. En los tres países, la plantación fue no sólo un importante dato económico sino un hecho político de particular significación; hasta finales de la década de los cincuenta, el grueso de la inversión norteamericana en la región se ubicó en la agricultura y en el control de los servicios básicos vinculados a ella.

Esto tendría por sí mismo cierta relevancia, que resulta mayor por el hecho que la producción de banano constituía entre 1945-49 (dato promedio) el 40% del total del producto agrícola, dando empleo a una octava parte de la fuerza de trabajo y constituyendo durante muchos años la mayor fuente (aparente) de divisas. Por estar este conjunto de circunstancias en manos de una o dos empresas, la concesión bananera no fue sólo una concesión políticamente otorgada sino políticamente protegida. Y mientras el enclave no cambió de piel, constituyó una influencia externa poderosa sobre la vida política nacional.

La Compañía Bananera de Costa Rica, propiedad de la UFCO, cosechó un promedio de 28 millones de dólares anuales, que es más del doble del valor de la producción de

café, que constituye el segundo producto en importancia y también más que el valor de toda la producción de mercado interno (excluyendo el ganado); controlaba el 15% del total de la tierra bajo cultivos y participaba en más del 50% de las exportaciones. Su importancia no era menor en Guatemala, donde la UFCO llegó a tener en propiedad el equivalente al 7.3% del total de tierra. Exportó el 32% del valor total, sólo en banano, pero si se consideran los otros productos bajo control de la plantación, su participación llega al 38%.⁶⁹

Sin embargo, la importancia de las plantaciones bananeras fue y es aún más decisiva en Honduras, ya que durante largos años constituyó prácticamente el único producto de exportación (junto con la plata y las maderas, también en manos de intereses extranjeros). En el período 1945-48, la producción de banano correspondió al 23% del Producto Interno Bruto y generó más del 60% de los ingresos totales en divisas, ya que el 79% de las exportaciones hondureñas correspondieron al banano producido por las dos empresas norteamericanas, la Tela Railroad Co. (de la UFCO) y la Aguan Valley Co. (de la Standard Fruit & Steamship Co.).⁷⁰

⁶⁹ La información cuantitativa que se está dando sobre las plantaciones ha sido tomada de diferentes fuentes, tales como los estudios de la CEPAL del Twentieth Century Fund, UN, FAO *Statistical Yearbook* y otros. Cuando se trate de un dato preciso de una fuente especial, se hará la cita correspondiente; de otra manera, se recargaría innecesariamente el texto. Los datos de esta sección se refieren a los años 1945-49 y constituyen o promedios o años normales y deben ser interpretados como tendencias generales de la economía.

⁷⁰ La Tela Railroad Co. se encuentra en las márgenes del río Ulúa, cerca de Puerto Trujillo y fue hasta 1958 el productor más importante (2/3 del total); la Standard Fruit & Steamship, tiene asiento en el valle del Aguan, entre La Ceiba y Tela, todos ellos puertos sobre el Atlántico.

Habría que detenerse un momento en el análisis de la plantación bananera en Honduras, no sólo por la importancia que como sector productivo tiene en este país sino como un antecedente que explica la política local y regional y en donde los intereses extranjeros tienen un peso específico imposible de imaginar en otras sociedades latinoamericanas. En efecto, el carácter paradigmático del enclave exhibe sus peores efectos en una sociedad como la hondureña, donde no logró construirse una agricultura comercial de exportación de propietarios nacionales, ni se logró en el pasado un inicio de integración física entre regiones económicas de gran potencial productivo.

Honduras fue desde la mitad de la década de los años veinte el exportador más grande de banano en el mundo, posición que mantuvo hasta 1948.⁷¹ Como consecuencia de este desestimable primer lugar, la agricultura hondureña y el conjunto de la economía se retrasaron en términos comparativos con el resto de Centroamérica y en términos absolutos si se consideran los montos de producción local.

Fue esta conformación casi colonial lo que impidió que la economía hondureña aprovechara el reordenamiento de la demanda internacional de la posguerra, pues en el período en que el resto de los países de Centroamérica aumentaba sus ingresos con productos tradicionales, como el café, o de recién aparición, como el algodón, el sector bananero entró en crisis, arrastrando de manera catastrófica al conjunto de la sociedad hondureña.

Aunque los precios del banano aumentaron en el mercado internacional⁷² y el valor unitario de la producción in-

⁷¹ Entre las dos guerras mundiales, el banano representó la increíble proporción del 88% de las exportaciones totales; en 1931 se colocaron 31 millones de racimos en el mercado internacional, cifra nunca alcanzada después (18%).

⁷² El promedio total exportado por América Latina fue comprado a 0.065 centavos por libra, que alcanzó su máximo precio de

terna también creció de 1.89 (dólares) por racimo (1945) a 3.30⁷³, la desarticulación total entre la plantación y el mercado nacional evitó que este último se beneficiara de manera directa con estos resultados. Sin embargo, la producción misma de banano creció muy lentamente entre 1945 y 1954; en este último año se conjugaron de manera accidental la gran huelga de los trabajadores bananeros, que señala el fin de una época de la historia política del país y el lento comienzo de otra, y un período de grandes inundaciones que dañaron seriamente las plantaciones.

El enclave de plantación revela en su funcionamiento externo la naturaleza de su articulación con el mercado nacional; así, en el período comprendido entre las dos fechas arriba mencionadas, las cuentas nacionales revelan un “crecimiento” sostenido que se apoyó en dos factores que no tienen que ver con la estructura productiva hondureña: aumento en el valor de las exportaciones de banano y una entrada neta de capital extranjero que las dos compañías norteamericanas trajeron para renovar las plantaciones, relativamente abandonadas durante la guerra.

Durante ese período, el Estado hondureño y los grupos políticos más activos, tomaron conciencia de la necesidad de articular de nueva manera el enclave de la plantación con el conjunto de la economía, así como de estimular la producción agrícola no bananera. La creación del impuesto sobre la renta, que buscó absorber una parte de las utilidades de las empresas exportadoras (1950) empezó a aplicarse, aumentando transitoriamente los ingresos estatales; aumentó la importancia de la hacienda cafetalera y de otros productos agropecuarios.

0.081 en 1957. Department of Agriculture, *Crops and Markets* (Washington, D.C.: USDA, 1960), p. 16.

⁷³ Estadísticas del Banco Central de Honduras, citado en *El desarrollo económico de Honduras*, op. cit., cuadro 17, p. 28.

Sin embargo, las inundaciones y la huelga bananera contrajeron la producción/exportación de banano en más de un 36%, disminuyendo en un tercio la capacidad nacional para importar; se interrumpió la corriente inversionista de capital extranjero⁷⁴ y a pesar de la compensación de otros factores, como el aumento de las ventas de café, en 1956 se planteó en la cuenta de capital cifras negativas de la disponibilidad de divisas. Honduras fue el primer país centroamericano que recurrió en 1957 a un crédito de tipo *stand-by* con el Fondo Monetario Internacional.

El objeto en esta sección es el estudio de la plantación como forma de organización agrícola; nos hemos desviado solamente para examinar en el ejemplo hondureño la manera como una economía nacional se retrasa aun cuando su sector externo se modernice y cómo, cuando este último entra en crisis —por razones climatológicas y políticas—⁷⁵ arrastra al conjunto del sistema. A partir de 1955 la sociedad hondureña creció a ritmos decididamente lentos, mostrando más que ningún otro país de la región, lo que significa la vulnerabilidad externa.

El enclave de plantación, como quedó dicho líneas atrás, sufrió una importante reestructuración en la década de los sesenta; desapareció como tal en Guatemala, donde la

⁷⁴ Entre 1945-53 la entrada neta anual de capital extranjero era de 8.2 millones de dólares, se redujo a 1.2 en el bienio 1954-55; en este último año, se produjo una fuga de capital por valor de 5.2 millones de dólares. Tal vez es innecesario decir que las compañías reanudaron el envío de utilidades al exterior, después de 1956, a un promedio anual de 8 millones de dólares. *El desarrollo económico de Honduras*, op. cit., pp.17-11, cuadros 10, 11.

⁷⁵ La huelga bananera se planteó aumento de salarios y otras prestaciones sociales que ya tenían los obreros agrícolas en sus homólogos de Costa Rica y Guatemala. Por sus efectos de mediano y largo plazo, aquel hecho político marcó el destino futuro de la sociedad hondureña, que no es posible, en este momento, entrar a analizar.

United Fruit Co. convertida en United Brands Corp., entregó al gobierno guatemalteco parte de las tierras que tenía en el Pacífico y vendió sus instalaciones del Atlántico a Del Monte. En Costa Rica, sólo conserva un distrito productivo, pero ha creado al igual que en Honduras, una estructura de cosechadores locales a los que presta asesoría y a quienes compra por anticipado la producción convenida. Esta historia de la piel del camaleón y sus resultados se consideran en la última parte de este trabajo.

B) LA HACIENDA

El análisis de la hacienda tradicional no puede hacerse ni de manera aislada ni considerándola como la forma universal de organización de la agricultura centroamericana. Aún en aquella época debe reconocerse la existencia de diversos tipos de hacienda, uno de cuyos límites es el latifundio improductivo cuyo propietario vive de un extendido sistema de aparcería, hasta la hacienda cafetalera, que tiene su expresión típica en la “hacienda de colonato”.

Los mencionados censos de comienzos de la década de los cincuenta permitieron comprobar con cifras lo que era una realidad económica, social y política fundante: el monopolio de la tierra para unos pocos e inherente a esa condición, la escasez de tierra para muchos otros. A juzgar por las fuentes consultadas, que se mencionan a lo largo del texto, aquella comprobación resulta cierta por otros medios, en el sentido de que existía en Centroamérica un paisaje rural dominado por la imagen de la hacienda tradicional con su propietario ausente y cientos de peones trabajando en su interior para pagar deudas, y junto a esto, subordinación política, cultura racista, discriminaciones social y étnica.

Sin ánimo de construir tipologías que solo podrían lograrse a base de mejor información factual, se ha formulado

una categorización de “situaciones productivas” tal como existían a la mitad de los cuarenta, período al que se refiere el cuadro 11. La heterogeneidad productiva resultado de la combinación de modalidades históricas de producción, exacerbadas por el período de estancamiento anterior, dan oportunidad para hacer una propuesta provisional de cuatro ‘modelos’ de producción cruzados por el mercado al que aquella se destina.

En este cuadro la clasificación de los productores no sigue la lógica de tres o seis sectores agrarios. Se *identifican cuatro subsectores funcionales con fronteras comunes* y que se diferencian por su desarrollo tecnológico relacionado con la variable “destino de la producción”, Es decir se refieren propiamente el producto y el mercado mas que el tamaño de la empresa. El cálculo se ha hecho con base en diversas fuentes que aparecen en los cuadros 10, 12, 13 y 14. La información del cuadro 11 puede ser objeto de varias consideraciones, una la distinción entre el mercado externo/interno y el autoconsumo, presentado en porcentajes del valor total de la producción agropecuaria, que es igual a 100. La mitad de la producción agropecuaria tiene como destino el ámbito internacional, testimonio de la relativa especialización productiva de la economía centroamericana. El valor de la producción de mercado interno es menor, del 30%, pero hubo épocas en que alcanzaba cifras mayores. Este cuadro informativo tiene un propósito hipotético: proponer con datos relativos el valor de los destinos productivos. En una sociedad rural, el autoconsumo tiene un valor relativamente alto, un 20%. Como puede verse no hay “especialización” exclusiva, salvo la plantación. Los otros patrones productivos tienen destinos compartidos: algo para la subsistencia y algo para el mercado interno. La distinción entre finca de producción comercial y la hacienda tradicional no reside en el tamaño relativamente menor de aquellas

(mediana propiedad, categoría 3, del cuadro 9) sino en una producción más o menos moderna, más o menos dirigida personalmente, con relaciones más o menos asalariadas. Por ejemplo, la hacienda tradicional cafetalera o ganadera versus la finca mejor administrada, más dinámica, con el dueño del beneficio o torrefactor, que maneja más capital.

La gran propiedad tenía en común, cualquiera que fuese el producto o su destino, que eran heredades cultivadas en forma extensiva, con escasa inversión de capital y sin ninguna posibilidad de incorporar tecnología. Las formas más extensivas se encuentran en la hacienda ganadera de Honduras y Nicaragua, o la hacienda cafetalera tradicional, que hemos llamado de “colonato”, funcionaba de manera más característica en Guatemala y El Salvador y, con menor intensidad, en Nicaragua. La finca es una manera de realizar la producción agrícola para exportación; por lo tanto se organizó y consolidó en función de la demanda internacional y constituye sin duda una empresa comercial especializada. En Costa Rica el grueso de la producción cafetalera se hacía en fincas medias, en la pequeña y mediana propiedad, cuyo volumen reunía el beneficiador/comerciante que compraba la cosecha de miles de propietarios, a quienes trataba no como campesinos asalariados sino como pequeños productores; y a los que pagaba un precio, un valor.

Cuadro 11
Origen y destino de la producción agropecuaria por subsectores, 1945-1948

Origen	Destino (en porcentajes)			Productos	
	Mercado externo	Autoconsumo	Mercado interno		Total
Plantación	25.0	-	-	25.0	Banano, abaca, palma africana
Economías campesinas	0.2	15.0	7.2	24.9	Maíz, frijol, sorgo, trigo, verduras, frutas, azúcar, etc.
Hacienda tradicional	5.0	2.0	17.5	25.0	Café, ganado, azúcar, arroz, tabaco, cacao, etc.
Finca comercial	20.0	3.0	5.1	25.1	Café, madera, ganado, etc.
Total	50.2	20.0	29.8	100.0	

Fuente: Cuadros 10, 12, 13, 14 y texto.

Lo que define el carácter básico de la hacienda es la estructura social que se establece con ocasión de la producción, generalmente de café y granos para el consumo interno. En efecto, ocupa un número importante de fuerza de trabajo, no especializada, en parte residente en los límites de la finca y cuya remuneración total es una combinación (no siempre explícita ni igual) de salario monetario con mercaderías de consumo inmediato, más una parcela de tierra y el uso de ciertas instalaciones.

La “parcela de subsistencia” convierte al trabajador agrícola en un campesino cuya oferta de trabajo desaparece a través de los mecanismos del endeudamiento vitalicio. Estos mecanismos estuvieron, sin ninguna duda, en los orígenes de la formación de las haciendas de colonato, llamadas así justamente porque el peón se convierte en el “mozo colono” y cuya permanencia en la unidad productiva asegura la mano de obra durante todo el año. Pero el sistema de deudas es ahora menos importante que el papel desempeñado por la parcela, que el campesino cultiva por períodos marginales a su actividad, en el tiempo de trabajo necesario para reproducir su existencia familiar.

Mientras el sistema se mantuvo hasta finales de los años sesenta como forma predominante de organización de la producción cafetalera (básicamente), fue ambigua la calificación de la significación del salario en dinero y de la tenencia de la parcela, discutiéndose si esta última era una forma de completar el salario, o si la relación con el campesino disimulaba una aparcería, es decir, una forma de renta que se paga con servicios personales. La cultura política y la ideología de la época se nutrieron de esta relación de sabor patrimonial, todo lo cual confluyó en su momento para legitimar en los hechos el absoluto predominio de los dueños de la tierra sobre el conjunto de la sociedad.

Debe decirse que las experiencias centroamericanas varían de un país a otro. La empresa bananera fue siempre una organización agraria moderna, lo que variaba entre la hacienda tradicional, una extensa combinación de tierras cultivadas por intermedio de aparcerías, medierías, colonato y otras formas de pago de la renta con productos, con el consiguiente efecto de una bajísima productividad, retraso social y cultural y extrema penuria humana. Y la finca comercial, como lo fue la finca cafetalera de los alemanes en Guatemala y Costa Rica, y muchas otras de extranjeros o nacionales, que estaban mejor organizadas por su rentabilidad porque los dueños eran más empresarios con mentalidad más burguesa, menos territorializada.

El período del estancamiento debilitó sin duda los vínculos con la tierra productiva pero los flexibilizó con aquellos recursos próximos a la frontera agrícola, lo que produjo una proliferación de economías de aparcería, como lo reflejan tardíamente aún los censos de 1962. En Honduras, sólo el 22.4% de las fincas son cultivadas por sus dueños (en Nicaragua, el 38.5%, el 39.4 en El Salvador y el 57% en Guatemala), en tanto que Nicaragua, el 19% de la tierra (equivalente a 735 mil hectáreas) es ocupada sin título.

El precarismo –tenencia sin título legal– en Honduras no sólo es un rasgo de la pequeña propiedad sino también del latifundio. Pero lo que más llama la atención es la cantidad de tierra entregada bajo diversas formas de arriendo que alcanza el 43% de todas las fincas en El Salvador, 34% en Honduras y 22% en Guatemala, así como la cantidad de tierra cultivada por comunidades o en forma colectiva, como lo señalan los censos, importante en estos dos últimos países.

Los primeros momentos del auge comercial, a partir de 1945-47 reforzaron de nuevo la relación entre los grandes propietarios de tierra y los campesinos necesitados de ingreso. El período de los primeros censos agropecuarios coincide con este

momento de transición, que tiene varias características: *a)* estimulados por la demanda externa, los cafetaleros se mueven aprovechando plantaciones abandonadas o no suficiente aprovechadas, para aumentar el volumen de producción sin inversiones de capital y a base de reclutar nueva fuerza de trabajo; *b)* luego, a través de una lenta expansión productiva basada exclusivamente en el aprovechamiento de tierra propia pero inculta en el marco de las mismas haciendas.

Y *c)* se da comienzo a la reorganización del mercado de trabajo rural, que estaba formado por el mozo colono –dentro de la hacienda– y los jornaleros o peones migrantes, que son campesinos de subsistencia que se trasladan estacionalmente con ocasión de la cosecha anual de café. Aquí aparece un nuevo personaje, ambiguo en su constitución funcional, el trabajador agrícola asalariado, estacional; es el proletariado rural, que en verdad es más pobre que proletario urbano y cuya naturaleza clasista se oculta en las redes de su relación laboral o de su ausencia. Se habla de “reorganización” porque el auge cafetalero se produce, ahora, en el marco de una situación política e ideológica que empieza –lentamente– a cambiar.

Las características del movimiento expansivo en la producción y exportación se analizan a continuación. Pero debemos subrayar algunos aspectos previos. Así, no resulta aceptable por falsa, la identificación entre gran extensión de tierra, hacienda de colonato y producción para la exportación, aun cuando en algunos países todos estos rasgos coincidan en la llamada “gran producción de café”, tal como sucede en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. En realidad, deben distinguirse, por lo menos, dos niveles de mercado; uno alude al destino geográfico del producto, es decir, a la intención productiva que responde a un tipo de demanda y otro, al origen de la oferta, es decir, la estructura de la organización, que produce la mercancía.

Tal como lo establece el Cuadro 12, hay que distinguir el tipo de mercado, pues tratándose de sociedades agrarias de vocación extrovertida, la producción para el mercado internacional varía cualitativamente de aquella que se consume en el mercado interno. Y aunque fue evidente desde antaño la especialización productiva de la hacienda extensiva también hay que considerar que existió una finca intensiva, ambas dedicadas a la exportación de café⁷⁶; y de la propiedad parcelaria como origen de géneros de alimentación popular. Hay especialización pero también, hay superposiciones.

En efecto, deben ser tomados en cuenta en la distribución del valor de la producción total, la cantidad de café que se consume internamente: en Costa Rica era el 12%, promedio, a finales de los cuarenta⁷⁷; en Guatemala equivalía al 20% de la cosecha hasta 1949⁷⁸ y en El Salvador, entre un 9 y 11% se consumía internamente.⁷⁹ Esta proporción seguramente se mantiene o ha disminuido ligeramente, de tal suerte que lo que interesa señalar es mas bien que la especialización de la gran propiedad es cierta pero relativa, por cuanto hay otros sectores que ya en aquella época cultivaban café, siendo el más importante el que llamamos (en el cuadro 11) “subsector de la finca comercial” cuya producción tiene un porcentaje de consumo interno y cuyo tamaño de tenencia se ubica probablemente en las categorías 3 y 4 de la estratificación estimada en el cuadro 9 (mediana propiedad rural y campesino *latu sensu*).

⁷⁶ El café fue y es el primer producto de exportación en casi todos los países, en el período considerado, cuando aún no aparecía el algodón, la caña de azúcar o el ganado; aún así, siempre hubo otros productos de menor cantidad y valor, tales como el cacao en Costa Rica, el ganado y la madera en Honduras y Nicaragua, o el chicle en Guatemala.

⁷⁷ *Investment in Central America, op. cit.*, p.64.

⁷⁸ Oficina Central del Café, publicación anual, 1949, p. 41.

⁷⁹ USDA, *Foreign Crops & Markets*, Sept. 1958.

Cuadro 12
Centroamérica: Información sobre agricultura tradicional de exportación, 1948-1978

País / Región	Banano						Café					
	1948-52			1974			1948-52			1978		
	Area	Prod.	Rend.	Area	Prod.	Rend.	Area	Prod.	Rend.	Area	Prod.	Rend.
Costa Rica	15	434	271	33	1100	333	51	23.2	454	85	95	1119
El Salvador	-	-	-	9	53	57	112	74.5	665	147	132	894
Guatemala	17	185	109	59	450	76	162	57.6	355	248	139	592
Honduras	57	802	140	48	1360	283	63	13.1	207	125	59	475
Nicaragua	1	13	128	40	250	63	56	19.5	348	90	60	661
Centroamérica	91	1434	162	189	3213	162	444	187.9	405	695	485	748

Nota: Area, en miles de hectáreas; Producción en miles de toneladas métricas; Rendimiento banano, cientos de kilos por hectárea; Rendimiento café, kilos por hectárea. Para efectos comparativos, téngase presente el rendimiento del banano en Ecuador (1948-52: 119; 1974: 175) y del café en Brasil (1948-52: 407; 1978: 480).

Al analizar la estructura de la producción cafetalera se comprueba que el grano se produce en *todas* las modalidades de extensión de la propiedad, así como que los granos básicos (maíz, frijol, sorgo y trigo) también se cultivan cualquiera sea la dimensión de la tenencia. En otras palabras, en aquella época la especialización productiva era menos rentable y bien podría dedicarse parte de la tierra de las grandes haciendas al cultivo de productos de alimentación popular para su consumo interno.

De todas maneras, la concentración de la producción exportable estuvo siempre en pocas manos, incluso en Costa Rica, donde también esto es parcialmente cierto a contrapelo de la divulgada creencia sobre la igualdad en la propiedad de la tierra. Según unas fuentes, el 5% de los hacendados eran propietarios de más del 50% de los árboles en producción⁸⁰; si se calcula que por la variedad del cafeto de aquella época correspondían 1.433 árboles por hectárea, se comprenderá la escasa significación que tenía el 58% del total de fincas cafetaleras (un total de 21.576)⁸¹ que tenían menos de mil árboles por unidad; de nuevo, el 5% de los plantadores tenían en producción más de 10,000 árboles cada uno.

En El Salvador, el 4% de los cafetaleros (455 haciendas) monopolizaban el 58% de la tierra sembrada de café y producían el 76% de la cosecha total.⁸² La situación es similar en Guatemala, donde el control de las grandes haciendas es aplastante: casi el 80% de la producción se origina en 1.500

⁸⁰ El número de árboles se estimaba en 75 millones, la mayor parte de los cuales estaba dentro de un radio de 15 kilómetros alrededor de San José, distribuido en fincas manejadas por pequeños productores, muchas pertenecientes a un solo dueño. *Investment in Central America, op.cit.*, p. 65

⁸¹ Inter-American Development Commission, *Central America* (Washington, D.C., 1944), p. 95.

⁸² *Investment in Central America, op. cit.*, p. 108.

Cuadro 13
Centroamérica: Información sobre agricultura no tradicional de exportación, 1948-1979

País / Región	Caña de Azúcar						Algodón						
	1948-52/53			1978			1948-52			Producción			
	Área	Prod	Ren	Área	Prod	Ren	Área	Prod	Ren	70	75	77	79
Costa Rica	21	827	391	44	2437	558	-	-	-	1	1	7	4
El Salvador	13	763	587	41	3200	775	21	8	3.6	46	78	66	72
Guatemala	16	358	376	77	5436	705	5	2	3.2	57	105	137	146
Honduras	22	560	250	73	2300	325	-	-	-	3	5	6	8
Nicaragua	16	627	401	45	2706	608	21	8	3.8	67	123	118	109
Centroamérica	88	3135	402	280	16079	594	47	18	3.5	174	312	334	339

Nota: Área en miles de hectáreas; Producción en miles de toneladas métricas, se trata de azúcar y no de caña de azúcar; Ren es rendimiento en kilos por hectárea. Para efectos comparativos, téngase presente el rendimiento de la caña de azúcar en Cuba (1948-52/53: 419); y del algodón en Argentina (1848-52: 2.4).

haciendas que corresponden a 1,300 propietarios.⁸³ Aunque con una producción sensiblemente inferior, la situación de control de las haciendas más grandes es similar en Honduras; el censo de 1952 registró 39.000 “fincas” de café, pero la mitad de la cosecha se procesa en unidades mayores de 250 hectáreas.⁸⁴

Conforme a la distribución porcentual que propone el Cuadro 11 –que fue hecha con el valor de la producción de tres de los cinco países–⁸⁵ la agricultura de exportación (columna de la izquierda) genera más de la mitad del valor de la producción agrícola total; esa situación no tiene novedad, ya que lo que llama la atención es la importancia de la agricultura de mercado interno y, en su interior, la importante proporción de la producción en el subsector de las economías campesinas.

En esa época la contribución de la producción de la plantación era mayor que la que generaba el café. Esa situación cambiaría en los años inmediatos, con el auge de la producción de algodón, el aumento de las exportaciones de café y unos años más tarde, con la producción para la exportación de productos que tradicionalmente eran sólo de mercado interno: el azúcar y la carne de vacuno. Pero en aquella época, junto

⁸³ El Censo Agropecuario de 1950 contabilizó más de 31,000 fincas de café, de las que 1.744 producían el 87% del total. Según el censo, había en esa época 153 millones de árboles, de los que el 75% estaba en producción.

⁸⁴ Un dato importante es que un tercio de las 68 mil hectáreas de café (1951) lo ocupaban árboles con menos de 5 años, lo que indica una importante siembra que explica la formación de un empresariado cafetalero importante pero tardío.

⁸⁵ Se trata de un cálculo aproximado en muchos sentidos, pues el cálculo del valor que aparece en las fuentes consultadas era hecho por primera vez y además, incompleto. Los porcentajes revelan, sin embargo, una cierta congruencia con las cifras subsectoriales y nacionales de aquella época.

a la hacienda tradicional, existía el latifundio improductivo y una franja de propietarios/productores que se movían entre la hacienda exportadora, por un lado y las diversas economías campesinas, por el otro y cuya producción fundamental se orientaba al mercado interno, sin que pudieran o necesitaran la especialización monoprodutora.

Por ello, en este tipo de unidades productivas –que corresponderían a lo que en otras latitudes se llama campesino rico o hacienda mediana y pequeña– también se cosechaba café para la exportación, o cacao (Costa Rica), o ganado (Honduras), pero también tenían necesidad de suplir sus propias necesidades, destinando parte al autoconsumo. Este subsector, que llamamos finca comercial, nunca aparece en la tradicional dicotomía latifundio-minifundio, era y es todavía según nuestro entender, un factor decisivo en el funcionamiento del mercado interno y en la dinámica de la agricultura de exportación.

Las situaciones nacionales son diversas, de tal suerte que este tipo de productores que venden en el mercado interno, en el exterior y también están en el límite superior del autoconsumo, son más importantes en Costa Rica, Nicaragua y Honduras (en este orden). Se trata de una producción semi-moderna si así pudiera calificarse, germen de un empresario agrícola de nuevo tipo. Reproducen culturalmente la hacienda tradicional y la de los campesinos, en parte porque están al servicio de aquellos y explotan a estos. La información del cuadro 12 es importante no tanto por el área o el volumen de la producción sino por el rendimiento nacional, que son datos inéditos y donde Costa Rica, en banano y El Salvador, en café aparecen con líderes con altos niveles de productividad.

c) LAS ECONOMÍAS CAMPESINAS

Este subsector de la estructura agraria nacional estaba formado por una heterogénea variedad de formas de actividad económica que a su vez condicionan procesos particulares de trabajo, de acceso al mercado y, en general, de existencia social y cultural y que sólo tienen en común el tamaño de tierra de que disponen. Esa actividad económica ya no está destinada a obtener ganancias ya que la mueven básicamente propósitos de subsistencia, la autoreproducción de la condición social de los productores directos, que se encuentran en diverso grado de relación con la propiedad y disposición de los medios materiales para lograrlo.

Utilizamos aquí el término “economías campesinas” en plural, tomando como eje la definición clásica de Wolf,⁸⁶ pero tratando de captar esa variedad referida hace un momento y que obviamente la “estratificación” del Cuadro 8 no representa bien. Según los censos de la época, había en Centroamérica más de medio millón de parcelas menores de diez hectáreas de las cuales un cuarto de millón tenía menos de una hectárea,⁸⁷ todo lo cual representa más del 80% del total de tenencias. Los censos no son claros en la identificación del número de trabajadores agrícolas; una estimación posterior calculó que el 22% de la población rural centroamericana eran

⁸⁶ Eric Wolf, *Peasants* (Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1966). En torno a la definición de campesino hay una polémica interminable, justamente porque no se acaba de comprender la naturaleza histórica del campesinado. No entramos a esa discusión por los propósitos específicos de este trabajo.

⁸⁷ La propiedad parcelaria entre 1 o menos de 10 hectáreas suma 367,048 unidades y la situación de destrucción casi total de propiedad (menos de 1 ha.) es de 264.814, lo cual da un total de 631,862 parcelas en relación a 778.893 que hacen el total de tenencias, cualquiera sea su tamaño. Cf., censos nacionales.

trabajadores agrícolas o campesinos sin tierra o ambas cosas a la vez.⁸⁸

Es preciso hacer la distinción entre la economía campesina de subsistencia y las formas de lo que se conoce como economía mercantil simple, distinción que no sólo se apoya en la disponibilidad de tierra, calidad de la misma, acceso físico al mercado, sino en la calidad y cantidad del producto obtenido, todo lo cual supone además culturas campesinas relativamente diversas. La situación es muy fluida y tiende a simplificarse por el lado de lo que es común: la extrema pobreza que determina un bajísimo nivel de vida.

El supuesto ha sido que a partir de la Gran Crisis, la falta de trabajo y la actividad económica disminuida en el sector de exportación reforzó el subsector campesino, con diversas alternativas como auge del arriendo no capitalista de tierra, nuevas divisiones de la misma, aumento de la presión demográfica, etc. Por lo general, desde el sector campesino se origina una doble articulación con el mercado, como oferta de trabajo (que en este caso estaba disminuida) y como oferta de bienes de consumo inmediato (que en este caso, aumentó sensiblemente).

Así como la economía de exportación, por su grado de especialización pudo sobrevivir sólo en la gran propiedad, en las economías campesinas la sobrevivencia sólo pudo lograrse con la venta de una parte de las cosechas, con la diversidad productiva y con el auge del artesanado rural. El cuadro siguiente contiene información sobre producción para el mercado interno, no necesariamente para el autoconsumo. Se supone que una fracción de esta se realiza en el mercado con un valor o algún cálculo cierto que se menciona en el cuadro siguiente.

⁸⁸ Según el estudio de CIDA/CAIS, "Tenencia de la tierra y desarrollo rural en Centroamérica" (San José, Costa Rica, a mimeógrafo, 1970), sobre un total de 6.6 millones de población rural había 1.5 millones de "trabajadores sin tierra".

Cuadro 14
 Centroamérica: Información sobre el valor de la producción agropecuaria, 1945 (en millones de dólares)

Productos de mercado interno (61%)								
	Maíz	Frijol	Arroz	Trigo	Azúcar ^{/o}	Otros	Prod. Pecuaria	Total
Guatemala ^{/h}	45.0	12.4	2.2	3.0	2.6	33.1 ^{/c}	35.0	133.3
El Salvador ^{/f}	9.2	3.3	2.5	-	7.3	5.2 ^{/e}	17.2	44.7
Honduras ^{/j}	8.3 ^{/i}	0.5	2.1	-	-	-	-	35.1 ^{/b}
Nicaragua ^{/m}	6.1	3.2	1.1	2.2	-	10.0 ^{/l}	30.8	53.4
Costa Rica	2.0	1.4	1.4	-	4.5 ^{/n}	3.1 ^{/c}	17.6	30.1
Centroamérica								266.6
PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN (39%)								
	Café	Banano	Otros	Total				
Guatemala	26.1	18.2	11.4 ^{/b}	55.7				
El Salvador	51.4	-	3.4 ^{/d}	54.8				
Honduras ^{/h}	4.7 ^{/g}	34.6	0.9	39.7				
Nicaragua	15.1	-	2.2 ^{/k}	17.3				
Costa Rica ^{/h}	12.0	28.0	4.8	44.8				
Centroamérica				213.3				

Fuente: ^{/h}: *The Economic Development of Guatemala*, op. cit., p.24 y corresponde a 1946-47; ^{/b}: Chicle, aceites esenciales, cacao y Madera; ^{/c}: Tabaco, papas, frutas, algodón, vegetales, etc.; ^{/d}: Algodón, semilla de algodón y henequén; ^{/e}: Tabaco, ajonjolí y maicillo; ^{/f}: *El desarrollo económico de El Salvador*, op. cit., p.152, millones de colones de 1952 convertidos a dólares; ^{/g} y ^{/h}: *El desarrollo económico de Honduras*, op. cit., p.174, tempiras de 1948 convertidos a dólares; ^{/i}: Corresponde al valor efectivo de la oferta interna, *idem*, p.42; ^{/j}: Los datos sobre producción y el valor para la agricultura de consumo interno fueron imposibles de conseguir; ^{/k}: Ajonjolí, algodón y otros; ^{/l}: Caña de azúcar y otros; ^{/m}: *El desarrollo económico de Nicaragua*, op. cit., p.88; ^{/n}: Azúcar y panela; ^{/o}: *Costa Rica: A Study...*, op. cit., p.40; ^{/b}: La información confunde producción de caña de azúcar con producción de azúcar o panela; ^{/r}: La producción total se calculó como promedio de otros años.

Desde finales del siglo XIX, la consolidación de la agricultura de exportación en la gran hacienda cafetalera estuvo acompañada por una estructura minifundista en la que recayó parcialmente la función de producir granos básicos y otros productos de valor para el mercado interior. En la posguerra encontramos que esta situación se ha reforzado al punto de que en algunas regiones la pequeña producción mercantil se ha vuelto predominante y que según la descripción del origen y destino de la producción agropecuaria total (cuadro 11), correspondería a este sector un importante volumen en esa producción: un valor aproximado del 7.2% se vendería al mercado y un poco más del doble (17.5%) serviría para el autosostenimiento familiar.

En ese período, las dificultades con los productos de exportación habían mejorado de manera relativa el valor de la producción interna, que según cifras aproximadas correspondían a más de 60% del producto agropecuario total para todo Centroamérica. Y se habla con propiedad de datos aproximados porque el valor real de la producción campesina nunca se ha podido calcular y menos en aquella época.

Como puede advertirse al examinar esta aparente estructura dual (véase Cuadro 14, *supra*), si bien la exportación es importante como fuente de divisas para importar todo aquello que la sociedad no tiene pero que necesita para funcionar, la vida económica gira en torno a la producción de mercado interno. En esta época, un importante sector de la actividad económica estaba vinculado al mercado sólo de manera marginal y el cálculo económico no puede valorar por ello la contribución del numeroso sector de subsistencia, mayoritario en Guatemala, Honduras y Nicaragua, y menos importante en El Salvador o Costa Rica.

No es necesario insistir en el hecho que el retraso económico y la pobreza en que vivían millones de campesinos centroamericanos no se debía ni a la falta de tierra ni a ausencia de laboriosidad; ya desde esa época y aún antes era evidente que la estructura de la propiedad agraria y la cultura política de los dueños de la tierra empujaban a la sub-utilización de los recursos naturales existentes y de los recursos humanos disponibles. Con el auge de la agricultura de exportación, a partir de 1946, el avance del capitalismo agrario reforzó y modificó tanto la hacienda tradicional como las economías campesinas en un sentido totalmente contradictorio.

Estas últimas disminuyeron su producción y su productividad y parte de sus tierras fueron ocupadas por los nuevos cultivos. La producción de granos básicos y, en general, la oferta agrícola de mercado interno empezó a disminuir y contradictoriamente en el momento de la posguerra cuando se empezaron algunos programas de salud ambiental que contribuyeron a elevar el crecimiento de la población. Este aumento demográfico hizo más crítica la oferta de alimentos.

El sector campesino no fue nunca un sector inmovilizado desde el punto de vista de sus prácticas de cultivo, ni se mantuvo aislado del funcionamiento del conjunto de la economía nacional e internacional. No ha sido suficientemente analizado el papel que la producción de granos básicos y otras ofertas alimenticias ha desempeñado en el funcionamiento del conjunto de la economía, así como la naturaleza del mercado de trabajo creado en torno a una sobreoferta de mano de obra y un nivel muy bajo de salarios. La economía campesina fue el colchón donde se recostó la sociedad agroexportadora herida por la falta de estímulo externos.

Cuando estos aparecieron de nuevo, después de 1945, fue a costa de la tierra y de la producción campesina que se recuperó el sector cafetalero y después de 1950, que se

diversificó la producción de exportación. Es este, el punto de partida de importantes modificaciones en el sector que hemos llamado de la “hacienda tradicional” y “finca comercial”.

El análisis de esta transformación en dirección de la creación de un empresariado agrícola moderno, es decir, el paso de lo que llamamos el surgimiento de una cúspide agraria, burguesa, monopólica en la década de los setenta, corresponde a la destrucción de las economías campesinas y su transformación en un régimen empobrecido de pequeñas economías mercantiles, mientras más pequeñas más necesitadas del mercado y, por lo tanto, más dependientes de una demanda de trabajo y de recursos cada vez más difíciles y escasos.

Las nuevas líneas que marcaron la organización del comercio internacional —apertura de nuevos mercados, demanda de nuevos productos agrícolas, elevación transitoria del nivel de precios, innovaciones en las comunicaciones y el transporte, pero sobre todo, la estructuración de un sistema financiero internacional estable— fueron más que eso. Debe hablarse en propiedad de un ajuste de las economías periféricas y de los centros económicos dominantes en el marco de una nueva división internacional de trabajo.

Esta renovación del capitalismo de posguerra influyó decisivamente en una sociedad como la centroamericana, agraria, sensible de los cambios externos por su estructura exportadora. En esta cadena que vincula la demanda internacional con la agricultura interna, el sector campesino resultó profundamente lastimado al perder, de nuevo, parte de la tierra disponible; al fraccionarse aún más su tenencia promedio, al aumentar la presión demográfica y, en el período de transición (1945/52-53), al ver desvalorizada parte de su producción, como resultado de la oferta de alimentos y otros bienes de origen agrario importados. En la competencia que se dio en los hechos, disminuyó en términos relativos la oferta interna de alimentos y granos

básicos. El empobrecimiento campesino fue el testimonio fatal de la mengua en los patrones de vida de la mayor parte de la población rural. Resulta necio, *ab initio*, hablar de la pobreza rural, pero resulta inevitable.

La verdadera naturaleza de este movimiento es contradictoria y la información estadística no puede reflejar las variaciones regionales en el interior de un país, con la desagregación requerida. La baja producción y productividad de las economías campesinas es distinta en cada país y varió en el transcurso del tiempo; en general, la agricultura era más atrasada en Honduras que en Costa Rica, y en Guatemala que en El Salvador. Todas eran sociedades campesinas y no es válido el argumento que intenta presentar al hacendado cafetalero como un actor racional e innovador que enfrenta un campesino reacio al cambio y apegado a métodos primitivos de labranza. Ambos se mueven en el mismo espacio cultural y sus atributos productivos se corresponden; sin embargo, la diferencia va quedando establecida no sólo por la manera cómo se produce sino también por lo que se produce, ya que el mercado valoriza diferencialmente el café, para la exportación, que el maíz, para el mercado nacional.

Si se comparan los rendimientos en el valor de lo producido, la agricultura costarricense aun cuando era la más homogénea del istmo, arroja diferencias contrastantes (1949): la “retribución” calculada por trabajador-producto promedio es de 425 dólares en general, pero es de 1.070 el valor producido por un obrero agrícola bananero, de 435 un trabajador cafetalero y 320 dólares por un campesino.⁸⁹ En

⁸⁹ Si los rendimientos en dólares se calculan por hectárea cosechada, una hectárea en la plantación dio un valor equivalente a 679.52 dólares (1949) en tanto que la misma unidad en una hacienda cafetalera daría 247.10, y una con cultivos para el mercado interno, sólo 50.10 dólares. *Costa Rica: A Study...*, *op. cit.*, Cuadro 4, p.51.

Cuadro 15
Centroamérica: Información sobre agricultura de mercado
interno, 1948/52 - 1978

	Maíz					
	1948-1952			1978		
	Área	Prod.	Rend.	Área	Prod.	Rend.
Costa Rica	58	77	1320	50	98	1960
El Salvador	182	191	1050	252	540	2150
Guatemala	538	437	810	522	760	1450
Honduras	283	205	730	325	340	1050
Nicaragua	111	115	1030	228	209	930
Centroamérica	1172	1025	980	1377	1947	1410
Argentina			1630			3280
	ARROZ					
	1948-1952			1978		
	Área	Prod.	Rend.	Área	Prod.	Rend.
Costa Rica	25	35	1420	73	195	2660
El Salvador	15	26	1690	17	60	3510
Guatemala	8	9	1180	11	26	2360
Honduras	11	18	1640	15	21	1390
Nicaragua	22	31	1390	28	82	2920
Centroamérica	81	119	1460	134	384	2860
Argentina			2990			3530
	FRIJOL					
	1948-1952			1978		
	Área	Prod.	Rend.	Área	Prod.	Rend.
Costa Rica	27	11	4100	30	15	5300
El Salvador	36	29	8100	53	43	8200
Guatemala	63	30	4700	135	80	5900
Honduras	50	22	4400	90	50	5500
Nicaragua	33	21	6600	67	51	7700
Centroamérica	209	113	5580	375	240	7720
			9600			10700

Fuente: *Idem* cuadro 13. Área y producción igual cuadro 13. Rendimiento en kilos por hectárea.

otra dirección, se puede comparar la tasa de crecimiento del producto agrícola en una sociedad como Guatemala, con predominio del campesinado indígena, en un período de diez años (1950-59); el total de las cosechas de exportación creció a una tasa anual acumulada 4.1%, en tanto que las cosechas de consumo interno, sólo a un 2.0%.⁹⁰

Otra experiencia, distinta en relación con el destino de la agricultura parcelaria, la ofrece de manera dramática El Salvador, donde a partir de 1946 se inicia un rápido desplazamiento de economías campesinas dedicadas al cultivo de ajonjolí y arroz (y con menor importancia, el maíz). Es difícil argumentar con una óptica “campesinista” y censurar la sustitución de aquellos productos por el algodón. La razón técnica y económica indica que una agricultura se moderniza no sólo si logra mejorar rendimientos sino también sustituyendo unos cultivos por otros de más intenso rendimiento de valor. Y nadie discute el valor del algodón frente a los precios del maíz.

El problema sociológico (y político) radica en el hecho de que nada se hizo, ni por parte del gobierno ni de los empresarios agrícolas y menos aun por las inexistentes organizaciones populares, para ayudar a mejorar los rendimientos de las cosechas destinadas al consumo popular y paralelamente, para trasladar parte del dinamismo del mercado externo a las economías campesinas; de modo que no sólo hubo sustitución de cultivos, sino que mientras la productividad del algodón aumentó más de tres veces y la del café casi un 50%, el maíz –por ejemplo– aumentó sus ren-

⁹⁰ El algodón –nuevo producto de exportación– creció a un 37.01%, el maíz a 0.9% y la cosecha de frijol, a 0.2%. Datos en quetzales de 1958. Fletcher *et al.*, *Guatemala's Economic Development: The Role of Agriculture* (Iowa State University Press, 1970), cuadro 3.3, p. 42.

dimientos en un 15% en el trecho 1948-51 y desde entonces ha empezado a disminuir. Posteriormente apareció el azúcar y la carne, en los años sesenta que ya no corresponden al período bajo estudio.

Los cuadros 12, 13 y 15 contienen una información resumida sobre área sembrada, producción total y rendimientos promedio. Puede suponerse que la combinación de demanda externa-ayuda estatal favoreció diferencialmente la agricultura de exportación no tradicional (algodón y azúcar y debería agregarse, ganado de carne); luego, los productos tradicionales de exportación (café, banano) y finalmente lo que *latu sensu* se llama la agricultura de mercado interno. Se ha incluido información sobre los rendimientos alcanzados por países claves, para fines comparativos.

Una simple lectura de tales datos permite concluir que en el lapso de 25 años, una parte de la agricultura centroamericana se modernizó por intermedio de diversas medidas que no entramos a analizar en este momento, modernización que se expresa en una mejora cuantitativa de los rendimientos por hectárea. La comparación debe hacerse de tres maneras para que resulte menos obvia: entre un mismo país en períodos diferentes, entre los diferentes países de la región y entre el promedio centroamericano y del país latinoamericano más especializado en el cultivo de que se trata.

Así, aunque mejore el rendimiento de maíz/arroz/frijol, el promedio regional es inferior al de Argentina, salvo el arroz en Costa Rica, que pasó a ser una producción altamente modernizada después de 1968. En cambio, los rendimientos de banano (en Costa Rica y Honduras), de café (en Costa Rica y El Salvador), de azúcar (en Guatemala y El Salvador) y de algodón (en El Salvador y Nicaragua), no sólo son superiores a los de los países especializados en esos productos como Ecuador, Brasil, Cuba y Argentina, respectivamente,

sino que en el caso del café, el banano y el algodón, se han alcanzado rendimientos de nivel mundial.

En resumen, un nuevo período de limitaciones económicas y políticas se abatió sobre el campesinado centroamericano; en el interregno la población se duplicó y el crecimiento de la producción de granos básicos, siempre extensivo, fue inferior a aquel crecimiento poblacional. Desde el punto de vista técnico, el descenso de la producción está en función de la escasez de tierras, vale decir, de aumentos en su concentración; pero junto a este factor está el hecho de que “el progreso técnico no se propagó de la agricultura de exportación a los cultivos alimenticios básicos”. En una sociedad donde unos subsectores contribuyen eficazmente al crecimiento económico y otro se rezagan, el problema no es sólo técnico sino social.

El rezago de la agricultura destinada al consumo popular no sólo afecta el problema de las divisas (por la tendencia creciente a importar) sino a la disponibilidad de alimentos. En los hechos, una parte importante de la población centroamericana ha disminuido su consumo alimenticio en términos relativos. El crecimiento económico en la industria y algunos rubros agrícolas, la expansión urbana, el acceso de algunos grupos sociales minoritarios a la educación y al consumo suntuario, y en general, la modernización sectorial del conjunto de la sociedad se hizo, sin duda, a costa de la población campesina.

La crisis política que se genera en la región en la década de los setenta estuvo alimentada sin duda por los efectos sociales totales que produjo este modelo de crecimiento contradictorio, polarizado e injusto. Pero esa es harina de otro costal.

Impreso por
Litografía e Imprenta LIL, S.A.
Apartado 75-1100
San José, Costa Rica
381287

